

Las guerras del siglo XXI

coord.

Ana Esther Ceceña



Las guerras del siglo XXI

Advertencia editorial

Esta edición fue realizada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, por lo que sigue los usos del español en Argentina.

Se advierte al lector en México que en esta obra se utiliza la coma como signo decimal y el punto como signo de separación de miles.

Esta investigación contó con el apoyo del Programa de Apoyos para la Superación del Personal Académico de la UNAM.

DOI: 10.54871/gS23b100

Las guerras del siglo XXI / Ana Esther Ceceña ... [et al.] ;
Coordinación general de Ana Esther Ceceña. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO ; Ciudad de México : Instituto de Investigaciones Económicas ; Ciudad de México : Observatorio Latinoamericano de Geopolítica ; Ciudad de México : Universidad Nacional Autónoma de México, 2023.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN CLACSO: 978-987-813-534-2

ISBN: UNAM: 978-607-30-7904-4

1. Guerras. 2. Conflictos Bélicos. 3. Conflictos Internacionales. I. Ceceña, Ana Esther, coord.

CDD 303.66

Otros descriptores asignados por CLACSO:

Guerra / conflictos / hegemonía / poder / territorio

Diseño de tapa: Dominique Cortondo

Corrección: Mariela Gurevich

Maquetado: Paula D'Amico

Las guerras del siglo XXI

Ana Esther Ceceña
(Coordinadora)



PLATAFORMAS PARA
EL DIÁLOGO SOCIAL



CLACSO



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales

Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

CLACSO Secretaría Ejecutiva

Karina Batthyány - Secretaria Ejecutiva

María Fernanda Pampín - Directora Editorial

Equipo Editorial

Lucas Sablich - Coordinador Editorial

Solange Victory y Marcela Alemandi - Producción Editorial



Librería

Latinoamericana
y Caribeña de
Ciencias Sociales

CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE

Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital o adquirirse en versión impresa desde cualquier lugar del mundo ingresando a www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana

Las guerras del siglo XXI (Buenos Aires: CLACSO/UNAM, julio de 2023).

ISBN CLACSO: 978-987-813-534-2

ISBN UNAM: 978-607-30-7904-4



CC BY-NC-ND 4.0

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | clacso@clacsoinst.edu.ar | www.clacso.org



Este material/producción ha sido financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Asdi. La responsabilidad del contenido recae enteramente sobre el creador. Asdi no comparte necesariamente las opiniones e interpretaciones expresadas.

Investigación realizada dentro del proyecto PAPIIT - UNAM IG300318, *Economía y guerra en el siglo XXI: corporaciones, Estados y mercenarios. Genealogías latinoamericanas.*

Índice

Introducción 7
Ana Esther Ceceña

Las guerras del siglo XXI 13
Ana Esther Ceceña

Parte 1. El capital de la guerra

La corporación militar y su papel en la disputa por el liderazgo
económico mundial 51
Raúl Ornelas

Parte 2. Las guerras estratégicas

El conflicto palestino-israelí: vigilancia y control en un entorno de
guerra urbana 89
Ana Katia Rodríguez Pérez

La guerra a distancia: el caso de Libia 127
Adriana Franco Silva

La guerra en Siria: disputa hegemónica y luchas por la territorialidad 161
Christian Jean Faci

Parte 3. Guerras en el vecindario

Crear dos, tres... muchas Colombia..... 207

David Barrios Rodríguez

El rompecabezas de la guerra contra Venezuela 247

Yetiani Romero Rebollo

Parte 4. Las guerras invisibles

Guerras no militares: sanciones, embargos y guerra financiera 293

Alberto Hidalgo Luna

Glosario 331

Sobre las autoras y los autores 335

Introducción

Ana Esther Ceceña

Guerra, devastación y violencia son las palabras con las que abre el siglo XXI. Guerra en todos los órdenes. Guerra de espectro completo que no deja terreno sin contaminar, espacio sin ocupar, dimensión sin alterar, involucrando a todos los seres vivos del planeta (aunque en este libro no trataremos de las guerras ecológicas). Afganistán en 2001 marca el inicio de una nueva fase de acoso de los grandes poderes mundiales contra los obstáculos, de cualquier tipo, que se les colocan enfrente, en un intento más de disciplinamiento y adecuación a sus dinámicas, estilos y propósitos.

Como rasgo notable de estos tiempos, las guerras no solo transcurren en todas las dimensiones de organización de la vida y, por tanto, utilizan armas no bélicas en combinación con las que comúnmente se identifican como armas de guerra, sino que también adoptan modalidades muy distintas para adecuarse a los terrenos geográficos, históricos y sociales del objetivo a alcanzar. Difiere el fin perseguido: doblegar, aniquilar, generar situaciones de confusión y caos, instalar el pánico, o lo que en cada caso resulte más redituable en términos de los propósitos de la guerra. Se ponen en marcha técnicas que van

siendo desarrolladas creativamente como respuesta a la envergadura de los desafíos y a las innovaciones de lucha, resistencia, evasión o contraataque del enemigo a vencer.

La extensión territorial de las guerras contemporáneas es tan indefinida como la guerra misma y bien se puede caracterizar como una guerra infinita de los grandes poderes y las grandes potencias contra los pueblos del mundo: guerras de saqueo y disciplinamiento. Michael Klare habla de guerras por los recursos que quedan marcando el sentido de devastación que provocan. Guerras concentradas en territorios con enormes riquezas, en mares estratégicos, en sitios con sociedades *indisciplinadas* o desafiantes, ahí donde se encuentran los yacimientos de agua dulce o donde se puede cortar el paso a los flujos de hidrocarburos... pero guerras sin final visible y que se van extendiendo como gota de aceite. Guerras sin fronteras geográficas, que han roto también los límites seccionales para convertirse en lo que Qiao Liang y Wang Xiangsui (1999) llaman guerras irrestrictas y que traspasan cualquier barrera del derecho internacional.

El primer capítulo de este libro se ocupa de ir desmenuzando todas las transgresiones de las guerras del siglo XXI y la percepción del mundo que está detrás del diseño de estrategias. Revisa sus variantes y modalidades dando cuenta de una realidad, la de la vuelta de siglo, que movió los criterios desde las guerras convencionales a las difusas y se instaló en una realidad que produce desafíos en los dos terrenos. La confrontación de potencias, que después del estallido de la Unión Soviética parecía alejarse del horizonte es hoy la mayor amenaza a la hegemonía de Estados Unidos, el *hacedor de la guerra*, pero también al planeta mismo, por la cercanía de un holocausto nuclear. Aun así, las guerras de emancipación y disciplinamiento, encubiertas por la suntuosidad de las otras, emergen en casi todos los puntos del planeta.

Una poderosa industria de guerra mueve gran parte de los hilos, como se explica en el capítulo 2, en que Raúl Ornelas hace una revisión exhaustiva del lado corporativo que sostiene y alimenta la guerra, de la guerra corporativa misma por lograr condiciones de

superioridad y de las contradicciones de los cruces entre los aspectos políticos y empresariales.

Después de esas dos aproximaciones de revisión teórico-conceptual y de trazado de las perspectivas y horizontes globales, el libro se orienta al estudio detallado de cinco casos que permiten observar los diferentes lugares del espectro que abarcan las guerras:

1. Las distintas maneras de intervenir y hasta de diseñar los escenarios de confrontación en guerras en las que los estilos culturales resultan ser los mejores espacios de defensa, como la de Palestina, y, por tanto, son penetrados hasta la más preciada intimidad: atravesando muros, cortando paredes y enderezando rutas. Y a pesar de la profundidad de la intervención y de lo prolongado de este proceso de genocidio sistemático, la fuerza del pueblo palestino se renueva y nutre la resistencia inventando también sus propios métodos de lucha.
2. Las maquinaciones para armar una guerra en un Estado petrolero tribal como Libia, con capacidad de atracción y organización regional y de establecer un liderazgo cohesionador a pesar de la pulverización cultural a la que la geografía, las tradiciones y las experiencias de la colonización llevaron a las poblaciones del África noroccidental. Evitar la confluencia, alimentar los quiebres comunitarios e impedir la emergencia de un referente central era la pista para mantener el control sobre las riquezas del lugar.
3. Es difícil precisar cuándo comienza la guerra en Siria e ir siguiendo todos los hilos entrecruzados que complican su discernimiento, ya que es una guerra que comenzó sin previo aviso y que no parece anunciar su posible término pero que ocurre en un territorio de peso geoestratégico. Las viejas rutas comerciales y militares que confrontaron y enlazaron Europa y Asia se reproducen con nuevas complicaciones cuando el Medio Oriente es uno de los territorios de más capacidad definitoria en la alta política mundial y el afán expansionista de Israel no parece tener límites.

4. Una guerra antigua pero siempre actualizada es la de Colombia, ya del otro lado del mundo. La virtud de ser el tapón entre el norte y el sur del continente y de ser entonces la vía de entrada a la cuenca amazónica, además de sus riquezas en oro, esmeraldas y varios otros minerales preciosos ha sido su perdición. Colombia fue el lugar del continente elegido para convertirse en un vórtice bajo el control de Washington. Colombia es también cabeza de playa de la privatización de las guerras y del uso amplio e irrestricto del mercenarismo y es el lugar desde donde se despliega o hacia donde se repliega la guerra en el continente.
5. Venezuela es un caso emblemático de la puesta en marcha de la guerra en las otras dimensiones del espectro. Si bien se tiene el antecedente del bloqueo a Cuba, con la sofisticación que permite el medio siglo de distancia, en este caso se combinaron la guerra financiera con la humanitaria, comercial, mediática, jurídica, sanitaria, monetaria, de invasión de fronteras, de operaciones de fuerzas especiales y cada una con su propia lógica y su ritmo particular. Es la teoría del enjambre aplicada en pleno con ataques simultáneos pero diferenciados, que no se sabe bien de dónde vienen y se dispersan después del ataque para borrar los rastros o sembrar confusión.

El último capítulo, en continuidad con la experiencia de las guerras no *kinéticas*, o no explícitamente bélicas, presenta un trabajo sobre la capacidad de las sanciones, de varios tipos, para instalar una dinámica de deterioro y corrosión que puede ser previa a una intervención armada, acompañarla o simplemente el detonador de guerras internas causadas por el deterioro de las condiciones de vida y la deslegitimación de los Estados que provocan las sanciones. Se hace un recuento pormenorizado de las sanciones impuestas a países como Irán, siempre un punto desde donde es posible irradiar condiciones de desestabilización hacia el entorno regional, o a países específicamente seleccionados para ser corroidos, como Venezuela.

Al final del libro no hay conclusiones, hay pistas abiertas. Faltará trabajar casos como el del genocidio al pueblo tamil en Sri Lanka, que recuerda a Palestina pero con implicaciones estratégicas del más alto nivel por encontrarse en el Océano Índico, en las rutas del petróleo y en las cercanías de China; el caso de la guerra en Ucrania, como guerra proxy que hunde a Europa mientras que la obliga a cercar a una Rusia que se voltea a mirar a Asia e incluso a América Latina; las menos visibles guerras en África central; las guerras en las que intervienen fuerzas transnacionales no estatales y las potenciales grandes confrontaciones que están dando lugar a movidas muy rápidas, y hasta sorprendentes en algunos casos, en un tablero a punto de estallar.

Las guerras del siglo XXI

Ana Esther Ceceña*

Antes que contener u organizar nuestras fuerzas de acuerdo con las fronteras existentes, queremos movernos a través de ellas.

Weizman, 2010.

Durante mucho tiempo, las guerras se han entendido como hechos de armas que ocurren en campos de batalla. Incluso la Tormenta en el Desierto, sobre Irak, televisada en tiempo real, por cierto, consistió en su primer momento en una cascada de bombas arrojadas desde aviones militares fuertemente pertrechados. Los emblemas de la guerra, durante todo el siglo XX, han sido soldados, bombas, misiles, balas, tanques, helicópteros y aviones. Todo un arsenal de objetos creados para matar de manera efectiva y para destruir lo más ampliamente posible las condiciones de reproducción material, histórica y cultural de aquellos considerados enemigos. No obstante, los modos de concebir y hacer la guerra se modificaron como respuesta a las claves que provenían tanto de los cambios en la organización

* Agradezco al Programa de Apoyos para la Superación del Personal Académico de la UNAM, y asimismo a Sandy Ramírez y Alberto Hidalgo su colaboración en la búsqueda de información.

política como de los de las tecnologías que respondían a las necesidades y requerimientos bélicos a la vez que les abrían nuevos caminos.

A lo largo del siglo, se pasó de los clásicos campos de batalla con soldados reales desplegados en grandes escenarios que se observan en las películas sobre la Primera guerra mundial, a los aviones bombarderos, protagonistas centrales de la Segunda guerra mundial, y al inicio de las guerras impersonales robotizadas en las que los drones inundan el paisaje.

No solo cambió la estética de la guerra, la capacidad letal de los atacantes, los sentidos de la intervención, las herramientas a ser empleadas, las tecnologías, los estilos y los modos, sino también sus protagonistas, los desafíos y su propia concepción. El nuevo milenio inició su despliegue con modalidades de entender y hacer la guerra muy distintas a las heredadas de las experiencias pasadas y que modifican sustancialmente su concepción y sus prácticas.

Los escenarios y sus claves

Desmoronamiento y reorganización del gran contrario

El desmembramiento de la Unión Soviética es el acontecimiento que sintetiza las grandes tensiones y transformaciones geopolíticas de fines de siglo. La desagregación de vastos territorios soviéticos encendió luces de celebración, festejando por fin la *derrota* del bloque opositor más fuerte y peligroso del poder estadounidense. También se encendió la carrera por ocupar los territorios *liberados*, ofreciendo la ocasión de ampliar posicionamientos, de incorporar sus inmensas riquezas naturales al mercado mundial y de extender la influencia ideológico-cultural de los protocolos de dominación y de los soportes materiales y simbólicos de la organización global hegemónica. Simultáneamente, se abrió el abanico de competidores y de riesgos y vulnerabilidades potenciales. La disputa entre poderes, consustancial a las lógicas del sistema moderno capitalista, cambió sus claves y redefinió sujetos, combinando sus capacidades con la presencia geográfica específica y con sus modos discrepantes de pensar y hacer capitalismo.

La dimensión de la desintegración soviética, en todos los sentidos, significó un profundo clivaje en el sistema global y cambió la fisonomía que lo había perfilado a lo largo del siglo XX. Un cisma de gran envergadura que propició un reacomodo geopolítico general, transformó la disposición relativa de las piezas en pugna por la ocupación de espacios y territorios y obligó a los contendientes a movilizarse de manera acelerada para afianzar las estructuras y jerarquías de poder, y para asegurar la cohesión sistémica.

Una primera manifestación de esos nuevos diseños geográfico-culturales que apuntaron a la redefinición del tablero fue el violento desmoronamiento de la zona de los Balcanes que, propiciado por tensiones internas apuntaladas por fuerzas del exterior, ocurrió al perder su marco de contención. De este fenómeno deriva una de las caracterizaciones que se convirtió en paradigma de las concepciones estratégicas del nuevo momento: el despedazamiento territorial, tipificado bajo la categoría de *balcanización*, que fue aplicado sistemáticamente a partir de entonces en casi todos los conflictos que implicaban disputa por territorios.

El quiebre sistémico

El estallamiento de la Unión Soviética y la desarticulación de su campo de influencia, aunque a primera vista significaba una gran victoria de las fuerzas hegemónicas, en realidad fue una manifestación de la fractura general en el *ethos* sistémico y en el orden institucional. Los marcos sistémicos mostraban sus grietas. La modernidad como tal se empezó a enfrentar con sus propios límites. En 1987, la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo (WCED, por sus siglas en inglés) publica el documento *Our Common Future*, conocido también como el Informe Brundtland (WCED, 1987), donde se expone ya, desde los más altos niveles de la institucionalidad vigente, la preocupación por el uso excesivo de la naturaleza y la necesidad de limitar el desarrollo a un marco de sostenibilidad. En 1992, la Cumbre de la Tierra puntualiza que “[...]la protección del medio ambiente deberá

constituir parte integrante del proceso de desarrollo[...]" (ONU, 1992, Principio 4). La capacidad destructiva del sistema, potenciada por los avances tecnológicos, ponía en riesgo al "ambiente", y con ello al "desarrollo humano". Esto era un signo evidente de la contradicción entre el modo capitalista de reproducción de la materialidad social, llamado desarrollo, y la vida.

De esa manera, no solo en los territorios agrupados dentro del bloque soviético sino en todas las geografías del planeta se expresa una incomodidad sistémica que empieza a romper los ligamentos y a rediseñar fronteras. Para algunos, como Wallerstein, la revuelta cultural de 1968 fue el inicio de la divergencia que muestra los límites de la modernidad capitalista y abre el camino para una bifurcación sistémica.

Desde mi perspectiva, esta ruta de bifurcación que emerge del corazón y la esencia misma del sistema-mundo moderno confluye con una revuelta que le viene de sistemas-mundo avasallados, en parte desestructurados o destruidos, pero que desde su condición han mantenido y reinventado sus propias lógicas y formas de vivir, habitar, territorializar y resistir.

El 12 de octubre de 1492 es una fecha simbólica con la que los pueblos oprimidos, provenientes o portadores de esos otros sistemas-mundo, conmemoran el gran genocidio físico, cultural y territorial que marcó el saqueo o acumulación originaria más cuantioso que se haya conocido en la historia del planeta entero. El descubrimiento de la redondez de la Tierra aconteció junto con el de la combinación de la pólvora y el metal como tecnología moderna de conquista y el de la eficacia bacteriológica en la fragilización del otro, considerado como enemigo en la disputa territorial. Con toda la sofisticación lograda a lo largo de estos cinco siglos, esas mismas dos vetas reaparecen en las guerras contemporáneas.

Simultáneamente al quiebre del bloque socialista, 500 años después, en 1992, emergió con gran fuerza una fractura civilizatoria que plantea desafíos y amenazas ya no solo a la jerarquía del poder dentro del sistema, sino a la estructura completa del poder y al modo de vida instaurado por la modernidad.

1992 fue nuevamente un momento de clivaje. El sistema como tal demostraba su incapacidad y a la vez sus límites históricos. Detonador de insurgencias que se multiplicaban en toda América, pero también en el resto del mundo. Insurgencias ajenas a la institucionalidad establecida y, por tanto, sin marcos de contención liberales. Insurgencias de lo desconocido para el sistema y de lo imprevisible.

Si bien 1492 ha sido entendido como el inicio de un proceso integrador o cohesionador que logró someter al planeta entero a los principios, lógicas, epistemología y estructuras de poder impulsadas por la modernidad, ha sido un proceso resistido a lo largo de 500 años y, por tanto, lleno de porosidades. 1992 y los años subsiguientes, al contrario, se perciben como el momento de la disipación, de la pérdida de coherencia y de una relativa desintegración. Como los dos extremos metafóricos de la historia de la modernidad capitalista, dos momentos en los que la guerra adquiere una relevancia central.

Los sujetos y las modalidades de la guerra

Mercenarismo estructural

La revolución de los asuntos militares, respondiendo a las condiciones y escenarios cambiantes y a la necesidad de transgredir los límites institucionales impuestos internacionalmente de acuerdo con la moralidad vigente, avanzó, de la mano de Donald Rumsfeld y Condoleezza Rice, hacia el uso de fuerzas privadas que soterradamente podían ocuparse de todo el trabajo sucio de la guerra. Empresas de mercenarios como la emblemática *Blackwater* se incorporaron a las tareas de guerra, desestabilización, ajuste de cuentas y demás, sin ningún tipo de control social. Solo respondían al contratista que, justamente, les pedía hacer todo lo que él mismo no podía.¹

¹ Hoy, Blackwater tiene más de 2300 soldados privados desplegados en nueve países, incluso dentro de los Estados Unidos. Mantiene una base de datos de 21.000 ex integrantes de las Fuerzas Especiales, soldados y agentes de la ley retirados a quienes podría llamar en cualquier momento. Blackwater cuenta con una flota privada de

Cuando los tanques estadounidenses entraron en Bagdad en marzo de 2003, trajeron consigo el mayor ejército de contratistas privados jamás desplegado en una guerra. Al final del mandato de Rumsfeld, había aproximadamente 100.000 contratistas privados sobre el terreno en Irak, una proporción de casi uno a uno con los soldados estadounidenses en servicio activo. [...] antes de que Rumsfeld dimitiera, dio el paso extraordinario de clasificar a los contratistas privados como parte oficial de la maquinaria de guerra de EE. UU. (Scahill, 2007, p. 17).

Se definió la “Fuerza Total del Departamento” como “sus componentes militares activos y de reserva, sus servidores públicos y sus contratistas” [...] (Scahill, 2007, p. 18).

A partir de la experiencia paradigmática de *Blackwater*, proliferaron las empresas de mercenarios y las guerras cambiaron de carácter al abrir un espacio ambiguo entre las actividades contratadas y al servicio del Estado, y las que corrían por la ruta de lo privado.² Más aun, el refinamiento y eficacia en las técnicas de guerra, la disuasión e intervención demostradas por *Blackwater* superó a las de los cuerpos de defensa institucionales. Las fuerzas armadas de mayor entrenamiento y sofisticación en el mundo, las del Pentágono, delegaron en *Blackwater* la formación de sus cuerpos de élite.

más de veinte aviones, incluidos helicópteros artillados y una división de dirigibles de vigilancia. Su sede de 7000 acres en Moyock, Carolina del Norte, es la instalación militar privada más grande del mundo. Entrena anualmente a decenas de miles de agentes de la ley, federales, locales y de naciones extranjeras “amigas”. (Scahill, 2007, pp. 18-19).

² No sólo el Departamento de Defensa incorporó el contratismo como parte de su estructura sino todas las agencias de seguridad del estado, entre las que se encuentra la CIA.

“A partir de septiembre de 2001 la subcontratación se disparó [...] Grandes parcelas del servicio clandestino pasaron a ser totalmente dependientes de contratistas que actuaban como si estuvieran en la propia cadena de mando de la CIA, pero que en realidad trabajaban para sus patrones empresariales. De hecho, la agencia contaba ahora con dos plantillas de personal distintas, y la privada estaba mucho mejor pagada. En 2006, alrededor de la mitad de los agentes de la base de Bagdad y del nuevo Centro Nacional de Antiterrorismo eran empleados contratados, mientras Lockheed Martin, el mayor contratista militar del país, publicaba anuncios pidiendo “analistas de antiterrorismo” para interrogar a los sospechosos de terrorismo en la prisión de Guantánamo.” (Weiner, 2008, p. 538).

Las condiciones en el cambio de siglo apelaban a un tipo de guerra diferente. Más que contingentes de soldados entrenados y pertrechados, se requerían habilidades muy sofisticadas de intervención que llevaron a poner un especial cuidado en la preparación o contratación de cuerpos de élite, de Fuerzas Especiales cuyas principales virtudes se relacionaban con la versatilidad, movilidad, invisibilidad y flexibilidad con la que podían realizar sus tareas tanto de disuasión como de intervención en operativos de guerra. Las Fuerzas Especiales tienen funciones o tareas focalizadas, específicas y muy especializadas, que el ejército regular no está en condiciones de cubrir. Su preparación tiene un alto grado de refinamiento. Las Fuerzas Especiales se mueven en los límites de lo posible en la guerra.

En 2007, Jeremy Scahill, quien publicó la más acuciosa investigación conocida sobre *Blackwater*, señalaba que:

Blackwater tiene más de 2,300 soldados desplegados en nueve países, incluyendo Estados Unidos. Tiene una base de datos de 21,000 integrantes de fuerzas especiales, soldados y agentes de la ley retirados a quienes puede llamar al momento. Blackwater tiene una flota privada de más de veinte aeronaves, incluyendo helicópteros artillados y dirigibles de monitoreo. Su cuartel de 7,000 acres en Moyock, Carolina del Norte, es la mayor instalación militar privada del mundo. Entrena anualmente a decenas de miles de agentes de la ley locales y federales y a tropas de “países amigos”. (Scahill, 2007, pp. 18-19).

No solo se incorporó masivamente un nuevo sujeto en el terreno de la guerra, sino que se registró un cambio profundo en la razón de ser del Estado. Las intervenciones en nombre de la seguridad nacional y las misiones de alta precisión y peligrosidad quedaban parcialmente en manos de contratistas privados que no se mueven por el interés de la Nación, sino por el suyo propio.

Grupos de élite, ejércitos o comandos fantasma surgieron de esas nuevas vertientes militares no institucionales, en calidad de mercenarios o contratistas que cumplían órdenes, hasta el momento en que algún quiebre propició su emergencia como fuerzas independientes. Al

Qaida, el Ejército Islámico, Boko Haram y otros han cobrado vida propia convirtiéndose en contendientes de alto nivel en el escenario mundial con capacidad técnica y financiera equivalente a la de los Estados. Estos grupos, denominados Violent Extremist Organizations (VEO) y reconocidos por el Comando Conjunto de Estados Unidos dentro de las cinco mayores amenazas a la seguridad nacional junto con China, Rusia, Irán y Corea del Norte, tienen la ventaja de no defender territorio nacional y moverse a través de las fronteras con alta volatilidad.

Paradójicamente, el mismo comportamiento y acciones de parte de estos grupos, son calificadas de manera distinta si las ejercen bajo el mando de una institución estatal o si las llevan a cabo independientemente. Mientras Bin Laden fue un empleado del Pentágono, no aparecía siquiera en las noticias ni se conocía públicamente su nombre. Fue solo cuando este personaje desafió los mandatos del Departamento de Defensa estadounidense cuando se convirtió en amenaza *terrorista* mundial. Los mismos actos, dentro de las funciones de contratista disciplinado, no son considerados terrorismo.

Una vez creados estos cuerpos de mercenarios y una vez mostrada su eficacia para hacer mejor las tareas ilícitas o proscritas dentro del marco del derecho internacional en situaciones de guerra, se convirtieron en un componente imprescindible de las fuerzas armadas de seguridad y se extendieron sus funciones incluso hasta el ámbito de la seguridad privada. Blackwater devino la pieza fundacional de un proceso irreversible de neoliberalización militar que, al introducir el elemento privado en la gestión social colectiva de la seguridad, corroe la razón del Estado.

Las emergencias virales o el enemigo difuso

La distensión sistémica, agudizada con la desarticulación del bloque socialista y con la fuerza acumulada de las-otras-maneras-de-habitar-el-mundo, ya sea que emergieran de experiencias largas en el tiempo o de disrupciones del propio sistema, produjo un malestar general creciente y múltiples iniciativas de corrosión, subversión o negación.

En los círculos militares, esto fue entendido como caos y prendió las alertas sobre una amenaza hasta ese momento desestimada. La guerra de Vietnam mostró la dificultad de enfrentar a un pueblo en armas: no reacciona como ejército, no es previsible, usa métodos distintos a los de los manuales y crece y se resguarda entre la hierba. Ni toda la tecnología y la carga letal del napalm y las bombas pudieron derrotar a un *enemigo* de tales características. Volvió a ocurrir en Mogadisho, en una escala menor, donde los poderosos *blackhawk*, la tropa de élite y las mejores armas del momento fueron derrotadas por una multitud impredecible e inidentificable: un *enemigo difuso*. En los dos casos, la asimetría armamentística era enorme y jugaba a favor de las fuerzas armadas de Estados Unidos, el invasor, no obstante, el desconocimiento de las claves culturales y las dinámicas sociales del lugar, así como la confianza en la infalibilidad de la superioridad tecnológica y el desprecio por la capacidad del contrincante determinaron, en ambos casos, la derrota que no fue solo ni principalmente militar, sino cultural.

La guerra de Vietnam coincidió y agudizó una fractura sistémica que explotó en las revueltas de 1968 y marcó una ruta de bifurcación sin retorno que se ha ido ensanchando y diversificando desde entonces. Pero los finales del siglo XX, con la distensión estructural-institucional provocada por la eclosión de la Unión Soviética, produjeron un ambiente de riesgo sistémico reptante de características nuevas.

Contraviniendo el principio militar estratégico de no dejar ni un solo resquicio al enemigo, en la situación de crisis sistémica, los resquicios parecían multiplicarse. Cualquiera, desde un laboratorio casero, podía producir un arma biológica y desde su computadora, podía hackear, incluso al Pentágono. Desde la perspectiva militar, en estas circunstancias, el enemigo podía estar en todas partes sin ser percibido, como un virus.

Muy difícil de combatir por su versatilidad, por su ubicuidad, por su diversidad, por no ser fácilmente descifrable, por provenir de ambientes culturales cuyas claves no son evidentes, por ser tan pequeño frente a la inmensidad del poder del sistema que se pierde en sus pliegues. Con una asimetría tan grande, la pequeñez se convierte en

fortaleza con una capacidad sobre todo corrosiva, más que confrontativa y eso, justamente, es lo que le otorga peligrosidad.

Los pequeños, los excluidos, los despreciados, los excedentes, los no integrados y aquellos que provienen de condiciones similares se convirtieron en el enemigo a vencer. Un enemigo latente pero difuso, que surge sin previo aviso, llevó a buscar métodos disuasivos o preventivos que intentaran aniquilarlo antes de su constitución. Cualquier condición potencialmente propicia para su formación debía ser atacada y eliminada. La guerra se trasladaba hacia lo cotidiano, lo precario, lo minúsculo, lo interno, lo privado y, por tanto, estaba obligada a cambiar de estilo y de instrumentos. Del gran campo de batalla, generalmente abierto, se pasaba a otros más bien abigarrados, complicados de descifrar y de penetrar. La guerra de Argelia fue un primer ensayo para este tipo de guerra, pero era un caso acotado. Ya en la vuelta de siglo, con contendientes virales y en terrenos urbanos, las guerras se acercaron mucho más a la experiencia argelina, con Palestina como el ejemplo más refinado. Se pasaba de colocar posiciones en un gran escenario a romper estructuras físicas de organización del espacio privado: “caminando atravesando muros” (Weizman, 2010), penetrando paredes y techos, creando túneles internos en las conformaciones arquitectónicas socioculturales de las familias palestinas. “Atravesar los espacios domésticos: una maniobra que convirtió el interior en exterior y los dominios privados en vías públicas” (Weizman, 2012, p. 10).

El crecimiento de los contratistas y de las Fuerzas Especiales fue sin duda una acción apropiada para confrontar a un oponente indetectable a simple vista. Un oponente que no se anunciaba y que se fraguaba silenciosamente. Si bien las Fuerzas Especiales intervienen en todos los escenarios por su versatilidad, son especialmente pertinentes para objetivos ocultos, difíciles de alcanzar o descifrar, o muy protegidos.

Lo que se reconoce como amenazas virales o estratégicas, en este contexto, está ubicado generalmente en zonas urbanas pero también en ambientes tecnológicamente avanzados. El desafío tecnológico, aunque específico, suele ser alto: biológico, químico, informático, cultural y, en este marco, también religioso.

Fuerzas enemigas equivalentes

Después de la conmoción creada por el desmembramiento soviético, Rusia se reconstruye como potencia en torno al eje militar en los campos de innovación armamentística e inteligencia y sobre la base de sus enormes riquezas de hidrocarburos y minerales estratégicos. China, a su vez, después de un intenso trabajo de construcción hacia adentro, se lanza al mundo con un despliegue de capitales financieramente sólidos con la Iniciativa de la Franja y la Ruta y con un cuidadoso y bien pensado entramado de posesión de oro y dólares como para plantar un desafío del más alto nivel a Estados Unidos, además de sus reservas de minerales y tierras raras y su enorme fuerza de trabajo. Estas dos potencias, combinadas con Irán, que además de sus plantas nucleares tiene el petróleo del que China carece, y Corea del Norte, con arsenal nuclear y una posición importante en el Asia Pacífico, son entendidas por Estados Unidos como las cuatro amenazas a su seguridad nacional de nivel estatal, es decir, equivalente.

Holísticamente, los 4+1 representan competidores de gran poder con arsenales nucleares modernizados y capacidades avanzadas de proyección de contrapoder, que exportan influencia maligna, representan amenazas para la seguridad nacional y la paz regional, y perpetúan el extremismo violento (Schwarz, 2018: 127).

Al lado de estos poderosos contendientes, reconfigurados y potencialmente aliados entre sí, que nuevamente perfilan el campo de batalla de gran escenario, se coloca la otra amenaza de nivel semejante pero con características muy distintas, cuyo origen se puede rastrear hasta las fuerzas mercenarias creadas o auspiciadas como soporte de los ejércitos regulares, como ya se mencionó: las Organizaciones Extremistas Violentas (VEO, por sus siglas en inglés), entre las que se ubica primeramente a Al Qaida y al Estado Islámico (DAESH).

El 4+1 nuevamente instala la necesidad de pensar en guerras más convencionales, de contendientes equivalentes tanto en peso como en estilo de organización, y poner nuevamente la apuesta en términos que recuerdan a los de la Guerra Fría, aunque notablemente actualizados.

[...] la Estrategia Militar Nacional de 2016 reorientó el marco estratégico para la fuerza conjunta, identificando a Rusia, China, Irán, Corea del Norte y las organizaciones extremistas violentas, comúnmente conocidas como “4+1”, como los desafíos más apremiantes (Schwarz, 2018, p. 126).

La guerra, en este terreno, adopta características distintas. Si los oponentes virales podían representar una amenaza tecnológica, no era una amenaza de gama amplia, sino más focalizada. En el caso de los enemigos equivalentes, al tratarse de potencias estatales, la franja tecnológica en la que se mueven compite y, en muchas ocasiones, supera a la del poder de Estados Unidos, el gran hegemon.

Los criterios del Pentágono

La variedad de problemáticas de guerra o de amenazas a la estabilidad hegemónica y sistémica provocó una serie de redefiniciones en el terreno conceptual y estratégico en los círculos militares de las potencias del planeta, y particularmente en los del Pentágono. Como parte de un trabajo teórico de revisión de experiencias, se llegó a la conclusión de que las estrategias de guerra sólo podrían ser exitosas pasando por la articulación de todas las fuerzas de manera cooperativa, ya que lo que se tenía enfrente eran amenazas o desafíos *transregionales, multidominio y multifuncionales*, que tenían que ser combatidos de una sola vez.

Garantizar el mantenimiento de la hegemonía planetaria, en estas circunstancias, suponía a la vez efectuar una ocupación estratégica de las regiones euroasiáticas desvinculadas de la Federación Rusa y desactivar, disuadir o combatir iniciativas diversas de corrosión o subversión del sistema que provenían de enemigos difusos y difíciles de anticipar.

No solo había que controlar las emergencias virales de grupos no institucionalizados y de diversa inspiración, métodos y propósitos,

sino que había que mantener activas todas las modalidades y herramientas para una guerra *convencional* de pares. De ahí surgen varias reflexiones que transformaron la mentalidad militar y las herramientas de ejercicio del poder.

La dominación de espectro completo

El mayor desafío en términos estratégicos consistió en asumir que la guerra no era un asunto de superioridad militar solamente, sino que tenía que ser jugada simultáneamente en todos los ámbitos relacionados con el ejercicio del poder.

En el terreno militar, las mejores armas podían ser burladas y hasta derrotadas con recursos relativos a las costumbres de vida, al uso del espacio, a los modos de comunicarse y de trabajar en colectivo de acuerdo con prácticas culturales ajenas a la guerra, pero aplicables en ella, o al uso distinto de armas similares. Era necesario instalar la guerra en todo ese espectro.

Lo ocurrido en Vietnam, la derrota del ejército más poderoso del mundo por un pueblo sencillo y modesto, y en Mogadiscio, donde la multitud venció a los poderosos *blackhawks* y a las fuerzas de élite del ejército estadounidense, resultó ejemplar para reflexionar sobre el uso favorable de las asimetrías y los significados de la complejidad y el caos. No solo era indispensable desarrollar una estrategia que atendiera todos esos campos, sino también una que impulsara tecnológicamente habilidades de penetración mucho más profundas:

[...] grandes áreas conformadas por un complejo laberinto de calles y edificios, densamente pobladas de civiles, harán que el combate terrestre sea extremadamente difícil sin la asistencia cibernética. Como se ilustra en la Batalla de Mogadiscio, un entorno urbano abarrotado puede permitir que las fuerzas adversarias nieguen la libertad de acción de las fuerzas estadounidenses (Commons, 2018, p. 128).

El *Joint Vision 2010*, documento del Comando Conjunto que marca la ruta estratégica, publicado en 1998, avanza en el concepto de

dominación de espectro completo como el modo de hacer frente a la complejidad e incertidumbre de las situaciones de guerra, entendiéndose por ello la utilización de todas las armas y todas las fuerzas de forma conjunta:

[...] guiar la transformación de estos conceptos hacia capacidades operativas conjuntas. Sirve como base para enfocar las fortalezas de cada servicio o componente individual para explotar la gama completa de capacidades disponibles y permitirnos lograr el dominio del espectro completo (CJCS, 1998, p. 34).

Dos años después, en el *Joint Vision 2020*, se despliega y puntualiza el concepto como base de la reorganización de las fuerzas militares:

El objetivo general de la transformación descrita en este documento es la creación de una fuerza que sea dominante en todo el espectro de operaciones militares: persuasiva en la paz, decisiva en la guerra, preeminente en cualquier forma de conflicto (CJCS, 2000, p. 58).

La gama completa de operaciones incluye mantener una postura de disuasión estratégica. Incluye actividades de participación y presencia teatral. Incluye conflictos que involucran el empleo de fuerzas estratégicas y armas de destrucción masiva, guerras de grandes escenarios, conflictos regionales y contingencias de menor escala. También incluye aquellas situaciones ambiguas que residen entre la paz y la guerra, como las operaciones de mantenimiento de la paz y de imposición de la paz, así como las operaciones de socorro humanitario y el apoyo a las autoridades nacionales (CJCS, 2000, p. 61).

Un concepto muy fuerte que, no obstante, queda reducido a lo militar: “[...]the ability of U.S. forces, operating unilaterally or in combination with multinational and interagency partners, to defeat any adversary and control any situation across the full range of military operations” (CJCS, 2000, p. 59). Aun cuando es referido a los ámbitos espaciales estima solamente aquellos de alcance militar: tierra, aire, mar, subterráneo y espacio exterior. De cualquier manera, la formulación dio lugar a la revolución en los asuntos militares que

impulsó la conjunción de fuerzas que intentaba eliminar la suma de partes inconexas en las operaciones de guerra, tanto en la ejecución como en la planeación, y transformar la competencia entre ellas en colaboración. Si bien contempla también el intercambio entre agencias, este es asumido como aleatorio o como circunstancia agregada a la estrategia definida en el terreno militar. En ese terreno, en cambio, asienta la idea de que la paz puede ser gestionada militarmente, cuestión que en la práctica sucede con la instalación de *cuerpos de paz* (cascos azules) formados por militares armados, y que, al ser incorporada a la teoría, abre la puerta a la legitimación de las *ocupaciones militares con funciones de pacificación*, a pesar de la evidencia en contra.

La estrategia combinada es pertinente en virtud de que quien se entiende como enemigo hoy tiene varias cabezas y múltiples razones y vertientes. De ahí la urgencia por crear condiciones de cooperación entre los distintos cuerpos de guerra, particularmente probadas en Irak bajo la idea de los operativos tierra-aire, buscando acciones simultáneas y colaborativas con carácter envolvente, siempre con la intención de eliminar los resquicios de protección a aquellos considerados enemigos y bajo el criterio de la integración global:

[...] la disposición de acciones militares cohesivas en tiempo, espacio y propósito, ejecutadas como un todo para abordar desafíos trans-regionales, multidominio y multifuncionales (Schwarz, 2018, p. 127).

Desde mi perspectiva, el concepto *dominación de espectro completo* refiere de manera muy precisa la amplitud y pertinencia del ejercicio del poder, sus estructuraciones y herramientas, pero no restringido al ámbito militar, como fue planteado por el Comando Conjunto. Yo observo que el tendido del poder, respondiendo a la complejidad social contemporánea y al desarrollo de tecnologías intrusivas, disciplinadoras y con capacidad de manipulación y espionaje, efectivamente ha ido abarcando el espectro completo de los aspectos público y privado de la vida en sociedad. Nunca total, pero con un alcance

que lo lleva a definir desde la alimentación y el entretenimiento hasta las actividades o procesos directamente relacionados con la guerra. La disuasión, que marca ese terreno en el que se gana la guerra, por intimidación o por fascinación, en campos de batalla no militares, es uno de los espacios clave en el arte operacional de este cambio de siglo.

Los contenidos de la enseñanza, las narrativas, los estilos alimenticios, los hábitos creados por una materialidad específica delineada por el poder, las estéticas sociales, los deseos y gustos manipulados, todo forma parte de las condiciones que construyen los consensos de la dominación y que pueden incluso hacerla deseable. Siguiendo la inspiración de Sun Tsu, la disciplina social que emana de la gestión de estos campos y otros equivalentes es la que hace posible ganar guerras antes de llegar a la confrontación militar. Pero, a la vez, cuando estos aspectos se desatienden o son subestimados, los resultados pueden ser semejantes a los de la guerra de Vietnam o a los de la batalla de Mogadiscio.

El coronel Qiao Liang, estratega veterano de las fuerzas armadas de China, en una versión distinta de la dominación de espectro completo, se refiere a las guerras contemporáneas como “guerras sin restricciones”, aunque su perspectiva se mantiene en lo esencial en la circunscripción militar, pero enfatizando el papel de la tecnología informática como arma de guerra privilegiada. Para los veteranos chinos, “la primera regla de la guerra sin restricciones es que no hay reglas, que no hay nada prohibido” (Liang y Xiangsui, 1999, prefacio).

La guerra que trasciende todas las fronteras y límites, en corto: la guerra irrestricta [...] el significado de este tipo de guerra es que todos los medios estarán prestos, que la información será omnipresente y el campo de batalla será cualquier lugar. Significa que todas las armas y la tecnología pueden sobreimponerse a voluntad, significa que todas las fronteras entre los dos mundos de la guerra y la no-guerra, de lo *military* y lo *no-militar* serán totalmente destruidas, y también significa que muchos de los actuales principios de combate serán modificados, e incluso que las reglas de la guerra necesitarán ser re-escritas. (Liang y Xiangsui, 1999, prefacio).

Zonas grises

Como parte de la definición del espectro completo, en términos militares, se incorpora el reconocimiento de las zonas grises. No son zonas de guerra ni de paz, son una especie de franja de amortiguamiento entre ambas y donde se puede actuar militarmente sin que aparezca como actividad de guerra. Representan la disolución de fronteras entre guerra y no-guerra o entre lo militar y no-militar como refieren Liang y Xiangsui. Los territorios ocupados por cascos azules son una de las representaciones de estas zonas grises, pero, cada vez más, son territorios en los que ni siquiera se formaliza la situación con *tropas de paz*, sino que se mantiene en una ambigüedad propicia para moverse con libertad entre las sombras, cuestión ideal para las operaciones de Fuerzas Especiales.

[...] la amplia gama de misiones de las sof marca la necesidad de pequeñas fuerzas de tarea especialmente diseñadas que consisten en elementos terrestres, marítimos y aéreos optimizados para participar en los conflictos irregulares centrados en la población que ocupan el espacio disputado entre la guerra y la paz. Este espacio, conocido coloquialmente como la Zona Gris, se ha convertido en el centro de los esfuerzos recientes de las SOF contra el terrorismo y la insurgencia en todo el mundo y ha definido cada vez más su razón de ser en comparación con las fuerzas convencionales (Hayes, 2018, p. 61).

Cabe decir que las zonas grises tienen una cierta tendencia a incrementarse y se convierten en un campo de batalla no declarado, con métodos un poco más oscuros e imprevistos, con agentes de todo tipo, no siempre con definición precisa, como territorios en los que no hay regulaciones y, por tanto, tampoco hay límites bien establecidos.

[...] las formaciones convencionales y SOF [fuerzas operativas especiales, por sus siglas en inglés] deben operar de manera integrada e interdependiente para garantizar el éxito en el campo de batalla moderno. La integración y la interdependencia se encuentran en el

corazón de MDB [campo de batalla multidominio], ya que el concepto prevé que las SOF realicen actividades en apoyo de las fuerzas convencionales y viceversa (Hayes, 2018, p. 61).

Por-con-a través (By-with-through)

Después de un largo periodo en el que los ejércitos particulares iban a pelear sus propias guerras, se trabajó en la capacitación de las fuerzas de los aliados para poder apoyarse en ellas. Los reclamos de la sociedad, especialmente de la estadounidense, por el sacrificio de sus jóvenes en grandes cantidades y por el desvío de recursos públicos de los sectores de cuidado hacia los militares, además de los excesivos gastos de guerra, reforzaron la idea de pelear por-con-y a través de las fuerzas de ejércitos aliados locales. De esta manera, incluso, las guerras se hacían pasar por conflictos regionales diluyendo la responsabilidad de Estados Unidos, quien, sin embargo, intervenía en ellas, marcaba la estrategia y comandaba las operaciones de las fuerzas locales. Surgen así las llamadas guerras *proxy* o bajo encargo, que no solo facilitan y alivian la carga de las fuerzas armadas estadounidenses sino que terminan por confundir la escena desdibujando los intereses que dieron lugar al conflicto, y propician el emprendimiento de métodos de combate combinados mediante la utilización simultánea de una fuerza principal y de fuerzas de guerrilla o de modalidades menos convencionales.

[...] alcanzar los intereses nacionales de los EE. UU. al involucrar y habilitar las capacidades y el liderazgo local y regional de los socios [...] Los habilitadores de las Fuerzas Conjuntas pueden apoyar, organizar, capacitar, equipar, construir/reconstruir y asesorar a las fuerzas de seguridad de los socios y sus instituciones de apoyo desde el punto de vista táctico hasta niveles ministeriales (Votel y Keravuori, 2018, p. 41).

Centro de gravedad

En un ambiente multifacético como el del siglo XXI, los escenarios, los desafíos y las maneras de hacerles frente son diversas en geografía o geocultura, en motivos y estilos, en capacidades y en importancia específica y global. Casos que en algún momento cobran mucha relevancia por sus características o urgencia pueden no ser piezas clave en el rompecabezas general y causar distracciones costosas. La confluencia de todos los tipos de fuerzas, incluyendo las proxy, podría verse afectado en medio de la confusión que genera, más allá de lo deseable. Por esta razón, el Comando Conjunto de Estados Unidos organiza sus acciones a partir de un diseño en el que localiza y define tanto el *centro de gravedad* (COG, por sus siglas en inglés) global, como los específicos de cada escenario o situación de guerra. De esta manera, se garantizan los intereses estratégicos, a la vez que se articulan o encadenan con cada una de las situaciones particulares.

[La definición del COG] permite al planificador pensar mejor sobre qué objetivo se intenta lograr (fines) y cómo se logrará (medios). Un análisis bien ejecutado del COG permite anticipar a qué partes de nuestro propio sistema puede intentar apuntar el adversario, directa o indirectamente, lo que brinda al planificador reflexivo una mayor comprensión de la intención del oponente (Klima y Mazzella, 2018, p. 110).

La determinación del COG tiene que combinar no solo una jerarquización de propósitos, sino también de geografías, movimientos y métodos. El COG operacional, en ocasiones, puede no coincidir inmediatamente con el estratégico, sino ser una especie de jugada de enroque que al final cumpla con el propósito central.

Por el momento, el propósito estratégico parece apuntar a China. No obstante, la manera de alcanzar el objetivo pasa por ocupaciones militares en los países circundantes, por movimientos y amenazas militares en los mares cercanos, por bloqueos de oleoductos para obstaculizar suministros básicos y otra serie de cuestiones similares que permiten asfixiar al enemigo antes de iniciar un combate con él.

En realidad, no hay una declaración de guerra a China, pero es para todos evidente el calentamiento de la plaza y el aumento de agresiones que por no ser directamente militares no dejan de ser parte de una guerra soterrada.

La consecuencia entre el COG operacional y el estratégico es una parte esencial de la metodología con la que se emprenden las tareas y los grandes diseños militares. No solo en general, sino en cada escala de planeación y actividad relacionada con el gran entramado de la dominación de espectro completo, la definición de los centros de gravedad es entendida como la palanca del triunfo o como el anclaje para que la amplitud del espectro de fuerzas y procedimientos no pierda la pista. Y esto aplica, también, a la lectura que se hace de las condiciones del enemigo:

Al atacar una sola vulnerabilidad, se puede crear un efecto en cascada que paralice o destruya el sistema del enemigo desde adentro, estableciendo las condiciones para el estado final deseado (Klima y Mazzella, 2018, p. 107).

La teoría del enjambre

Una de las técnicas de guerra contemporánea más innovadoras y exitosas, que forma parte de la estética de la guerra en el siglo XXI, corresponde a la generación tecnológica de las estructuras de red combinada con los notables avances prácticos de la inteligencia artificial.

Si bien las guerras actuales suponen el uso de grandes portaviones, tanques, aviones, misiles y un acervo de grandes dimensiones y volumen, como en el siglo XX, el uso de la información y su transformación en arma de guerra ocupa hoy un lugar privilegiado. El equipo de guerra ha cobrado versatilidad y ligereza, ha disminuido los riesgos y costos, y se adapta mejor a los combates en áreas urbanas o relativamente impenetrables. Aquello que hizo la guerra de Argel tan complicada, hasta que los franceses lograron entender las claves organizativas argelinas y desmontarlas, aquello que en Palestina

nuevamente se presentaba como un estilo de asentamiento impenetrable y difícil de descifrar, hasta que los israelitas desarrollaron agresivos métodos de intervención específicos para un ambiente abigarrado y laberíntico, vuelve a presentarse como desafío con las emergencias virales o no convencionales en un contexto tecnológico que dio lugar a un equipo miniatura, con cualidades de cierta invisibilidad, con un buen alcance y multiplicidad de funciones.

Las megaciudades, sin embargo, con sus edificios altos, calles estrechas y llenas de gente y espacios subterráneos ofrecen una amplia protección contra la vigilancia aérea y el apoyo de fuego aéreo cercano. Afortunadamente, un nuevo dominio, el ciberespacio y el espectro electromagnético, ha surgido como el medio preeminente para comprender y dar forma a las acciones en los otros cuatro dominios [tierra, aire, mar, espacio]. Para que la fuerza conjunta tome, retenga y explote la iniciativa en un entorno de megaciudad, los comandantes de la fuerza de tarea conjunta deben priorizar la superioridad del ciberespacio en lugar de la superioridad aérea como requisito previo operativo (Commons, 2018, p. 120).

La *teoría del enjambre* o de la infestación surge de la experiencia de las fuerzas especiales y viene acompañada de los ejércitos de drones. Inspirada en el modo de acción de las emergencias virales, buscando a la vez un ataque eficaz y un retiro limpio, la idea de un enjambre resultó promisoria. Una operación en la que los atacantes provienen de todos los flancos, simultáneamente, cada uno con un propósito distinto, pero articulados y tan volátiles que lo mismo que llegan, desaparecen hacia todos lados como si cada uno fuera independiente y tuviera una ruta propia, resultaba interesante para impedir que el atacado se defendiera o identificara el origen de la agresión.

Se trata de una acción ofensiva sincronizada y desde diversos frentes, basada en el modelo de guerra de guerrillas, pero sustentada por el mayor nivel de tecnología disponible para coordinar las fuerzas en tiempo real, en unidades de pequeñas dimensiones y en constante comunicación. “El enjambre como una táctica militar ‘implica

un ataque convergente por muchas unidades” (Faggard, 2013, p. 84) y es una técnica dúctil que puede emplearse con efectividad en dimensiones tan distintas como las del ataque directo a personas o colectivos, o como la de construcción de narrativas.

El enjambre social basado en la comunicación [...]. Ofrece métodos para iniciar, detener y coordinar las insurgencias en línea, mientras que simultáneamente crea confusión gubernamental en una sociedad moderadamente conectada. Sus métodos se profundizan cuando la represión y corrupción son incontroladas, cuando es fácil conseguir una narrativa y cuando el acceso diplomático de otros poderes mundiales no es fácil de lograr, como fue el caso en Irán en 2009 (Faggard, 2013, p. 94).

Desplazamiento del centro de gravedad

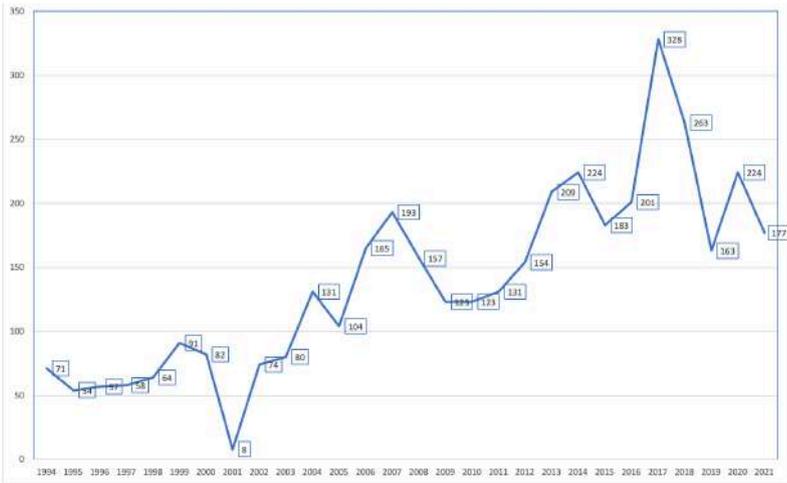
Después del desmembramiento de la Unión Soviética, la entrada de Estados Unidos en tierras asiáticas se convirtió en una necesidad desde la perspectiva hegemónica. Su presencia en el área de Asia Central era muy exigua en ese momento y, por un lado, la ocasión ofrecía condiciones de apropiarse parte de esos territorios, pero, por otro, obligaba a extenderse hacia la zona para detener el avance de sus competidores geopolíticos. De ahí que la primera incursión se haya dirigido a Afganistán como bahía de entrada a la región y con pocas posibilidades de defensa, a la vez que geográficamente bien colocado en medio de la ruta entre los países petroleros y China.

La ruta del opio

El objetivo geopolítico, siempre acompañado por intereses económicos, buscó en Afganistán, además de una plataforma de acción militar en la región, reconstruir la jugosa ruta del opio que, ya para 2021, reporta ingresos entre 1.8 y 2.7 miles de millones de dólares (UNODC,

2021, p. 3). Entre 2001, en que inicia la intervención, y 2020, Afganistán pasó de 8 mil Ha. de cultivo de amapola a 224 mil (ONUDD, 2021a, p. 9), superficie que se mantiene alrededor de ese nivel con un máximo en 2017, como se observa en la gráfica.

Gráfico 1. Afganistán. Cultivo de Amapola
Miles de hectáreas



Fuente: Diseñado con base en ONUDD, 2021a.

Coincidiendo con el impulso geopolítico para la ocupación, se mantuvo el segundo lugar mundial de Afganistán como productor de hashish (resina de cannabis) y, desde 2012, crece la producción de metanfetaminas, que para 2018 se eleva ya a 1.251 kg. (ONUDD, 2021b, p. 11).

Gráfica 2. Afganistán. Producción de Metanfetaminas.



Fuente: ONUCD, 2021, p. 11.

Negocios que acompañan las guerras y guerras que acompañan los negocios.

El negocio de las armas

La industria del armamento necesita guerras que, a su vez, requieren armas. Las razones de las guerras son múltiples: desde la necesidad de aniquilar al otro, consustancial a la competencia capitalista, hasta la apropiación de territorios estratégicos, de riquezas naturales valiosas, de rutas de enlace relevantes o impedir coaliciones enemigas o rebeliones e indisciplinas, pero también la posibilidad de hacer o incrementar negocios rentables como el de abrir o estimular la producción y flujo de sustancias enervantes, la trata de personas o la venta de armas y equipo militar.

Entre 2001 y 2021, Estados Unidos casi duplicó el valor de sus exportaciones de armas, pasando de 5.590 millones de dólares a 10.613. Y, en total, de los 10 países que registran las mayores ventas, solo dos no pertenecen a la coalición occidental, Rusia y China. Todos los otros son miembros de la OTAN, excepto Israel que, sin embargo, tiene total cercanía con Estados Unidos.

Tabla 1. Venta de armas 2001-2018

Países	Millones de dólares
Estados Unidos	174.356
Rusia	123.935
Francia	43.003
Alemania	35.262
China	23.469
Reino Unido	22.533
Italia	13.681
Israel	12.682
Países Bajos	11.111
España	10.982

Fuente: elaborado con datos de SIPRI Arms Transfers Database.

Sorprende que la venta de armas tuvo sus cifras más altas en los años noventa, en parte por las guerras en los Balcanes, pero cayó ligeramente ya en el siglo XXI. Estados Unidos ha estado desde entonces incentivando el armamentismo para colocar su producción, que compite de cerca con la de Rusia. Sin duda, las guerras de Afganistán, Irak, las tensiones en la zona y, ahora, la guerra de Ucrania han pesado para incrementar sustancialmente el negocio de los productores de armas.

El COG y sus vías de entrada

La prioridad en este gran despliegue hacia Asia Central, como mencionamos, era contar con un punto de anclaje en su interior, con condiciones geográficas de punto de irradiación para, desde ahí, organizar una intervención más extensiva, cubriendo los territorios que habían quedado fuera del control centralizado de la Unión Soviética. En esta tarea, uno de los desafíos a enfrentar era la presencia de potencias regionales aglutinadas en torno al Islam, cultural y territorialmente arraigadas en esos territorios y con historias milenarias, pues constituían un obstáculo, e incluso un riesgo, para sostener la posibilidad de una hegemonía planetaria. Irak, potencial nodo de cohesión política de las fuerzas locales frente al poder de Occidente y poseedor de 145 mil millones de barriles de petróleo en reserva (OPEC, 2022), ocupando el quinto lugar mundial, fue un segundo blanco directo en este despliegue de fuerzas -después de Afganistán-, y facilitó una presencia estratégica en el Medio Oriente y el Golfo Pérsico. El otro nodo de cohesión político-religiosa es Irán, con capacidad nuclear, consistencia cultural y religiosa y abundantes reservas de petróleo, además de probable aliado en una coalición que ponga freno al despliegue de Occidente. Por ello, Irán ha sido sometido a una política de encierro, de acoso y de bloqueo permanente.

Pero Rusia y China son, sin duda, los objetivos principales. Como potencias emergentes de distinto carácter, dimensiones y posibilidades, y con una historia de desavenencias mutuas, se han ido consolidando como los mayores oponentes al despliegue del poder estadounidense en un proceso simultáneo de aproximación paulatina. Fuerza económica, capacidad militar y tecnológica, y recientes acuerdos entre ambos, incluso en el terreno militar, los convierten en una coalición sumamente peligrosa para el poder estadounidense.³

³ Esta manera de conceptualizar las amenazas en ocasiones es representada como 2 (China y Rusia) + 3 (Irán, Corea del Norte y las Violent Extremist Organizations) (Buell et al., 2018, p. 31). Con ello, se pone énfasis en el carácter de *adversarios próximos* o equivalentes (near-peer adversaries) de China y Rusia y, por tanto, como amenazas prioritarias con las cuales se compete en el largo plazo; mientras que Irán, Corea del

El recurso en los casos de Afganistán e Irak fue la guerra revestida de una narrativa que justificó cualquier intervención, sin importar las transgresiones de las normas y el derecho internacional, a través de la instalación del calificativo genérico e inespecífico de terrorismo. No obstante, la apuesta es alcanzar el objetivo principal, Rusia y China, después de ocupar sus zonas circundantes y de socavar la situación de los países limítrofes creando franjas o extensiones de zonas grises desde donde poderlas atacar, ya sea por asfixia, por vulneración de sus condiciones básicas o generándoles condiciones de fragilidad suficientes para intervenirlas de algún modo.

[...] no es posible lograr la aniquilación del enemigo en el curso de una sola operación, requiere la ejecución de operaciones sucesivas en la penetración del enemigo. [...] Esto significa que el avance debe integrarse con la persecución en profundidad junto con el uso de reservas para mantener el ritmo de la ofensiva para evitar que el enemigo restablezca una defensa coherente (Blythe, 2018, p. 40).

Rusia ha sido llevada a guerras como la de Ucrania, que es una región estratégica en términos militares, energéticos y alimenticios. Se la ha intentado someter a un estrés energético y a bloqueos financieros severos. Con China, el terreno ha sido más bien el de la economía, pero la ocupación y los movimientos en el área del Indopacífico por parte de Estados Unidos, acompañado por el Reino Unido, indican una estrategia de asfixia que, no obstante, no parece muy sencilla. Las posiciones en Taiwán, en Trincomalee (Sri Lanka) y Diego García no solo buscan intimidar a China, sino también controlar la ruta de suministro del petróleo del que China es deficitaria.

Como capas envolventes o penetraciones directas o cercanas en el territorio, controlando mares y pasos estratégicos y generando guerras difusas o abiertas, Estados Unidos busca mantener su posición hegemónica impidiendo el fortalecimiento de Rusia, China y

Norte y las VEO son situadas en un rango menor de amenaza y a partir de metodologías para contrarrestarlas (*countering*) y disuadirlas (*detering*).

sus aliados. El problema es que, con todo el trabajo en inteligencia, planeación estratégica, diplomacia, intervención y creación de condiciones materiales de superioridad militar, Estados Unidos se enfrenta a contrincantes con capacidades económicas, tecnológicas y militares de un nivel equiparable, que cuentan con presencia y fuerza de atracción tanto regional como global.

Guerras tecnológicas

Los avances en tecnologías de inteligencia artificial, captación y procesamiento de información transitan todas las dimensiones de la guerra o de las disputas hegemónicas. Las guerras a distancia, con vehículos no tripulados o con el trabajo de hackers, guerras de espectro completo que colocan como centro de gravedad estratégico penetrar los sistemas informáticos críticos para alterar el funcionamiento regular de un estado. Pueden ser, como en Irán, los sistemas de control de centrales nucleares; pueden ser los sistemas de información del Pentágono; pueden ser sistemas financieros u otros que provoquen desastres de gestión, supuestos accidentes o decisiones equivocadas con implicaciones importantes.

Las características principales de los conflictos futuros serán el empleo extensivo de armas de precisión y otros tipos de armas nuevas, incluida la tecnología robótica. Los objetivos económicos y el sistema de control estatal del enemigo estarán sujetos a destrucción prioritaria. Además de las esferas tradicionales de la lucha armada, se involucrará dinámicamente la esfera y el espacio de la información (Gerasimov, 2018, p. 132).

Con los ciberataques, se trata de inhabilitar al adversario, de impedirle reaccionar con efectividad o de crear confusión en sus centros de control. El propósito es aislarlo física u operacionalmente, “[...] ‘privar al adversario de las funciones necesarias para ser eficaz’, que la actual doctrina de operaciones urbanas describe como ser crítico para el éxito” (Commons, 2018, p. 123).

Con condiciones crecientes de urbanización y megarurbanización, la gestión social descansa en una medida importante en sistemas informáticos. El control de vialidades, el pago de impuestos, la seguridad y vigilancia, los servicios públicos y casi todas las actividades de gestión institucional, pública y privada, están ya organizadas y reguladas electrónicamente. Con más razón, ocurre con cuestiones altamente prioritarias como las del sector financiero o las consideradas de seguridad nacional.

Ya es recurrente la imagen del soldado que mata con total precisión a un enemigo colocado a kilómetros de distancia, en la cara opuesta del mundo. Han sido muchos los trabajos de hackers de todo tipo y denominación, poniendo en alerta e incluso riesgo algunos procesos o centros de alto cuidado.

Una vez que esto se ha hecho posible, el ciberespacio se ha incorporado como teatro de operaciones de una guerra que tiene múltiples variantes, modalidades, herramientas y criterios, pero que, bajo todas sus formas, es parte de la guerra de espectro completo que no se reduce a lo militar, sino que penetra todos los aspectos de la vida.

El ejemplo de Libia ilustra que sin acceso a las redes del adversario, la fuerza conjunta no puede lograr la superioridad y la libertad de acción en el ciberespacio, ya que la negación del ciberterreno proporcionará a un adversario determinado un medio para interrumpir las funciones conjuntas de los EE.UU. mientras habilita las suyas propias (Commons, 2018, p. 127).

La guerra como apuesta final

La sofisticación alcanzada por la tecnología de guerra en el siglo XXI prefigura batallas de enormes consecuencias y envergadura. La capacidad destructiva, con un amplio soporte informático, se extiende a todos los aspectos de la vida con altos índices de letalidad. Si bien la ciberguerra, propia del siglo XXI, se coloca como una de las modalidades esenciales de las nuevas conflagraciones, lo

que podría permitir pensar en una guerra *limpia*, es solo una de sus vertientes y se combina incluso con la amenaza nuclear. El planteamiento de guerra de espectro completo, en la versión del Pentágono, como el de guerra irrestricta, en la versión de Liang y Xiangsui, indican una multiplicación de medios, frentes, herramientas y estilos en una combinación que intenta agotar todas las posibilidades de defensa del contrario. No dejar resquicios sin atender, cubrir todos los flancos.

El riesgo mayor parece estar delineado por guerras bien perfiladas, contra contendientes de estatura y capacidades equivalentes, en las que se juegan las condiciones y reglas de vida de la humanidad hacia un futuro que, no obstante, podría ser cancelado. Las disputas y definiciones del poder no están lejos de conducir a un holocausto general y extensivo en el que nadie gane porque todos pierden, marcando los límites históricos del sistema-mundo moderno capitalista. La catástrofe ambiental generada por el modo capitalista de organización de la vida, que apunta ya a un colapso del sistema, se ve hoy acelerada por guerras multidominio y multiescalares, cuyo andamiaje tecnológico e intensidad agravan los niveles de contaminación y calentamiento global.

La confrontación entre grandes potencias está en curso, moviéndose discretamente mediante guerras colaterales, ocupando poco a poco territorios, lesionando puntos estratégicos, con intervenciones puntuales que no desaten todas las fuerzas en contra, rodeando al contrario o intentando socavar o poner en estado de vulnerabilidad sus soportes estratégicos.

Si bien esta sería la amenaza más grande para la vida en el planeta, por su impacto destructivo físico, ambiental y social, la guerra soterrada, reptante y difusa ocurre todos los días, en todos los territorios, para disciplinar, para subsumir y controlar y para disuadir cualquier tipo de fuerza corrosiva o desordenadora.

La dominación de espectro completo, entonces, está obligada a desplegar fuerzas de diferentes tipos y en todos los terrenos. Lo mismo con la movilización de enormes buques de guerra que con

pequeños enjambres capaces de caminar atravesando muros, de alcanzar un objetivo preciso en los lugares más recónditos (como han sido incómodos líderes palestinos o el propio Bin Laden, si es que no se trató de un asesinato simulado).

La idea del combate multidominio y la preparación de las fuerzas, humanas o tecnológicas, con la flexibilidad que les permita pasar de un teatro de guerra a otro con condiciones y desafíos tan distintos como los que estos variados escenarios exigen, sin perder presteza y capacidad de respuesta inmediata y efectiva, es la gran apuesta que subyace a la pretensión de dominación de espectro completo que marca la hoja de ruta del siglo XXI.

Guerras proxy, guerras sucias, guerras fantasma, guerras abiertas y de gran escenario, guerras reptantes, soterradas, irrestrictas o totales, en combinaciones variadas de acuerdo con la situación, que ocurren de acuerdo con tres criterios que buscan hacerlas temibles e incontestables:

1. Simultaneidad en la aplicación de acciones de distintos tipos y en diferentes terrenos. Puede ser un ataque de enjambre junto con una intervención financiera, una invasión de algún comando de ataque, un cierre de fronteras, encarecimiento alimentario y la colocación mediática de narrativas deliberadas para dislocar los sentidos de realidad y justificar la ofensiva.
2. Avasallamiento desplegando fuerzas sobredimensionadas de modo que cualquier defensa o resistencia resulte ridícula y se inhiba de antemano.
3. Cobertura total para evitar rutas de escape. Sensación de panóptico que busque paralizar cualquier intento evasivo o confrontativo y genere resignación y disciplinamiento anticipados, sin lugar seguro para resguardarse.

Las guerras del siglo XXI son el espacio de definición de las jerarquías del poder mundial y de la geocultura sobre la cual se construyen los consensos colectivos. Son, a la vez, la última frontera de

cohesión del sistema-mundo que se distiende aceleradamente y que bien puede colapsar por sus contradicciones internas dando paso a la liberación de formas alternativas de organización de la vida o bien, con la tremenda fuerza destructiva acumulada, puede generar un estallamiento que cancele toda posibilidad de vida humana organizada socialmente en el planeta.

El sistema-mundo moderno capitalista está tocando sus límites históricos. Las guerras, que deberían colaborar con un disciplinamiento general para mantener la estabilidad y las condiciones de su permanencia, están, al contrario, contribuyendo a un final catastrófico. Todos los sistemas, de acuerdo con sus características, su complejidad y su evolución, tienen límites históricos que ofrecen la posibilidad de abrir horizontes más luminosos. El previsible colapso de este sistema no anula la creatividad de la vida para recrearse, afirmarse o reinventarse, a pesar de todas las guerras por las que tenga que transitar.

Bibliografía

Adamsky, Michael J. y Pence, Scott (2019). Thriving in Uncertainty. From Predictive- to Probability-Based Assessments. *Military Review*, 54-63. <https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/Mar-Apr-2019/54-Thriving/>

Arnold, Thomas D. y Fiore, Nicolas (2019). Five Operational Lessons from the Battle for Mosul. *Military Review*, 56-71. <https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/Jan-Feb-2019/Arnold-Mosul/>

Barea, Alfonso (2018). El control sobre los “global commons” en el mundo actual. *Military Review. Edición Hispanoamericana*, 24-29. <https://www.armyupress.army.mil/Journals/Edicion-Hispanoamericana/Archivos/Primer-Trimestre-2018/El-control-sobre-los-global-commons-en-el-mundo-actual/>

Bathia, Kapil (2018). Coercive Gradualism Through Gray Zone Statecraft in the South China Seas. *Joint Quarterly* (91).

- Baumann, Robert F. (2018). A Central Asian Perspective on Russian Soft Power. *Military Review*, 48-63.
- Beskow, David. M. y Carley, Kathleen M. (2019). Social Cybersecurity. An Emerging National Security Requirement. *Military Review*, 118-127. <https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/English/MA-2019/Beskow-Carley-Social-Cyber.pdf>
- Blythe, Wilson C. Jr. (2018). A History of Operational Art. *Military Review*, 37-49. <https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/November-December-2018/Blythe-Operational-Art/>
- Buell, William A., Dorrance, Erin y West, Robert (2018). Transregional Capstone Exercise Training for Tomorrow's Fight. *Joint Force Quarterly*, (90), 30-35
- Caliscan, Murat (2019). Hybrid warfare through the lens of strategic theory. *Defense & Security Analysis*, 35(1), 40-58.
- Calvo Albero, José Luis (2016). Los ejércitos como redes. El dilema entre jerarquía y descentralización. *Military Review. Edición Hispanoamericana*, 3-9. https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/Spanish/MilitaryReview_20160430_art004SPA.pdf
- Cecea, Ana Esther (2019). Las redes de la guerra. *América Latina en Movimiento*, (544). <https://geopolitica.iiec.unam.mx/index.php/node/597>
- Chivvis, Christopher (22 de marzo de 2017). Understanding Russian "Hybrid Warfare" And What Can Be Done About it. *Testimony presented before the House Armed Services Committee*. RAND Corporation.
- CJCS (1998). *Joint Vision 2010*. Washington: U.S. Government Printing Office.
- CJCS (2000). *Joint Vision 2020: America's Military—Preparing for Tomorrow*. JFQ, Summer. Washington: U.S. Government Printing Office.
- Commons, Austin G. (2018). Cyber is the New Air Domain Superiority in the Megacity. *Military Review*, 120-130. <https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/January-February-2018/Cyber-is-the-New-Air-Domain-Superiority-in-the-Megacity/>
- RAND Corporation (2022). *Cyber Warfare*. <https://www.rand.org/topics/cyber-warfare.html>

Dunn, Brian J. (2018). The Tyranny of the Shores. Army Planning for the Asia-Pacific Theater. *Military Review*, 101-107. <https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/March-April-2018/Dunn-Tyranny-of-Shores/>

Faggard, David (2013). El enjambre social. Los efectos asimétricos del discurso público en el conflicto futuro. *Military Review. The professional journal of the US Army*. Washington: Department of Defense.

Forsyth, Michael (2018). Why Alaska and the Arctic are Critical to the National Security of the United States. *Military Review*, 113-119. <https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/English/Forsyth-why-alaska-and-arctic-are-critical.pdf>

Fridman, Ofer (2017). Hybrid Warfare or Gibrinaya Voyna? *The RUSI Journal*, (162)1, 42-49.

Gerasimov, Valery (2018). Russian General Staff Chief Valery Gerasimov's Presentations to the General Staff Academy. *Military Review*, 130-138. <https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/Jan-Feb-2019/Gerasimov-Future/>

Gloffka, Aleksy (2011). *Swarming: una mirada a la guerra desde las dos caras del dios Janus*. *Military Review. The professional journal of the US Army*, 42-49.

Hayes, James E. (2018). Beyond the Gray Zone Special Operations in Multidomain Battle. *Joint Force Quarterly*, (91), 60-66.

Klima, Kenneth T., Mazzella, Peter y McLaughlin, Patrick B. (2018). Scipio Africanus and the Second Punic War. Joint Lessons for Center of Gravity Analysis. *Joint Force Quarterly*, (88), 102-111.

Mansoor, Peter R. (2012). Hybrid warfare in history. En Williamson, Murray y Mansoor, Peter, *Hybrid Warfare. Fighting Complex Opponents from the Ancient World to the Present*. Cambridge University Press.

Martin, Emily y Wooley Samantha (2018). The Army's Role in the Future Pacific Theater. *Military Review*, 102-112. <https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/January-February-2018/The-Armys-Role-in-the-Future-Pacific-Theater/>

Moon Cronk, Terri (2019). Near-peer adversaries work to surpass U.S. in technology, official says. DoD News. <https://dod.defense.gov/News/Article/Article/1512901/near-peer-adversaries-work-to-surpass-us-in-technology-official-says/>

ONU (1992). *Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo*. <https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm>

ONUDC (2021a). *Afghanistan Opium Survey 2020*.

ONUDC (2021b). *Drug situation in Afghanistan 2021*.

OPEC (2022). *Annual Statistical Bulletin*. https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm

Perkins, David G. (2019). Multi-domain battle, the advent of twenty first century war. *Military Review*, 8-13. <https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/English/Multi-Domain-Battle-The-Advent-of-Twenty-First-Century-War.pdf?ver=2017-10-26-160929-763>

Liang, Qiao y Xiangsui, Wang (1999). *Unrestricted warfare*. Estados Unidos: Echo point books and media.

Robinson, Linda (2017). *SOF's Evolving Role: Warfare 'By, With, and Through' Local Forces*. RAND Corporation. <https://www.rand.org/blog/2017/05/sofs-evolving-role-warfare-by-with-and-through-local.html>

Scahill, Jeremy (2007). *Blackwater. The rise of the world's most powerful mercenary army*. Nueva York: Nation Book.

Schwandt, Jamie Richard (2018). Uncovering Hidden Patterns of Thought in War. *Military Review*, 18-29. <https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/November-December-2018/Schwandt-Wei-Chi/>

Schwarz, Erik (2018). A new approach to joint concepts. *Joint Force Quarterly*, (89).

United States Special Operations Command (9 de septiembre de 2015). *Gray Zone White Paper*.

Votel, Joseph L. y Keravuori, Eeron R. (2018). The By-With-Through Operational Approach. *Joint Force Quarterly*, (89), 40-47.

World Commission on Environment and Development [WCED] (1987). *Brundtland report*. <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>

Weiner, Tim (2008). *Legado de cenizas. La historia de la CIA*. México: Debate.

Weizman, Eyal (2010). *Caminar atravesando muros*. European Institut for Progressive Cultural Politics [eipcp]. http://eipcp.net/transversal/0507/weizman/es/#_ftn3

Weizman, Eyal (2012). *A través de los muros. Cómo el ejército israelí se apropió de la teoría crítica postmoderna y reinventó la guerra urbana*. Errata naturae.

White House (2018). *National Strategy for Counterterrorism of the United States of America*. Washington: White House.

Zanol, James L. y Pierce, Brian M. (2018). Overcoming the Challenges in Implementing Emerging Maneuver Concepts. *Military Review*, 84-92. <https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/May-June-2018/Overcoming-the-Challenges-in-Implementing-Emerging-Maneuver-Concepts/>

Parte 1. El capital de la guerra

La corporación militar y su papel en la disputa por el liderazgo económico mundial

Raúl Ornelas*

DOI: 10.54871/gS23b10b

La ruptura de todos los órdenes de las sociedades contemporáneas y, en particular, la desarticulación del orden internacional ha situado en el primer plano de las relaciones internacionales el ejercicio de la violencia y sus formas extremas, las guerras en todas sus escalas y declinaciones. Para las instancias gubernamentales, la guerra se ha convertido en la respuesta típica tanto a los enemigos seculares o creados (estados rivales, el crimen organizado, el terrorismo internacional) como a cualquier problema o situación que obstaculice la marcha del sistema capitalista. Tal es el caso de la pandemia de SARS-COV-2 que inició en diciembre de 2019, entre otros. Mandatarios muy diferentes entre sí, como Emmanuel Macron, Donald Trump y Joe Biden, la han calificado de *situación de guerra*.

Uno de los rasgos más destacados de las guerras contemporáneas es el papel de las corporaciones privadas, ya no solo como re-taguardia, sino como sujetos con grandes capacidades para planear

* Agradezco la colaboración de Sandy Ramírez, Cristóbal Reyes y Josué García quienes sistematizaron las bases de datos utilizadas en este trabajo.

y actuar en los teatros de conflicto. Este protagonismo creciente es resultado de las estrategias y políticas de privatización que caracterizan el periodo histórico neoliberal iniciado en los años ochenta del siglo xx (Godfrey et al., 1994).

Una vez disuelto el imperio soviético, el hegemon estadounidense tuvo el campo libre para transformar sus fuerzas armadas y abrió el conjunto de los dominios militares a la participación de las empresas privadas (Mathews y Treddenick, 2001). El liderazgo militar estadounidense sintetizó su concepción de la guerra y del papel de las fuerzas armadas en el mundo contemporáneo en la llamada Revolución de los asuntos militares, conjunto de modificaciones en la doctrina y en los modos de hacer la guerra que estableció:

1. El tránsito de las guerras convencionales de carácter interestatal hacia las guerras asimétricas o difusas, en las que el enemigo no es fácilmente identificable, se *mezcla* con la población civil y puede estar en *cualquier parte*.
2. La necesidad de crear y/o consolidar las ramas de las fuerzas armadas dedicadas a la llamada inteligencia y las operaciones especiales, denominaciones eufemísticas para las tareas de espionaje, tortura, secuestros, asesinatos y demás operaciones de guerra encubierta.
3. La reducción de personal de los principales cuerpos de las fuerzas armadas, en particular el ejército, favoreciendo los recursos aéreos y los armamentos de la guerra “quirúrgica” (Sloan, 2002).

La figura de conjunto que adquirieron las fuerzas armadas estadounidenses es la conjunción de dos artes de la guerra (*warfare*): la guerra preventiva y la guerra a distancia. El eje de esta nueva forma de concebir y practicar la guerra son las tecnologías de la información, que permiten recopilar, analizar y transmitir en tiempo útil las informaciones y los conocimientos necesarios para la toma de decisiones, así como la articulación de complejas infraestructuras de alcance global que permiten la ejecución *a control remoto* de operaciones militares.

Como respuesta a los supuestos o reales enemigos difusos, la guerra preventiva pretende anticipar los movimientos del oponente mediante la llamada inteligencia y las controvertidas acciones de infiltración y golpes devastadores (sabotajes, asesinatos, diversas acciones de *desestabilización*). Por su parte, la guerra a distancia propone una alternativa organizativa que, supuestamente, minimiza las pérdidas humanas en los teatros de conflicto, mediante un complejo sistema de armas controladas a distancia y con un alto poder destructivo. Aunque el aseguramiento de los territorios sigue necesitando el concurso de las tropas, muchas de las batallas pueden ser resueltas gracias al poder de fuego aéreo, que, a diferencia de lo que sucedió en la guerra de Vietnam, comprende tanto una vertiente masiva (por ejemplo, bombardeos) como los golpes puntuales con drones y otro tipo de armas a control remoto (Chamayou, 2016).

La segunda invasión estadounidense en Irak constituye el ejemplo típico de esta forma de hacer la guerra: el liderazgo estadounidense construyó tanto la *evidencia* de que el régimen de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva que amenazaban a los intereses y a los aliados estadounidenses en la región, como la opinión pública favorable a una intervención armada en el país asiático. La ofensiva militar estuvo basada en bombardeos masivos y el avance ulterior de las tropas. Una vez desintegrado el régimen de Hussein, las corporaciones militares privadas se desplegaron y reforzaron la intervención de las fuerzas armadas en su intento por instaurar un nuevo régimen político y social en Irak, mediante acciones militares y de ingeniería social e institucional. Todo ello dio lugar a negocios altamente rentables para empresas civiles y militares de la coalición invasora (Congress of the United States of America, 2008).

Las innovaciones tecnológicas destacan como pilares de las nuevas formas de hacer la guerra: municiones guiadas de precisión, equipos de vigilancia, plataformas de armas sigilosas y armamento autónomo fueron usados en batalla por primera vez durante la primera invasión estadounidense en Irak. El uso militar de la tecnología de la información alcanzó su cenit y las nuevas tecnologías mejoraron la

capacidad de las fuerzas de la coalición para intercambiar y utilizar información, resaltando las ventajas de impedir las comunicaciones enemigas, gracias a las tecnologías de interceptación.

A través de la Revolución en los asuntos militares, el hegemon estadounidense recuperó sus ventajas frente a las fuerzas armadas de otras potencias, en particular respecto de Rusia. Los éxitos económicos y militares de las nuevas configuraciones de la guerra estimularon la difusión de las nuevas tecnologías y las formas de organización hacia prácticamente todas las naciones que cuentan con fuerzas armadas estables y una masa crítica mínima. Ya en el siglo XXI, incluso actores no estatales adoptaron segmentos de la nueva forma de hacer la guerra, como los ataques cibernéticos, el uso de drones en tareas de vigilancia y combate, y el recurso a contratistas privados como tropa de combate (Calvo, 2017).

Auge y diversificación de la corporación militar

El protagonismo creciente de las corporaciones privadas discurre por dos vías principales:

- 1) Los fabricantes de armamentos consolidaron sus operaciones al encontrar mercados en constante crecimiento y la posibilidad de comerciar sus productos con menos restricciones gracias a la liberalización comercial. Tal es el caso de las corporaciones gigantes (Lockheed Martin, Dyncorp, BAE Systems) y de las empresas estatales y paraestatales (Airbus, United Aircraft, Aviation Industry Corporation).
- 2) La emergencia de las llamadas corporaciones militares privadas, de menores dimensiones respecto de los grandes fabricantes de armamento, cuyo papel en la guerra deviene estratégico y altamente rentable. Estas corporaciones se hacen cargo de tareas realizadas con anterioridad por las fuerzas armadas, desde el entrenamiento y la provisión de servicios de avituallamiento, sanitarios, educativos, hasta el alquiler de batallones de combatientes de élite con armas de tecnología de vanguardia. Las corporaciones militares privadas realizan tareas que representaban cuellos

de botella en el funcionamiento de las fuerzas armadas (Avant, 2005; Kinsey, 2006; Hanson y Lin-Greenberg, 2019). A la luz de la experiencia de 30 años de operaciones, desde la primera invasión estadounidense en Irak, evaluaciones independientes han mostrado que los objetivos de mejorar la eficiencia y reducir los costos de las operaciones militares no se han cumplido, haciendo evidente que la verdadera motivación del auge de las corporaciones militares privadas es su alta rentabilidad y su colaboración en realizar actividades y misiones cuestionables desde el punto de vista del derecho internacional y humanitario (Hartley y Belin, 2020; Peltier, 2020).

En este texto, presentamos un análisis de los desempeños de las 100 corporaciones militares más importantes del mundo de acuerdo con los datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI, por su sigla en inglés). Al tratarse de una actividad altamente concentrada, tanto por los controles estatales que la consideran como un tema de seguridad nacional como por las barreras tecnológicas y económicas que impiden la existencia de un gran número de empresas especializadas en la producción de armamento, el estudio de las mayores corporaciones nos permite establecer los rasgos más importantes de la competencia mundial en actividades de defensa y seguridad.

La liberalización emprendida desde los años ochenta del siglo xx también ha incidido sobre el control del mercado de bienes y servicios militares que de manera paulatina ha pasado a manos de las corporaciones privadas, al tiempo que se propician situaciones paradójicas en las que el derecho internacional o las regulaciones nacionales pierden capacidad de acción, como son el hecho de que una misma empresa venda armas a bandos contrarios en los conflictos armados, el recurso a empresas privadas para las *operaciones de paz* de las instancias multilaterales como Naciones Unidas, y la comisión lisa y llana de crímenes de guerra y de lesa humanidad por parte de empresas contratadas por los estados.

En ese marco, el estudio de la competencia en este importante mercado presenta un ángulo estratégico del liderazgo estadounidense en el terreno militar: los sujetos empresariales que realizan las iniciativas de Estados Unidos y desarrollan su propia agenda geopolítica y de obtención de ganancias. Nuestro estudio también muestra la posición que tienen los grupos de empresas con sede en las otras potencias militares, en particular, las vencedoras de la Segunda guerra mundial.

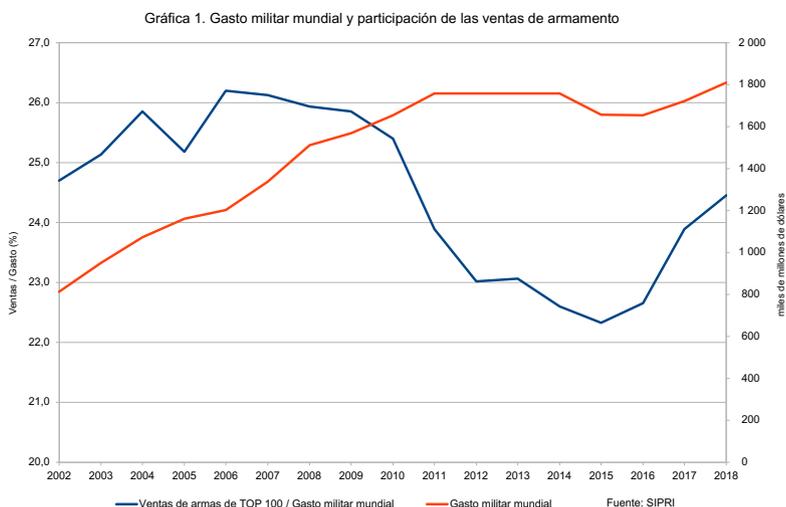
El texto está dividido en 4 secciones: la primera presenta el panorama de las 100 empresas de defensa y seguridad más grandes del mundo; la segunda presenta los principales campos tecnológicos que desarrollan estas empresas; en la tercera sección, se muestran las relaciones entre personal militar, político y empresarial a partir de los consejos de administración de las empresas; finalmente, se muestran los vínculos financieros entre las empresas militares y las administradoras de activos, señalando la profunda imbricación entre dos ámbitos estratégicos del capitalismo contemporáneo: lo militar y las finanzas.

Panorama de las corporaciones de defensa más grandes del mundo

Para establecer las tendencias generales de la competencia en el mercado de defensa y seguridad, recurrimos a la muestra de SIPRI, que clasifica las empresas por sus ventas anuales de armamentos y su país sede, y ofrece datos para el periodo 2002 a 2018. Hasta 2016, presenta datos sobre las ganancias y los empleados totales, los mismos que hemos utilizado para construir indicadores de desempeño.¹ Las informaciones de las empresas con sede en China solo existen para el periodo 2015 a 2019.

¹ En la dirección http://let.iiec.unam.mx/anexo_cmp se puede consultar la base de datos utilizada y el conjunto de materiales que fundamentan nuestro análisis sobre la competencia en el sector de defensa y seguridad. Los datos originales están alojados en el sitio de SIPRI <https://www.sipri.org/databases/armsindustry>.

La importancia de estas corporaciones puede ser medida al relacionar sus ventas de armamento con el gasto militar en el mundo. Entre 2002 y 2018, este indicador oscila entre un máximo de 26,2% en 2006 y un mínimo de 22,3% en 2015, con un valor promedio de 24,5%: las ventas de solo 100 empresas equivalen a entre una cuarta y una quinta parte de todos los recursos destinados a la defensa en el mundo (Gráfica 1). Esta proporción también es relevante en tanto el gasto militar ha tenido una tendencia ascendente en el periodo de estudio, pasando de 813 mil millones de dólares (mmd) a 1,8 billones de dólares (bd) (Ornelas, 2021).



A partir de las ventas de armamento, hemos agrupado las 100 corporaciones más importantes por sus respectivos países sede, clasificadas por el monto de sus ventas anuales de armamento, obteniendo una jerarquía internacional dominada en forma amplia por las empresas estadounidenses, a partir de dos indicadores: las ventas acumuladas en el periodo de estudio y los promedios anuales de ventas (Cuadro 1). La muestra incluye información de 234 corporaciones de 25 países sede, cuyas ventas acumuladas ascienden a 6,1 bd con un

promedio anual de 360 mmd.² Las empresas con sede en Estados Unidos aportan 59,4% de las ventas acumuladas (3,6 bd) y tienen un promedio anual de ventas de 213 mmd, poseyendo un liderazgo sólido frente a las corporaciones con sede en otras potencias militares, que en conjunto aportan 29,4% de las ventas acumuladas. En esta medición, solo las empresas de Reino Unido tienen un peso significativo, 11% de las ventas y ventas promedio de 39,8 mmd.

Cuadro 1. Jerarquía de las empresas militares. Ventas <i>miles de millones de dólares y porcentajes</i>					
Grupos de corporaciones	Empresas		Ventas de armas		
	#	%	Acumulado 2002-2018	% sobre Total	Promedio
Estados Unidos	104	44,4	3 633	59,4	213,7
Reino Unido	18	7,7	677	11,1	39,8
Francia	14	6,0	341	5,6	20,1
Rusia	25	10,7	305	5,0	17,9
Trans-europeas	4	1,7	279	4,6	16,4
Italia	5	2,1	195	3,2	11,5
Seis principales	170	72,6	5 430	88,8	319,4
Otros (19)	64	27,4	688	11,2	40,5
Total	234	100,0	6 118	100,0	359,9

Fuente: base de datos ventas de las principales CMP
Disponible en http://let.iiec.unam.mx/anexo_cmp

Los indicadores de desempeño ofrecen una visión más matizada de la competencia entre las grandes corporaciones militares. En el periodo 2002 – 2016, la relación ganancias totales – ventas de armamento para las 204 empresas consideradas es de 15,4% promedio

² A lo largo del periodo 2002 – 2019 hay una importante variación en las empresas que figuran en el listado, de modo que el número total de empresas se eleva hasta 234, aunque buena parte de ellas solo participan en algunos años. Por tanto, según el periodo que se considere, variará el número de empresas consideradas. En el Anexo estadístico, se puede consultar la base de datos completa.

anual, en tanto que el promedio de las ventas por empleado es de 88 mil dólares (Cuadro 2). La relación ganancias – ventas favorece a las empresas estadounidenses, pero su ventaja no es tan amplia; tienen un valor promedio de 19,6%, seguidas por las empresas francesas (10,3%) y las de Reino Unido (8,5%). En cambio, todos los grupos de empresas con sede en Europa tienen ventas por empleado superiores a las del grupo estadounidense, destacando las empresas italianas que promedian casi 128 mil dólares durante el periodo de estudio. Este desempeño de las corporaciones estadounidenses indica menores niveles de productividad, factor que de mantenerse en el mediano y largo plazo, puede afectar su liderazgo.³

Cuadro 2. Indicadores de desempeño de las principales corporaciones militares

valores promedio del periodo 2002 – 2016

Grupos de corporaciones	Ganancias / Ventas %	Ventas por empleado miles de dólares
Estados Unidos	19,6	102,4
Reino Unido	8,5	131,4
Francia	10,3	118,2
Rusia	3,1	50,8
Trans-europeas	7,5	119,9
Italia	1,4	128,0
Los 6 principales	15,5	101,6
Total	15,4	88,2

Fuente: base de datos ventas de las principales CMP

Disponible en http://let.iiec.unam.mx/anexo_cmp

³ Este es un rasgo de la industria de defensa estadounidense advertido por autores como Noble (1977 y 1984) y Reich (1972), quienes estudian los bajos niveles de eficiencia y lo que llaman *desperdicio* de recursos. La dinámica de largo plazo de esta industria es resultado de una posición monopólica en la que el liderazgo tecnológico estadounidense convive con la baja eficiencia, los altos costos de producción y los altísimos precios de venta de sus bienes y servicios.

Las informaciones disponibles sobre las corporaciones militares chinas muestran que en ese país está emergiendo un importante foco de producción de armamento. Entre 2015 y 2018, las ventas acumuladas de las 4 empresas chinas son de 216 mmd con un promedio anual de 54,2 mmd. Sobre el total mundial para ese periodo (16 bd), este grupo representa 13,6%, lejos aún de la cuota de las empresas estadounidenses, que es de 58,4%, pero ya por encima de las corporaciones con sede en Reino Unido, que, con entre 8 y 10 empresas, aporta 9,4% del total. Es bien sabido que, en los últimos 10 años, China ha realizado crecientes inversiones en el sector militar (Tian y Su, 2021) y parte de esos recursos son manejados por este pequeño grupo de corporaciones diversificadas, mostrando la voluntad del liderazgo chino de prepararse para hacer frente a su rival estadounidense, incluso en el terreno militar.

Este panorama apuntala un tópico de las relaciones internacionales: el liderazgo militar de Estados Unidos, y muestra que las corporaciones con sede en ese país controlan el mercado militar. En las siguientes secciones, mostramos tres aspectos nodales de la competencia entre empresas militares, con el fin de evaluar la solidez del liderazgo estadounidense en la dimensión militar e identificar potenciales desafíos en el mediano y largo plazo.

Principales tecnologías que desarrollan las corporaciones militares

El panorama de la competencia entre empresas militares tiene como rasgo principal el liderazgo de las empresas con sede en Estados Unidos. Para analizar las bases y dinámicas de ese liderazgo, hemos realizado una amplia investigación sobre los desempeños de las principales corporaciones militares referidas por SIPRI. Para ello, elaboramos los perfiles de cada una de dichas empresas.⁴ En esta sección, presentamos los resultados de nuestro análisis sobre las especializaciones

⁴ Los mismos pueden ser consultados en http://let.iiec.unam.mx/perfiles_corporaciones

tecnológicas de estas empresas. Utilizamos elementos del llamado análisis cualitativo de datos que permite establecer tendencias de los procesos o situaciones estudiados sin contar con indicadores cuantitativos, recurriendo en este caso a los principales bienes y servicios que ofrecen las corporaciones militares estudiadas. El análisis que presentamos es de carácter general y su pertinencia reside en el número de casos considerados. Estos son suficientemente abundantes para describir el núcleo de la producción de las empresas militares y su repartición entre grupos de empresas, sabiendo que el mercado mundial de armamentos es muy concentrado, por lo que las 104 empresas estudiadas comprenden los segmentos estratégicos de la producción militar privada.

El punto de partida de esta investigación fue la elaboración de una clasificación de las tecnologías empleadas a partir de los bienes y servicios que ofrece cada empresa, resultando en cuatro grandes categorías, con sus respectivos rubros principales:

- a) Armas de destrucción masiva: armas nucleares y químicas, naves aéreas y marinas, misiles.
- b) Armas de vanguardia: armas autónomas, comunicaciones, computación, datos, ciberseguridad, sistemas electrónicos, electro-ópticos y electromagnéticos.
- c) Armas convencionales: armas y municiones, vehículos terrestres de combate y transporte, uniformes e implementos de combate.
- d) Servicios militares: infraestructura e instalaciones, tareas de mantenimiento, servicios de consultoría, apoyo militar y organización de operaciones.

Esta clasificación fue elaborada a partir de la complejidad de las tecnologías implicadas y comprende una gran diversidad de productos elaborados por este grupo de corporaciones.⁵ La muestra comprende información para 104 empresas, recopilada entre 2018 y 2019 de sus

⁵ La clasificación de tecnologías y productos y la base de datos obtenida pueden ser consultadas en la dirección http://let.iiec.unam.mx/anexo_cmp.

sitios en internet y diversas fuentes públicas, abarcando 1 185 tipos de bienes y servicios distribuidos en las cuatro categorías de la siguiente manera: 325 tipos de armas de destrucción masiva, 520 tipos de armas de vanguardia, 97 tipos de armas convencionales y 243 tipos de servicios militares (Cuadro 3). En tanto se trata de las mayores fabricantes de armamento, es plausible que los productos más comunes sean las armas de vanguardia, que constituyen el segmento más dinámico en el mercado mundial de productos destinados a la defensa y la seguridad. Los liderazgos de las potencias militares y, entre ellos, los liderazgos militares coinciden en que la disputa presente y futura tiene como principal escenario las armas de vanguardia y los sistemas a los que dan lugar.

Cuadro 3. Especializaciones tecnológicas de las principales corporaciones militares					
Grupos de corporaciones	Tipo de armamento fabricado				Total
	Destrucción masiva	Vanguardia	Convencionales	Servicios militares	
Estados Unidos	88	207	17	127	439
Reino Unido	31	46	7	27	111
Francia	16	30	7	15	68
Rusia	27	15	9	9	60
China	12	18	7	0	37
Italia	12	14	2	4	32
Trans-europeas	19	7	2	3	31
Los siete	205	337	51	185	778
Otros	120	183	46	58	407
Total	325	520	97	243	1185

Fuente: base de datos tecnologías y productos de las CMP
 Disponible en http://let.iiec.unam.mx/anexo_cmp

Para establecer las especializaciones tecnológicas, agrupamos las empresas por los siete principales países sede, incluyendo las 4 empresas chinas referidas en el primer apartado. Estos grupos principales representan la mayor parte del total de los bienes y servicios retenidos, entre 52,6% (armamento convencional) y 76% (servicios militares), concentrando 65,7% del total de las cuatro categorías consideradas en su conjunto. Esta distribución por grupos de empresas

permite una segunda lectura de la competencia, esta vez a partir de las tecnologías empleadas.

En lo que toca al liderazgo en cada actividad, las empresas estadounidenses ofrecen la mayor cantidad de bienes y servicios en las cuatro categorías: las 38 empresas de este grupo ofrecen 439 productos, 37% del total; destacan sus actividades en la producción de armamento de vanguardia con 207 productos (casi 40% del total de esa categoría), en los servicios militares, con 127 productos (52%) y las armas de destrucción masiva, con 88 productos (27%). Las empresas con sede en Reino Unido tienen un patrón de especialización similar al de las estadounidenses: de 111 productos, 41% son armas de vanguardia con 46 productos, cifra que representa 8,8% del total de esa categoría. Los otros grupos que privilegian las armas de vanguardia son las empresas francesas (44% del total de sus productos), chinas (48,6%) e italianas (43,8%). En cambio, las empresas rusas y las transeuropeas privilegian las armas de destrucción masiva, con 45 y 60% del total de sus productos situados en esa categoría.

Una de las características más destacadas del arte de la guerra contemporáneo es la inversión de ingentes montos de recursos en nuevos armamentos, de ahí que el control de este segmento del mercado mundial de armas sea estratégico en la competencia por el liderazgo empresarial. El Cuadro 4 presenta los principales rubros detectados por nuestra investigación en la categoría de Armas de vanguardia. Sobre un total de 519 productos agrupados en 38 segmentos, destacan 11 rubros que cuentan entre 23 y 43 productos cada uno, detallados en el cuadro. Todos ellos tienen una importancia documentada en las nuevas formas de la guerra, dando lugar a los sistemas de información en tiempo real que articulan el espionaje, la vigilancia, el análisis de datos, así como los sistemas de armamentos que permiten la vigilancia y los ataques a larga distancia a través de distintos dispositivos como los satélites y las naves no tripuladas. Estos rubros también cubren las tecnologías ligadas a la ciberguerra, imbricadas de forma estrecha con los sistemas mencionados (The Economist, 2018b; The Economist, 2017; Statman, 2015; Whittle, 2014; Krishnan, 2009).

Cuadro 4. Principales productos del segmento Armas de vanguardia
número de productos por categoría

	Total *	Estados Unidos	Reino Unido	Francia	Rusia	China **	Italia	Trans-europeas	Otros países
Sistemas de comunicaciones	43	19	4	1	2	1	1	0	15
Sistemas de mando y control	43	14	6	2	2	2	1	0	16
Inteligencia, vigilancia y reconocimiento	39	16	4	3	1	1	1	0	13
Ciberseguridad	35	21	3	1	0	1	1	1	7
Radars	33	11	3	1	3	2	2	0	11
Redes y sistemas informáticos	33	16	2	3	1	2	0	1	8
Satélites	32	11	3	3	0	0	1	1	13
Sensores	32	14	4	3	0	2	1	0	8
Análisis y procesamiento de datos	26	14	2	2	0	0	0	1	7
Electrónica para la aviación	23	7	3	1	1	1	1	0	9
Sistemas electro-ópticos	23	7	1	1	1	1	0	0	12
Otros productos y servicios ***	157	56	11	9	3	5	5	3	65
Total de Armas de vanguardia	519	206	46	30	14	18	14	7	184

* 104 empresas

** Se incluyen las cuatro empresas chinas que forman parte del top 25 de SIPRI a partir de 2015.

*** El rubro Otros comprende los productos con menos de 20 apariciones totales.

Se trata de 26 categorías de productos cuyo detalle puede consultarse en el Anexo estadístico.

Fuente: base de datos tecnologías y productos de las CMP

Disponible en http://let.iec.unam.mx/anexo_cmp

En este segmento, el liderazgo de las corporaciones estadounidenses es amplio, con 39.7% del total de productos (206), y una ventaja absoluta en los 11 segmentos destacados, en particular los productos de ciberseguridad y los sistemas de comunicaciones. De los restantes grupos, solo destaca la participación de las empresas con sede en Reino Unido en los segmentos de sistemas de mando y control (6 productos), sistemas de comunicaciones; inteligencia, vigilancia y reconocimiento; y sensores (4 productos en cada uno). Este panorama señala que la producción de armas de vanguardia es dominado sin disputa por las corporaciones estadounidenses.⁶

Estas empresas también encabezan el mercado del gran armamento y las armas de destrucción masiva. Las 104 empresas estudiadas ofrecen 336 productos, repartidos en 43 segmentos, entre los que destacan los aviones de combate (26 productos), los sistemas de defensa anti-misiles (23) y los barcos de combate (20). Sobre el total,

⁶ Se debe destacar que esta relación de fuerzas solo concierne al ámbito empresarial, y que muchos de los desarrollos tecnológicos de las potencias militares se mantienen en manos de dependencias estatales, incluyendo las armas de destrucción masiva y las armas de vanguardia. En nuestro análisis, destacamos la ventaja estadounidense que resulta de la actividad de las empresas militares y debe ser completado considerando los desarrollos estatales.

las empresas con sede en Estados Unidos aportan 88 tipos de productos (26% del total) y, en los tres segmentos mencionados, ofrecen 8, 8 y 5 productos respectivamente. La segunda posición la ocupan las empresas con sede en Reino Unido con 31 productos, pero solo 2 empresas producen aviones de combate y 1 barco de combate; las empresas rusas reportan 27 productos, destacando 3 tipos de sistemas de defensa anti-misiles. Las empresas chinas reportan solo 10 productos en este mercado. En el estratégico segmento de las armas nucleares, que incluye desarrollo tecnológico, almacenamiento, ensamblaje y mantenimiento, se reportan 17 productos repartidos entre solo tres grupos de empresas: 8 de corporaciones británicas, 5 estadounidenses y 4 francesas.

Para concluir este análisis, presentamos un panorama de las especializaciones de las mayores empresas militares de cada grupo estudiado (Cuadro 5).

Cuadro 5. Principales productos de las empresas líderes de las potencias militares

Posición 2019	Empresa	País sede	Ventas (mmd)	Armas de destrucción masiva y gran armamento	Armas de vanguardia	Armas convencionales	Asesoría, diseño, entrenamiento e infraestructura
1	Lockheed Martin	Estados Unidos	53,23	Aviones, helicópteros y barcos de combate; defensa antimisiles; misiles interceptores; sistemas de combate naval; naves espaciales	Redes y sistemas informáticos; ciberseguridad; satélites; sensores; análisis y procesamiento de datos; radares; sistemas de mando y control	-	Generación de energía, simulación de escenarios; entrenamiento
6	AVIC	China	22,47	Aviones de combate; aviones de entrenamiento; aviones para patrullaje y vigilancia; aviones de reabastecimiento; aviones de carga; helicópteros de combate; sistemas de armas aéreas.	Vehículos aéreos no tripulados; inteligencia, vigilancia y reconocimiento	-	-
7	BAE Systems	Reino Unido	22,24	Aviones y barcos de combate; portaaviones; submarinos; lanzamisiles; torpedos	Aviones no tripulados; radares; sistemas de mando y control; ciberseguridad; inteligencia, vigilancia y reconocimiento; sistemas electroópticos; sensores; sistemas	Tanques y vehículos de combate; municiones; municiones de precisión; sistemas de artillería	Servicios de ingeniería; servicios de informática; soporte, reparación y mantenimiento

12	Leonardo	Italia	11,11	Aviones y helicópteros de combate; aviones para patrullaje y vigilancia; torpedos; misiles anti-aéreos; misiles de superficie tierra-aire; misiles anti-buques	Aviones y helicópteros no tripulados; electrónica para la aviación; sensores; radares; sistemas de guerra electrónica y electromagnética; sistemas robóticos avanzados; sistemas de mando y control; sistemas de comunicaciones; sistemas de armas autónomas; ciberseguridad; satélites; inteligencia, vigilancia y reconocimiento.	Sistemas de artillería; municiones	Entrenamiento; servicios de lanzamiento de naves espaciales y satélites
13	AirBus Group SE	Trans-europea	11,05	Aviones y helicópteros de combate; aviones de reabastecimiento; naves espaciales; misiles guiados; misiles de superficie aire-aire; misiles de superficie aire-tierra	Aviones no tripulados; sistemas de navegación y geolocalización; ciberseguridad; análisis y procesamiento de datos; satélites; armas autónomas	-	Soporte, reparación y mantenimiento; servicio de lanzamiento de naves espaciales y satélites
13	United Aircraft Corporation (datos de 2016)	Rusia	5,16	Aviones de combate	-	-	Soporte, reparación y mantenimiento; entrenamiento
14	Thales	Francia	9,47	Motores para avión y componentes del motor; naves espaciales	Satélites; sistemas de mando y control; inteligencia, vigilancia y reconocimiento; radares; redes y sistemas informáticos; computación en la nube; análisis y procesamiento de datos; desarrollo de software; criptografía; sensores; sistemas de comunicaciones; sistemas geomáticos; ciberseguridad	Tanques y vehículos de combate	Servicios de lanzamiento de naves espaciales y satélites; soporte, reparación y mantenimiento

Fuente: base de datos tecnologías y productos de las CMP
 Disponible en http://let.iiec.unam.mx/anexo_cmp

En primer lugar, destaca la asimetría entre las ventas de Lockheed Martin, la mayor fabricante privada de armamento en el mundo, y el resto de las corporaciones líderes: en 2019 reporta ventas de armas por 53 mmd, frente a 22,5 mmd de la empresa china AVIC y 22,2 mmd de la británica BAE Systems. En lo que toca a la oferta de productos, estas grandes empresas se concentran en la elaboración de bienes y servicios estratégicos, como son las naves de combate, sistemas informáticos y guerra cibernética. Destaca que solo dos de ellas reportan la fabricación de armas convencionales, mercado de menor rentabilidad en el que actúan empresas de menores dimensiones.

Entre los principales productos de estas corporaciones se cuentan:

- Lockheed Martin: avión de combate F-35; sistema de defensa Terminal de área de gran altura; misiles PAC-3; helicópteros Sikorsky; sistemas de combate Aegis.
- AVIC: Aviones de combate (FC-31, FC-20, FC-1); helicópteros militares (Z-19E, Z-9WE); vehículos aéreos no tripulados.
- BAE Systems: Participa en la producción de los aviones de combate F-35 y Eurofighter Typhoon; portaviones Queen Elizabeth.
- Airbus: Participa en la producción del avión Eurofighter Typhoon; vehículos aéreos no tripulados; sistemas militares de comunicación satelital.
- Leonardo: Participa en la producción de los aviones de combate F-35 y Eurofighter Typhoon; vehículos aéreos no tripulados; helicópteros TiltRotor.
- Thales: Sistemas de comunicaciones, mando y control; sistemas de vigilancia; electrónica para la aviación.
- UAC: Aviones de combate (Su-35, Su-30, MIG-35, MIG-29, entre otros) y de carga.⁷

Estas aproximaciones permiten afirmar que la superioridad tecnológica de las corporaciones con sede en Estados Unidos es un elemento

⁷ El proyecto para diseñar y fabricar el avión F-35 es un buen ejemplo de cómo la guerra contemporánea tiene una vertiente comercial muy rentable e ineficiente. En los años noventa del siglo xx, el Departamento de defensa de Estados Unidos lanzó el programa *Joint Strike Fighter* (JSF) que se propuso crear el mejor avión de combate hasta la fecha y que sirviera a la Fuerza aérea, la Armada y el Cuerpo de marines, para lo cual se entregó un contrato multimillonario a Lockheed Martin como principal responsable. El proyecto se abrió a la colaboración de 8 gobiernos aliados y corporaciones privadas estadounidenses y extranjeras. El diseño se inició en 2001 y, hacia 2015, se estimó que la producción de 2 457 aviones F-35 había costado 400 mmd, casi el doble del costo inicial. El estimado del mantenimiento y la operación del programa JSF a lo largo de su vida útil es de 1 billón de dólares de acuerdo con datos del gobierno estadounidense. Además de los múltiples avatares técnicos y financieros, la pertinencia del programa F-35 ha sido cuestionada por el lanzamiento de aviones similares por parte de Rusia y China, cuyos costos son muy inferiores a los del avión de manufactura estadounidense. En la actualidad, el Departamento de defensa de Estados Unidos está buscando una alternativa de *baja gama* al F-35, lo cual pone en cuestión la continuidad de ese proyecto multimillonario de defensa. Véase Insinna, 2019; Axe, 2021.

fundamental del liderazgo estadounidense en el mercado mundial del armamento y una ventaja estratégica al ser trasladada a los teatros de operaciones, pues sus fuerzas de combate, estatales y privadas, no solo cuentan con las mejores tecnologías, sino que las corporaciones estadounidenses son proveedoras de buena parte de los armamentos utilizados. Esta superioridad tecnológica les permite también marcar las tendencias de desarrollo de los bienes y servicios militares, de modo que, como rasgo general, las otras potencias y corporaciones militares están limitadas a desarrollar iniciativas de imitación, complemento y defensa ante el armamento concebido en Estados Unidos.

La división internacional del trabajo en el terreno de la producción de armamentos señala dos vías de especialización. Por una parte, los aliados históricos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, en menor medida las potencias derrotadas en la segunda guerra mundial, Alemania, Japón e Italia, invierten en desarrollar tecnologías complementarias y bienes y servicios propios en los mismos campos que las corporaciones estadounidenses. Por otra parte, las potencias rivales, principalmente China y Rusia, sitúan sus esfuerzos tanto en los armamentos que garantizan su defensa (aviación, defensa anti-aérea, armas nucleares) como en algunos ámbitos de la vanguardia tecnológica en que las barreras a la entrada son menores, tanto en términos de conocimientos como en términos financieros. Al respecto, es preciso destacar el acelerado desarrollo de la inteligencia artificial y la guerra cibernética por parte de corporaciones e iniciativas de China y Rusia.

Redes de ejercicio del poder

A los factores económicos, proponemos añadir un análisis de las redes de influencia que se tejen mediante los entrelazamientos de los consejos de administración de las corporaciones militares. Como han establecido estudios canónicos y contemporáneos, una de las principales fortalezas del sistema de dominación estadounidense es la estrecha relación que guardan los tres ámbitos estratégicos del

ejercicio del poder: las fuerzas armadas, el empresariado y el personal político. En tanto gobierno paralelo o informal, las redes de ejercicio del poder dan solidez y fluidez a las relaciones de dominación. Desde el punto de vista económico, permiten una asignación más eficiente de los recursos privados y públicos, respecto de las asignaciones institucionales que deben pasar por largos y complejos procesos de negociación y aprobación, como es el caso de las aprobaciones parlamentarias de los presupuestos. En cuanto a las decisiones políticas, estas redes también permiten un intercambio de propuestas y de favores mutuos que escapan al escrutinio público e institucional, fundando y consolidando los proyectos de ingeniería social y política de las élites. Es crucial subrayar que dicha eficiencia no está ligada a la satisfacción de las necesidades sociales, sino a la consecución de los intereses de las instituciones y el personal de los tres ámbitos que participan en las redes de ejercicio del poder.⁸

⁸ “Las decisiones de un puñado de empresas influyen en los acontecimientos militares, políticos y económicos en todo el mundo. Las decisiones de la institución militar descansan sobre la vida política, así como sobre el nivel mismo de la vida económica, y los afectan lastimosamente. Las decisiones que se toman en el dominio político determinan las actividades económicas y los programas militares. Ya no hay, de una parte, una economía, y de otra parte, un orden político que contenga una institución militar sin importancia para la política y para los negocios. Hay una economía política vinculada de mil maneras con las instituciones y las decisiones militares [...] Si hay intervención gubernamental en la economía organizada en grandes empresas, también hay intervención de esas empresas en los procedimientos gubernamentales. En el sentido estructural, este triángulo de poder es la fuente del directorio entrelazado que tanta importancia tiene para la estructura histórica del presente” (Mills, 1978, p. 17). El planteamiento seminal de Mills ha sido enriquecido y puesto a prueba durante más de 60 años y sigue siendo una herramienta útil para el análisis del ejercicio del poder en el capitalismo contemporáneo. En ese sentido, recordemos su perspectiva sobre las relaciones entre los vértices del triángulo del poder: “De los tres círculos que integran la élite del poder de hoy, el militar es el que más ha aprovechado su aumento de poder, aunque los círculos corporativos se han atrincherado asimismo de un modo más abierto en los círculos donde se elaboran las decisiones públicas. El político profesional es quien más ha perdido, tanto que, al examinar los acontecimientos y las decisiones, sentimos la tentación de hablar de un vacío político, donde gobiernan la riqueza corporativa y el señor de la guerra, con intereses coincidentes” (Mills, 1978, pp. 259-260), palabras que parecen describir las sociedades actuales. Para investigaciones contemporáneas sobre el tema, véase Domhoff, 2014; Murray, 2014; Foster y Holleman, 2012; Vitalia, Glattfelder y Battiston, 2011.

En esa perspectiva, es pertinente estudiar si las corporaciones militares construyen redes de poder mediante el entrelazamiento de los consejos de administración en los tres vértices señalados: fuerzas armadas, instancias gubernamentales y empresariado, éste último dividido entre otras corporaciones militares y las primeras 200 empresas más grandes del mundo.

El Cuadro 6 presenta los rasgos generales de la muestra utilizada. Se cuenta con información de 101 corporaciones militares, obtenida de los sitios en internet de cada empresa y otras fuentes de información, principalmente, *Bloomberg*, *Forbes*, y la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos. La identificación de los entrelazamientos se realizó a partir del cumplimiento de al menos uno de los siguientes tres criterios: 1) los consejeros de las corporaciones de defensa ocupan posiciones de mando en los cuerpos militares nacionales (como el ejército o la marina) o a nivel internacional (como la OTAN); 2) los consejeros de las corporaciones de defensa desempeñan funciones relevantes en alguna rama del aparato de estado (en las ramas ejecutiva, legislativa y/o judicial), en organismos multilaterales con amplia legitimidad (como Naciones Unidas), y/o en instancias de decisión regional (específicamente en Unión Europea); 3) los consejeros de las corporaciones de defensa forman parte de los consejos de administración de otras grandes corporaciones, militares y no militares. La importancia económica de estas corporaciones se verificó con el listado de SIPRI (Top 100 y Top 25), en el caso de las corporaciones militares, y tomando en consideración los 200 primeros lugares de la lista de Fortune Global 500, para las corporaciones no militares. Esta delimitación permitió concentrar el análisis en los principales ámbitos del ejercicio del poder, estableciendo los vínculos directos que establecen las corporaciones militares a través de su personal directivo.

Con estos criterios, se determinó que 96 de las 101 corporaciones militares de las que se obtuvo información tuvieron al menos un consejero relacionado con alguno de los ámbitos considerados.

Esas 96 empresas reportan 967 consejeros entre 2018 y 2019, de los cuales 455 (47%) tienen vínculos con al menos alguno de los vértices del

poder. Sobre un total de 743 vínculos, predominan las instancias gubernamentales, que concentran 53% (395 vínculos), seguidas por las grandes corporaciones (22%), las corporaciones militares (15%) y las instancias militares (9%). El predominio de los vínculos entre corporaciones militares y gobierno se explica por la consideración de la producción militar como un asunto de seguridad nacional, por lo que gobernantes y empresas de defensa tienen interés en mantener relaciones directas. De los vínculos entre corporaciones, destacan las relaciones con corporaciones civiles, debido a la colaboración tecnológica y financiera, así como la presencia en la muestra de un importante número de corporaciones que realizan tanto producción militar como producción civil. Las relaciones con los dos ámbitos militares estudiados, corporativo e institucional, tienen una importancia menor que los tipos anteriores, señalando la existencia de una competencia importante entre las corporaciones militares, que no acostumbran *compartir* consejeros ni colocar a sus directivos en instancias militares. El conjunto de los datos se puede consultar en el tercer rubro del anexo estadístico.

Cuadro 6. Panorama de las redes de influencia de las corporaciones militares
número de vínculos

	Número	Participación
Total empresas	104	100%
Sin información	3	2,9%
Con información	101	97,1%
No cumplen criterios	5	
Empresas con vínculos	96	
Total consejeros	967	100,0%
Consejeros con vínculos	455	47,1%
Total de vínculos	743	100,0%
Gobierno	395	53,2%
Grandes corporaciones	165	22,2%
Corporaciones militares	114	15,3%
Militar	69	9,3%

Fuente: base de datos redes de influencia de las CMP
Disponible en http://let.iiec.unam.mx/anexo_cmp

La distribución por países sede muestra una asimetría significativa entre las empresas estadounidenses y sus competidoras. De los 743 vínculos hallados, 345 son de este grupo de corporaciones, cifra que representa 46,4% del total (Cuadro 7). La segunda posición la ocupan las corporaciones rusas que reportan 71 vínculos, 9,6% del total, seguidas por las empresas de Reino Unido, con 66 vínculos, casi 9% del total, y por las francesas con 56 vínculos (7,5%). Las corporaciones italianas, transeuropeas y chinas cuentan con un menor número de vínculos, 23, 16 y 14, respectivamente, lo que señala que esas corporaciones establecen sólo relaciones puntuales.

Cuadro 7. Distribución de vínculos por grupos de corporaciones militares					
<i>número de vínculos</i>					
Grupos de corporaciones	Vínculos totales	Tipo de relación por país sede			
		Militar	Gobierno	Corporaciones civiles	Corporaciones militares
Estados Unidos	345	57	141	89	58
Reino Unido	66	2	24	27	13
Francia	56	0	33	13	10
Rusia	71	0	46	4	21
China	14	0	10	4	0
Italia	23	2	13	5	3
Trans-europeas	16	0	5	8	3
Otros	152	8	123	15	6
Total	743	69	395	165	114

Fuente: base de datos redes de influencia de las CMP
 Disponible en http://et.iiec.unam.mx/anexo_cmp

Cuando analizamos el tipo de vínculos que cada grupo de empresas establece, observamos que las corporaciones estadounidenses privilegian las relaciones con las instancias gubernamentales, con 141 participaciones, 41% del total, y con las corporaciones civiles (89 vínculos). También tejen redes con corporaciones e instancias militares, pero en menor cuantía, 58 y 57 vínculos respectivamente. Esa distribución señala que estas corporaciones establecen redes sólidas y diversificadas a partir de las participaciones de sus consejeros en otras instancias del poder capitalista, las mismas que se inscriben en el llamado complejo militar-industrial que en gran medida abarca a las diferentes instancias de gobierno en ese país.

Las empresas militares rusas, en correspondencia con el régimen estatista de su país sede, focalizan su participación en las instancias gubernamentales, 64,8% del total de sus vínculos, y en otras corporaciones militares (29,6%). La inexistencia de vínculos con instancias militares se explica porque el gobierno de Vladimir Putin ha estatizado la producción de armamento en Rusia, además de concentrar el control de las empresas militares en consorcios gubernamentales, cancelando las direcciones por empresa (Davis, 2019; Kosals, Izyumov y Kemelgor, 2018).

Por su parte, las empresas de Reino Unido privilegian las relaciones con las corporaciones civiles, con quienes tienen 27 vínculos, 40,9% del total, lo cual se explica por la importancia nacional e internacional de BAE Systems, cuya amplia actividad implica relaciones tanto productivas como financieras y de influencia con otras corporaciones. También destacan las relaciones con instancias gubernamentales y otras corporaciones militares, 24 y 13 vínculos respectivamente. A diferencia de sus pares estadounidenses, estas corporaciones no tejen redes con las instancias militares, situación anómala dado el papel global que tienen las fuerzas armadas de Reino Unido.

En el caso de las empresas francesas, predominan los vínculos con instancias gubernamentales, casi 59% del total. Se establecen vínculos menos numerosos con las corporaciones civiles y militares, en tanto que no se hallaron vínculos con las instancias militares.

Al observar la distribución de los vínculos que establecen las empresas líderes de las potencias militares (Cuadro 8), destacan dos rasgos generales: el predominio de los vínculos con las instancias gubernamentales (38 sobre un total de 67 vínculos) y, con excepción de Lockheed Martin, la ausencia de vínculos con las instancias militares.

Cuadro 8. Vínculos de las empresas líderes de las potencias militares
número de vínculos

Posición 2019	Empresa	País sede	Vínculos totales	Tipo de relación			
				Militar	Gobierno	Corporaciones civiles	Corporaciones militares
13	Airbus Group	Trans-europea	15	-	5	8	2
13*	United Aircraft Corporation	Rusia	13	-	11	-	2
1	Lockheed Martin Corp.	Estados Unidos	10	4	3	1	2
7	BAE Systems	Reino Unido	10	-	3	5	2
14	Thales	Francia	9	-	8	1	-
12	Leonardo	Italia	7	-	5	2	-
6	Avic	China	3	-	3	-	-
	Subtotal 7		67	4	38	17	8

* Posición de 2016

Fuente: base de datos redes de influencia de las CMP

Disponible en http://let.iec.unam.mx/anexo_cmp

El panorama de las redes de colaboración e influencia que establecen las corporaciones militares mediante el entrelazamiento de consejos de administración indica la presencia de importantes vínculos entre las instancias del poder capitalista, en particular con los ámbitos gubernamentales, rasgo que se explica por el papel que juegan como reguladores de las actividades de las empresas militares y como compradores casi exclusivos de sus productos. En sentido opuesto, la menor importancia de los vínculos con instancias militares, rasgo que representa un cambio respecto a lo observado en los años cincuenta y sesenta del siglo xx, puede explicarse por el creciente rechazo que tales vínculos despiertan tanto en la opinión pública como en organizaciones e investigadores que estudian y denuncian los conflictos de interés que tal tipo de vínculo representa.⁹

En la actualidad, el ascenso de China y la agudización de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos, China y Rusia han desatado polémicas en torno al declive de los modelos liberales de

⁹ En términos literales, los cuatro tipos de vínculos representan potenciales conflictos de interés, como lo muestran los estudios sobre la evasión de impuestos, facilitada por los vínculos de los evasores con actores de la finanza, o sobre la fijación de precios, en la que las relaciones entre empresas permiten manipular los intercambios. Sin embargo, el vínculo entre la institución militar, usuaria directa de los productos militares y las empresas militares beneficiarias directas de las compras millonarias de armamento, tiene una calidad particular que la hace cuestionable, no solo por las manipulaciones potenciales que el entrelazamiento supone, sino porque las instancias militares son sostenidas por la riqueza social.

gobernanza que, de acuerdo con ciertas interpretaciones, serán sustituidas por formas centralistas, ancladas en formas autoritarias de gobierno. Sobre la base de importantes evidencias históricas, se argumenta que ante las dificultades del sistema capitalista, las naciones con regímenes estatistas son las que muestran mejores desempeños económicos y son capaces de implantar soluciones a grandes problemas como la alimentación, la migración, los conflictos políticos y sociales, al tiempo que se reconoce que tales éxitos tienen como contrapartida la implementación de formas de control social cada vez más represivas (Man y Wainwright, 2018; Milanovik, 2020; Alami y Dixon, 2020; *The Economist*, 2012). Tales análisis sitúan a China como la potencia emergente que, de manera tendencial, ocupará el lugar del hegemón mundial en la medida en que sus capacidades de gobernanza son superiores a las de sus rivales, incluso a las del hegemón declinante, Estados Unidos.

El estudio de la competencia entre empresas muestra que esas visiones generales sobre la disputa hegemónica deben ser completadas con análisis más detallados sobre los diferentes ámbitos en que se construye la hegemonía mundial. Desde la perspectiva de la competencia por el liderazgo económico mundial, la existencia de relaciones entre los ámbitos del poder capitalista representa una ventaja decisiva para las corporaciones militares estadounidenses, en tanto amplía las posibilidades de acción de las corporaciones implicadas en las redes de influencia, permitiéndoles un mayor alcance de sus actividades con respecto a las de las corporaciones chinas o rusas, controladas estrechamente por sus respectivos estados. De ese modo, podemos afirmar que la gobernanza centralizada de los estados de China y Rusia puede resultar más eficiente que la realizada por los gobiernos liberales de las potencias occidentales, en particular, por Estados Unidos, pero no tiene los mismos efectos en la competencia empresarial, en tanto limita las posibilidades de acordar con otros sujetos, estrategias y acciones que favorezcan el funcionamiento de las empresas militares.

Financiarización de las empresas militares

El tercer ámbito de la competencia entre corporaciones militares que analizamos concierne a la administración del capital social. Para las potencias militares, la producción de armamentos es considerada como una actividad estratégica que debe ser protegida de las acciones de sujetos extranjeros y, sobre todo, de las potencias rivales. Por ello, se han creado diversas formas y grados de control sobre la producción militar, de manera destacada, regulaciones estatales que impiden la participación extranjera en las empresas que producen bienes y servicios militares, e incluso en los mercados militares locales.

Por ello, la forma típica de administración del capital social de las corporaciones militares es el control mayoritario por parte de accionistas locales y, a menudo, una importante participación estatal, por ejemplo, la *acción de oro* o los poderes de veto que detentan ciertos gobiernos sobre actividades o decisiones de las corporaciones militares en las que participan. Sin embargo, las corporaciones militares estadounidenses han desarrollado prácticas de financiarización en busca de aumentar sus ganancias mediante inversiones especulativas que no conciernen directamente a la producción militar. Estas inversiones financieras se hacen mayoritariamente a través de las administradoras de activos financieros (*holdings*), empresas que concentran gigantescos montos de capitales de otras empresas y diseñan estrategias de inversión que permiten la obtención de ganancias financieras.¹⁰ Las empresas adminis-

¹⁰ El *holding* es una figura legal y administrativa que permite la gestión del capital de múltiples empresas. En la actualidad, uno de los *holdings* más poderosos de la economía capitalista es Alphabet, la empresa matriz de Google, que administra más de 12 subsidiarias que operan en sectores como el cuidado de la salud, ropa deportiva, acceso a internet, inteligencia artificial, innovación urbana, entre otras. A través de Alphabet, los principales accionistas y la alta gerencia de este conjunto de empresas armonizan estrategias y acciones que permiten perseguir objetivos de mediano y largo plazo en busca de aumentar la rentabilidad de las empresas que forman parte del *holding*. Las administradoras de activos tienen un rango de actividad menor, pues no participan directamente en la gestión de las empresas que les confían sus capitales. Sin embargo, por los montos de recursos que administran y los beneficios que pagan, estas empresas han adquirido una gran influencia sobre sus empresas clientes. Entre los cientos de administradoras de ac-

tradoras son una de las encarnaciones más destacadas de la lógica especulativa del capitalismo contemporáneo, que crea intensas corrientes de inversiones y de ganancias financieras a partir del capital de otras empresas. Del mismo modo que el conjunto de las actividades especulativas, las ofertas y las operaciones que estas empresas llevan a cabo cuentan con un respaldo mínimo y por completo insuficiente para garantizar las inversiones que administran.

Como parte de las transformaciones que impulsó la Revolución en los asuntos militares, que cambió gran parte de las referencias culturales y regulatorias de las actividades de defensa e incluso de las doctrinas de seguridad nacional, y con el incentivo de obtener ganancias financieras de corto plazo, muchas de las mayores corporaciones militares del mundo han entregado parte de sus paquetes accionarios a las administradoras de activos. Ello da lugar a una paradoja relevante para la competencia por el liderazgo mundial en esta actividad, dado que, por un lado, la inversión de capital de las corporaciones militares genera mayores ganancias, pero, por otro lado, crea importantes riesgos, tanto de pérdidas económicas como de injerencias por parte de las administradoras de activos. A través de las inversiones financieras, el clivaje entre propiedad y control aparece entre las corporaciones militares, un grupo de empresas que hasta finales de la Segunda guerra mundial se mantuvieron ajenas a las actividades especulativas. Es a través de dicho clivaje que proponemos analizar la importancia que tiene la financierización en la competencia entre las principales corporaciones militares.

De las 104 corporaciones estudiadas, 69 reportan información de sus relaciones con administradoras de activos. De las 35 empresas que no reportan información, 22 son de propiedad estatal, 7 no cotizan en bolsa

tivos que existen, se distinguen tres: Blackrock, que administra capitales por un monto de 8.6 bd, Vanguard que controla 7.2 bd activos en el mundo, y State Street, con 3.5 bd de activos bajo su administración. Dado que los activos de Lockheed Martin, la mayor corporación militar del mundo, son de 47,5 mmd, es evidente la asimetría entre ambos grupos de empresas, la cual puede crear relaciones de influencia significativa sobre las corporaciones militares. Acerca de estos actores de la finanza mundial véase: Fichtner, Heemskerk y García-Bernardo, 2017; The Economist, 2018a; Vander Stichele, 2020.

y 6 cotizan, pero no reportan relaciones con administradoras de activos. La ausencia más importante es la información de las corporaciones rusas, todas ellas bajo control estatal y que en apariencia no tienen vínculos con las administradoras de activos. Se contabilizaron 1 044 relaciones de inversión por un monto total de 541 mmd (Cuadro 9). Es necesario destacar que las fuentes utilizadas sólo reportan las principales inversiones efectuadas, con un número máximo de 20 administradoras de activos por empresa (véase el rubro 4 del anexo estadístico).

Cuadro 9. Relaciones con administradoras de activos de las principales corporaciones militares			
Grupos de corporaciones	# corporaciones	# inversiones	Valor del capital en manos de holdings <i>millones de dólares</i>
Estados Unidos	30	640	505 624
Reino Unido	7	76	8 605
Trans-europeas	1	10	4 736
Francia	3	34	2 988
Italia	2	30	1 068
China	2	14	112
Rusia	n.d.	n.d.	n.d.
Los 6 grupos	45	804	523 133
Otros	24	240	17 888
Total de la muestra	69	1 044	541 022

Fuente: base de datos principales administradoras de activos de CMP
Disponible en http://let.iiec.unam.mx/anexo_cmp

La distribución por grupos de empresas muestra que son las corporaciones militares estadounidenses las que mantienen relaciones significativas con las administradoras de activos: 30 empresas reportan 640 relaciones de inversión (61% del total) con un valor de 505,6 mmd (93,5% del total). Los otros 5 principales conjuntos agrupan 15 empresas y realizan 164 inversiones a través de las administradoras de activos, pero el monto de esas operaciones es marginal, 3,2% del total (17,5 mmd). Entre ellas destacan las empresas de Reino Unido, que reportan 76 inversiones por un monto de 8,6 mmd (1,6% del total).

El Cuadro 10 presenta el otro rasgo destacado de la financiarización de las corporaciones militares: el predominio de las administradoras de activos con sede en Estados Unidos. La muestra comprende 427 administradoras que gestionan inversiones por 541 mmd, de las cuales, 354 tienen como sede Estados Unidos (83,5% del total) y gestionan 97% de las inversiones realizadas por las corporaciones militares. Esta cifra indica que incluso las empresas no-estadounidenses prefieren realizar sus inversiones financieras con las administradoras con sede en Estados Unidos. En consecuencia, el resto de los *holdings* financieros no tienen un papel relevante en la gestión del capital de las corporaciones militares; la segunda posición corresponde a los que tienen su sede en Japón, con inversiones por 5,5 mmd, cifra que representa solo 1% del total. La muestra comprende *holdings* de otros 13 países sede y ninguno de esos grupos rebasa 1% de las inversiones totales, incluso las administradoras de activos de Reino Unido tienen una participación minúscula, 12 inversiones por un valor de 2,4 mmd.

Cuadro 10. Administradoras de activos de corporaciones militares				
<i>número e inversiones</i>				
País sede	Número		Valor	
	#	%	millones de dólares	%
Estados Unidos	354	83,5	525 619	97,2
Japón	28	6,6	5 465	1,0
Canadá	12	2,8	4 294	0,8
Reino Unido	12	2,8	2 441	0,5
Alemania	1	0,2	701	0,1
Australia	1	0,2	692	0,1
Bermudas	1	0,2	529	0,1
Noruega	1	0,2	434	0,1
China – Hong Kong	3	0,7	307	0,1
Singapur	2	0,5	271	0,1
Luxemburgo	4	0,9	123	0,0
Francia	3	0,7	122	0,0
Suiza	1	0,2	12	0,0
Israel	1	0,2	12	0,0
Total	424	100,0	541 022	100,0

Fuente: base de datos principales administradoras de activos de CMP
 Disponible en http://let.iiec.unam.mx/anexo_cmp

Finalmente, otro rasgo destacado de la financiarización de las corporaciones militares es la alta concentración de las administradoras de activos. A pesar de que para una muestra de 69 empresas se logró identificar cientos de vínculos financieros, son un puñado de *holdings* los que concentran la mayor parte de esas operaciones. Las 10 primeras administradoras de activos concentran 59% de las inversiones (más de 318 mmd), además de que todas tienen su sede en Estados Unidos, lo que indica el predominio absoluto de las corporaciones estadounidenses en este terreno (Cuadro 11). De ese grupo líder, destacan tres empresas financieras por su control de los capitales de las principales corporaciones militares del mundo: Vanguard Group con un monto de 74 mmd (13,7% del total), Blackrock con activos bajo su control por 65 mmd (12%), y State Street con 62 mmd (11,6%).¹¹ Las tres controlan recursos de las corporaciones militares superiores a los activos de Lockheed Martin, la mayor empresa militar del mundo, relación que señala la importancia de estos actores en la administración del capital de las corporaciones militares.

Cuadro 11. Principales administradoras de activos de las mayores corporaciones militares				
Holding	País sede	Valor		Clientes #
		mmd	%	
Vanguard Group Inc. (The)	Estados Unidos	74,1	13,7	37
Blackrock Inc.	Estados Unidos	65,3	12,1	32
State Street Corporation	Estados Unidos	62,6	11,6	30
Vanguard Total Stock Market Index Fund	Estados Unidos	20,6	3,8	32
Capital World Investors	Estados Unidos	18,1	3,4	5
Newport Trust Co	Estados Unidos	17,5	3,2	3
Price (T. Rowe) Associates Inc.	Estados Unidos	17,1	3,2	11
FMR, LLC	Estados Unidos	16,8	3,1	20
Vanguard 500 Index Fund	Estados Unidos	13,3	2,5	15
Capital Research Global Investors	Estados Unidos	12,9	2,4	6
<i>10 principales holdings</i>		318,5	58,9	191
<i>Resto (414 holdings)</i>		222,5	41,1	
Total		541,0	100,0	

Fuente: base de datos principales administradoras de activos de CMP
 Disponible en http://let.iec.unam.mx/anexo_cmp

¹¹ Al consolidar los datos de las empresas matrices y sus filiales, el peso de las 10 administradoras de activos más importantes aumenta hasta 72% del total (391 mmd), siendo la cuota de Vanguard la que tiene mayor crecimiento y la que alcanza 25% del total (137 mmd).

Desde el punto de vista de la seguridad nacional y de la geopolítica, tanto la financiarización de partes del capital social de las corporaciones militares como la gestión de tales inversiones por parte de administradoras de activos con sede en Estados Unidos, representan ventajas significativas para el hegemón estadounidense. Este análisis muestra que el riesgo implícito en la financiarización es menor para las corporaciones militares con sede en Estados Unidos respecto de sus competidoras, en tanto el estado de ese país cuenta con medios de control sobre las administradoras de activos.¹² Mediante la financiarización, las corporaciones militares y financieras de Estados Unidos obtienen tanto ganancias económicas como ventajas geopolíticas que apuntalan su liderazgo global.

Conclusiones

Entre los saldos de la Revolución de los asuntos militares, se cuenta la consolidación del liderazgo militar estadounidense. La liberalización de las actividades de defensa y seguridad nacional estimuló las operaciones de las corporaciones privadas en todo el mundo, pero son aquellas con sede en Estados Unidos las que mejor se adaptan al nuevo marco de doctrina y de regulación para desarrollar sus tecnologías y productos, y acaparar mercados y beneficios en escala global.

Como hemos mostrado, las cuestiones tecnológicas están en el centro de la disputa por el liderazgo económico mundial en estas actividades. La situación de guerra permanente y el recurso constante a las guerras como medio de expansión y apuntalamiento geopolítico estimulan el desarrollo científico y tecnológico aplicado a las actividades de defensa. De ahí que las empresas que predominan en el

¹² Acerca de las disputas sino-estadounidenses en materia de inversiones extranjeras véase Ornelas, 2018. Las sanciones aplicadas por las administraciones estadounidenses contra empresas y activos (reservas de metales preciosos, petróleo) de países considerados enemigos (Cuba, Venezuela, Irán) ilustran, en un grado superlativo, el riesgo que implica la financiarización para las corporaciones militares.

terreno de las tecnologías cuenten con las mejores condiciones para ocupar las posiciones líderes.

Las redes de influencia que se tejen a partir de las participaciones en consejos de administración y las ganancias que obtienen las corporaciones militares mediante sus inversiones financieras son ámbitos de la competencia empresarial en los que las corporaciones estadounidenses dominan de manera amplia.

Estos elementos muestran que el liderazgo económico no depende solo de la competencia mercantil, sino de un amplio conjunto de relaciones tecnológicas, financieras y político-institucionales. Aunque los ámbitos analizados en este texto requieren de análisis detallados, el panorama presentado permite establecer las razones del predominio estadounidense en la competencia entre empresas militares.

En una perspectiva general, ocupar las posiciones líderes en los mercados de defensa y seguridad, representa una ventaja crucial en la disputa por la hegemonía mundial. Las empresas militares complementan las inversiones e iniciativas estatales, ofreciendo un tejido industrial y socio-político que es capaz de dar respuesta a los desafíos militares y geopolíticos planteados por las potencias rivales. Esas corporaciones constituyen un factor de flexibilidad e innovación que apuntalan las actividades militares, en particular de las potencias globales: Estados Unidos, Rusia y China.

En el marco de la disputa hegemónica, se observa con claridad la diferencia entre las potencias que fundan su posición global en los recursos e iniciativas estatales y la flexibilidad del hegemón estadounidense que cuenta tanto con el poder concentrado del estado, como con las acciones relativamente descentralizadas de las grandes corporaciones militares que tienen su sede en Estados Unidos. De ahí la pertinencia de conocer las bases sobre las cuales se construyen los liderazgos económicos.

Bibliografía

Alami, Ilias y Adam D. Dixon (2020). The strange geographies of the “new” state capitalism. *Political Geography* (82), 102237. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2020.102237>

Avant, Deborah (2005). *The Market for Force. The Consequences of Privatizing Security*. Cambridge University Press.

Axe, David (23 de febrero de 2021). The U.S. Air Force Just Admitted The F-35 Stealth Fighter Has Failed. *Forbes*.

Calvo, Jordi (2017). *La transformación del Complejo Militar-Industrial*. Barcelona: Centre Delàs d'Estudis per la Pau y NOVACT, International Institute for Nonviolent Action.

Chamayou, Grégoire (2016). *Teoría del dron*. Buenos Aires: Futuro Anterior.

Congress of the United States of America (2008). *Contractors' Support of U.S. Operations in Iraq*. Washington: Congressional Budget Office.

Davis, Mark (2019). The Russian defense industry, 1980–2025: systemic change, policies, performance and prospects. En Keith Hartley y Jean Belin (eds.), *The economics of the global defense industry* (pp. 69-125). Nueva York: Routledge.

Domhoff, G. William (2014). *Who Rules America? The Triumph of the Corporate Rich*. Nueva York: McGraw Hill.

Fichtner, Jan; Eelke M. Heemskerk y Javier Garcia-Bernardo (2017). Hidden power of the Big Three? Passive index funds, re-concentration of corporate ownership, and new financial risk. *Business and Politics*, 19(2), 298-326. Cambridge University Press.

Foster, John B. y Hannah Holleman (2012). La élite del poder financiero. *Monthly Review*, 62(1), 1-19.

Godfrey, Richard et al. (2014). The Private Military Industry and Neoliberal Imperialism: Mapping the Terrain. *Organization*, 21(1), 106-125.

Hanson, Kolby y Erik Lin-Greenberg (2019). Noncitizen Soldiers: Explaining Foreign Recruitment by Modern State Militaries. *Security Studies*, 28(2), 286–320.

Hartley, Keith y Jean Belin (eds.) (2020). *The economics of the global defense industry*. Nueva York: Routledge.

Insinna, Valerie (21 de agosto de 2019). Inside America's Dysfunctional Trillion-Dollar Fighter-Jet Program. *The New York Times*.

Kinsey, Christopher (2006). *Corporate soldiers and international security: the rise of private military companies*. Nueva York: Routledge.

Kosals, Leonid; Alexei Izyumov y Bruce Kemelgor (2018). From the Plan to the Market and Back—The Organisational Transformation of the Russian Defence Industry. *Europe-Asia Studies*, (9), 1451-1471.

Krishnan, Armin (2009). *Killer robots: legality and ethicality of autonomous weapons*. Ashgate: Surrey.

Man, Geoff y Joel Wainwright (2018). *Leviatán climático. Una teoría sobre nuestro futuro planetario*. Madrid: Biblioteca Nueva.

Mathews, Ron y Treddenick, John (eds.) (2001). *Managing the Revolution in Military Affairs*. Londres: Palgrave Macmillan.

Milanovic, Branko (enero-febrero de 2020). The Clash of Capitalisms. The Real Fight for the Global Economy's Future. *Foreign Affairs*.

Mills, Wright (2013). *La élite del poder*. Ciudad de México: FCE.

Murray, Joshua (2014). Evidence of a transnational capitalist class-for-itself: the determinants of PAC activity among foreign firms in the Global Fortune 500, 2000-2006. *Global Networks*, (14), 230-250.

Noble, David (1977). *America by Design. Science, Technology, and the Rise of Corporate Capitalism*. New York: Knopf.

Noble, David (1984). *Forces of production. A Social History of Industrial Automation*. New York: Knopf.

Ornelas, Raúl (septiembre-diciembre de 2018). La competencia entre Estados Unidos y China por el liderazgo mundial: Un panorama desde las inversiones extranjeras. *México y la Cuenca del Pacífico*, 7(21), 53-93.

Ornelas, Raúl (2021). El nervio de la guerra: panorama del gasto militar 2000 – 2019. *Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM*.

- Peltier, Heidi (2020). *The Growth of the “Camo Economy” and the Commercialization of the Post-9/11 Wars*, Providence: Watson Institute for International and Public Affairs, Brown University.
- Reich, Michael (1972). Does the U.S. Economy Require Military Spending? *The American Economic Review*, 62(1/2), 296-303.
- Sloan, Elinor (2002). *The revolution in military affairs: implications for Canada and NATO*. Montreal: McGill-Queen’s University Press.
- Statman, Daniel (2015). Drones and Robots: On the Changing Practice of Warfare. En Seth Lazar and Helen Frowe (eds.) *The Oxford Handbook of Ethics and War*. Oxford University Press.
- The Economist (14 de diciembre de 2017). *The visible hand*.
- The Economist (19 de enero de 2012). *Miniature robotics. Military robots are getting smaller and more capable. Soon, they will travel in swarms*.
- The Economist (13 de enero de 2018a). *BlackRock v Blackstone. Mirror, mirror on the wall, who is the mightiest finance tycoon of them all?*
- The Economist (27 de enero de 2018b). *War at hyperspeed. Getting to grips with military robotics. Autonomous robots and swarms will change the nature of warfare*.
- Tian, Nan y Fei Su (2021). *A New Estimate of China’s Military Expenditure*. Estocolmo: SIPRI.
- Vander Stichele, Myriam (enero de 2020). The financialised firm. *State of power 2020*.pp. 49-60.
- Vitalia, Stefania, James Glattfelder y Stefano Battiston (octubre de 2011). The network of global corporate control. *PLoS ONE*, 6(10).
- Whittle, Richard (2014). *Predator: The Secret Origins of the Drone Revolution*. Nueva York: Henry Holt and Co.

Parte 2. Las guerras estratégicas

El conflicto palestino-israelí

Vigilancia y control en un entorno de guerra urbana

Ana Katia Rodríguez Pérez

DOI: 10.54871/gS23b10c

Introducción

La ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel ha involucrado una serie de procesos de dominación colonial y ocupación militar caracterizados por la consolidación de un sistema constante de vigilancia jurídico, burocrático y tecnológico. La red de vigilancia se constituye como un elemento sustancial de la dominación en la medida en que le permite a Israel ejercer un control total sobre el territorio y sus recursos, posibilitando la gestión de flujos sociales, económicos y políticos de las y los palestinos en el espacio y el tiempo. Esta estructura se muestra a través de la construcción de diferentes sistemas interconectados: el muro de apartheid, la subdivisión y zonificación territorial, los *checkpoints* o puestos de control, el uso de documentos de identidad, las carreteras de circunvalación para uso único israelí, las bases militares y el conjunto de leyes militares que respaldan todos los demás sistemas (Abujidi, 2011, p. 315).

La forma de dominación de las autoridades israelíes ha cambiado a lo largo de los años. A partir de los Acuerdos de Oslo de 1993, la ocupación israelí sobre Palestina se ha caracterizado por estar basada en

el principio de separación. Autores como Neve Gordon y Elia Zureik señalan que este proceso hace referencia al abandono de los esfuerzos israelíes por administrar la vida de la población colonizada, al mismo tiempo que se insiste en la continua explotación de los recursos humanos y no humanos del territorio, es decir, la tierra, el agua y la fuerza de trabajo. Bajo este principio, existe una falta de interés o indiferencia por la vida de las y los palestinos, y aumenta el ejercicio de la violencia por medio de la vigilancia, el control y la tecnología (Gordon, 2008, p. 19).

Como el poder ocupante, Israel está menos interesado en la gestión de la población que en el control y la apropiación del territorio en el que reside dicha población. Sin embargo, esta forma de dominación no minimiza la importancia que el Estado colonial le atribuye a la recolección, control y categorización de datos de la población (Zureik, 2011, p. 11). Así, se presenta un proceso contradictorio de inclusión y exclusión en el que, por un lado, la disciplina y vigilancia se aplican de forma sistemática y minuciosa para gobernar a la comunidad palestina, mientras que simultáneamente el Estado limita la participación de la población en el cuerpo político, económico y social (Zureik, 2011, p. 12).

De este modo, el presente texto tiene por objetivo analizar las formas por medio de las cuales Israel ha buscado consolidar el proyecto del Estado sionista, haciendo énfasis en los mecanismos de control y vigilancia desplegados en contra de la comunidad palestina, así como en las características que definen el tipo de guerra ejercida sobre los territorios de Gaza y Cisjordania y la lucha por dominar las principales fuentes de gas y agua. Ante la generación de una situación de guerra permanente, Israel ha logrado proyectar y comercializar alrededor del mundo una visión de seguridad altamente militarizada basada en el uso de dispositivos tecnológicos. En este sentido, se analiza la exportación y la aplicación de la experiencia israelí a los sectores militares y civiles de otros países, destacando la relación entre Israel y Estados Unidos como socios que han construido un sistema común de estrategias de guerra y complementación tecnológica.

Control y explotación de los recursos gasíferos e hídricos palestinos

Yacimientos de gas natural en las aguas territoriales de Gaza

Uno de los elementos geopolíticos a considerar dentro del conflicto árabe-israelí es la búsqueda por parte de Israel de controlar las fuentes de gas natural que se encuentran bajo las aguas territoriales de Gaza. En 1993, Israel y la Autoridad Palestina (AP) firmaron los Acuerdos de Oslo, los cuales supuestamente pondrían fin a la ocupación israelí en Gaza y Cisjordania, dando lugar a la consolidación de Palestina como un Estado soberano. En ese momento, a pesar de que la marina israelí todavía patrullaba la zona, Israel acordó que la recién creada AP controlaría totalmente sus aguas territoriales. Se rumoreaba que dichas aguas tenían depósitos de gas natural, pero en ese entonces no se consideró relevante, pues los precios de los hidrocarburos eran bajos y los suministros abundantes (Schwartz, 2015).

Sin embargo, en 1999, se descubrieron importantes yacimientos de gas frente a la costa de Gaza, añadiendo una nueva dimensión a la ocupación israelí sobre territorio palestino. Poco tiempo después, Israel descubrió reservas de gas en sus aguas territoriales de creciente envergadura. Los primeros hallazgos se hicieron entre los años 2000 y 2004, pero fueron los campos de Tamar y Leviatán, descubiertos en 2009 y 2010, los que convirtieron al país en un actor significativo en la región. En Gaza, el bloqueo militar y la ocupación israelí ha impedido que los palestinos desarrollen sus campos de gas, por lo que cualquier acceso al recurso y los ingresos que representa se han vuelto algo imposible. Cabe destacar que las fechas de los descubrimientos de los yacimientos de gas coinciden con una serie de procesos que han marcado al enfrentamiento árabe-israelí, entre los que se puede mencionar el desarrollo de la Segunda Intifada a finales de septiembre de 2000; la retirada de Israel de la Franja de Gaza en 2005; la victoria de Hamás en las elecciones de 2006; la guerra de Israel contra Hezbollah en Líbano en 2006; la intensificación del bloqueo de Gaza, específicamente a partir de 2007; la toma de posesión de la Franja de

Gaza por parte de Hamas en julio de 2007; las crecientes tensiones entre Israel y Turquía desde 2009; y el cambio de régimen en Egipto en 2011 (Antreasyan, 2013, pp. 29-30).

En noviembre de 1999, el entonces presidente de la Autoridad Palestina, Yasir Arafat, firmó un contrato por 25 años para la exploración de gas con la empresa British Gas Group (BG). A principios del mismo año, BG descubrió un gran yacimiento de gas al que nombró como Gaza Marine, el cual estaba a una distancia de 17 a 21 millas náuticas de la costa de Gaza, es decir, formaba parte de las aguas territoriales correspondientes a Palestina. En el año 2000, BG perforó dos pozos en el campo y realizó varios estudios de viabilidad con buenos resultados. Todo ello fue posible gracias a que los Acuerdos de Oslo II, concretamente el Acuerdo de Gaza-Jericó de 1994, le otorgaron a la Autoridad Palestina la jurisdicción marítima de 20 millas náuticas de la costa, lo que permitía actividades pesqueras, recreativas y económicas, incluyendo la perforación de yacimientos de hidrocarburos (Antreasyan, 2013, p. 31).

A pesar de lo establecido en los Acuerdos, el convenio también le otorgó a Israel el derecho a prohibir el tráfico marítimo dentro de esta zona por motivos de seguridad. Igualmente, el desarrollo de los yacimientos se enfrentó a los círculos empresariales y políticos israelíes, pues las empresas del consorcio Yam Thetis (que se creó para operar en los yacimientos de gas israelíes adyacentes e hizo su primer descubrimiento en 1999) pidieron al gobierno israelí que prohibiera a BG perforar los yacimientos palestinos. La razón aducida fue que la Autoridad Palestina no es un ente soberano y, por tanto, no puede beneficiarse del Tratado sobre el Derecho marítimo. No obstante, en julio del 2000, el primer ministro israelí, Ehud Barak, concedió a BG la autorización de seguridad para perforar el primer pozo, Marine-1, como parte de un reconocimiento político, pero no legalmente vinculante, por parte de Israel de que el pozo estaba bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina. Así pues, en noviembre del 2000, BG comenzó a perforar el segundo pozo, Marine-2, para evaluar la cantidad y la calidad del gas. De acuerdo con la empresa, las reservas contenían

aproximadamente 1 billón de pies cúbicos, de forma que el acceso a este hidrocarburo permitiría satisfacer la demanda palestina y proveer una cantidad adicional para las exportaciones, proporcionando una base sólida para consolidar su economía y así establecer un Estado independiente (Antreasyan, 2013, p. 31).

El contrato firmado en 1999 con BG le otorgaba a la empresa el 90% de los ingresos y a la Autoridad Palestina un 10% hasta que comenzara la producción de gas, momento a partir del cual la participación de la AP aumentaría al 40%. El 10% que recibirían en un primer momento, les garantizaría a las y los palestinos un acceso suficiente al recurso energético para satisfacer sus necesidades básicas. El plan de desarrollo de BG fue aprobado en julio del 2000 e incluía la construcción de un gasoducto que uniera los yacimientos de Gaza, con un coste estimado de 150 millones de dólares (Antreasyan, 2013, p. 31). Con una industria de gas ya en funcionamiento, Egipto aceptó ser el centro de operaciones y el punto de tránsito del gas por un gasoducto submarino para su venta a la Corporación Eléctrica de Israel. Sin embargo, la empresa no aceptó el acuerdo y el primer ministro israelí, Ehud Barak, exigió que Israel, no Egipto, recibiera el gas de Gaza. A sus exigencias le añadió la sugerencia de que Israel controlara todos los ingresos destinados a los palestinos para evitar que el dinero se utilizara para “financiar al terror” (Schwartz, 2015).

La negativa israelí llevó en 2005 a la intervención del Primer Ministro británico, Tony Blair, quien trató de negociar un acuerdo que satisficiera tanto al gobierno israelí como a la Autoridad Palestina. El resultado fue la propuesta en 2007 de que el gas fuera entregado a Israel a precios inferiores a los del mercado, con el mismo recorte del 10% de los ingresos que finalmente llegaría a la AP. Sin embargo, esos fondos debían entregarse primero al Banco de la Reserva Federal en Nueva York para su futura distribución, lo que garantizaba que los recursos no se utilizarían para ataques contra Israel (Schwartz, 2015). En este sentido, la intervención británica en la negociación suponía un acuerdo desigual que terminaba por beneficiar a los intereses israelíes, perjudicando la capacidad autónoma de Palestina de

acceder y explotar sus propios recursos. El hecho de que los palestinos se volvieran proveedores de energía de Israel representaba, por un lado, la desviación de las relaciones económicas establecidas en virtud de los Acuerdos de Oslo y, por otro lado, la perpetuación de la ocupación militar y el deterioro de las condiciones básicas de existencia de las y los palestinos.

Pese a que el acuerdo favorecía a Israel, el arreglo no llegó a satisfacerlo por completo, principalmente por la reciente victoria del partido militante Hamás en las elecciones de Gaza de 2006 y la toma de poder de la Franja de Gaza en 2007. Aunque Hamás había acordado dejar que la Reserva Federal supervisara todos los gastos, el gobierno israelí, ahora dirigido por Ehud Olmert, insistió en que no se pagaran regalías a los palestinos. En su lugar, los israelíes pagarían el equivalente de esos fondos en bienes y servicios y, en virtud del acuerdo con BG, el gas palestino debía canalizarse por un gasoducto submarino hasta el puerto marítimo israelí de Ashkelon, transfiriendo así el control sobre la venta del gas natural a Israel. El trato resultó ser inadmisibles para Hamás, por lo que BG se retiró de las negociaciones con Israel (Chossudovsky, 2009). En consecuencia, Olmert impuso un bloqueo a Gaza que, con la cooperación de Egipto, tomó el control de todo el comercio dentro y fuera de Gaza, limitando severamente la importación de alimentos y eliminando su industria pesquera (Schwartz, 2015).

El bloqueo del acceso a los recursos extraterritoriales, que comenzó con la Segunda Intifada y coincidió con los descubrimientos de gas natural, hizo imposible la navegación civil o comercial hacia o desde la Franja de Gaza. La supuesta retirada unilateral de Israel de Gaza, completada en agosto de 2005 con la evacuación de los asentamientos civiles y las instalaciones militares, no puso fin a la ocupación. El plan de retirada establecía de manera explícita que Israel seguiría supervisando el territorio palestino, mantendría el control exclusivo del espacio aéreo y continuaría realizando actividades militares en el espacio marítimo de Gaza (“The Sharon Unilateral Disengagement Plan”, 2004, p. 95). Bajo estas condiciones, la situación

en Gaza pronto se deterioró, conduciendo al ascenso de Hamás como partido representativo y a la separación política de Cisjordania y la Franja de Gaza.

Frente a ello, Israel redujo de 20 millas náuticas establecidas por Oslo a 6 millas náuticas tras la victoria electoral de Hamás en 2006, y finalmente a 3 millas náuticas tras la Operación Plomo Fundido en 2008-2009. En otras palabras, la jurisdicción marítima de Gaza se ha visto reducida en un 85% desde el Acuerdo Gaza-Jericó. Si bien todo el proceso ha sido ilegal, la comunidad internacional no ha hecho nada al respecto. Actualmente la marina israelí controla todas las rutas marítimas y ha asesinado a un gran número de pescadores palestinos que han llegado a sobrepasar el límite de las 3 millas náuticas. Por lo tanto, se evita que los palestinos exploten sus propios recursos y exista una mayor posibilidad para que Israel integre los campos de gas gazatíes a las instalaciones israelíes adyacentes (Antreasyan, 2013, p. 35).

Al considerar a Hamás como una amenaza latente a la seguridad nacional israelí, las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron la Operación Plomo Fundido en 2008. Tal como señalan Noam Chomsky e Ilan Pappé, parece difícil no poder concluir que la invasión a Gaza estuvo relacionada con el robo del gas natural palestino (Chomsky y Pappé, 2010, p. 201). Es decir, la ocupación militar de Gaza tiene toda la intención de transferir la soberanía de los campos de gas a Israel en violación del derecho internacional. Aunque la operación no logró cumplir su objetivo, la infraestructura de Gaza fue destruida y las millas náuticas continúan siendo muy reducidas. En los 22 días que duró la incursión, murieron 1.400 palestinos, entre ellos 300 niños y niñas y más de 115 mujeres (Amnistía Internacional, 2009a, p. 1). Como se mencionó en el apartado anterior, edificios, escuelas, hospitales y espacios públicos fueron atacados y demolidos por las fuerzas israelíes. La central eléctrica de Gaza, construida en 2002 en la ciudad de Nuseirat, también ha sido dañada repetidamente por los ataques aéreos israelíes y actualmente funciona a la mitad de su capacidad original. Esto, sumado al prolongado bloqueo que restringe

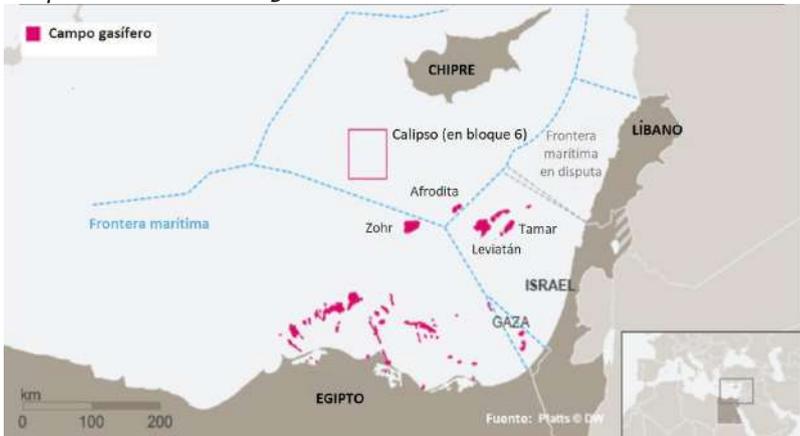
la entrada de material de construcción y el cierre del cruce fronterizo con Egipto, ha hecho que Israel sea el único proveedor de combustible de Gaza (Najjar, 2017).

En años posteriores a la incursión de 2008, Israel ha intentado negociar desigualmente con Gaza para tener acceso a sus hidrocarburos, ya que en las últimas dos décadas Israel ha experimentado una creciente crisis energética. Entre 2000 y 2010, el consumo de energía israelí aumentó en un 3,5% anual. Esto vino aparejado de un aumento del 9% en los precios de la electricidad ante un contexto en el que más del 40% de la electricidad de Israel proviene del gas natural (Ahmed, 2012). Es por ello que el gobierno ha luchado por mantener un suministro constante y apropiarse de los recursos palestinos. Es así como las fuerzas israelíes lanzaron la Operación Retorno de Eco en marzo de 2012 y la Operación Margen Protector en 2014 frente a la ofensiva aérea palestina para proteger el gas de la costa (Ahmed, 2014). A pesar del constante acoso israelí a Gaza, Israel no ha podido acceder a los recursos palestinos. Sin embargo, Israel sigue negándoles a las y los palestinos el derecho a explotar los yacimientos de gas en la costa, lo que recrudece las condiciones de existencia de la población palestina asolada por la guerra (Shama, 2019).

Lo anterior está vinculado a la dinámica regional, pues la gestión de las reservas de gas natural en el este del Mediterráneo y la Cuenca del Levante ha sido fuente de varias disputas, pues las aguas territoriales son compartidas por Israel, Gaza, Líbano, Chipre y Siria. Israel se ha enfrentado tanto diplomática como militarmente a Líbano, puesto que existe un desacuerdo sobre su frontera común, la llamada *línea azul* que fue trazada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el 2000. Líbano ha apelado ante la ONU para evitar que Israel perfore los yacimientos que le corresponden de acuerdo con la determinación de sus millas náuticas. Sin embargo, las negociaciones no han fructificado y el conflicto prevalece, por lo que la *línea azul* aún continúa en disputa y ambas partes están preparadas para usar la fuerza ante cualquier amenaza. Ello se ve reflejado en la creación israelí del sistema antimisiles *Iron Dome*, introducido en marzo de 2011 para defender las

instalaciones de explotación de gas ante un ataque libanés. Este mismo sistema ha sido utilizado para proteger sus instalaciones ante los cohetes dirigidos por Hamás (Antreasyan, 2013, p. 40).

Mapa 1. Yacimientos de gas en el este del mar Mediterráneo



Fuente: Shama (2019).

Por su parte, Egipto no ha realizado ningún movimiento formal, ya que cuenta con un contrato en esta materia con Israel, el cual depende del suministro de gas por parte de El Cairo. Egipto se convirtió en el principal proveedor de gas de Israel en 2008, lo que hizo que la seguridad energética israelí dependiera en gran medida de sus relaciones con Egipto. No obstante, esta seguridad se vio sacudida por la revolución egipcia de 2011 al interrumpir 40% de los suministros de gas, lo que generó que Israel buscara diversificar sus fuentes de suministro de energía. La condición de vulnerabilidad energética fue paliada en cierto sentido por el descubrimiento del yacimiento Leviatán en 2010 y un mayor vínculo con la Chipre griega, con quien ha llegado a negociar acuerdos de exploración y extracción. Empero, el acercamiento chipriota-israelí ha sido causa de confrontaciones con Turquía, lo que ha derivado en el deterioro de las relaciones con Israel y la militarización de la zona (Antreasyan, 2013, p. 30).

Recursos hídricos en Cisjordania: el río Jordán y el acuífero de la Montaña

De igual manera, la búsqueda por controlar los recursos hídricos y crear un sistema de aguas ha sido un elemento central para el desarrollo de las bases territoriales, demográficas y económicas de Israel. La necesidad de constituir un Estado sionista requería del control de un recurso tan vital como es el agua para absorber a la población judía establecida en Europa y Medio Oriente, generar una presencia demográfica judía en la mayor parte posible de Palestina y consolidar una economía basada principalmente en la agricultura (Morag, 2001, p. 179). En un primer momento, la intención por lograr una autosuficiencia agrícola era considerada crucial no solo por razones ideológicas, sino también en términos estratégicos. Por un lado, las condiciones de ocupación podían conducir a un bloqueo árabe al acceso de alimentos vitales. Por otro, para recibir a la comunidad judía, era necesaria la existencia de un sector rural sólido. Sin embargo, si bien las necesidades agrícolas siguen siendo un factor relevante en el cálculo hídrico de Israel, el acceso al agua es de suma importancia para abastecer la creciente demanda para uso personal, industrial y servicios de alta tecnología (Morag, 2001, p. 182).

De esta manera, desde su creación en 1948, Israel ha explotado intensamente los recursos hídricos disponibles como parte de su proyecto nacional. Inicialmente, gran parte de esta agua era extraída del acuífero Costero, pero a medida que estos pozos se fueron haciendo cada vez más salinos durante la década de 1950, se buscaron otras fuentes de agua como los manantiales en Yarkon y Raninim, que se alimentan del acuífero de la Montaña bajo el territorio de Cisjordania. A principios del decenio de 1960, se estimaba que la extracción israelí superaba la capacidad de recarga del acuífero, por lo que comenzó a desviar agua del mar de Galilea para alimentar el nuevo Acueducto Nacional de Israel que actualmente transporta el agua hasta el desierto del Néguev en el sur (Cooley, 1984, p. 9). Sin embargo, la extracción de agua del mar de Galilea a gran escala redujo drásticamente el caudal de la principal fuente de suministro: el río Jordán (Smith, 2014, p. 243).

A pesar de que el aseguramiento de los suministros de agua tal vez no haya sido la razón principal para iniciar la guerra de 1967, es indiscutible que la mayor parte del territorio que Israel anexó sigue estando bajo su control en parte por su importancia hidrológica. Después de la Guerra de los Seis Días en junio de 1967 entre Israel y Egipto, Siria y Jordania, las fuerzas israelíes lograron ocupar la Franja de Gaza y Cisjordania, así como la Península del Sinaí (que posteriormente sería devuelta a Egipto) y los Altos del Golán de Siria. Como consecuencia, Israel se hizo con el control de todos los recursos hídricos de los nuevos territorios ocupados, de manera que actualmente retiene el control exclusivo de todos los recursos hídricos en la tierra entre el río Jordán y el mar Mediterráneo (B'Tselem, 2017).

Así pues, durante las dos primeras décadas de ocupación, Israel logró apropiarse de los recursos hídricos de los territorios ocupados. El 80% de los acuíferos de las montañas se encuentran debajo de Cisjordania y el 20% restante está bajo Israel (Weizman, 2007, p. 19). Tomando en consideración la importancia de este recurso vital, que hoy en día abastece el 40% de las necesidades agrícolas de Israel y casi el 50% de su agua potable, Israel comenzó a modificar la situación jurídica e institucional de los derechos sobre el agua en los territorios ocupados después de la guerra. Los cambios se desarrollaron en dos etapas principales, las cuales corresponden con los dos primeros periodos de ocupación. Primero, en agosto de 1967, Israel le otorgó la capacidad de toma de decisiones en relación con el agua a las autoridades militares en Cisjordania y posteriormente, hizo un movimiento similar en la Franja de Gaza en diciembre de 1974. Este proceso tuvo como resultado la restricción a los palestinos de perforar nuevos pozos para satisfacer sus necesidades y, en cambio, el gobierno israelí se apropió del agua para abastecer a la población israelí. Durante la segunda etapa, muchas de las facultades de las autoridades ocupantes, entre ellas el control del abastecimiento de agua a los centros urbanos, se transfirieron al Comisionado de Aguas de Israel y al Ministerio de Agricultura. De este modo, los recursos hídricos de Cisjordania y la Franja de Gaza se integraron bajo el mando israelí, siendo controlados por un sistema único y centralizado (Gordon, 2008, p. 127).

Mapa 2. Recursos hídricos de los Territorios Ocupados e Israel



Fuente: Koek (2013).

El interés por tener una presencia territorial sobre Cisjordania radica en buena medida en los recursos hídricos superficiales y subterráneos que contiene. Las aguas superficiales proceden principalmente de la cuenca del río Jordán, el cual en teoría es un recurso compartido entre Palestina, Israel, Jordania, Siria y Líbano. Sin embargo, en el caso palestino-israelí, el río suministra aproximadamente 650 millones de metros cúbicos de agua a Israel, mientras que este no abastece en lo absoluto a la población palestina (Amnistía Internacional, 2009b, p. 10).

Por otra parte, se encuentran los recursos hídricos subterráneos otorgados por el acuífero de la Montaña. El acuífero es el único recurso que provee de agua a las y los palestinos y es considerado una de las más importantes fuentes de suministro para Israel. El ciclo hidrológico de la cuenca del Valle de Jordán es un sistema de flujos cíclicos que atraviesa las fronteras políticas y de seguridad de la zona.

En invierno, el agua que se evapora de la superficie del Mar Mediterráneo se condensa y genera nubes. Las nubes se desplazan hacia el este sobre las llanuras costeras de Israel hacia las montañas de Cisjordania. Allí comienza a llover y el agua corre hacia los barrancos y arroyos que drenan el agua en dirección al oeste a través de las laderas occidentales de las montañas y regresa al mar por medio de la llanura costera israelí. (Weizman, 2007, pp. 18-19).

En realidad, el acuífero se compone de tres cuencas (Oeste, Noreste y Este), las cuales cuentan con una producción media total de aproximadamente 679 millones de metros cúbicos al año (Amnistía Internacional, 2009, p. 9). Los recursos hídricos que ellas contienen fueron divididos a raíz de los Acuerdos de Oslo II en 1995 entre Israel y Palestina de manera desigual, y terminaron por beneficiar a la ocupación israelí. Los acuerdos estipulaban que los recursos generados por el acuífero de la Montaña serían repartidos en un 64% para Israel y un 17,4% para Palestina. Las cifras estaban divididas de la siguiente manera: de los 362 millones de metros cúbicos al año del acuífero del Oeste, le correspondían 93,9% a Israel y 6,1% a Palestina; 71% de los 145 millones de metros cúbicos al año del acuífero Noreste serían para Israel, mientras que solamente el 29% sería para Palestina; y de los 172 millones de metros cúbicos del acuífero del Este, 23,3% serían para Israel y 31,4% para Palestina (Vásquez y Ramírez, 2018, p. 117).

Lo anterior sugiere que los acuerdos vinieron a consolidar el control que Israel ya tenía desde 1967, e impidieron el acceso y control por ley a Palestina y el desarrollo de infraestructura hidráulica (Corradin, 2016). Por lo tanto, las y los palestinos se ven en la necesidad de adquirir agua a través de las autoridades israelíes, dependiendo del monopolio Mekorot, empresa de aguas israelíes que controla la distribución y producción (tratamiento y desalinización) de recursos hídricos en la zona (Vásquez y Ramírez, 2018, p. 109). Aunque Israel cuenta con un gran acceso al agua, ha tenido que invertir en plantas y proyectos de desalinización para enfrentar el agotamiento del recurso (The Economist, 2018). Bajo estas condiciones, la Franja de Gaza y Cisjordania sufren de una grave escasez de agua e inclusive, en casos como el

de Gaza, el agua que se suministra es de mala calidad y no es potable. Aunado a ello, el acuífero Costero del que Gaza depende como fuente primaria de agua, ha sido contaminado por el bombeo excesivo y la contaminación de las aguas residuales viéndose obligados a reducir la cantidad de agua que utilizan a niveles mínimos y a comprar agua desalinizada de vendedores privados (B'Tselem, 2017).

Como puede observarse, la apropiación del agua palestina se presenta como otro ejemplo de los esfuerzos israelíes por controlar y explotar los recursos de los territorios ocupados. Siguiendo a Weizman, este tipo de acciones concuerdan con lo que el autor ha denominado como la política de la verticalidad, la cual hace referencia al intento simultáneo israelí por controlar los tres niveles espaciales (tierra, aire y subsuelo) para gestionar a la población palestina (Weizman, 2002). Así pues, la confiscación de los recursos hídricos no solo ha servido para favorecer las necesidades económicas y de seguridad de Israel, sino que también ha sido utilizado para administrar a los habitantes ocupados al reducir su acceso al agua (Gordon, 2008, p. 128).

Vigilancia y control de los territorios ocupados

La red de vigilancia se expande a lo largo de múltiples escalas sociales a través de una serie de métodos de diversa índole. Por un lado, los medios a partir de los cuales Israel domina son de carácter burocrático y jurídico. Israel creó una estructura institucional que supervisa burocráticamente a la población palestina con la ayuda de los diversos departamentos y organismos gubernamentales como son la policía, el ejército, la oficina central de estadística, organismos de inteligencia y el registro de tierras. A fin de asegurar el funcionamiento eficiente del control israelí, se agrupa información general y personal de varios campos sociales, desde las características de la población y de cada individuo, el tipo de trabajo que desempeñan, los servicios básicos como la salud pública y la educación, la infraestructura, las formas de comunicación entre palestinos y la organización de la comunidad.

Un mecanismo a partir del cual se logró obtener información relevante sobre la población ocupada fue el uso de redes de espionaje dentro de las comunidades palestinas locales. Estas redes dependen de la participación de colaboradores e informantes palestinos, cuya cooperación con Israel principalmente es resultado de una necesidad personal y económica. Israel recompensa a los ciudadanos palestinos que cooperan con él con una autorización de seguridad para facilitar el acceso a determinados puestos de trabajo, permisos de construcción, viajes y la concesión de licencias comerciales. De igual manera, en momentos de disidencia organizada u oposición violenta al régimen colonial, este tipo de vigilancia no técnica se basaba en unidades especiales encubiertas, los llamados *Mista'rivim* o simuladores árabes, para reunir información y liquidar a personas que el Estado considera peligrosas (Zureik, 2011, p. 19).

El uso de colaboradores se presenta así como una fuente de inteligencia que brinda información relevante a las fuerzas israelíes, y contribuye a un mayor nivel de precisión en los ataques a la infraestructura palestina y a los líderes de la resistencia. Un colaborador puede ser un palestino común y corriente, por lo que su uso promueve la fragmentación de la sociedad, socavando la confianza básica necesaria para crear comunidad y estimular la resistencia política (Gordon, 2008, p. 43). Por lo tanto, la recolección de datos genera un proceso de autodisciplina en el que las y los palestinos evitan ciertas situaciones para no ser castigados, denotando una vigilancia constante sobre los cuerpos de la población ocupada.

Por su parte, los mecanismos jurídicos han servido de base para casi todos los demás aparatos y prácticas de control y, de muchas maneras, ha configurado sus operaciones. El sistema jurídico estableció el marco institucional de la ocupación y para la ocupación, determinó el mandato del gobierno militar y delimitó las facultades del comandante militar y las responsabilidades de las diferentes instituciones civiles. Paralelamente, el propio sistema jurídico se ha convertido en un medio de control al establecer normas y difundir un discurso jurídico por medio del cual se autoriza y legaliza la detención

administrativa, la demolición de viviendas, la confiscación de tierras, el acceso a recursos y servicios básicos y otras formas de control cotidiano (Gordon, 2008, pp. 28-29). Por ejemplo, el uso de mecanismos legales para confiscar la tierra ha resultado en la separación de las y los palestinos de sus medios de subsistencia, haciendo de la ocupación una condición insoportable. Asimismo, Israel ha modificado las condiciones jurídicas e institucionales de los derechos sobre el agua, y se ha apropiado de los recursos hídricos palestinos bajo un sistema único y centralizado (Gordon, 2008, pp. 127-128), denotando el control de uno de los tres niveles espaciales: el subterráneo.¹

Por otro lado, como parte de la red de vigilancia, existen mecanismos de corte técnico, los cuales abarcan un conjunto de medidas entre las cuales se destacan la utilización de métodos como la grabación electrónica de información mediante la intervención telefónica y la interceptación de mensajes electrónicos, la televisión en circuito cerrado, la vigilancia por vídeo, los sistemas de geoposicionamiento, la identificación por radiofrecuencia, las huellas dactilares, las pruebas genéticas, los análisis de ADN y la identificación biométrica retiniana y facial (Zureik, 2011, p. 13). A ello se añade el desarrollo de estrategias de control sobre las principales estructuras espaciales y físicas palestinas. Esto es posible a través del establecimiento de una red de puntos estratégicos en torno a las principales zonas urbanas palestinas, en las que se construyen asentamientos, puestos de control, bases militares y parques industriales, todos ellos conectados por carreteras y autopistas de circunvalación de uso israelí (Abujidi, 2011, p. 317). Esta estrategia se ha venido recrudesciendo —especialmente después de la Segunda Intifada en el año 2000— a raíz de la implementación de un cordón militar israelí alrededor de los territorios ocupados (Abujidi, 2011, p. 324).

En los primeros años de ocupación, los asentamientos tenían un objetivo triple. En primer lugar, formaban parte de un mecanismo de

¹ Eyal Weizman ha denominado como política de verticalidad al intento simultáneo de Israel por controlar tres niveles del espacio: el suelo, el aire y el subterráneo.

despojo y ayudaban a transformar la confiscación legal de tierras en una realidad concreta. En segundo lugar, los asentamientos y los colonos dentro de ellos sirvieron como un aparato civil para controlar y vigilar a la población palestina. Por último, los asentamientos en Cisjordania formaban parte de la línea de defensa de Israel contra enemigos externos como Egipto y Siria y estaban desplegados para ayudar a los militares a vigilar la frontera, asegurar las carreteras y garantizar las comunicaciones internas. El establecimiento de los asentamientos entrañaba la construcción de carreteras de acceso, las cuales sirvieron para consolidar el territorio israelí mediante la creación de una red que conectaba el territorio con las demás áreas de Israel. De esta manera, los asentamientos y las carreteras de circunvalación no solo sirvieron como aparatos físicos que funcionaban en relación con los mecanismos jurídico-burocráticos para asegurar la confiscación de las tierras palestinas, sino que también funcionaron como parte de los aparatos que se desplegaron para controlar la población ocupada mediante la restricción de la circulación, la vigilancia y políticas étnicas (Gordon, 2008, pp. 131-132).

Después de 1967, la política de asentamientos cambió y se basó en la construcción de un sistema geométrico que une el dominio visual con el orden espacial, de manera que los asentamientos son dispositivos ópticos urbanos para la vigilancia y el ejercicio del poder (Weizman, 2007, p. 130). Para ello, se construyeron asentamientos israelíes en la cima de las colinas en Cisjordania para dividir el espacio y vigilar a las aldeas palestinas que se encuentran debajo. A su vez, se impusieron bases militares y se mejoraron las carreteras de circunvalación para reforzar el control israelí sobre la población. Así pues, la función estratégica de los asentamientos se integró en la distribución y topografía del espacio, creando una red de observación que permite visualizar los principales puntos y arterias de la configuración espacial de Cisjordania. Los asentamientos son, por consiguiente, dispositivos disciplinarios que tienen por objeto hacer visible y dócil a la población ocupada. Son utilizados para vigilar las actividades palestinas, ya sea el trabajo en el campo o el viaje por

carreteras adyacentes, funcionando como torres panópticas que moldean el comportamiento de las y los palestinos, al mismo tiempo que fragmentan el espacio y alteran el movimiento (Gordon, 2008, p. 138).

Los asentamientos no son la única forma a partir de la cual se genera una situación de control y vigilancia, ya que la construcción de carreteras para uso exclusivo de los israelíes logra delimitar el espacio de los palestinos y controlar su tiempo. Ello se ve reflejado en los casos en los que la población palestina se ve obligada a utilizar rutas alternativas, algunas de las cuales atraviesan zonas urbanas densamente pobladas e implican el uso de caminos de tierra sin pavimentar que se extienden a lo largo de campos agrícolas y valles montañosos. La distancia que hay que recorrer utilizando estas rutas es mucho mayor, así como el tiempo que se tarda en ir de un lugar a otro. En consecuencia, el verse obligado a viajar por estas carreteras alternativas afecta aspectos de la vida cotidiana en Cisjordania, incluidas la economía y los sistemas de salud y educación (Gordon, 2008, p. 137). Además, tales carreteras se utilizan como límites, teniendo como objetivo el control del libre tránsito y la división de las zonas palestinas en pequeños cantones aislados (Weizman, 2007, p. 81).

Por si los asentamientos y las carreteras no fueran suficientes, desde el principio a los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado se les concedió el estatuto de comunidades fronterizas, autorizándoles a recibir armas militares para su autodefensa. Por ley, los colonos están obligados a vigilar sus asentamientos e instituciones educativas. Están autorizados a detener a las personas que se nieguen a proporcionar identificación y a arrestar a los que traten de ocultarse y no puedan explicar razonablemente su comportamiento. En consecuencia, cada asentamiento tiene un depósito de municiones y un coordinador de seguridad pagado por el Estado que se encarga de organizar la defensa del asentamiento. Los habitantes adultos reciben rifles semiautomáticos y pistolas, y el coordinador programa patrullas en los límites del asentamiento. Es importante recordar que todo esto es oficial (Gordon, 2008, p. 141).

Después de los Acuerdos de Oslo y la Segunda Intifada, se experimentó un cambio en la arquitectura y las técnicas de vigilancia, las dimensiones espaciales y temporales y la gestión de la población. La concepción de seguridad israelí siempre ha incluido un complejo aparato territorial, institucional y arquitectónico, concebido para gestionar la circulación de los palestinos a través del espacio (Weizman, 2007, p. 142). Así, la nueva red de vigilancia incorpora puestos de control y elementos de alta tecnología como cámaras, drones, inspecciones con tecnología láser y el muro de apartheid. Este tipo de vigilancia ahondó la gestión israelí del espacio a partir de medidas incluyentes y excluyentes que delimitaron los derechos y responsabilidades de las y los palestinos, así como los flujos y actividades de los sujetos, y terminó por repercutir significativamente en su vida cotidiana (Abujidi, 2011, p. 314).

A pesar de que el sistema de puestos de control surgió de manera gradual como una serie de respuestas locales a lo que los oficiales militares consideraban como necesidades tácticas, ahora los puestos de control asumen una disposición estratégica general, constituyendo un sistema territorial completo cuyos objetivos son dominar y gestionar las vidas de las y los palestinos e imponer una política de cierre a la circulación sin tener que invadir sus ciudades, pueblos y aldeas, y sin la necesidad de recurrir a la fuerza directa (Weizman, 2007, p. 146). Es decir, los puestos de control se presentan como un sistema que reemplaza la ocupación directa de los territorios palestinos por un supuesto cruce fronterizo neutral con reglamentos de paso. Sin embargo, siguen siendo lugares de tensión y humillación, caracterizados por arbitrariedades y la violación a los derechos humanos. Como afirma Weizman, el sistema de puestos de control se ha vuelto tan omnipresente e intrusivo que ha crecido hasta gobernar todo el espectro de la vida palestina bajo la ocupación (Weizman, 2007, p. 147).

Los puestos de control se han ido modificando, recurriendo en gran medida a la aplicación de tecnología, como el uso de detectores de metales y máquinas de sensores, tarjetas biométricas, sistemas

informáticos avanzados, torniquetes y el despliegue de guardias de seguridad privada en lugar de soldados. Por ejemplo, desde 2004, los torniquetes comenzaron a ser instalados en los puestos de control, los cuales buscan frenar, regular y organizar a la multitud de palestinos que intentan cruzar el puesto para que pase un palestino a la vez y se enfrente a un soldado que comprueba sus permisos y revisa su equipaje. Los soldados regulan el ritmo de paso mediante un dispositivo eléctrico que controla el giro de las puertas. Una persona pasa a la vez pulsando un botón y, cada pocos segundos, el soldado detiene la rotación de los torniquetes con la intención de dejar a las personas atrapadas entre ellos; la longitud es reducida para que se presionen físicamente los cuerpos de las personas en tránsito (Weizman, 2007, p. 151). Esta situación se ve agravada por el hecho de que los soldados se encuentran detrás de vitrinas y el idioma que se utiliza es el hebreo, haciendo que la comunicación sea más desgastante. El principal motivo de este tipo de comportamiento es introducir incertidumbre y confusión en la mente de los vigilados (Kelly, 2006, p. 100). Así, este es un claro ejemplo de que el poder de máquinas como los torniquetes, detectores de metales y tecnologías de escaneo no pueden separarse del poder de los soldados y guardias de seguridad.

En los puestos de control, es donde se comprueban y verifican los documentos de identidad. En Israel, las tarjetas de identidad obligatorias se introdujeron en 1949 tras el establecimiento del Estado. Zureik argumenta que, en general, la razón para introducir las tarjetas de identidad es doble: radica en la necesidad de securitizar el Estado y garantizar la asignación de derechos y obligaciones a los ciudadanos. De esta manera, en los territorios ocupados, las tarjetas de identificación son herramientas esenciales en la matriz de control israelí, pues regulan la movilidad y la residencia, pero no otorgan ningún derecho estatal (Zureik, 2011, p. 14). Israel es quien cuenta con el monopolio del registro civil y la expedición de identificaciones para los palestinos, incluyendo la administración de visados y los permisos de trabajos. Los datos personales, incluidos el nombre, la edad, la fecha y el lugar de nacimiento, la afiliación política y el registro de

seguridad, se conservan en una base de datos central a la que tienen acceso los funcionarios israelíes en los puestos de control y las fronteras. Es por ello que se asevera que la y el palestino existen solo si la computadora israelí así lo dice (Lyon, 2011, p. 54).

A raíz de los Acuerdos de Oslo, la expedición de documentos de identidad pasó a ser responsabilidad de la Autoridad Palestina, pero Israel conservó su participación en el registro de la población, por lo que sigue determinando todos los derechos y estatutos de los habitantes del territorio palestino ocupado (Lyon, 2011, p. 52). De acuerdo con Weizman, los Acuerdos de Oslo obligan a los palestinos a identificarse no solo como objetos expuestos al poder militar, sino también como sujetos políticos de otra identidad: la Autoridad Palestina. Es decir, los palestinos siguen estando sometidos a la dominación de la seguridad israelí al estar expuestos a sus amenazas, pero se les alienta a creer que son sujetos de su propia autoridad política (Weizman, 2007, p. 144).

Los documentos de identidad limitan la capacidad de participar en contextos sociales normales, como es la vida en familia, la educación y el trabajo, así como actividades recreativas o políticas. Las prácticas de vigilancia que ello conlleva construyen la identidad de los palestinos, al hacer de la vida cotidiana una realidad agobiante (Zureik, 2001). En particular, los sistemas de identificación reflejan y refuerzan las asimetrías políticas y económicas existentes que se hacen sentir especialmente en las restricciones a la movilidad, pues se les niega a los palestinos el derecho a acceder a sus tierras, lugares de empleo, educación y atención médica. Es probable que este tipo de sistemas continúe, especialmente porque en varias partes del mundo se están adoptando nuevos sistemas de identificación biométrica que requieren bases de datos para el registro de la población, convirtiéndose en herramientas básicas de la infraestructura de la información (Lyon, 2011, p. 59).

La instalación de puestos de control y el uso de documentos de identidad impuestos por las autoridades israelíes describe un mecanismo que controla los cuerpos de las y los palestinos mediante

métodos físicos, tecnológicos y burocráticos. Estas medidas de control expresan la forma en la que los israelíes dominan el tiempo y el espacio de la población palestina. Por un lado, el espacio palestino se encoge, el tiempo se ralentiza y la movilidad se ve limitada. Por otro, los ocupantes israelíes tienen la libertad de moverse sin restricciones y expandirse a través del espacio y el control del tiempo (Peteet, 2008, p. 14). A partir de este proceso, el autor Amal Jamal introduce la categoría de tiempo racializado para examinar el trato diferenciado que Israel le da a la población palestina (Jamal, 2008). El tiempo de los palestinos se caracteriza por ser estático y discontinuo, en donde los métodos de control y vigilancia tienen por objetivo suprimir, bloquear y retrasar el flujo de tiempo. Así pues, el control israelí del tiempo y el espacio se ve facilitado por la vigilancia en forma de cierres, puestos de control, muros, la confiscación de tierras y la emisión de documentos de identidad (Zureik, 2011, p. 18).

Guerra asimétrica y urbana: el urbicidio y la guerra a distancia como constantes

La red de vigilancia descrita anteriormente se ve complementada por una situación de guerra de corte asimétrico y urbano. A raíz de la formación de espacios densamente urbanos, la doctrina militar y de seguridad israelí comenzó a centrarse en la identificación de insurgentes, *terroristas* y una amplia gama de amenazas procedentes del caos de la vida urbana. Para ello, era necesario encontrar formas para reconocer a dichas amenazas antes de que se materializara un potencial ataque, de manera que se empezaron a desarrollar sistemas de vigilancia de alta tecnología para identificar con anticipación a futuros enemigos. De esta manera, para este nuevo urbanismo militar resultó fundamental un cambio en la forma de entender el espacio, pues aquellos espacios públicos y privados de las ciudades, así como su infraestructura y su población civil se convirtieron en una fuente de objetivos y amenazas (Graham, 2011a, p. 13). En este sentido, el urbanismo militar descansa en la idea de que las técnicas

militarizadas de rastreo y ataque deben controlar y dominar permanentemente el paisaje de la ciudad y los espacios de la vida cotidiana, dando lugar a una noción de la guerra como un ejercicio constante e ilimitado.

La estrategia que las fuerzas israelíes han implementado en la lucha por ocupar los territorios palestinos ha sido descrita por Stephen Graham como urbicidio. El autor entiende a este proceso como la destrucción planificada de zonas urbanas (ciudades e infraestructura), haciendo referencia a la guerra urbana en Cisjordania e igualmente aplicable en Gaza, como se experimentó en la invasión de la Franja en 2008 (Graham, 2003, p. 70). El estado de urbicidio representa el estado permanente de invasión y estrangulamiento que tiene lugar en las ciudades y campos de refugiados palestinos (Abujidi, 2011, p. 325). Esta doctrina militar se centra en la idea de que la ciudad ya no es meramente el sitio, sino el medio mismo de la guerra (Weizman, 2007, p. 54), en el cual grupos insurgentes operan a través de redes que logran pasar desapercibidas ante la visión militar tradicional. Esta situación exige un aumento radical de las técnicas de rastreo, vigilancia y selección de objetivos, centradas tanto en las redes de circulación y movilidad como en espacios de la vida urbana cotidiana (Graham, 2011a, p. 22). Así, las herramientas de alta tecnología como los drones y la división del espacio mediante muros y puntos de control biométricos proporcionan cada vez más modelos para la reorganización del espacio urbano.

Este tipo de incursiones demuestran que las tecnologías militares de vigilancia se están abriendo paso a los entornos urbanos, desdibujando así la división entre los sectores civil y militar. Lo que caracteriza a estos conflictos es que se presentan en un tejido urbano denso y contiguo en el que los ejércitos regulares comienzan a experimentar dificultades para operar de manera efectiva. Entre dichas dificultades, figuran la falta de claridad para separar a los *terroristas* o insurgentes de las poblaciones civiles y la alta densidad de la infraestructura urbana que interfiere en los sistemas de vigilancia e identificación de objetivos militares. Según Graham, las ciudades

palestinas se presentan como espacios potencialmente impenetrables e incognoscibles, por lo que desafían la mirada tridimensional de los sistemas de vigilancia de alta tecnología de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y su armamento de gran potencia (Graham, 2003, p. 70). Es decir, las ciudades socavan la capacidad de vigilancia vertical israelí que permitiría dominar todo el espectro del complejo urbano, ya que la arquitectura de las urbes desdibuja el vasto entramado urbano por medio de edificios y espacios subterráneos.

Atravesar los muros: el caso de Cisjordania

Las incursiones realizadas en los territorios palestinos, como el caso de las ciudades de Nablus y Yenín en Cisjordania en el 2002 dentro de la Operación Escudo Defensivo, es un ejemplo de la manera en la que se está llevando a cabo el conflicto directo entre palestinos e israelíes que muestra la estrategia militar a emplear en un contexto urbano. La táctica utilizada en la ciudad de Nablus reflejó una forma de romper y reinterpretar una construcción espacial impuesta y delimitada a partir del atravesamiento de muros. Al traspasar los muros y crear así caminos, el ejército israelí trató de crear un espacio operativo como si no tuviera fronteras, neutralizando las ventajas que el terreno urbano otorga a los oponentes de la ocupación.

En lugar de entrar al complejo urbano por medio de los caminos trazados de la ciudad como las calles, carreteras y avenidas, los soldados lograron entrar y atacar mediante la perforación de agujeros en los muros, techos y suelos. Es decir, reinterpretaron la dimensión espacial de la ciudad para hacerla tridimensional, y llegaron a eliminar cualquier obstáculo y la distinción entre el espacio público y privado. Ante un escenario en el que los soldados israelíes y los guerrilleros palestinos lucharon dentro de la construcción arquitectónica de la ciudad, se volvieron casi invisibles desde una perspectiva aérea (Weizman, 2012, p. 10). Sin embargo, la estrategia israelí domina tanto la verticalidad como la horizontalidad del espacio urbano palestino, ya que es capaz de realizar asesinatos selectivos con el uso de

drones y orientar a las fuerzas israelíes a través de satélites con GPS, así como atravesar los muros, utilizando explosivos o grandes martillos, y emplear excavadoras blindadas Caterpillar D9 para demoler edificios fortificados que refugian a guerrilleros palestinos junto a civiles desarmados.

Eyal Weizman (2012) analiza la táctica de guerra de atravesar los muros a partir de la descripción de aquellas características que definen a los conflictos asimétricos. De acuerdo con el autor, la guerra asimétrica se explica por el hecho de que el enemigo es difuso, sigiloso, disperso y se configura a través de una red de bandas organizadas que cuentan con una extrema flexibilidad de movimiento. Para enfrentarlo, las Fuerzas de Defensa de Israel han recurrido a la técnica del enjambre, la cual es parte de la teoría militar del ejército norteamericano. En este sentido, Weizman la define como una teoría que “intenta describir las operaciones militares como una guerra no lineal: una red constituida por una multiplicidad difusa de unidades pequeñas, semiindependientes pero coordinadas, que operan con todas las demás en una sinergia generalizada” (Weizman, 2012, p. 22) y que van aprendiendo a través de la interacción de sus elementos por medio de la adaptación a situaciones emergentes y cambiantes.

Es a partir de dicha definición que la incursión sobre Nablus estuvo determinada por la formación de una operación de sitio sistemática que aplicó la maniobra del enjambre, atacando a la resistencia palestina de manera simultánea y desde todas las direcciones. Mientras que los combatientes palestinos esperaban a que las fuerzas israelíes actuaran conforme a los parámetros clásicos de la guerra, los militares se desplazaron a través de los edificios, perforando agujeros en los muros y trasladándose de manera lineal a través de las casas de los habitantes civiles (Weizman, 2012, p. 37). Además, este acontecimiento demostró una nueva práctica militar israelí, en donde se realizan incursiones continuas e invasiones temporales, en contraste con invasiones y ocupaciones más intensas y permanentes.

Recuperando la categoría de urbicidio de Graham, el ataque y el asedio sobre Nablus y Yenín destruyeron los sistemas de

infraestructura palestinos. Además de las batallas, las incursiones, los secuestros y las demoliciones masivas, la característica central de la operación fue la destrucción deliberada de cualquier símbolo de la modalidad urbana palestina. Durante las operaciones de 2002, los depósitos de agua fueron acribillados a balazos; se bombardearon e interfirieron las comunicaciones electrónicas; las carreteras, las escuelas y el mobiliario urbano fueron ampliamente arrasados y destruidos; se destrozaron computadoras, se robaron discos duros y se destruyeron los transformadores de electricidad. Tales acciones son un reflejo directo de los cambios en la doctrina militar israelí, en donde los ataques sistemáticos contra la infraestructura civil han llegado a considerarse un medio de coaccionar a los adversarios en las guerras *no tradicionales* contra los insurgentes y las poblaciones civiles que los apoyan en las ciudades. Los ataques contra la infraestructura urbana son un medio de lanzar operaciones basadas en los efectos para coaccionar física y psicológicamente a poblaciones enteras (Graham, 2011a, pp. 284-285).

La guerra a distancia y los asesinatos selectivos en Gaza

Así como en las incursiones continuas por el territorio de Cisjordania, en el caso de Gaza, la estrategia de dominación se basa en la idea de control a distancia mediante la militarización de las fronteras, las invasiones regulares, los asesinatos selectivos y la intensa vigilancia aérea, en lugar del control a través de la presencia continua de los ejércitos de ocupación (Graham, 2011b, p. 138). Después de la retirada de Israel en 2005, lo que se observa en Gaza es una especie de laboratorio para nuevas técnicas de control urbano, pacificación y guerra de contrainsurgencia sin ocupación por parte del ejército israelí. Gaza se ha convertido en un espacio en el que Israel prueba y perfecciona diversas técnicas de gestión, experimentando continuamente en busca de un equilibrio óptimo entre el máximo control sobre el territorio y la mínima responsabilidad política, jurídica, social o moral sobre la población palestina

(Li, 2007, p. 38). Lo que sucede en la Franja de Gaza es que se aplica una menor actividad directa militar y una menor fricción (menor contacto directo) con la población civil, lo que supone una menor exposición a ataques.

Este tipo de tácticas se adaptan al ejército estadounidense en su intento por desarrollar una estrategia de guerra larga, es decir, el uso más o menos permanente y globalmente disperso de incursiones preventivas contra supuestos adversarios, como parte de la guerra irregular en un contexto de guerra contra el terrorismo en la región de Medio Oriente (Hayden, 2009). En el caso del conflicto árabe-israelí, la estrategia de *guerra larga* es aplicada en el sentido de que la temporalidad de la guerra amenaza con extenderse indefinidamente, y genera un estado de guerra permanente sobre los territorios ocupados a partir del control a distancia y una vigilancia persistente. Ello se ve reflejado en el caso de Gaza, en donde el estrangulamiento del territorio palestino se ha intensificado drásticamente tras la evacuación de los asentamientos judíos en 2005 y la victoria de Hamás en las elecciones de 2006. A partir de ese momento, Israel declaró que Gaza era un territorio hostil y terrorista con el que estaba en guerra, dando lugar a la invasión de 2006, la Operación Plomo Fundido en 2008 y 2009 y la Operación Margen Protector en 2014 (Graham, 2011a, p. 287).

Desde el comienzo de la Segunda Intifada en septiembre del 2000, las limitaciones de la capacidad israelí para mantener una presencia terrestre permanente en todos los territorios palestinos habían reforzado la dependencia de Israel a una lógica táctica que trataba de perturbar la resistencia armada y política mediante asesinatos selectivos, es decir, ejecuciones estatales extrajudiciales, realizadas con mayor frecuencia desde el aire (Weizman, 2007, p. 237). La práctica de asesinatos selectivos continúa de manera sistemática y se lleva a cabo utilizando tecnologías sofisticadas de vigilancia, como es el caso de los aviones no tripulados. En Gaza, los asesinatos con drones son un mecanismo primordial para el nuevo modelo de control externo sin la ocupación de ejércitos

permanentes. Se estima que desde septiembre del 2000 hasta el 2011, Israel asesinó a 400 personas utilizando técnicas extrajudiciales de asesinatos selectivos. En consecuencia, el uso de drones con fines de vigilancia en Cisjordania y Gaza se ha convertido en una herramienta común para asesinar directamente a militantes palestinos (Zureik, 2011, p. 19).

Así pues, una vez más, Gaza se presenta como el laboratorio de esta nueva doctrina y armamento, en donde alrededor del 90% de los asesinatos durante la Segunda Intifada fueron ejecutados desde el aire (Li, 2007, p. 48). Sin embargo, el desarrollo de una lógica territorial a lo largo de un eje vertical, como son los ataques aéreos, ha hecho que la resistencia palestina se vuelva más profunda al buscar otras formas de lucha, especialmente bajo tierra. De este modo, parte de la guerra asimétrica entre las fuerzas israelíes y la resistencia palestina se manifiesta en el control absoluto del espacio aéreo por parte de Israel y el dominio palestino de la guerra subterránea (Weizman, 2007, p. 253).

En consonancia con los ataques aéreos, en 2007, el ejército israelí anunció que la frontera entre Israel y Gaza sería la primera frontera automatizada del mundo con francotiradores robóticos capaces de disparar contra *intrusos* gracias a las imágenes transmitidas desde una sala de control. Junto con esta frontera, Israel cuenta con una ametralladora robótica como parte del sistema *See-Shoot*, desarrollado por la empresa estatal Rafael, para desplegar una fuerza letal a lo largo de la Franja de Gaza. El sistema funciona en colaboración con un dispositivo de detección y orientación mediante sensores acústicos. Las armas y los sensores están conectados por fibra óptica a una red de mando que también puede obtener información de los activos terrestres, aviones tripulados y drones. Bajo esta dinámica, entre 1995 y 2007, catorce palestinos desarmados han sido asesinados por las fuerzas de seguridad israelíes a distancias de entre 100 y 800 metros de la valla fronteriza. Incluso ha habido casos en los que se les ha disparado a personas sin intenciones hostiles. Algunos intentaron entrar a Israel para encontrar trabajo, otros para acceder

al sistema de salud y algunos eran niños que entraron sin cuidado a una zona prohibida (Graham, 2011a, p. 171).

De igual manera, tal como se demostró en la Operación Plomo Fundido en 2008 y 2009, la destrucción de la infraestructura urbana es crucial para la nueva estrategia militar israelí. Por un lado, se destruyeron viviendas y tierras de cultivo, obligando a las y los palestinos a abandonar sus hogares y fuentes de subsistencia. Además, los ataques redujeron la importación de alimentos, lo que resultó ser algo catastrófico en una ciudad que depende en gran medida de la ayuda alimentaria para sobrevivir. Por otro lado, se cortaron los suministros de combustible y energía, se destruyeron puentes y carreteras, y se bombardearon las principales instalaciones de generación de electricidad. La falta de fuentes eléctricas provocó la disminución de los servicios de agua y alcantarillado, así como el desmantelamiento de varios centros de salud. Como consecuencia, el sistema de salud pública de Gaza se deterioró sustancialmente, provocando enfermedades estomacales, anemia y altas tasas de malnutrición (Graham, 2011a, pp. 288-290). Esta situación se vio agravada por la participación estadounidense en el envío de armas desde Grecia a Israel durante el asedio mientras los gazatíes buscaban desesperadamente refugio (Ambrogi, 2009). De esta manera, en colaboración con Estados Unidos, Israel promovió la devastación sistemática de los medios de vida de las y los palestinos, y los llevó a estar en lo que Achille Mbembe denomina “mundos de la muerte”, espacios como Palestina en donde la población se ve obligada a existir como muertos vivientes (Mbembe, 2003, p. 40).

Exportación de la experiencia sionista y el mantenimiento de un socio estadounidense

Después de los atentados terroristas del 11 de septiembre y la integración cada vez más profunda de la estrategia militar urbana de Israel en la guerra contra el terrorismo, el gobierno israelí, en colaboración

con Estados Unidos, ha trabajado para proyectar sus aptitudes, conocimientos especializados y productos militares más allá de los mercados más evidentes que forman parte de la guerra urbana, como es el caso de su aplicación civil (Graham, 2011b, p. 144). De esta manera, la industria de seguridad y vigilancia de Israel está firmemente vinculada al cambio de la demanda tras los ataques terroristas y la consiguiente guerra contra el terrorismo, así como a los procesos mundiales de carácter político, económico, social y cultural relacionados con el creciente movimiento de personas, bienes y servicios a través de las fronteras (Gordon, 2008, p. 154).

Con este aumento en la demanda, las autoridades israelíes han logrado capitalizar la *experiencia de laboratorio* sobre los territorios ocupados y trasladarla a otras partes del mundo. Tanto el gobierno como las compañías militares más grandes de Israel han logrado expandirse a través de la venta de armamento, tecnología y servicios militares a otros Estados y corporaciones, bajo el argumento de que sus productos son probados en terreno, y convirtieron a Palestina en uno de los laboratorios más grandes para la prueba de armas y tecnología militar.² Lo anterior es posible a partir de la estrecha colaboración entre el ejército y el sector industrial, en donde cerca de la mitad de los oficiales tiene antecedentes de haber trabajado en el sector industrial de la seguridad. Sin embargo, no se trata solamente del despliegue de modelos y técnicas del nuevo urbanismo militar en zonas de guerra extranjeras, sino de su difusión e imitación a través de la militarización de la vida cotidiana. Ello se ve reflejado en el despliegue rutinario de drones israelíes –diseñados para subyugar verticalmente y apuntar a los palestinos– por parte de las fuerzas policiales en América del Norte, Europa y Asia Oriental (Graham, 2011a, p. 18).

² Si bien la mayoría de las grandes empresas de defensa del mundo son de propiedad privada, varias de las principales empresas de defensa israelíes, como la Industria Aeronáutica de Israel (IAI), las Industrias Militares de Israel (IMI) y Rafael (Israel), son total o parcialmente propiedad del gobierno. Solamente Elbit Systems es una corporación privada.

Asimismo, el tener como socio a Estados Unidos le ha permitido a Israel abrirse a otros mercados para la venta de sus productos, teniendo como clientes a Europa, India, China y algunos países de América Latina (Zureik, 2011, p. 23). Ante la oportunidad generada por la guerra contra el terrorismo, Israel aprovechó la situación y se comercializó a nivel mundial no solo como un profesional de la vigilancia, sino como un agente mundial relevante en la prestación de conocimientos especializados y el despliegue de programas y equipos informáticos relacionados con la vigilancia. Por lo tanto, de acuerdo con Naomi Klein, al ser una sala de exposición de veinticuatro horas al día, Israel ha logrado convertir la guerra interminable en un activo económico (Klein, 2007a).

En este sentido, más de 300 corporaciones israelíes se dedican a la fabricación de productos de seguridad nacional (Klein, 2007b, p. 515). A partir de cifras estimadas por el gobierno estadounidense, Zureik recupera el hecho de que más de 400 empresas israelíes participan en la exportación de productos relacionados con la seguridad, con un volumen de negocios de 4,500 millones de dólares en 2007. En ese mismo año, el valor de las exportaciones alcanzó los 1.200 millones de dólares, lo que supuso un aumento del 20% con respecto al año anterior (Zureik, 2011, p. 23). La amplia participación de Israel en la producción y venta de tecnologías de seguridad y vigilancia nacionales en todo el mundo lo ha impulsado a ocupar una posición de liderazgo entre los productores de esas tecnologías. A pesar de que cuenta con una población de apenas siete millones de habitantes, Israel se encuentra entre los cinco mayores exportadores de armas y representa el 10% de las ventas mundiales de armas (Gordon, 2008, p. 164). De este modo, Israel controla aproximadamente el 70% del mercado de vehículos aéreos no tripulados y es líder mundial en tecnologías de vigilancia de fronteras, como son los sensores, muros y aplicaciones electro-ópticas (Zureik, 2011, p. 23).

En el último caso, el programa de fronteras electrónicas desarrollado por Israel ha tenido por objetivo el uso de algoritmos informáticos y técnicas de extracción de datos para identificar a personas

o comportamientos considerados *ilegales* antes de que lleguen a amenazar los límites territoriales del Estado. Este tipo de proyecto está basado en la idea de la omnisciencia tecnológica, en donde se busca identificar a todas las personas que atraviesan las fronteras a partir de registros de actividades y asociaciones pasadas para localizar amenazas futuras antes de que se materialicen. Tal es el caso de la valla fronteriza de alta tecnología entre Estados Unidos y México, la cual está siendo construida por un consorcio que vincula a Boeing con la empresa israelí Elbit, cuyas tecnologías de radar y de puntería se han desarrollado en el bloqueo permanente de la vida urbana palestina (Graham, 2011a, pp. 22-23).

Esto también señala la acelerada militarización de la sociedad civil, pues el mayor uso de tecnología militar de rastreo, identificación y ataque han llegado a abarcar los espacios de la vida cotidiana (Graham, 2011a, p. 11). A raíz de que los dispositivos electrónicos de control y vigilancia en red se distribuyen por toda la sociedad, la vida urbana cotidiana comienza a estar mediada por un sentido de control constante. Por lo tanto, la búsqueda de control social funciona cada vez más a través de complejos sistemas tecnológicos que se extienden por zonas tanto temporales como espaciales (Graham, 2011a, p. 63).

La exportación de servicios militares no ha estado únicamente encaminada a proveer de armas y tecnología a otras entidades, sino también de proporcionar estrategias para luchar en contextos de guerra urbana. Es significativo que las brutales estrategias israelíes en los territorios ocupados palestinos y en Líbano hayan influido en la guerra urbana estadounidense en Irak. Graham demuestra la estrecha relación entre Israel y Estados Unidos al respecto, señalando que durante la incursión de Israel en el extenso campamento de refugiados de Yenín en 2002, se informó que el personal militar estadounidense estuvo presente para observar la operación israelí (Graham, 2011a, p. 144). También se ha informado que el ejército de Israel visitó Estados Unidos para entrenar al personal estadounidense y estuvo en Irak para observar las estrategias norteamericanas en la guerra urbana.

La aplicación de estrategias israelíes en Irak se presentó en forma de construcción de muros, el acordonamiento de ciudades, la destrucción de distritos urbanos, ejecuciones extrajudiciales generalmente por aviones no tripulados, el castigo a las familias de los presuntos combatientes y la instalación de puestos de control y sistemas de tarjetas de identificación en los pueblos y ciudades (Graham, 2011a, p. 128). Como resultado, se muestra un proceso que Graham denomina como la *palestinización* de Irak, en donde se manifiestan tácticas de insurgencia parecidas a las de Hamas o Hezbollah, así como la replicación de estrategias de las Fuerzas de Defensa de Israel por parte de los militares estadounidenses (Graham, 2011b, p. 137). Aunado a ello, la relación entre Estados Unidos e Israel se presenta en el sector de investigación y desarrollo, en donde ambos actores colaboran en el desarrollo y mejora de productos y servicios militares. Por ejemplo, Rafael y General Dynamics diseñaron de manera conjunta una variedad de misiles encaminados a destruir edificios urbanos y nuevos sistemas de protección para los vehículos que combaten en las ciudades, los cuales permiten que un soldado permanezca protegido dentro del vehículo mientras opera un arma a distancia (Graham, 2011a, p. 247).

Sin embargo, las tácticas militares israelíes no han sido empleadas únicamente fuera de Estados Unidos, sino que han sido adoptadas en territorio nacional a través del entrenamiento militar israelí a las fuerzas policiales y militares estadounidenses. Varios estados y ciudades de Estados Unidos permiten que sus departamentos de policía sean entrenados por la policía israelí, las Fuerzas de Defensa de Israel y el servicio de seguridad interna de Israel, conocido como Shin Bet, todas ellas instituciones que durante décadas han oprimido a las y los palestinos con brutales tácticas policiales. Estados como California, Nueva York, Texas y Florida cuentan con oficiales que fueron entrenados a partir de enfoques militares israelíes para la recopilación de datos, actividades de inteligencia, seguridad fronteriza, puestos de control y la coordinación con medios de comunicación. Con ello, se promueven lógicas militarizadas de seguridad

en la esfera civil, normalizando las prácticas de vigilancia masiva, la criminalización y la represión violenta de comunidades y movimientos que el gobierno considera como una amenaza. Estas acciones, a su vez, están basadas en la diferenciación y violencia racial sistemática que también es reproducida entre los palestinos e israelíes (Guzman, 2020).

El ascenso militar y tecnológico de Israel no solamente tiene implicaciones en términos de un mayor control y vigilancia sobre la población palestina y la exportación de servicios de seguridad, sino que se muestra como un factor relevante en la dinámica de poder en la región de Medio Oriente. Junto con Arabia Saudita, Israel es uno de los aliados regionales de Estados Unidos, por lo que se muestra como una fuerza importante frente al bloque opositor constituido por Irán, Siria, Turquía, Rusia y China (Mesa, 2017). Mientras que Estados Unidos proporciona un enorme apoyo financiero, político y militar al proyecto colonial sionista, Israel le provee a Estados Unidos un activo estratégico en una de las mayores fuentes de recursos energéticos del mundo. De esta manera, Israel funge como una base de avanzada para cualquier intento estadounidense de intervenir o, en términos discursivos, “defender el Golfo y garantizar la estabilidad” (Chomsky y Pappé, 2010, pp. 93-94).

Cabe destacar la relación de tensión entre Israel e Irán, pues, en varias situaciones de conflicto, Irán ha mostrado una postura en contra de la ocupación israelí y se ha solidarizado con la causa palestina (Mesa, 2009, p. 232), que incluso le ha llevado a apoyar a Hamas, organización considerada terrorista por parte de Israel y Estados Unidos (Garduño, 2020, p. 8). A su vez, la cuestión nuclear iraní es un asunto geopolítico que cuestiona y pone en evidencia el modelo de dominación e influencia económica y política proyectado por Estados Unidos e Israel en Medio Oriente, de manera que Israel ha buscado minar la influencia de Irán en varios países árabes, especialmente en Irak, Siria, Yemen, Líbano y Palestina (Garduño, 2020, p. 6).

Bibliografía

- Abujidi, Nurhan (2011). Surveillance and spatial flows in the occupied Palestinian territories. En Zureik, Elia; Lyon, David y Abu-Laban, Yasmeen (eds.), *Surveillance and Control in Israel/Palestine*. Nueva York: Routledge.
- Ahmed, Nafeez (28 de noviembre de 2012). Israel's War for Gaza's Gas. *Le Monde diplomatique*. <https://mondediplo.com/outsidein/israel-s-war-for-gaza-s-gas>
- Ahmed, Nafeez (9 de julio de 2014). IDF's Gaza assault is to control Palestinian gas, avert Israeli energy crisis. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2014/jul/09/israel-war-gaza-palestine-natural-gas-energy-crisis>
- Ambrogi, Stefano (9 de enero de 2009). U.S. seeks ship to move arms to Israel. *Reuters*. <https://www.reuters.com/article/us-israel-arms-usa-sb/u-s-seeks-ship-to-move-arms-to-israel-idUSTRE50875320090109>
- Amnistía Internacional (2009a). *Israel/Gaza: Operación "Plomo Fundido": 22 días de muerte y destrucción*. Madrid: Amnistía Internacional.
- Amnistía Internacional (2009b). *Israel y los Territorios Ocupados: Aguas turbulentas, negación del derecho al agua a la población palestina*. Madrid: Amnistía Internacional.
- Antreasyan, Anaïs (2013). Gas finds in the Eastern Mediterranean: Gaza, Israel and other conflicts. *Journal of Palestine Studies*, 42(29), 29-47.
- B'tselem (11 de noviembre de 2017). *Water Crisis*. <https://www.btselem.org/water>
- Chomsky, Noam y Pappé, Ilan (2010). *Gaza in Crisis. Reflections on Israel's War Against the Palestinians*. Chicago: Haymarket Books.
- Chossudovsky, Michel (8 de enero de 2009). War and Natural Gas: The Israeli Invasion and Gaza's Offshore Gas Fields. *Global Research*. <https://www.globalresearch.ca/war-and-natural-gas-the-israeli-invasion-and-gaza-s-offshore-gas-fields/11680>
- Cooley, John K. (1984). The War over Water. *Foreign Policy*, (54), 3-26.

Corradin, Camilla (23 de junio de 2016). Israel: Water as a tool to dominate Palestinians. *Al Jazeera*. <https://www.aljazeera.com/news/2016/06/israel-water-tool-dominate-palestinians-160619062531348.html>

Garduño, Moisés (2020). La cuestión nuclear iraní revisitada: tensiones, sanciones y negociaciones en torno al Plan de Acción Integral Conjunto de 2015. *Estudios de Asia y África*, 55(1), 5-42.

Gordon, Neve (2008). *Israel's Occupation*. University of California Press.

Graham, Stephen (2011a). *Cities Under Siege: The New Military Urbanism*. Londres: Verso.

Graham, Stephen (2011b). Laboratories of war: surveillance and US-Israeli collaboration in war and security. En Zureik, Elia; Lyon, David y Abu-Laban, Yasmeeen (eds.), *Surveillance and Control in Israel/Palestine* (pp. 133-152). Nueva York: Routledge.

Graham, Stephen (2003). Lessons in Urbicide. *New Left Review*, 63-78.

Guzman, Timothy Alexander (4 de junio de 2020). US Police Forces Are Trained by Israel: The Knee-On-Neck Tactic that was Used on George Floyd Is the Same Tactic that Has Been Used on the Palestinians. *Global Research*. <https://www.globalresearch.ca/us-police-forces-trained-israel-knee-neck-tactic-used-george-floyd-same-tactic-used-palestinians/5714997>

Hayden, Tom (7 de mayo de 2009). Understanding the Long War. *The Nation*. <https://www.thenation.com/article/archive/understanding-long-war/>

Jamal, A. (2008). On the troubles of Racialized Time. En Shenhav, Yehouda y Yonah, Yossi (Ed.), *Racism in Israel*, Jerusalén: Van Leer Institute y Hakibuts Ha-Meuhad.

Kelly, Tobias (2006). Documented Lives: Fear and the Uncertainties of Law during the Second Palestinian Intifada. *Journal of the Royal Anthropological Society*, (12), 89-107.

Klein, Naomi (2007a). Laboratory for a Fortressed World. *The Nation*. <https://www.thenation.com/article/archive/laboratory-fortressed-world/>

- Klein, Naomi (2007b). *The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism*. Toronto: Alfred A. Knopf.
- Koek, Elisabeth (12 de septiembre de 2013). Thirsting for water, 20 years after Oslo. *The Elders*. <https://www.theelders.org/news/thirsting-water-20-years-after-oslo>
- Li, Darryl (2007). The Gaza Strip as Laboratory: Notes in the Wake of Disengagement. *Journal of Palestine Studies*, 35(2), 38-49.
- Lyon, David (2011). Identification, colonialism, and control: surveillant sorting in Israel/Palestine. En Zureik, Elia; Lyon, David y Abu-Laban, Yasmeeen (eds.), *Surveillance and Control in Israel/Palestine*. Nueva York: Routledge.
- Mbembe, Achille (2003). Necropolitics. *Public Culture*, 15(1), 11-40.
- Mesa, Luis (25 de septiembre de 2017). Israel y Arabia Saudita: se afianzan los contactos. *Siempre*. <http://www.siempre.mx/2017/12/israel-y-arabia-saudita-se-afianzan-los-contactos/>
- Mesa, Luis (2009). La guerra en Gaza y el propósito israelí de restaurar su capacidad disuasiva. *Estudios de Asia y África*, 44(2), 205-236.
- Morag, Nadav (2001). Water, Geopolitics and State Building: The Case of Israel. *Middle Eastern Studies*, 37(3), 179-198.
- Najjar, Farah (1 de febrero de 2017). Gaza power crisis: "We want to end this nightmare". *Al Jazeera*. <https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/01/gaza-electricity-crisis-nighmare-170130221606018.html>
- Peteet, Julie (2008). Male Gender and Rituals of Resistance in the Palestinian Intifada: A Cultural Politics of Violence. *American Ethnologist*, 21(1), 31-49.
- Schwartz, Michael (26 de febrero de 2015). The Great Game in the Holy Land. How Gazan Natural Gas Became the Epicenter of An International Power Struggle. *TomDispatch*. http://www.tomdispatch.com/post/175961/tomgram%3A_michael_schwartz%2C_israel%2C_gaza%2C_and_energy_wars_in_the_middle_east/

Shama, Nael M. (23 de diciembre de 2019). The Geopolitics of a Latent International Conflict in Eastern Mediterranean. *Al Jazeera*. <https://studies.aljazeera.net/en/reports/2019/12/geopolitics-latent-international-conflict-eastern-mediterranean-191223074025635.html>

Smith, Bernard (2014). Water: A Critical Resource. En King, Russell; Proudfoot, Lindsay y Smith, Bernard (ed.), *The Mediterranean. Environment and Society*. Nueva York: Routledge.

The Economist (1 de diciembre de 2018). *Can the Sea of Galilee be saved?*. <https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2018/12/01/can-the-sea-of-galilee-be-saved>

The Sharon Unilateral Disengagement Plan. *Journal of Palestine Studies*, 33(4), 85-107.

Vásquez, Marco y Ramírez, Julio (2018). Conflicto palestino-israelí a la luz de la hidropolítica y la trasgresión del derecho al agua. *Estudios Internacionales*, (190), 107-124.

Weizman, Eyal (23 de abril de 2002). The Politics of Verticality. *Open Democracy*. https://www.opendemocracy.net/en/article_801jsp/

Weizman, Eyal (2007). *Hollow Land. Israel's Architecture of Occupation*. Londres: Verso.

Weizman, Eyal (2012). *A través de los muros. Cómo el ejército israelí se apropió de la teoría crítica postmoderna y reinventó la guerra urbana*. Errata Naturae.

Zureik, Elia (2001). Constructing Palestine through Surveillance Practices. *British Journal of Middle Eastern Studies*, 28(2), 205-227.

Zureik, Elia (2011). Colonialism, surveillance, and population control: Israel/Palestine. En Zureik, Elia; Lyon David y Abu-Laban, Yasmeeen (eds.), *Surveillance and Control in Israel/Palestine*. Nueva York: Routledge.

La guerra a distancia

El caso de Libia

Adriana Franco Silva

DOI: 10.54871/gS23b10d

Libia durante muchos años se contrapuso a la hegemonía capitalista. Desde 1969, con el golpe de Estado dirigido por Muammar Gaddafi hasta su derrocamiento en 2011, fue un país con índices de desarrollo altos, con capacidad para proporcionar trabajo a las poblaciones migrantes de África subsahariana, sin presencia significativa de corporaciones transnacionales ni deuda económica externa y, por lo tanto, con autonomía y soberanía en comparación con otros países del sur global. Sin embargo, esto comenzaría a cambiar a partir del 15 de febrero de 2011 con una protesta en la provincia de Bengasi, al noreste de Libia.

Esta demanda social se ubicó en el contexto de las llamadas primaveras árabes. No obstante, una de las principales diferencias en relación con las movilizaciones populares de la región fue la presencia activa de fuerzas extranjeras en el desarrollo del conflicto. En 2011, la injerencia occidental en Libia se sustentó en la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la cual justificó la intervención militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en este país norafricano. La participación de la Organización

fue más allá de lo establecido en la disposición y, siete meses después, con el apoyo de las fuerzas de oposición libias, asesinaron a Gaddafi y dieron por concluida la revuelta en el país.

Tras la intervención de la OTAN y el asesinato del líder libio, el tejido social del país quedó deshecho, la xenofobia y el racismo se convirtieron en ejes reguladores de la violencia en la sociedad, la explotación de recursos por empresas occidentales y milicias locales empezó a florecer y los grupos terroristas se apropiaron de regiones importantes del territorio. Actualmente, no hay un gobierno aceptado por la población libia en su conjunto, aunque sí hay uno reconocido por Naciones Unidas y países que intervinieron en el país en 2011, lo cual ha impulsado el mantenimiento de la situación de guerra por más de nueve años.

De tal suerte, el objetivo de este trabajo es hacer una descripción crítica sobre la manera en la que se ha desarrollado la guerra en este país norafricano a partir de 2011. La hipótesis central es que la guerra en Libia era necesaria para la dominación de espectro completo del sujeto hegemónico, debido a que la reproducción social, política, económica y cultural de Libia durante el gobierno de Gaddafi no estaba sometida a la hegemonía estadounidense. Asimismo, esta guerra fue comandada a distancia por fuerzas occidentales, quienes proporcionaron entrenamiento, armas, vigilancia aérea y asesoría a los grupos opositores al régimen del coronel.

En el primer apartado, se analizarán algunos antecedentes históricos y el contexto espacio temporal en el que se gestó la movilización social en Libia durante los primeros meses de 2011. Posteriormente, se estudiará la manera en la que se implementó la guerra y la injerencia occidental para el desarrollo de la conflagración. Finalmente, se examinarán algunas de las razones por las cuales se dio la intervención en Libia y las disputas políticas tras el asesinato de Gaddafi, las cuales han prolongado la situación de guerra en el país.

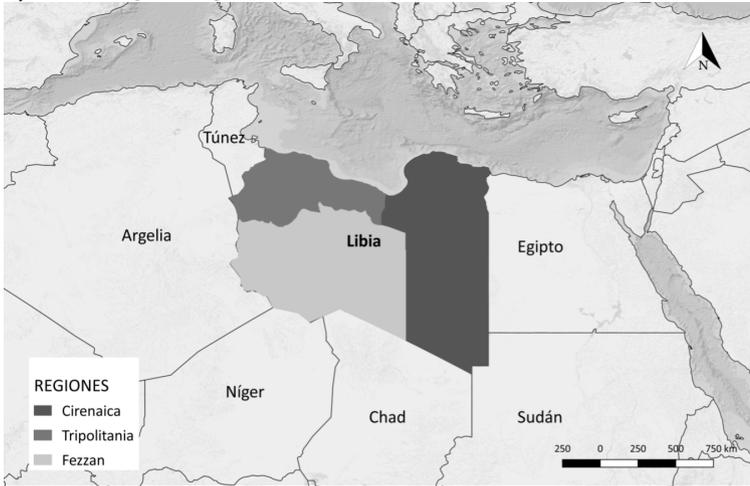
Antecedentes históricos y el régimen de Gaddafi

Libia es un país que se ubica en el norte de África. Colinda al este con Egipto, al sur con Sudán, Chad y Níger, al oeste con Argelia y Túnez y al norte con el Mediterráneo. La mayoría de la población está distribuida en la zona norte y se piensa que hay un total de 140 tribus (EPR Atlas, 2020).¹ Libia es el país africano con mayor cantidad de reservas petroleras, las cuales representan el 4,1% del total concentrado en los Estados miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP, 2018). Asimismo, Libia se encuentra sobre el acuífero de Nubia, que es “el sistema acuífero ‘fósil’ más grande del mundo” (IAEA, 2011).

Libia, al igual que los demás países africanos, fue colocado en una relación de subordinación frente a los europeos a partir del proceso de colonización, el cual fue necesario para la expansión y superación de la crisis capitalista europea. A pesar de que la institucionalización de la colonización se dio con la Conferencia de Berlín en 1884-1885, fue hasta 1911 cuando Italia intentó dominar y subyugar al pueblo libio. El periodo colonial europeo sobre el continente africano no fue una etapa sin resistencias. De hecho, esta fase estuvo caracterizada por movilizaciones y rebeldías constantes por parte de la población local.

¹ En este trabajo se utiliza el término *tribu* para hacer referencia a los diferentes grupos socioculturales que conforman al mosaico cultural y personal en Libia. De tal suerte, esta palabra se recupera porque es la traducción literal de *qabila*, término que las poblaciones árabes utilizan para referirse a dicha diversidad sociocultural. Por lo tanto, la forma en la que se emplea la palabra no hace referencia a los parámetros coloniales que jerarquizaban despectivamente a las organizaciones socioculturales ajenas a Europa y que incluso se utilizaban de manera despectiva para referirse a una escala civilizatoria en la cual los pueblos africanos eran representados en una relación de inferioridad.

Mapa 1. Libia y sus regiones



Fuente: Elaboración de Adriana Franco.

En el caso particular de Libia, Italia solo consiguió tener un control relativo en la región norte de Cirenaica y Tripolitania, pero jamás consiguió el dominio en Fezza. Asimismo, la población se opuso y se rebeló en contra del régimen fascista italiano dirigido por Benito Mussolini desde los primeros años del establecimiento colonial. Para contener las revueltas, el gobierno italiano implementó la *pacificación* de Libia, la cual implicó la represión brutal en contra de las y los libios que desafiaban la presencia colonial. Con esta estrategia, “la población de Libia se redujo en decenas de miles de personas, debilitada por décadas de guerra y empobrecida por la eliminación casi total del ganado y la destrucción de sus pocos cultivos” (Saini, 2017).²

² Aunque el primer genocidio reconocido por la historiografía hegemónica fue el que se cometió en contra de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, el caso de Namibia en 1904 y el de Libia en 1917 deben ser recuperados y reconocidos, ya que como señala Aimé Césaire en *Discurso sobre el colonialismo*, el genocidio fue un crimen que se cometió en contra de otros pueblos antes de 1945. Sin embargo, lo que aterró a Europa de estas prácticas no fue la violencia en sí misma, sino que esta fue ejercida en contra de población blanca en el mismo centro de la *modernidad*.

La independencia y el golpe de Estado de Gaddafi

Tras la Segunda Guerra Mundial y la derrota de las potencias del eje, Italia perdió los territorios que tenía en África, por lo que la administración de Libia pasó a ser gestionada por Gran Bretaña, debido a que a este país le interesaba controlar la región para garantizar la regulación del comercio que transitaba por Egipto y contener la presencia francesa en el oeste. Posteriormente, en 1951, Libia obtendría su independencia con el rey Idris a la cabeza. Empero, su gobierno mantendría los vínculos y subordinación frente a Gran Bretaña, permitiendo que las corporaciones británicas explotaran la riqueza petrolera del país sin generar beneficios reales para la población (EPR Atlas, 2020).

En 1969, el rey Idris fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por el coronel Muammar Gaddafi, quien era un militar originario del distrito de Sirte en la región de Tripolitania. A partir de ese momento, el coronel instauraría la República Árabe de Libia, la cual se opuso a la presencia y explotación occidental. Campbell (2013) divide los 42 años del gobierno de Gaddafi en cuatro etapas que se describen a continuación:

- De 1969 a 1977: corresponde al periodo del Consejo de Comando Revolucionario. En esta etapa, Gaddafi retiró las bases militares extranjeras como la estadounidense Wheelus Air Base, nacionalizó los fondos de empresas petroleras como British Petroleum, y publicó el libro verde, que es un texto donde el líder expuso el establecimiento de la Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular Socialista, la cual tendría un régimen socialista, nacional e islámico en donde la participación social se daría a partir de comités populares de base.
- De 1977 a 1988: durante este periodo el régimen libio tuvo una confrontación profunda y directa con occidente. La etapa incluye la Operación El Dorado Canyon, que fue el bombardeo contra Libia dirigido por el gobierno estadounidense de Ronald Reagan en

1986 y que tenía el objetivo de eliminar a Gaddafi. Posteriormente, esta estrategia fallida sería refuncionalizada por Gaddafi para resaltar su lucha en contra del imperialismo, simbolizada con la construcción de la estatua de una mano que captura y doblega a un avión caza estadounidense.

- De 1988 a 2001: durante este periodo los países occidentales lanzaron una serie de sanciones que aislaron al régimen de Gaddafi. Estas medidas se establecieron tras la acusación, en contra del gobierno libio, de derribar el vuelo 103 de Pan Am, mejor conocido como el atentado de Lockerbie. La etapa también coincide con la implosión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), por lo que el gobierno de Gaddafi perdió su capacidad negociadora y el apoyo de una fuerza que se contraponía a la hegemonía estadounidense. Esto, a su vez, fomentó la disminución de la participación político-militar que Libia tenía en otros países africanos, para transitar a una intervención desde el ámbito diplomático.
- Del 2001 al 2011: en esta etapa, el gobierno de Gaddafi, encabezado por Saif Islam, uno de los hijos del líder, comenzó un acercamiento con los países occidentales. Este fue el periodo de más estabilidad y negociación entre el grupo occidental y el régimen libio. Sin embargo, este terminó con las llamadas primaveras árabes y el derrocamiento y asesinato de Muammar Gaddafi.

La protesta en Libia en el contexto de las *primaveras árabes*

Las demandas sociales en el norte de África comenzaron en octubre de 2010 en Gdeim Izik, cuando grupos saharauis se rebelaron en contra del régimen marroquí en los territorios ocupados. Dos meses después, comenzarían las protestas en Túnez y en enero de 2011, en Egipto.³ En Libia, todo parecía estar en calma, empero, el 15 de febrero

³ La manifestación en el Sáhara Occidental fue omitida por la prensa internacional y pocas personas supieron de ella. Las de Túnez y Egipto sí fueron difundidas. En el

de 2011, cientos de personas que se estaban manifestando de manera violenta en la ciudad de Bengasi tuvieron una confrontación con las fuerzas policiales del régimen, lo que impulsaría el inicio de la rebelión dos días después (Hilsum, 2012, pp. 8-9).⁴

El 24 de febrero, las milicias de Misrata lograron controlar algunas ciudades en la región de Tripolitania. Dos días después, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas impuso sanciones sobre Gaddafi y su familia, argumentando que estas medidas eran necesarias para contener la violencia en el país (Atlantic Council, 2018). El 27 de febrero, las fuerzas opositoras formaron el Consejo Nacional de Transición (CNT) y el 10 de marzo, de manera unilateral, Francia reconoció a este grupo como el representante legítimo de Libia. Ya para el 19 de marzo, la OTAN incursionaría en el territorio libio con la Operación *Odyssey Dawn*, justificada por la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (Hilsum, 2012, p. 201). Siete meses después, la intervención militar en Libia terminaría con la vida de Muammar Gaddafi y con la desestructuración del país en su conjunto. ¿Cómo se dio la intromisión? ¿Cuáles fueron las tácticas? ¿Por qué en Libia se implementó una intervención militar de manera tan acelerada?

Desde la llegada de Gaddafi al poder, Libia se había convertido en un espacio que amenazaba la reproducción de la hegemonía capitalista. De hecho, durante el periodo en el que Gaddafi estuvo en el poder, fuerzas estadounidenses, británicas y francesas, principalmente, implementaron estrategia de presión contra Libia que incluyeron “operaciones encubiertas, acciones diplomáticas, sanciones económicas y muestras de uso de la fuerza militar” (Moss, 2010, p. 45). Sin embargo, a partir del siglo XXI, la estrategia estadounidense

Sáhara, la población fue reprimida. Por su parte, en Túnez y en Egipto, se logró la dimisión de Ben Ali y de Hosni Mubarak respectivamente, así como algunas reformas que no generaron un cambio de régimen.

⁴ Esta concentración se realizaba de manera periódica para demandar justicia por los 1.270 hombres que fueron asesinados en Abu Salim el 28 de junio de 1996. Los presos de Abu Salim habían sido arrestados tras ser vinculados con combatientes islamistas que se habían levantado en contra de Gaddafi. Sin embargo, fueron asesinados de manera extrajudicial en la prisión.

en contra de Libia tuvo que cambiar, debido al fracaso que había tenido en los años previos. Así, las tácticas se dirigieron a preparar el terreno para una alteración del régimen libio desde adentro.

Asimismo, a pesar de que a inicios del siglo XXI se levantaron las sanciones en contra del régimen libio, las tensiones seguían presentes.⁵ En 2004, algunas empresas libias comenzaron a ser privatizadas para la exploración y explotación petrolera (The Guardian, 2003). Las corporaciones que más se beneficiaron de esta acción fueron las estadounidenses Occidental, Amerada Hess y Chevron Texaco. Sin embargo, a partir de 2007, Gaddafi señaló que estas empresas tendrían que renegociar sus contratos para continuar la explotación de dicha riqueza en el territorio libio, lo cual inquietó a las fuerzas occidentales (Campbell, 2013, pp. 57-61).

De esta manera, a pesar de las negociaciones, Gaddafi seguía representando una amenaza para los intereses estadounidenses, a pesar del aparente decrecimiento de las tensiones entre ambos sectores. Lo anterior quedó demostrado con los cables de Wikileaks, en los que se reveló que las fuerzas occidentales estaban planeando el cambio de régimen en Libia y que este solo se lograría con la muerte del coronel. Por esta razón, tras la protesta social de Bengasi en 2011, Estados Unidos y Francia, principalmente, se apresuraron a aprobar la intervención y, de esta manera, derrocar al líder libio.

La guerra a distancia y su preparación

En este trabajo, la guerra a distancia se entiende como un tipo de conflagración asimétrica en la que la injerencia militar de Estados extranjeros es indirecta pero fundamental para derrocar a las fuerzas

⁵ Las sanciones se aplicaron con el objetivo de forzar al régimen libio a entregar a los acusados por el caso Lockerbie y para que el régimen cancelara su Programa de Armas Químicas. Sin embargo, en los noventa, las tensiones entre Gaddafi y las fuerzas occidentales decrecieron. Las negociaciones permitieron que las sanciones impuestas contra el régimen fueran levantadas por completo en 2003.

estatales donde se interviene. De tal suerte, las fuerzas foráneas no se enfrentan de manera presencial/directa en el campo de batalla contra las del gobierno local, sino que simplemente proporcionan mercenarios, recursos, entrenamiento, herramientas e información necesarias para apoyar a las fuerzas no estatales que se oponen a las tropas de los Estados en el escenario de operaciones.

La estrategia, defendida por el vicepresidente Joe Biden y John Mearsheimer, un politólogo de la Universidad de Chicago, implica el uso del poder aéreo, aviones no tripulados, fuerzas especiales, la CIA y, fundamentalmente, trabajar con las fuerzas nativas en lugar de comprometer fuerzas terrestres convencionales de Estados Unidos y sus aliados (Etzioni, 2012, p. 46).

En el caso de Libia, el 17 de marzo de 2011, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la resolución 1973, la cual autorizó una zona de exclusión de aérea, impuso un embargo de armas y congeló los activos de personas cercanas al régimen de Gaddafi y de las instituciones libias; por ejemplo, el Banco Central, la Dirección General de Inversiones, El Banco Exterior, la Cartera de Inversiones Africanas y la Corporación Nacional de Petróleo. Dos días después, la OTAN intervendría

[...] con el ataque por parte de cazabombarderos franceses Rafale a objetivos en el suelo en la zona de Ajdabiya. Esa misma noche, buques norteamericanos y británicos lanzaron un centenar de misiles Tomahawk sobre instalaciones de los sistemas de mando y control y de defensa aérea –radares y baterías antiaéreas o de misiles tierra aire– para estar en condiciones de comenzar a poner en práctica la zona de exclusión aérea (De Ayala, 2011, p. 56).

Con esto iniciaría formalmente la guerra a distancia en Libia que, siete meses después, terminaría con el asesinato de Muammar Gaddafi. No obstante, en este tipo de conflagraciones, es necesario implementar operaciones y tareas no solo durante la contienda, sino también antes de que esta comience. En Libia, algunas de las maniobras

establecidas fueron: la preparación de actores clave desde el exterior y su incorporación en las dinámicas del conflicto en 2011, la difusión de información falsa para generar apoyo y reconocimiento internacional a la intervención, la saturación del territorio con armas y el uso de tecnologías para bombardear y dirigir los ataques, y la humillación del líder libio como castigo ejemplar y el rompimiento del tejido social.

Reclutamiento y adoctrinamiento de libios en el exterior

Desde los primeros años del gobierno de Gaddafi, países como Gran Bretaña y posteriormente Estados Unidos habían intentado derrocar al coronel. En 1970, Gran Bretaña realizó la operación Hilton por medio de la cual se enviaron mercenarios británicos para armar a los presos que tenían vínculos con la suprimida monarquía del rey Idris (Hilsum, 2012, p. 76). Asimismo, a lo largo de los años ochenta, se formaron grupos en contra de Gaddafi, muchos de los cuales estaban financiados por Estados Unidos y Francia, como el Frente Nacional de Salvación Libia (FNSL) y el Grupo Islámico de Combate Libio (GICL).⁶⁷

⁶ El FNSL fue fundado en 1981 y recibió entrenamiento de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) (Vandewalle, 2006, p. 128). Este Frente también trabajó con los Servicios de Inteligencia Secreta de Reino Unido (MI6) para diseñar un proyecto que tenía como objetivo asesinar a Gaddafi, empero, este falló (Hilsum, 2012, p. 84; Chapin, 2011, p. 95).

⁷ El GICL fue fundado en los años noventa y apoyado tanto por las fuerzas estadounidenses como por las británicas. Sin embargo, en el 2000, la relación cambiaría, sobre todo a partir del acercamiento diplomático entre Gaddafi y las fuerzas occidentales, la apertura comercial de Libia y el apoyo que este país norafricano proporcionaría a la lucha contra el terrorismo. Incluso, en ese contexto, la CIA y el MI6 entregarían a Abdelhakim Belhadj, uno de los principales líderes de este grupo, al gobierno de Gaddafi. Posteriormente, en 2010, muchos integrantes de este grupo fueron liberados (Boduszyński y Pickard, 2013, p.92). Así, durante la guerra de 2011, se gestó una reconciliación entre los intereses de Belhadj y los de las fuerzas de la OTAN (Cobain, 2018).

De acuerdo con Hilsun, quienes tomaron las armas en contra de Gaddafi en febrero de 2011 fueron justamente los integrantes del FNSL, el cual estaba dirigido por Mustafa Abdul Jalil, ex ministro de justicia de Gaddafi y quien había colaborado con el régimen para el acercamiento con occidente. Este grupo se convertiría en el CNT después de que los opositores tomaran el control de Misrata. En este contexto, muchos libios que estaban viviendo en Estados Unidos regresaron a su país para formar parte de los grupos armados que se levantaron contra el coronel, como Khalifa Hafter, quien “había vivido en el estado de Virginia de Estados Unidos por dos décadas y regresó a Libia en marzo de 2011 para ser parte del ejército que luchó en contra del régimen de Gaddafi” (Campbell 2013, pp. 61-65).⁸ Otro personaje que se benefició de la ayuda occidental para luchar en contra del coronel fue Abdelhakim Belhadj, líder del GICL, quien posteriormente se convertiría en un prominente representante del CNT.

Información falsa

La intervención de la OTAN en Libia fue justificada bajo el discurso de que el *dictador* estaba reprimiendo de manera violenta las manifestaciones *pacíficas* de su pueblo. Kuperman menciona que, desde el inicio de las protestas, los manifestantes estaban armados y que, aunque al principio, el gobierno libio respondió con fuerza no letal, esto fue omitido por los medios occidentales (2013, p. 193).

Asimismo, la prensa extranjera publicó fotos donde supuestamente se mostraba la represión que el régimen libio estaba ejerciendo. Sin embargo, algunas de ellas eran fotografías que habían sido tomadas en espacios y tiempos diferentes. Incluso, Robert Gates, el entonces secretario de defensa estadounidense, afirmaba que el Pentágono no tenía evidencias para afirmar que Gaddafi estuviera

⁸ La transliteración del nombre es la que el autor de la cita decidió, pero, a partir de este momento, en el texto se referirá a él como Jalifa Haftar.

reprimiendo a su población. No obstante, el discurso de la violencia del *dictador* permaneció y justificó la injerencia (Campbell, 2013, p. 67, p.143).

En un momento, los insurgentes afirmaron falsamente que sus fuerzas [de Gaddafi] ya habían matado a 30 mil civiles. Esa cifra equivalía al total que el Consejo Nacional de Transición admitió, posteriormente, como el número máximo del total de muertes, tanto militares como civiles, que ocurrieron durante toda la guerra civil de nueve meses, que, finalmente, derrocó al régimen de Gaddafi (Carpenter, 2018, p. 23).

En la información difundida por los medios occidentales, también se omitió el hecho de que, del 5 al 15 de marzo, Gaddafi había recuperado todas las ciudades que habían sido tomadas por los rebeldes, excepto Misrata, lo que garantizaba el relajamiento de las tensiones. Además, aunque el régimen utilizó fuerza militar para contener el avance de los opositores, algunos analistas señalaron que, durante ese periodo, el deceso de civiles había sido mínimo, representando solo el tres por ciento del total de las muertes (Kuperman, 2013, p. 195-196).

Sin embargo, los medios occidentales argumentaron que Gaddafi estaba sometiendo a la población y el 17 de marzo de 2011, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1973, con la cual se estableció la zona de exclusión aérea y se solicitó que los Estados miembro utilizaran “todas las medidas necesarias [...] para proteger a los civiles y las zonas pobladas por civiles”. A pesar de que esta resolución excluía el uso de una fuerza de ocupación extranjera, la OTAN intervino gracias a esta medida.

Durante el mes de marzo, la Unión Africana (UA) emitió una propuesta de negociación, la cual fue ignorada tanto por las fuerzas occidentales como por el CNT, debido a que la hoja de ruta no incluía la salida inmediata del poder de Muammar Gaddafi (De Waal, 2013). Prescindiendo de esta propuesta, las potencias occidentales crearon el Grupo de Contacto sobre Libia el 29 de marzo, el cual exigía la

salida inminente de Gaddafi del poder y reconocía al CNT como representante legítimo de Libia (Campbell, 2013). Además, a pesar de que en todo momento se negó la conexión de las fuerzas occidentales con la oposición libia, a finales de 2012, con el asesinato del embajador estadounidense J. Christopher Stevens, se señaló lo siguiente:

El embajador estadounidense J. Christopher Stevens murió el martes en un asalto al Consulado estadounidense en Bengasi, la misma ciudad donde había llegado a bordo de un buque de carga en la primavera de 2011 para ayudar a construir lazos entre la rebelión advenediza y los rebeldes.

'Arriesgó su vida para detener a un tirano, luego dio su vida tratando de ayudar a construir una Libia mejor', dijo la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton (Pearson, 2012).

Envío de armas y uso de tecnología

La zona de exclusión aérea, aprobada con la resolución 1973, permitió que las fuerzas de la OTAN proporcionaran armas y asesoramiento a los grupos rebeldes a partir del uso de las tecnologías de la comunicación y la información. La zona de prohibición aérea fue establecida por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña el 19 de marzo de 2011 a través de la Operación *Odyssey Dawn*. Posteriormente, el comando sería cedido a la OTAN con la Operación *Unified Protector* (Simpson, 2011, p. 61). En ese momento, Gaddafi propuso la negociación y también aceptó la hoja de ruta de la UA, sin embargo, los bombardeos nunca pararon (Hilsum, 2012, p. 211).

Las dos principales tácticas que se desarrollaron después del establecimiento de la zona de exclusión aérea fueron: armar a los rebeldes y hacer la guerra a *control remoto*. Desde el inicio de la guerra, el régimen egipcio proporcionó armas a los rebeldes. Un mes después, el ejército británico ofreció asesoría en materia de defensa y Qatar transportó misiles anti tanque para los opositores libios. Asimismo, en mayo, las fuerzas francesas brindaron adiestramiento y lanzaron armas a sectores que estaban recibiendo entrenamiento de Reino

Unido e Italia (Levinson y Rosernberg, 2011; Kuperman, 2013, p. 197; Urban, 2012; Black, 2012; Nakhoul, 2011).

La segunda táctica fue el asesoramiento a distancia. Las fuerzas de la OTAN determinaban cuáles eran los objetivos, dónde estaban las armas, y proporcionaban información del terreno de batalla a los combatientes libios que estaban luchando en campo. Esta maniobra fue conveniente para las fuerzas extranjeras debido a que sus combatientes no tenían que pelear de manera directa en el terreno, lo cual, a su vez, reducía los posibles decesos. Por otra parte, esta táctica también *legitimaba* la operación frente a la población local e internacional debido a que de esta manera se podía reproducir la imagen de que quienes querían derrocar al régimen eran los mismos libios y que no había una injerencia directa de fuerzas extranjeras, porque estos no eran visibles en el campo de batalla.

Las fuerzas occidentales también apoyaron a los grupos rebeldes a partir del dominio del espacio aéreo. De acuerdo con el reporte oficial de la OTAN, las fuerzas occidentales lanzaron en promedio 150 bombardeos aéreos diarios durante la guerra en Libia, los cuales no discriminaban entre población civil y combatientes (Campbell, 2013, p. 119). Asimismo, hubo un despliegue tecnológico para saber cuáles eran y cómo se iban a realizar las operaciones de Gaddafi, por medio de intervenciones computacionales a sus servicios de seguridad e inteligencia (Hilsum, 2012, p. 226).

En agosto, las fuerzas de la OTAN atacaron Sirte, aunque en esta ciudad no había fuerzas rebeldes que tuvieran que ser asistidas (Kuperman, 2013, p. 197). No obstante, era la zona en donde se encontraba el coronel. Durante ese mes, la OTAN desplegó la Operación Sirena del Amanecer, la cual bloqueó Trípoli para que ninguna persona pudiera salir de ahí. Gaddafi fue rastreado por su celular y su ubicación fue transmitida a las fuerzas del CNT (Campbell, 2013, p. 172). La operación terminó en octubre, cuando fuerzas de la OTAN atacaron la caravana en la que se encontraba Muammar Gaddafi. Tras las explosiones, el coronel tuvo que salir del automóvil y las fuerzas opositoras se encargarían de lo demás (Chivvis, 2014, p. 167).

La humillación

A pesar de que la resolución 1973 no proponía un cambio de régimen, las fuerzas occidentales sí lo buscaron.

En mayo, Gaddafi ofreció un alto el fuego con los rebeldes, lo cual habría puesto fin a la crisis humanitaria y habría llevado a negociaciones entre los rebeldes y Gaddafi, empero, esto no implicaba ningún cambio de régimen. (El alto al fuego podría haberse impuesto amenazando con reanudar los bombardeos de la OTAN si no se cumplía o poniendo a las fuerzas de paz de la ONU entre las partes). Sin embargo, la OTAN rechazó la oferta de inmediato; Gaddafi, y su régimen, tenían que terminar. Luego, la OTAN procedió a bombardear no solo objetivos militares sino también el complejo residencial de Gaddafi en Trípoli, matando a su hijo y sus tres nietos (Etzioni, 2012, p. 49).

En agosto, las fuerzas opositoras ya habían conseguido la victoria militar, no obstante, la guerra continuó para capturar a Gaddafi. La aprehensión del coronel no concluyó con su traslado y juicio frente a la Corte Penal Internacional, sino con una muerte cruel y sanguinaria. El asesinato de Gaddafi fue un espectáculo en el que su cuerpo fue humillado, profanado y violentado, lo cual, desde mi perspectiva, tenía la intención de ejercer un castigo ejemplar a quien por tantos años se había opuesto a los intereses del sujeto hegemónico en esa región del mundo.

El proyectar el cuerpo exánime y maltratado del que había sido el líder de Libia desde 1969 tenía el propósito de mostrar lo que les pasaría a aquellos o aquellas que osaran contradecir, obstruir o cuestionar al sistema. Era una muestra de lo que le puede suceder a quien se atreva a diseñar un mundo alternativo y trabajar para construirlo. Asimismo, esta vejación era indispensable para deconstruir la imagen de Gaddafi como el triunfador que había logrado posicionarse y rechazar la dominación y explotación occidental.

Antes de morir, Gaddafi escribió un texto que tituló “Esta es mi voluntad”, en el cual explicó a la gente que jamás se vendió frente a las fuerzas extranjeras y que [...] aunque no ganemos inmediatamente, nosotros le daremos una lección a las generaciones futuras, porque proteger a la nación es un honor y venderla es la peor traición que la historia les recordará por siempre a pesar de que otros digan lo contrario (Campbell, 2013).⁹

Tras el asesinato de Muammar Gaddafi, las fuerzas del CNT quitaron la bandera verde que representó el gobierno de la Jamahiriya y colocaron la que se usaba durante el gobierno del rey Idris (Hilsum, 2012, p. 23). Esta acción fue una representación simbólica del regreso a los vínculos con occidente y del olvido de un periodo que confrontó constantemente a las fuerzas hegemónicas, por lo tanto, también implicó la reconstrucción de la narrativa autónoma y revolucionaria de Libia a una supeditada a los intereses del capital.

Gaddafi había logrado mantener una unidad entre la gran diversidad de grupos tribales que hay en el país, debido, en gran medida, a las políticas neopatrimoniales implementadas por el régimen. Estas prácticas permitieron que el coronel concentrara el poder apoyándose de gobiernos y jefaturas locales que eran fieles a su administración, como resultado de los servicios y recursos que este les proporcionaba para el bienestar de sus comunidades.

No obstante, tras la injerencia occidental, la sociedad quedó completamente dividida, deteriorada y armada. Los grupos fundamentalistas islámicos comenzaron a controlar territorios importantes en el país. Asimismo, el racismo y la xenofobia se desplegaron en todo el territorio y las violencias en contra de las poblaciones negra y extranjera se convirtieron en una constante (Milne, 2011; Hilsum, 2012; Kuperman, 2013).¹⁰ Actualmente, si-

⁹ El texto completo se encuentra en Horace Campbell (2013) *Global NATO and the Catastrophic Failure in Libya*.

¹⁰ Los perpetradores de estas violencias justificaban su actuar diciendo que estos grupos eran mercenarios de Gaddafi. Sin embargo, la violencia fue generalizada contra la población negra.

que sin haber un gobierno reconocido por los habitantes libios y la economía de guerra es la que regula las relaciones políticas, económicas y sociales en el país.

El caos para la dominación de espectro completo

El primer documento legal que sugirió la intervención en Libia lo emitió Estados Unidos, a pesar del discurso del entonces presidente, Barack Obama, de reducir las fuerzas militares que tenía desplegadas a lo largo y ancho del mundo (Simpson, 2011, pp. 60-61). Además, aun cuando la injerencia se justificó por razones humanitarias y discursos pro-democráticos vinculados con la Responsabilidad de Proteger (R2P por sus siglas en inglés), tras el asesinato de Gaddafi no se logró garantizar la seguridad de las y los libios. La manera en la que se realizó la operación demuestra que las potencias occidentales buscaban la eliminación del líder libio, a pesar de que su muerte fue adjudicada a los rebeldes (Carpenter, 2018, p. 25). Pero ¿por qué era necesario ejecutar a Gaddafi? ¿por qué a pesar del acercamiento entre las fuerzas extranjeras y el régimen libio se aprobó la intervención con tanta premura y sin aceptar una negociación?

Las principales razones por las cuales Estados Unidos decidió intervenir en Libia fueron las riquezas petroleras e hídricas con las que cuenta el territorio, ya que Libia concentra una gran cantidad de reservas petroleras, ocupando el décimo lugar a nivel mundial. Asimismo, se encuentra sobre el acuífero de Nubia, que es una de las reservas de agua subterránea más grandes del mundo. De hecho, durante su gobierno, Gaddafi implementó el proyecto “the Great Man made River” con el objetivo de proporcionar recursos hídricos a su población y a la de algunos países africanos (Hilsum, 2012, p. 58). De haberse concluido el proyecto, este hubiera proporcionado una fuerte capacidad y autonomía para el régimen, lo que a su vez hubiera incrementado la dificultad para el despliegue de la dominación hegemónica en la región.

De la misma manera, la intervención se asoció con los intereses de la industria armamentista, debido al incremento de las ventas que fomentan este tipo de conflagraciones. Las potencias occidentales también querían eliminar la independencia financiera que tenía Libia y los proyectos que afectaban a la reproducción del capital (Salgó, 2012, pp. 219-221). Una de las propuestas que Gaddafi sugirió durante sus últimos años de vida fue la modificación de la moneda de cambio para la exportación de las riquezas de los territorios de África y Medio Oriente. La idea era que tanto el petróleo como los demás minerales extraídos de estos espacios fueran intercambiados exclusivamente por dinares de oro, lo cual hubiera representado un golpe muy fuerte para el dominio del dólar en las transacciones internacionales.

Además, Gaddafi, junto con otros países africanos, estaba desarrollando un proyecto regional para garantizar la independencia del continente africano frente a las telecomunicaciones europeas (Salgó, 2012). Desde 1992, se había establecido la Organización Regional de Comunicación Satelital de África (RASCOM por sus siglas en inglés). El objetivo de esta estructura era lanzar un satélite africano para reducir el costo de las telecomunicaciones en el continente. Sin embargo, a pesar de la viabilidad del proyecto, ningún Estado ni Organismo Financiero Internacional había querido apoyarlo. En ese periodo, el continente pagaba a Europa cerca de 500 millones de dólares al año por el uso de sus satélites, como Intelsat, mientras que el satélite africano solo costaría 400 millones de dólares. Finalmente, en 2007, el proyecto se logró consolidar con el financiamiento proporcionado por el gobierno de Gaddafi, que contribuyó con 300 millones, y por el Banco Africano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de África Occidental, principalmente (Pougala, 2011).

Así, a pesar del acercamiento con occidente, las ideas y proyectos promovidos por Gaddafi eran una fuerte amenaza para el mantenimiento del *statu quo* en la región, lo cual podría generar consecuencias negativas para la reproducción hegemónica a nivel mundial. Sin embargo, Gaddafi no solo proponía una modificación en las relaciones políticas y económicas con el exterior, también estaba

generando una forma de reproducción social que podría descentrar los proyectos e imaginarios establecidos por occidente. Gaddafi fue representado como un dictador porque su forma de hacer política era diferente a la hegemónica. Lo anterior no quiere decir que no haya cometido actos represivos o violentos contra ciertos sectores de su población. Sin embargo, esa violencia no horrorizaba a las potencias occidentales, lo que realmente les molestaba y preocupaba era su albedrío y no alineación (Wright, 1982, p. 177).

De tal suerte, con el asesinato de Gaddafi, estos proyectos quedaron en el olvido y el saqueo del territorio se pudo reiniciar. En 2012, British Petroleum regresó al país tras un acuerdo con la corporación petrolera estatal de Libia, National Oil Corporation (NOC) (BNN, 2012). Asimismo, se instalaron otras empresas petroleras como Total (Francia) y algunas corporaciones enfocadas en la extracción de recursos hídricos como Bechtel (Estados Unidos), RWE (Alemania), Veolia, Suez y Lyonnaise des Eaux (Francia). El proyecto de Gaddafi *the Great Mann Made River* fue destruido, sin embargo, tras la muerte del coronel, Francia comenzó a rediseñarlo para controlarlo (Campbell, pp. 190-191). A pesar de esto, la explotación de las riquezas del país no ha sido algo tan sencillo para las potencias occidentales, debido al mantenimiento de la situación de guerra y a la división sociocultural que prevalece en el país.

¿La transición?

Una de las tácticas que han ocupado las potencias europeas y Estados Unidos para el control de los diversos territorios es la división de las poblaciones, debido a que es más fácil imponer la hegemonía cuando se ha roto el tejido social. No obstante, en el caso de Libia, los diferentes grupos socioculturales han demostrado tener capacidad de acción frente a los intereses internacionales, lo que ha promovido cambios en las coaliciones y poca claridad en las alianzas durante los años posteriores al asesinato del coronel.

Durante sus 42 años en el poder, Gaddafi había logrado la unificación nacional a partir de medidas neopatrimoniales. Así, su gobierno confió en comités populares y brigadas que él mismo controlaba. De tal suerte, no había una institución que centralizara el poder ni un ejército unificado (Hilsum, 2012, p. 26), debido a que el poder estaba personificado y concentrado en él. Por esta razón, “el aparato de seguridad de Gaddafi colapsó con él” (Randall, 2015, p. 200).

Además, la asociación tribal había sido favorecida por el régimen y, tras su muerte, tampoco se logró consolidar una figura o institución que pudiera agrupar a los diferentes sectores del país (Hweio, 2012, p. 112). Así, el periodo de transición se ha alargado por más de nueve años y aunque Naciones Unidas ha reconocido a un grupo como representante del gobierno nacional, este no se ha podido legitimar frente a la población. La etapa post-Gaddafi se ha caracterizado por la lucha entre diversas asociaciones que buscan el control y centralización del poder, así como el dominio de las riquezas estratégicas del país (Randall, 2015, p. 201).

Tres días después del asesinato del ex coronel, el CNT anunciaba la liberación total de Libia y el fin de cuarenta y dos años de dictadura, pero aquel anuncio no despertó ningún sentimiento de alivio. Nada más derrumbarse el régimen comenzaron las fricciones entre las milicias y las tribus y los miembros del gobierno provisional (Mesa, 2012, p. 7).

Por un lado, algunas de las personas que integraron el CNT regresaron del autoexilio, por lo que la población libia no conocía a quienes estaban asumiendo los puestos políticos nacionales y, por lo tanto, tampoco aceptaba su representación. Por el otro, algunos integrantes habían tenido relaciones con el régimen de Gaddafi, porque acompañaron a su hijo Saif Islam en la implementación de las reformas que impulsaron el acercamiento con occidente, como en el caso del Primer Ministro del CNT (Boduszyński y Pickard, 2013, p. 92), lo cual reafirma los lazos entre el CNT y las fuerzas occidentales y fortalece

la hipótesis de que el cambio de régimen fue orquestado por fuerzas externas desde inicios del siglo XXI.¹¹

Tras el asesinato de Gaddafi, el CNT se estableció como gobierno en Trípoli hasta agosto de 2012. Sin embargo, las diversas milicias que habían sido armadas para derrocar a Gaddafi no reconocieron la autoridad del Consejo, por lo que este no las pudo consolidar ni agrupar en una sola fuerza, provocando un nuevo levantamiento armado (Boduszyński y Pickard, 2013, p. 88). Las milicias más importantes en la disputa por el poder fueron las de Zintán, Misrata y Bengasi, las cuales, junto con los demás grupos rebeldes, no reconocieron la legitimidad del Consejo.¹² En la disputa por el poder, se debe incluir la participación de los consejos tribales y de los grupos islámicos, como Ansar al Sharía y los Hermanos Musulmanes (Randall, 2015, p. 2010). Asimismo, en las regiones de Fezzan y Cirenaica se consolidaron grupos que reivindicaron la autonomía y separación territorial frente al Estado libio (Boduszyński y Pickard, 2013), lo que complejizó aún más la realidad del país.

A pesar de la tensa situación, en julio de 2012 se realizaron elecciones con el objetivo de establecer un gobierno para Libia. Así, se pactó la sustitución del CNT por el Congreso General Nacional (CGN), que actuaría como poder legislativo del nuevo gobierno (Boduszyński y Pickard, 2013, p. 88). En el Congreso, Mohammed Yousef al-Margariaf fue nombrado presidente y en septiembre Mustafa Abushagur fue electo como primer ministro, aunque, un mes después, fue depuesto por Ali Zidan, debido a que no pudo establecer un gobierno

¹¹ Después de octubre de 2011, la Unión Europea apoyó con recursos económicos al CNT, a pesar de la división que se hizo entre los grupos que combatieron a Gaddafi, lo cual fue cuestionado en Europa, sobre todo debido a que este dinero fue utilizado para implementar políticas clientelares y de cooptación (Mesa, 2012, p. 9).

¹² La brigada de Bengasi consideraba que su grupo debería tener mayor representatividad en el nuevo gobierno, porque en Bengasi fue donde inició la rebelión contra Gaddafi; la de Misrata señalaba que su agrupación había contribuido de manera más fuerte al derrocamiento del coronel, debido a la cantidad de muertes que tuvieron, por lo que merecían participar de manera directa en el gobierno; por su parte, la de Zintán mantenía el control del aeropuerto internacional de Trípoli y había capturado a Saif Islam, con lo que pretendía tener mayor capacidad de acción en la negociación (Mesa, 2012, pp. 7-8).

representativo. Al-Magariaf fue uno de los fundadores del FNSL, grupo que había recibido entrenamiento de la CIA y financiamiento tanto de Francia como de Estados Unidos (Ben Ibrahim, 2017).

Más adelante, en septiembre de 2012, una asociación armada vinculada con Ansar al Sharía, grupo salafista que nació en Bengasi, realizó un ataque en el consulado estadounidense, el cual terminó con el asesinato del embajador Christopher Stevens y otros tres funcionarios más (Harding y Stephen, 2012). En mayo de 2013, el CGN emitió una ley que prohibía que funcionarios que habían participado en el gobierno de Gaddafi fueran parte de la vida política del país, lo cual dividió al incipiente gobierno y debilitó, aún más, las instituciones del Estado.

Frente al descontento y las reivindicaciones políticas contra el gobierno de Trípoli, durante el verano de 2013, grupos armados bloquearon terminales petroleras, provocando la renuncia del primer ministro en agosto (Randall, 2015, p. 212). Estos bloqueos duraron cerca de un año y disminuyeron los ingresos económicos por recursos petroleros a cerca de un sexto (Bellanger y Mejias, 2020), lo cual fue catastrófico para el gobierno de un país que depende casi exclusivamente de la renta petrolera.

Asimismo, en Misrata, la milicia de la región tomó algunos ministerios para oponerse al régimen del CGN, lo cual demostró la incapacidad del Congreso para gobernar al país (Boduszyński y Pickard, 2013, p. 88). Además, en este contexto, el Estado Islámico comenzó a ganar terreno en Libia, lo cual justificó el reinicio de los bombardeos dirigidos por las fuerzas estadounidenses que intervinieron, una vez más, para apoyar al gobierno reconocido internacionalmente. Sin embargo, a pesar de que la expansión del Estado Islámico se logró contener, su presencia se mantuvo (Carpenter, 2018, p. 28).

La segunda guerra civil

El mandato del CGN terminaba en febrero de 2014, pero este no se disolvió, lo que generó más protestas sociales. Jalifa Haftar -quien

participó en el movimiento para derrocar a Gaddafi, pero fue excluido de los puestos relevantes tanto del Consejo como del Congreso- solicitó que el CGN acatara el periodo de su mandato y estableciera un nuevo gobierno. Sin embargo, frente a la negativa, Haftar creó el Ejército Nacional Libio (ENL) y encabezó la Operación Dignidad -con apoyo de Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí- para derrocar al Congreso y luchar contra los grupos yihadistas que se estaban posicionando en Bengasi. El CGN declaró que esta acción era un intento de golpe de Estado y la batalla por el poder se reanudó (Neale, 2018).

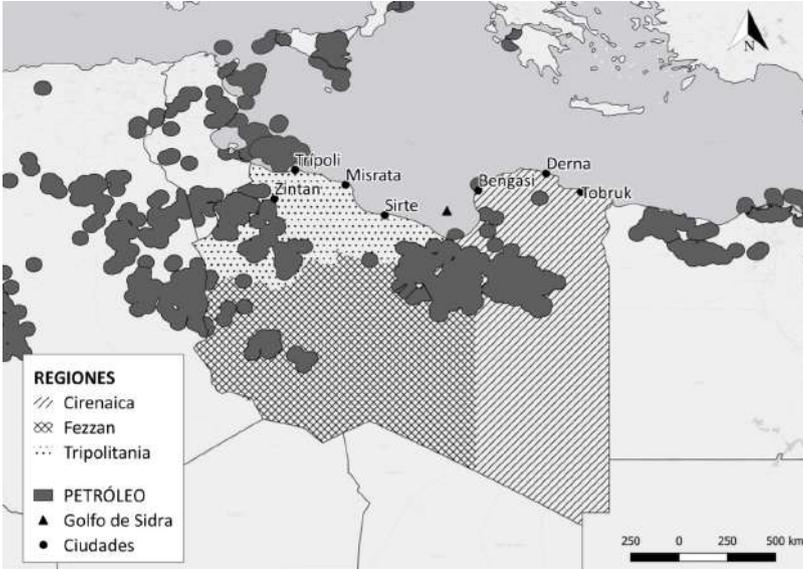
Así, se establecieron dos gobiernos: uno con sede en Trípoli y representado por el Congreso General Nacional, que tenía el apoyo de la brigada de Misrata, y otro con sede en Tobruk, que incluyó a personas de la Cámara de Representantes, elegida ese mismo año y apoyada por las fuerzas de Haftar. Antes de la injerencia occidental de 2011 en Libia, Haftar había tenido vínculos con Estados Unidos. Además, la Cámara de Representantes tenía una postura más liberal y, por lo tanto, se oponía a las fuerzas islámicas. A pesar de esto, tanto Estados Unidos como Francia decidieron continuar apoyando al gobierno de Trípoli (Randall, 2015, pp. 211- 214).¹³

Para hacer frente a las fuerzas de Haftar, la milicia de Misrata estableció una coalición con los grupos islámicos para lanzar la Operación Amanecer Libio, la cual se oponía a la maniobra antiislamista del este (Neale, 2018). Asimismo, las Brigadas de Defensa de Bengasi, que tenían la aprobación indirecta del GSN, también se levantaron contra el ejército del coronel (DRI, pp. 46-47). Con estas acciones, se pretendía debilitar al grupo de Haftar, debido a que este estaba ganando fuerza y controlando un territorio extenso en la región más rica en recursos petroleros de Libia: Cirenaica (Boyle, 2013, p. 181). Para ese momento, el gobierno de Tobruk regulaba las principales

¹³ En este contexto, Naciones Unidas volvió a reconocer al gobierno de Trípoli, aunque este no contaba con la legitimidad y aceptación del pueblo libio. De hecho, en 2014, el gobierno de Trípoli estuvo sesionando fuera de Libia debido a la guerra que se estaba desarrollando en el país. El Gobierno de Trípoli gobernaba desde un ferry griego de la empresa Anek Lines en las costas libias (Goldhammer, 2014).

terminales petroleras del país (Randall, 2015, pp. 211- 214), Ansar al Sharía dominaba gran parte de Bengasi y el Estado Islámico había tomado el control de Derna y del Golfo de Sidra, el cual también es rico en riquezas petroleras (Neale, 2018).

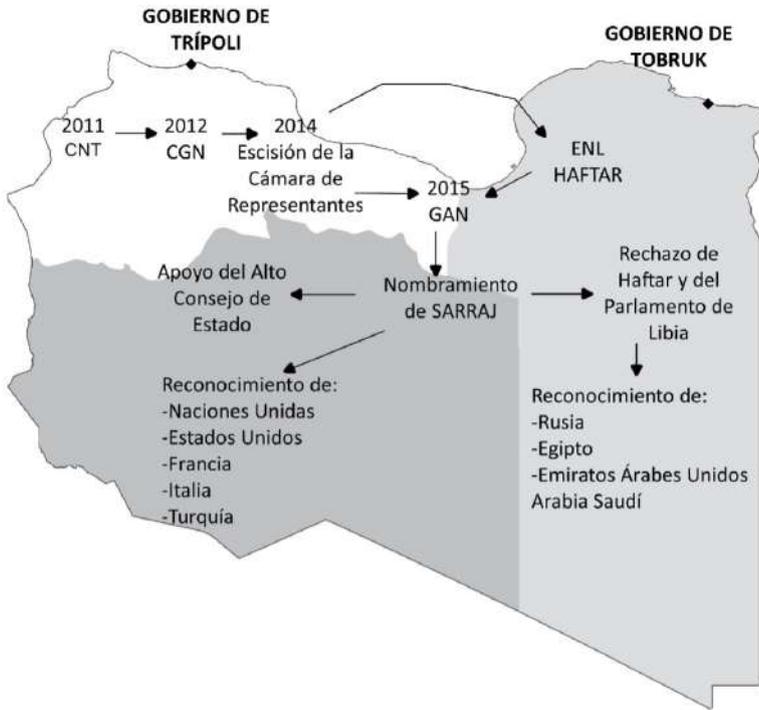
Mapa 2. Petróleo libio



Fuente: Elaboración de Adriana Franco.

En diciembre de 2015, con los acuerdos de Skhirat, los cuales fueron impulsados por Naciones Unidas, se formaría el Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN). Con esta acción se pretendía establecer una sola administración integrada por las fuerzas de Trípoli y las del este: el CGN se convertiría en el Alto Consejo de Estado y la Cámara de Representantes de Tobruk en el Parlamento de Libia. Sin embargo, las fuerzas del Alto Consejo de Estado nombrarían a Faïez Sarraj como primer ministro del GAN sin que este fuera elegido en votaciones por la población, por lo que el Parlamento de Libia no reconoció su nombramiento y la disputa por el poder continuó (Bellanger y Mejias, 2019).

Esquema 1. Los dos gobiernos libios



Fuente: elaboración de Adriana Franco.

La tercera guerra

Aunque el régimen de Sarraj se instaló en Trípoli en marzo de 2016, este no sería reconocido por las fuerzas parlamentarias del este encabezadas por Haftar. Unos meses después, Estados Unidos, el GAN y algunas milicias como la de Misrata realizarían ataques aéreos en contra del Estado Islámico y declararían la liberación de Sirte en diciembre de 2016 (Neale, 2018). Mientras tanto, en el este, Haftar continuó con su lucha y, en julio, tomó el control de las terminales petroleras de Lanouf y al-Sedra, y, a inicios de febrero de 2019, dominó los campos petroleros de al-Charara y el de al-Feer (Holzinger y Picard, 2019).

Haftar se negó a devolver el control de los puertos petroleros de Libia a la Corporación Nacional de Petróleo (NOC) de propiedad estatal con sede en Trípoli, eligiendo en su lugar entregarlos a un NOC paralelo con sede en el este. Haftar justificó esta medida expresando su frustración con el Banco Central de Libia (CBL), acusándolo de financiar 'milicias' y 'terroristas' (DRI, p. 15).

Así, gracias a los ingresos petroleros con los que ha contado el ELN, Haftar ha ganado la aceptación de otros grupos armados, debido a la economía de guerra que se ha producido en el país y de la que estos sectores también se benefician. Actualmente, algunos de los recursos que se comercian de manera ilegal en Libia son la chatarra de metal y el petróleo refinado y sus derivados, los cuales salen por la costa este vía marítima y a través de las fronteras de Egipto, Sudán, Chad, Níger y Túnez (Noria Research, 2019).

En enero de 2019, Haftar dirigió su operación a Fezzan y, en abril, lanzó una ofensiva contra Trípoli. Con esta acción, el coronel logró dominar las bases aéreas de Tamanhint y Jufra y vincularse con grupos rebeldes de Sudán y Chad (DRI, p. 48). Para ese momento, Haftar ya tenía control de una gran parte del terreno libio. No obstante, Faïez Sarraj seguía manteniendo el reconocimiento de Naciones Unidas (Bellanger y Mejias, 2019). En este contexto, el apoyo de Francia y Estados Unidos comenzó a dejar de ser tan claro, lo cual se puede entender debido a que Haftar estaba regulando gran parte de los flujos petroleros del país.

En abril de 2019, el gobierno de Trípoli señaló que tanto Estados Unidos como Francia estaban teniendo diálogos con Haftar, lo cual ponía en duda el apoyo al régimen de Sarraj (Al Jazeera, 2019). De hecho, en julio de 2019 fueron encontrados misiles Javelin producidos en Estados Unidos, pero que habían sido vendidos a Francia, en las bases controladas por Haftar, a pesar del embargo de armas impuesto por Naciones Unidas y del supuesto reconocimiento que se había otorgado al gobierno de Trípoli (The Guardian, 2019). Además, en noviembre del mismo año se ubicaron fuerzas mercenarias de Wagner

en Libia, las cuales estaban apoyando al ENL (Vitkine y Bobin, 2019). Así, la presencia de más actores en el campo de batalla parece demostrar que la disputa en el territorio se prolongará.

Asimismo, a pesar de que Haftar estaba controlando zonas cada vez más extensas del país (Bobin, 2020), a partir de inicios de 2020, hubo un nuevo equilibrio de poder generado por la llegada de fuerzas militares turcas, las cuales fueron solicitadas por el régimen de Trípoli. Frente a esta intervención, en enero de 2020, el ejército de Haftar bloqueó los puertos petroleros en protesta por la injerencia turca, con lo cual la producción petrolera del país se redujo en un 90%. No obstante, el régimen de Sarraj ha logrado recuperar algunas posiciones y contener el avance del ENL (Smolar y Bobin, 2020).

El apoyo de Turquía a Sarraj parece contradecir la postura de Rusia en Libia a pesar de la aparente alianza entre ambos países con el desarrollo del gaseoducto TurkStream. A Turquía le interesa que el régimen de Sarraj se mantenga debido al acuerdo para establecer bases militares en territorio libio y al pacto marítimo que firmaron en relación con las costas del mediterráneo, el cual desde la perspectiva de Egipto, la Unión Europea y Estados Unidos es ilegítimo. No obstante, Rusia ha estado apoyando con fuerzas mercenarias al gobierno del ELN. A pesar de esto, su ayuda puede decrecer si sus intereses por garantizar la realización del gaseoducto son mayores (Butt, 2020).

Reflexiones finales

La intervención de la OTAN en Libia en 2011 fue una estrategia para garantizar el despliegue de la dominación de espectro completo en la región norafricana. Así, a pesar de que la estabilidad no se ha logrado en el país, la situación de conflicto ha sido más conveniente para los intereses hegemónicos que la que se mantenía con Muammar Gaddafi. Además, aunque a inicios del siglo XXI hubo un acercamiento entre occidente y el coronel, las propuestas y praxis política del líder libio seguían siendo un obstáculo para el control de la región.

Por esta razón, las demandas sociales de un pequeño sector de la población contra el régimen, en el contexto de las *primaveras árabes*, fueron aprovechadas por países como Estados Unidos y Francia para generar el cambio de régimen. La premura con la que se aprobó la zona de exclusión aérea y la difusión de imágenes y discursos en contra del gobierno libio solo se pueden entender por la planeación previa que se había hecho para generar el cambio político en el país. Las potencias occidentales no podían dejar pasar esta oportunidad, por eso, a pesar de los vínculos y negociaciones que habían tenido con el coronel, occidente le daría la espalda y justificaría la intervención.

La injerencia se instauró a partir de una guerra a distancia, en la que las fuerzas terrestres convencionales de los países occidentales no pisaron el suelo libio, pero sí proporcionaron armas, información y asesoría a las fuerzas opositoras del gobierno de Gaddafi. Asimismo, la dominación aérea y tecnológica fue esencial para revertir la asimetría entre los grupos rebeldes y las fuerzas del coronel, y otorgó más fuerza y capacidad de acción a las agrupaciones opositoras al régimen libio. Sin embargo, la guerra a distancia no se puede entender solo a partir del apoyo que se dio a las fuerzas rebeldes de Libia durante el conflicto de 2011, ya que la preparación de personajes clave en territorio estadounidense y su regreso durante la conflagración también fue fundamental para conseguir el objetivo principal de la misión: asesinar a Gaddafi.

Matar y humillar al coronel era central para la dominación de espectro completo, tanto para garantizar el acceso a las riquezas como para suprimir la narrativa de autonomía y poder que había edificado el líder libio. A pesar de que tras el asesinato de Muammar Gaddafi no se ha podido establecer un gobierno central que asegure los intereses occidentales en el país, esta situación ha sido más redituable para las fuerzas extranjeras, debido a que la economía de guerra ha permitido la extracción ilegal de riquezas y la cancelación y olvido de los planes contrahegemónicos propuestos por el coronel.

En los últimos años, la situación en Libia se ha complejizado y la participación de actores e intereses extranjeros se ha incrementado.

En este contexto, las coaliciones y vínculos son cada vez más difusas y cambiantes. Sin embargo, mientras la situación de guerra continúa, la población civil seguirá siendo la más afectada. Tras el asesinato de Gaddafi, las fuerzas occidentales aseguraron que la manobra en Libia había sido un éxito, a pesar del rompimiento del tejido social en el país y la inseguridad que se desató en todo el territorio. Asimismo, la diversidad de alicientes entre los sujetos que están participando en la conflagración continuará dificultando el diseño de una estrategia que garantice la estabilidad del país, permitiendo la continuación del saqueo de las riquezas del Estado a partir de la violencia directa, simbólica y estructural en contra del pueblo libio.

Bibliografía

AP (2013). UN lifts sanctions against Libya. *The Guardian* <https://www.theguardian.com/uk/2003/sep/12/lockerbie.libya>

Marsad (25 de junio de 2019). At a Glance: Libya's Transformation 2011-2018 Power, Legitimacy and the Economy. *Democracy Reporting International*. <https://www.democracy-reporting.org/libya-political-transformation-timeline/assets/Libyas-Transformation-2011-2018.pdf>

Bellanger, Elisa y Mejias, Syrielle (23 de abril de 2019). Pourquoi la Libye est-elle coupée en deux? *Le Monde*. https://www.lemonde.fr/international/video/2019/04/23/pourquoi-la-libye-est-elle-coupee-en-deux_5453820_3210.html

Ben Ibrahim, Abdullah (14 de agosto de 2017). Former PM Zidan arrested in Tripoli. *The Libya Observer*. <https://www.libyaobserver.ly/news/former-pm-zidan-arrested-tripoli>

Bobin, Frédéric (14 de abril de 2020). Guerre en Libye : le maréchal Haftar affaibli par l'implication croissante des Turcs. *Le Monde* https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/17/guerre-en-libye-le-marechal-haftar-affaibli-par-l-implication-croissante-des-turcs_6036854_3212.html

Boduszyński, Mieczyslaw y Pickard, Duncan (2013). Tracking the 'Arab Spring': Libya Starts from Scratch. *Journal of Democracy* (24), 86-96.

Boyle, Francis (2013). *Destroying Libya and World Order. The three-decade U.S. Campaign to Terminate the Qaddafi Revolution*. Atlanta: Clarity Press.

Baltic News Network (2017). British Petroleum returns to Libya <https://bnn-news.com/british-petroleum-returns-libya-63634>

Butt, Gerald (14 de enero de 2020). Turkey's dual Libya objectives. *Petroleum Economist* <https://www.petroleum-economist.com/articles/politics-economics/middle-east/2020/turkey-s-dual-libya-objectives>

Campbell, Horace (2013). *Global NATO and the Catastrophic Failure in Libya*. Nueva York: Monthly Review Press.

Carpenter, Ted (2018). Paved with Good Intentions: How Washington Created the Libya Hell. *Mediterranean Quarterly*, (29), 19-31.

Cattaruzza, Amaël (2017). *Atlas des guerres et conflits. Un tour du monde géopolitique*. Paris: Édition autrement.

Chivvis, Christopher (2014). *Toppling Qaddafi. Libya and the Limits of Liberal Intervention*. Nueva York: Cambridge University Press.

Cobain, Ian (15 de mayo de 2018). UK government trying to block release of files exposing Gaddafi links. *The Guardian* <https://www.theguardian.com/world/2018/may/15/uk-government-block-release-files-gaddafi-libya-abdel-hakim-belhaj>

De Ayala, José Enrique (21 de junio de 2011). La intervención internacional en Libia La operación aliada es un avance de la 'seguridad de los Estados' a la seguridad humana. El doble rasero no implica que no sea una operación necesaria. *Ideas políticas*. https://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/afkar/afkar-ideas-30/afkar30_Libia_Jose_Enrique_Ayala_es.pdf/

De Waal, Alex (2013). 'My Fears, Alas, Were not Unfounded': Africa's Response to the Libyan Conflict. En *Libya. The Responsibility to Protect and the Future of Humanitarian Intervention*. Nueva York: Palgrave Macmillan.

Etzioni, Amitai (2012). The Lessons of Libya. *Military Review*. https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/English/MilitaryReview_20120229_art011.pdf

Goldhammer, Zach (13 de septiembre de 2014). On the Greek Ferry Housing Libya's Government. *The Atlantic*. <https://www.theatlantic.com/international/archive/2014/09/on-the-greek-ferry-housing-libyas-government/380145/>

Harding, Luke y Stephen, Chris (12 de septiembre de 2012). Chris Stevens, US ambassador to Libya, killed in Benghazi attack. *The Guardian* <https://www.theguardian.com/world/2012/sep/12/chris-stevens-us-ambassador-libya-killed>

Hilsum, Lindsey (2012). *Sandstorm. Libya in the Time of Revolution*. Nueva York: The Penguin Press.

Hweio, Haala (2012). Tribes in Libya: From Social Organization to Political Power. *African Conflict and Peacebuilding Review*, (2), 111-121.

IAEA (2011). Transboundary aquifers and rivers basins. *Water Resources Programme*. <http://www-naweb.iaea.org/napc/ih/documents/factsheetsPosters/Nubian%20-%20Transboundary%20Aquifers%20and%20Rivers%20Basins.pdf>

Kuperman, Alan (2013). NATO's Intervention in Libya: A Humanitarian Success? *Libya The Responsibility to Protect and the Future of Humanitarian Intervention*. Nueva York: Palgrave Macmillan.

Mesa, Beatriz (2012). La azarosa transición en Libia. *Instituto Español de Estudios Estratégicos*. Boletín electrónico http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO26-2012_AzarosaTransicionLibia_BeatrizMesa.pdf

Mesa, Luis (2012). *El pueblo quiere que caiga el régimen*. Ciudad de México: El Colegio de México.

Metz, Helen (2011). Chapter four: Government and Politics: Opposition to Qaddafi: Exile Opposition. En *Libya, a Country Study*. Comisión Federal de Investigación, Librería del Congreso. <https://www.loc.gov/item/88600480/>

Milne, Seumas (26 de octubre de 2011). If the Libyan war was about saving lives, it was a catastrophic failure. *The guardian*. <http://www.theguardian.com/commentisfree/2011/oct/26/libya-war-saving-lives-catastrophic-failure>

The Guardian (10 de julio de 2019). Missiles found at base of Libyan warlord are ours, France admits.. <https://www.theguardian.com/world/2019/jul/10/missiles-found-at-base-of-libyan-warlord-are-ours-france-admits>

Moss, Michael (2010). Getting to El Dorado Canyon: The Reagan Administration's 1986 Decision to Bomb Libya. *American intelligence Journal*, (28), 45-49.

Neale, Erin (15 de febrero de 2018). Timeline: How Libya's Revolution Came Undone. *Atlantic Council*. <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/timeline-how-libya-s-revolution-came-undone/>

Noria Research (2019). Predatory Economies in Eastern Libya. The dominant role of the Libyan National Army. *Global Initiative Against Transnational Organized Crime*. Ginebra. <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2019/06/GITOC-Predatory-Economies-Eastern-Libya-WEB.pdf>

Picard, Floriane y Holzinger, Flavie (23 de mayo de 2019). Les trois guerres de Libye. *Le Monde*. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/05/23/les-trois-guerres-de-libye_5465964_3212.html

OPEC share of world crude oil reserves, 2018 (2018). *Organization of the Petroleum Exporting Countries*. https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm

Pearson, Michael (15 de septiembre de 2012). Slain Ambassador died 'trying to help build a better Libya'. *CNN* <https://edition.cnn.com/2012/09/12/world/africa/libya-us-ambassador-killed-profile/index.html>

Pougala, Jean-Paul (10 de junio de 2011). The lies behind the West's war on Libya. *Pambazuka*. <https://www.pambazuka.org/human-security/lies-behind-west-s-war-libya>

Randall, Edward (2015). After Qadhafi: Development and Democratization in Libya. *The Middle East Journal*, (69), 199-221.

Resolución 1973 de 2011. Consejo de Seguridad. Naciones Unidas. [https://undocs.org/pdf?symbol=es/S/RES/1973\(2011\)](https://undocs.org/pdf?symbol=es/S/RES/1973(2011))

Saini, Federica (18 de enero de 2017). Libyans haven's forgotten history. *Brookings*. <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/01/18/libyans-havent-forgotten-history/>

Simpson, Charles (2011). Assessing the Arab Spring in Libya and Syria: A Compilation of Varying Statements from Key Actors. *Connections*, (11), 55-68.

Al Jazeera (20 de abril de 2019). Trump praises Haftar in apparent reversal of US policy on Libya <https://www.aljazeera.com/news/2019/04/trump-calls-haftar-praises-significant-role-terrorism-fight-190419182035115.html>

Vandewalle, Dirk (2006). *A History of Modern Libya*. Londres: Cambridge University Press.

Violation of humanity: Black men and women to be freed from Libyan enslavement. *Change.org*. <https://www.change.org/p/president-of-libya-mohammed-yousef-el-magariaf-violation-of-humanity-black-men-and-women-to-be-freed-from-libyan-enslavement>

Vitkine, Benoît y Bobin, Frédéric (22 de noviembre de 2019). La Libye, nouveau théâtre d'intervention des mercenaires russes. *Le Monde* https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/11/22/la-libye-nouveau-theatre-d-intervention-des-russes_6020074_3212.html

Wright, John (1982). *Libya A Modern History*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

La guerra en Siria

Disputa hegemónica y luchas por la territorialidad

Christian Jean Faci

DOI: 10.54871/gS23b10e

Introducción

La guerra en Siria, característica por su duración, multiplicidad de actores internos y externos, temporalidades, asimetrías y fluidez, permanece tan enigmática, nebulosa y compleja como lo parecían sus primeros brotes hace 10 años. Lejos de esclarecerse a lo largo de los años, el conflicto sirio ha mostrado un proceso de transformación y metástasis constante, lo cual obstaculiza su comprensión y ha normalizado la concepción de Siria como un territorio en guerra permanente.

El objetivo de este capítulo es presentar algunos elementos teóricos e históricos que nos permitan entender el proceso de guerra en Siria desde una perspectiva sistémica y transescalar, dando pautas para hacer una caracterización del conflicto capaz de esquematizar las dinámicas de la guerra e identificar las propuestas de gestión territorial que se están disputando. Nuestra propuesta es que el estudio del conflicto sirio se debe extender más allá de una perspectiva local o regional, entendiéndolo como la manifestación de una forma específica de *situación de guerra* dada por la disputa entre el sujeto hegemónico, fuerzas alternativas con pretensiones hegemónicas y

actores subversivos por el control de la producción y el ordenamiento territorial en Siria, lo cual refleja las contradicciones del Estado nacional poscolonial como forma dominante de administración territorial y se entiende como resultado de un proceso de producción estratégica del espacio y dominación por el sujeto hegemónico.

Con este fin, el capítulo está dividido en tres apartados. En primer lugar, presentamos los principales elementos teóricos e históricos que utilizamos para entender la formación del Estado en Siria y las debilidades estructurales subyacentes al estallido de la guerra, en vista de identificar las características principales de su organización social y su posición sistémica en un contexto de disputa entre proyectos geopolíticos antagónicos. En segundo lugar, utilizamos estas categorías de análisis para hacer un recuento del proceso de guerra para proponer una subcategorización que la divide en tres grandes temporalidades a partir de determinadas variables. Finalmente, hacemos una síntesis de ambos elementos para dar paso al desarrollo de nuestra hipótesis, según la cual el proceso de guerra en Siria se debe entender como producto de una disputa entre territorialidades hegemónicas, contrahegemónicas y subversivas, las cuales operan a través de las diferentes unidades militares que atraviesan el sistema o la situación de guerra que se ha conformado ahí.

Territorialidad, hegemonía y guerra: el conflicto en Siria como fenómeno sistémico

Para comprender la guerra en Siria y hacer un análisis detallado, se tiene que partir de un cuestionamiento desde la historia y el espacio, haciendo un análisis de la “conformación político-territorial” (Ceceña, 2013, p. 72) de los territorios en Siria y Medio Oriente. De esta forma, se entenderá el conflicto como un proceso de reorganización del espacio, cuyas dimensiones políticas, simbólicas y económicas, constituyen una territorialidad que ha sido atravesada por la dominación del sujeto hegemónico y sus alternativas

contrahegemónicas. En este texto, definimos la territorialidad como aquel proceso de organización y ordenamiento del espacio político y social, entendiéndola como producto de su articulación en tanto que parte de un sistema de escala global. Nuestro planteamiento es que la situación de guerra que actualmente se vive en Siria constituye una forma de territorialidad entrecruzada en la que converge la disputa entre el sujeto hegemónico estadounidense, operativos extranjeros con pretensiones hegemónicas y fuerzas locales por el control de la vivencia, la administración y la producción en este espacio. Con este fin, partiremos de un análisis de la historia siria desde la territorialidad, en vista de dar cuenta de los antecedentes y estructuras histórico-espaciales que subyacen al conflicto.

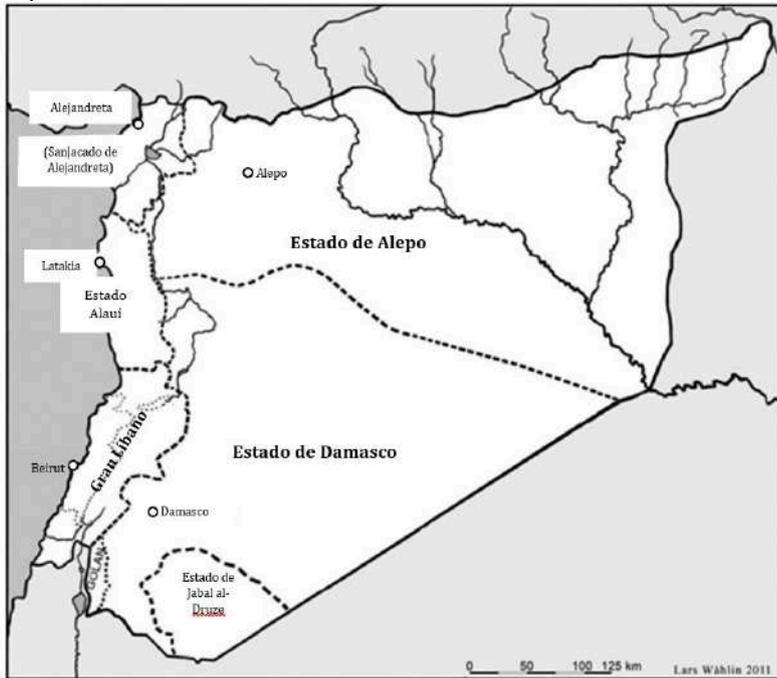
Históricamente, las poblaciones árabes concebían a la región actualmente conformada por Siria, Palestina, Líbano, Jordania y partes de Turquía e Irak como una totalidad territorial sin fronteras claras, ampliamente conocida como *Bilad al-Sham* (*países del Sham*) o, desde interpretaciones europeas, como “La Gran Siria” (Andurain, 2017) (también conocida como la *Siria Geográfica*). Si bien es cierto que, en el marco del control por el Imperio Otomano, esta región ya había vivido procesos imperiales de fragmentación administrativa tendientes al sectarismo y a la creación de fronteras internas (Hanne, p. 17), la parcelación colonial de los territorios dada en Medio Oriente por vía de los acuerdos de Sykes-Picot y la Resolución de San Remo tuvo un carácter cualitativamente distinto. En Siria, el establecimiento del Mandato Francés y el proceso colonial conllevó a una intensiva *compartimentación* del espacio ligada al control de la población y al dominio sobre el territorio, a la que se ancló una distribución desigual de los insumos políticos y económicos bajo criterios sectarios. Esto sentó las bases de la fractura social que se hizo evidente una vez que se empezaron a propagar las movilizaciones sociales a lo largo del mundo árabe durante 2011.

Una de las estrategias principales llevadas a cabo por el Mandato Francés, establecido en 1920, para asentar su control sobre la

Gran Siria fue la creación de fronteras administrativas internas, las cuales resultaron en un proceso de *balcanización* territorial que exacerbó las divisiones confesionales y de clase, e impidió la formación de un sentido de unidad territorial a través de la compartimentación colonial bajo parámetros sectarios (Quintana, 1980, p. 598). Esto llevó a la creación de un sistema administrativo cuyo objetivo era *encerrar* política y administrativamente a las diferentes minorías religiosas que históricamente habitaban los territorios del mandato, de manera que identidades confesionales fluidas se cristalizaron bajo la forma de identidades políticas construidas bajo parámetros propios de la territorialidad del Estado europeo.

Así, el territorio del Mandato fue parcelado según la percepción orientalista que tenían las autoridades francesas respecto a la distribución espacial de los grupos confesionales, lo cual resultó en el establecimiento de unidades administrativas propias para los drusos en las regiones montañosas del sur, los maronitas cristianos en las costas de Monte Líbano y los alawitas en las costas de Latakia. Igualmente, se crearon distritos autónomos en las regiones kurdas y se separó la Alexandretta en el noroeste debido a su población mayoritariamente turca (Kerr y Larkin, 2015, p. 36). El caso de la región interna de Siria, habitada mayoritariamente por la población sunita, fue diferente, ya que su dispersión territorial, tamaño poblacional y tendencias políticas antiimperialistas dieron fuerza a grandes movilizaciones sociales que presentaban una potencial amenaza para la administración colonial (Kargin, 2018, p.19). En este caso, primó una lógica de dividir para conquistar dada a través de la creación de dos *estados* (unidades administrativas) distintos: el Estado de Alepo y el Estado de Damasco, los cuales tomaban como referencia dos centros simbólicos históricamente importantes en vista de manipular rivalidades tribales. El objetivo de este proceso era frenar el nacionalismo árabe y sirio que desató la colonización, y así facilitar la dominación sobre el territorio y la población (Jörum, 2014, p. 25).

Mapa 1. División administrativa de la Siria colonial



Fuente: E. Jörum, *Beyond Syria's Borders: A History of Territorial Disputes in the Middle East*, p.25.

El sistema francés, teniendo como principales intereses estratégicos el control sobre la cuenca del Mediterráneo y el fácil acceso a sus colonias en África, privilegió política, económica y militarmente a las minorías alawitas y cristianas que se concentraban en la región occidental y controlaban las costas. La mirada colonial y la partición territorial que resultó de esta política sectaria conllevó a la aniquilación del tejido social frente a la instauración de fronteras y la edificación gradual de un sistema interno de centros y periferias, el cual continuó desarrollándose y se empezó a institucionalizar tras las independencias formales de Líbano en 1943 y de Siria en 1946. En el ámbito económico, la inserción de Siria al sistema capitalista tuvo

como resultado la destrucción de varias industrias tradicionales, el acentuamiento político de las divisiones de clase bajo parámetros sectarios y la creación de una relación estructural de dependencia respecto al gran capital, incluso en sectores tradicionalmente autosuficientes, como la agricultura que se daba en el este a orillas del Éufrates (Quintana, p. 598).

Una vez lograda la independencia, la fragmentación política y desigualdad espacial generadas por el sistema de mandatos resultó en un largo y violento proceso de formación del Estado sirio, el cual, a pesar de existir formalmente a partir de su independencia en 1946, mantuvo fronteras fluidas y se materializó a través de una lucha febril por la conquista interna y el control del territorio.¹ Dostal resalta que, desde su independencia hasta la consolidación del Estado en la década de 1970, ocurrieron más de una docena de golpes de Estado en Siria, lo cual es indicativo de la fragilidad del *statehood* (unidad o capacidad de gestión estatal) en el territorio y explica el desarrollo del ejército como “el instrumento más efectivo para ejercer el poder político” (Dostal, 2014, p. 19). Este proceso puede ser relacionado al vínculo que encuentra Charles Tilly entre la guerra y la formación del Estado nacional, el cual resulta en una desproporción importante entre la organización militar y otras formas de organización civil contextos intervenidos por la colonización, principalmente a causa de la falta de una dinámica de *negociación* entre lo civil y lo militar, así como por el peso de fuerzas exógenas coloniales que intervienen en la conformación del ejército (Tilly, 1985, p. 186).

Incluso después de las independencias, la continua dominación colonial sobre Siria y el mundo árabe dada por la expansión del sistema capitalista fue retada desde múltiples narrativas islamistas,

¹ Más allá de la disputa territorial propia del conflicto actual, autores como Emma Lundgren Jörum identifican una fluidez histórica en las fronteras del Estado sirio, encarnada por las anexiones de la provincia de Hatay (también llamada Alexandretta) en el noreste, negociada entre Turquía y Francia en 1938, y posteriormente por la anexión israelí de los Altos de Golán en 1967. Ambos territorios continúan siendo reivindicados por el estado sirio hasta la fecha.

socialistas, comunistas, arabistas, antiimperialistas, tercermundistas, etc., que florecieron a lo largo de Medio Oriente durante el Siglo XIX. Es en este contexto histórico de Guerra Fría, resistencias y política sectaria postcolonial que debemos situar la fundación del Partido Baaz, un partido panarabista de alcance transnacional que, en Siria, se consolidó internamente en 1970 a través del Movimiento Correctivo encabezado por Hafez al-Assad, un militar y político perteneciente a la minoría Alawita (Jörum, 2014, p. 30). A lo largo de 30 años, Hafez al-Assad fue protagonista de un sistema de gobierno unipartidista de corte sumamente militarista y nacionalista, el cual se sostuvo en una narrativa de *resistencia* nacional cuyos ejes eran el confrontamiento contra Israel y la hegemonía de Estados Unidos, el acercamiento político-militar hacia la URSS, y el dominio regional sobre Líbano y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) (Kerr y Larkin, 2015, p. 13).

El gobierno de Hafez al-Assad resulta crucial porque fue el primer gobernante capaz de edificar una territorialidad propiamente estatal en Siria, dada por un sistema político que, a través de una mezcla de medidas formales e irregulares, logró tanto la *monopolización de la violencia legítima* a través del control militar sobre el territorio sirio como la orientación de los flujos económicos en un sentido nacionalmente unitario. Esto se dio a través de mecanismos altamente centralizados desde el Estado, cuyo objetivo era construir infraestructura necesaria para articular la economía entre los principales centros urbanos, Damasco y Alepo, así como para mantener estables las condiciones de vida en el campo y las periferias a través de subsidios, transferencias de capital e inversiones públicas. Esta política de nacionalismo económico, el cual se sostenía de una ideología modernista que buscaba sacar a Siria de su *atraso* crónico a partir de la educación de las masas por parte de las élites *ilustradas*, se impulsó incluso en el campo de las representaciones. Della Ratta ha estudiado, por ejemplo, la manera cómo las élites políticas y culturales de la era Assad se valieron del control audiovisual y la producción de series de TV (*musalsalat*) con el objetivo de impulsar la idea de la patria

(*al-Watan*) siria como parámetro identitario dominante, colocándolo por encima del crisol lingüístico y religioso que utilizaron los franceses para subordinar a la población (Della Ratta, 2018, pp.35-55).

En este sentido, el Baazismo encabezado por Assad es más que un episodio en la historia del Estado en Siria: es el tránsito de una representación colonial ficticia a una realidad territorial, económica, militar y simbólicamente tangible. Sin embargo, el Estado Baazista en la práctica reprodujo dinámicas fragmentarias a través de tratos favorables para las élites políticas y económicas, mayoritariamente (mas no exclusivamente) alawitas, cercanas al ejército y al Estado. Más aún, incluso si se impulsó políticamente la representación unitaria y laica de la sociedad siria, las contradicciones poscoloniales contenidas en el territorio no se eliminaron de raíz y se tuvieron que administrar por medio de un sistema de *paz autoritaria* encarnado en la creación *de facto* de dos ejércitos distintos. Un ejército profesional, confesionalmente diverso, encargado de defender las fronteras externas del Estado y representar someramente al nacionalismo sirio, y una guardia pretoriana, acuerpada por unidades confesional y familiarmente cercanas a Assad, encargada de defender al régimen a través de su despliegue frente a amenazas internas (Kerr y Larkin, 2015, p. 43). De esta manera, la territorialidad del Estado Assadista se tiene que entender como un constructo cuya existencia dependía del uso de medidas altamente centralizadas, tanto violentas (i.e. represión directa por parte del ejército y de milicias irregulares) como no violentas (transferencias de capital, subsidios), con el objetivo de pacificar, superficialmente, las tensiones latentes contenidas en las periferias.

Una vez desmantelada la URSS, el principal patrocinador del gobierno de Assad, el liderazgo del Baaz mantuvo su narrativa contrahegemónica y antiimperialista en el discurso, pero en la práctica dejó de resistir a la expansión del sistema capitalista y empezó a implementar políticas neoliberales de apertura económica desde 1986 y a lo largo de la década de 1990 (Abboud, 2020). Tras la muerte de Hafez al-Assad en el año 2000, le sucedió su hijo y actual cabeza del

gobierno, Bashar al-Assad, quien adoptó una narrativa abiertamente reformista, superficialmente contraria al modelo autoritario de su padre, la cual prometía la lucha contra la corrupción y la apertura política-económica de Siria. Esto dio lugar a un breve periodo de debate público dirigido hacia la sociedad civil, ampliamente conocido como la *Primavera de Damasco*, el cual en la práctica resultó en la cooptación de la oposición y, al divulgar tanto la imagen de Assad como un líder comprometido con la apertura (Della Ratta, 2018) como las dificultades de las élites urbanas para formar un frente único frente al régimen (Álvarez-Ossorio, 2012), legitimó la continuidad del unipartidismo baazista a lo largo de la próxima década. En este contexto, la reforma económica que empezaba a implementarse fue agudizada por la aplicación de un nuevo modelo económico denominado *Economía Social de Mercado*, lo cual conllevó a la propagación de dinámicas de capitalismo amiguista (*crony capitalism*) y el surgimiento de nuevas élites nacionales a costa de la degradación de las condiciones de vida en las periferias agrarias, económicamente dependientes de las transferencias de capital y los subsidios por parte del Estado (Abboud, 2020). Estos espacios, afectados desproporcionadamente por la sequía que azotó al Medio Oriente a partir de 2006, fueron posteriormente uno de los principales escenarios de las protestas y movilizaciones sociales en las que se desató la espiral de represión Baazista, cuyo resultado fue la transformación gradual del territorio sirio en aquello que Nazih Richani denomina un *sistema de guerra*.

En suma, al ser producto de la colonización y el dominio territorial por el sistema hegemónico, el ordenamiento territorial que nace de los Acuerdos Sykes-Picot y el Mandato Francés se debe entender como la implantación de las concepciones europeas del territorio en la región (Hanne, p. 17), lo cual conllevó a un proceso de parcelación territorial y organización política del espacio (Cataia, 2008, p. 2) ligado a la inserción estratégica de Medio Oriente bajo parámetros favorables para los centros del sistema hegemónico. En Siria, el proceso colonial resultó en la formación de un tipo particular de Estado nacional, construido a través de una lucha larga y violenta que generó contradicciones una

vez que se articuló como constructo político controlado por una clase privilegiada interna que obtuvo beneficios de su alianza con élites económicas transnacionales (Dostal, 2014, p. 10), puesto que el Estado nacional nace intrínsecamente ligado a la dominación de clases y a la reproducción de un sistema hegemónico global. En este sentido, la transformación de Siria en un territorio en guerra se tiene que entender como un proceso de colapso de la territorialidad del Estado Baazista en Siria, construida por las élites Assadistas bajo un modelo centralizado y neopatrimonial dependiente de mecanismos económicos, militares y simbólicos que empezaron a abandonarse como parte de un proceso de apertura neoliberal del territorio.

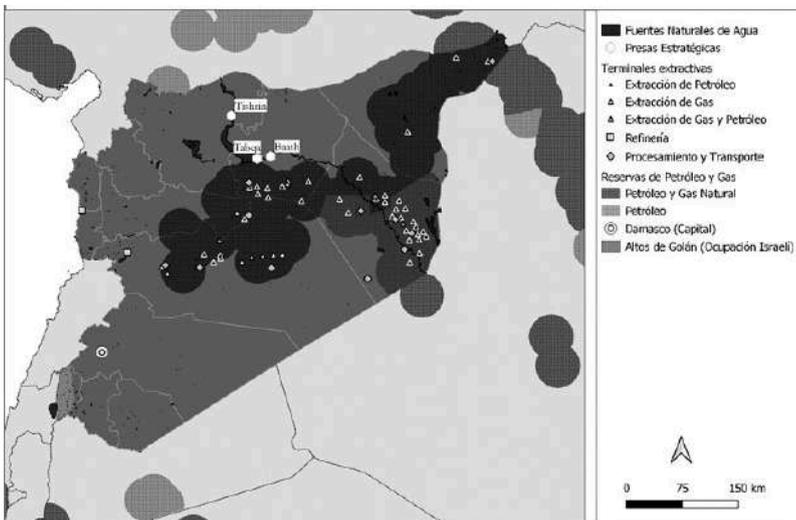
Para entender la situación de guerra que se vive en Siria desde hace cerca de 10 años, es importante de igual manera identificar cómo el territorio sirio ha sido significado como un espacio estratégico ligado a la necesidad de controlar “todo aquello con lo que se construye la materialidad, o lo estratégico de lo estratégico” (Ceceña, 2013, p. 66). Contrario a lo que sucede en otras partes de la región, como Irak o los emiratos de la Península, Siria no es un territorio abundante en riquezas estratégicas, ni energéticas ni minerales. Gilberto Conde identifica que, hacia 2007, las reservas probadas de petróleo en Siria rondaban en torno a los 2500 millones de barriles, lo cual contrasta tajantemente con el mínimo de 115.000 millones de barriles en Irak (Conde, p.31), y es equiparable a las reservas probadas en Argentina (IAPG, 2017).² En Siria, el significado del petróleo y el gas como insumos estratégicos tiene más que ver con su utilidad para captar divisas y la satisfacción de las necesidades energéticas internas – cuestiones sobre todo ligadas a la capacidad de hacer la guerra, al *statehood* y a la capacidad de lograr el control efectivo sobre el territorio.

Pese a esta escasez relativa de riquezas, Siria ha sido producida como un *espacio estratégico* a partir de las retículas propias de la

² Desde 2007, el seguimiento de la exploración de reservas petroleras iraquíes ha subido este número a 142.000 millones de barriles.

dominación del sujeto hegemónico, de manera que juega un papel importante dentro de las dinámicas geopolíticas que actualmente se juegan en Medio Oriente. Saracho resalta que los espacios estratégicos “no son puntos fijos, que tienen una capacidad ‘estratégica’ inherente, sino que dependen en gran medida de los actores que estén generando dicha estrategia, de las condiciones espacio-tiempo en el que se enmarcan y de su ‘lugar’ sistémico en el tejido del sistema-mundo” (Saracho, p.22). En el caso específico de la estrategia estadounidense, esto tiene que ver con la necesaria proyección de su hegemonía frente a sus rivales regionales, principalmente Irán y Rusia, así como el despliegue contra grupos interesadamente identificados como terroristas, la protección de sus aliados (i.e. Israel) y cuestiones como “garantizar el libre flujo del petróleo” y “asegurar el equilibrio y la seguridad regional” (Ghotme, p. 287).

Mapa 2. Siria: riquezas estratégicas



Fuente: elaboración de Christian Jean Faci.

En este sentido, la formación de una situación de guerra en Siria necesariamente se tiene que contextualizar dentro de la realidad y los antagonismos geopolíticos dados en las escalas regional y global, lo cual plantea la posibilidad de la articulación de la guerra como estrategia de contención y proyección hegemónica en un sentido más amplio. Esta tesis ha sido propuesta por autores como Koryvko y Ghotme, quienes plantean de diferentes formas que la guerra en Siria ha sido estratégicamente orquestada como una forma de ejercer la dominación y las dinámicas de proyección hegemónica provenientes desde Estados Unidos. Esta hipótesis, sin embargo, necesariamente se tiene que contrastar con la trayectoria y la corporalidad de la guerra en un nivel más local, en vista de generar un esquema auténticamente transescalar y territorialmente situado del conflicto.

Para este fin, resulta útil la noción de *sistema de guerra* acuñada por el politólogo Nazih Richani. Más allá de la identificación de la situación de guerra en Siria como un fenómeno sistémico, en el sentido de una manifestación territorial de un sistema mundial de guerra, hablar concretamente de la guerra en Siria como un *sistema* de manera más local resulta útil en algunos sentidos. Por un lado, facilita la categorización, esquematización y mapeo de los flujos políticos y militares de la plétora de actores involucrados, ya que nos aporta una totalidad metodológica a partir de la cual podemos ordenar las dinámicas del conflicto. En segundo lugar, el uso de esta categoría es útil para hacer puentes conceptuales con dinámicas de violencia que, en América Latina, nos resultan más familiares. Richani desarrolló el grueso de su marco teórico pensando en su aplicación al caso de la guerra civil en Colombia (Richani, 2003); es hasta 2016 que escribe un texto, utilizando las mismas categorías de análisis, para analizar el conflicto en Siria (Richani, 2018). Esto nos ayuda a desmentir la idea de que las guerras en Medio Oriente son más complejas y multidimensionales que las nuestras, y demuestra que, pese a la articulación del conflicto con variables propias del caso como la cuestión religiosa, es posible analizarlas en los mismos términos.

Richani define un sistema de guerra como “un conjunto de relaciones políticas, económicas y militares forjadas a través de las interacciones de actores violentos tras el inicio de una guerra civil” (Richani, 2018, p. 154). Se trata de una totalidad organizada, cuyas unidades o componentes interactúan a través del ejercicio de la violencia, lo cual “los une en una relación sistémica que, a su vez, conforma su propia dinámica” (Richani, 2003, p. 24). Los sistemas de guerra tienen tres características o condiciones que los determinan:

- El fracaso del ámbito institucional para “mitigar, arbitrar o mediar los conflictos sociales que polarizan el sistema de gobierno”.
- Una situación de impasse, es decir, “una correlación de fuerzas que no produce un ganador definitivo” una vez que el conflicto escala a una confrontación violenta.
- “La emergencia de una política económica que sostiene la guerra” (Richani, 2003, p. 25; 2018, p. 154)

El autor utiliza este esquema para identificar por qué y cómo se extienden las guerras civiles más allá de un cambio de fuerzas coyuntural, dando lugar a conflictos de larga duración en los que la violencia se convierte en una interrelación permanente dentro de un territorio en disputa.

Una vez que un conflicto adquiere estas características y se transforma en un sistema, se dice que entra en punto de equilibrio, a partir del cual se mantiene estable siempre que no haya cambios en la relación interna y la distribución de fuerzas. A pesar de la tendencia general a la perpetuación de la violencia a largo plazo, los sistemas de guerra rara vez se mantienen en un mismo punto de equilibrio. En la medida que el conflicto avanza y se dan cambios en la institucionalidad, la correlación de fuerzas y la economía política, estos suelen entrar en diferentes fases y se recalibran en puntos de equilibrio distintos.

Por lo que respecta a la economía política y la situación de *impasse*, el autor señala que existen dos tipos. Como parámetro central,

desarrolla el concepto de *cómodo impasse*, equiparable a las nociones de equilibrio de fuerzas o empate negativo, el cual existe cuando “los actores en conflicto logran establecer áreas bajo su control [...] para reagruparse, rearmarse, entrenar y reclutar; son lugares relativamente seguros y no se ven afectados por la guerra de baja intensidad” (Richani, 2018, p. 160). Una vez que cambia esta situación, aparece la posibilidad de un *impasse menos cómodo*, el cual es indicativo de un cambio importante en la correlación de fuerzas que amenaza al punto de equilibrio, forzando su recalibración o la potencial extinción del sistema.

Una última característica de los sistemas de guerra que vale la pena mencionar es aquello que el autor denomina interdependencia compleja, concepto que define como “la dialéctica entre conflicto y cooperación entre actores en guerra, mediada por su respectivo agenciamiento” (Richani, 2018, p. 162). De forma sintética, la interdependencia compleja hace referencia a aquellas situaciones, aparentemente contradictorias, en las cuales actores antagónicos cooperan entre ellos, ya que al hacerlo reciben una ganancia neta que mantiene o mejora, sea sus capacidades para hacer la guerra, sea el alcance de su eventual victoria.

Trayectoria histórica y fases de la guerra

Pese a las limitaciones del marco teórico de Richani, al entender la guerra en Siria desde un enfoque local que coloca a la agencia y la racionalidad de los actores por encima de las estructuras, la noción de sistema de guerra resulta útil para situar nuestro análisis dentro de una escala concreta y generar un esquema a partir del cual podemos identificar las principales temporalidades por las cuales ha transitado el conflicto. Si bien es importante resaltar que toda parcelación histórica de un proceso de guerra tan largo y complejo como el sirio necesariamente parte de cierto grado de arbitrariedad, para fines

prácticos proponemos una división en cuatro fases, fundamentada en las siguientes variables:

- La condición de fragmentación o unidad de la oposición anti-Assad.
- Formas predominantes de guerra y distribución de las capacidades militares.
- Ubicación geográfica de los principales focos de combate.
- Estructuración de las áreas de influencia y grado de control sobre los territorios ocupados.
- El peso y el tipo de relaciones provenientes de actores y fuerzas extranjeras.

Marzo 2011 – junio 2014

El estallido de la guerra en Siria no fue una ocurrencia repentina y total, y se tiene que entender como la metástasis gradual de un conjunto de protestas y movimientos sociales cuyo descontento estaba enraizado en la erosión de las condiciones de vida en las periferias agrarias, derivada de la apertura económica. Autores como Richani y Pinto han señalado que, contrario a lo sucedido en otros países partícipes de las *Primaveras Árabes* como Túnez y Egipto, las protestas sociales en Siria no fueron movilizaciones urbanas localizadas en las plazas de grandes ciudades, más bien tendieron a ser rurales, territorialmente dispersas y periféricas (Pinto, 2012, p. 353). Fueron principalmente las regiones rurales en el este y en el sur (i.e. Daraa', Deir Ez-Zour), así como la ciudad de Hama, los principales puntos de origen a partir de los cuales empezaron a propagarse los primeros brotes de las movilizaciones sirias. Gilberto Conde también señala que, a comparación de Egipto y Túnez, el levantamiento sirio fue tardío. El catalizador de las revueltas o la *intifada* en este primer momento fue la violencia ejercida por las fuerzas del gobierno de Daraa', una pequeña ciudad en el sur de Siria, contra un grupo de adolescentes

por escribir en las paredes consignas antigobierno inspiradas de las movilizaciones del resto del mundo árabe (Conde, p.143).

Como se apuntó anteriormente, estas movilizaciones tienen que situarse más allá de la coyuntura y verse como parte de un proceso de degradación de la seguridad alimentaria y las condiciones socioambientales en las periferias, ante el efecto de las políticas neoliberales implementadas por el gobierno y su articulación con la sequía que azotaba al territorio desde 2006. La relación entre la degradación socioambiental y la guerra en Siria es fundamental, ya que ha despertado la necesidad de generar investigaciones interdisciplinarias que vinculan la crisis climática dada por el calentamiento global con el conflicto y las guerras. Autores como Gleick, por ejemplo, han concluido que el cambio en las condiciones hídricas y climáticas de la región tuvieron un papel determinante en el deterioro de las condiciones económicas y de vida en Siria, lo cual tiene una relación directa con la movilización social y el conflicto (Gleick, 2014, p. 331). Esto despierta la necesidad de situar el conflicto en Siria como parte de una totalidad organizada o un *sistema complejo* en el que la realidad geopolítica está intervenida por “el deterioro del medio físico y de las condiciones de vida en extensas regiones” (García, 2010, p. 66).

En este sentido, es importante cuestionar planteamientos como los de Korybko (Korybko, 2015), Bensaada (Bensaada, 2015) y Carapico (Carapico, 2013), quienes interpretan las movilizaciones sirias a partir de “teorías que afirman que instituciones y gobiernos externos actuaron para hacer un cambio político en la región, a través de medios pacíficos y no violentos”, manipulando el actuar de la sociedad siria “según su propia agenda, a costa de las necesidades locales” (Della Ratta, p.125). Korybko, por ejemplo, propone de manera muy sucinta que la revuelta siria está emparejada con la crisis ucraniana, en la medida que fue una *revolución de color* orquestada por Estados Unidos con el fin de balcanizar el territorio y desestabilizar las periferias rusas. Carapico, por su parte, ha hecho énfasis en el papel que jugaron formas de activismo digital y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) occidentales en el proceso de formación de

la sociedad civil en Siria, en vista de llevar a cabo una suerte de *activismo desterritorializado* (*deterritorialized activism*) capaz de operar por encima de la soberanía nacional del Estado en Siria (citado en Della Rata, p. 128). Al hacer esta crítica a estos enfoques, no estamos negando la existencia de un interés externo por manipular las movilizaciones según agendas geopolíticas externas. Sin embargo, es importante resaltar que toda dinámica de intervención en esta fase necesariamente operó a través de su articulación y alianzas con grupos locales, cuyas sujetidades y objetivos surgen desde las circunstancias vividas en Siria.

En sus primeras fases, la movilización social fue en gran medida pacífica y no retaba la existencia misma del Estado sirio. Hanne señala que, en este primer momento, las revueltas “no se manifestaban en contra de la nación siria como tal, sino contra un sistema político-económico particular” (Hanne, 2018, p. 27). Esta fase, dirigida por aquellos actores de la sociedad civil que se empezaron a manifestar directamente en contra de la autoridad de Assad, desató una dinámica de militarización que dio fuerza a los sectores islamistas de la oposición (Haidar, 2017, p.72) a lo que le siguió la degradación de la situación hacia una espiral de violencia y el eventual desgarramiento de la territorialidad del Estado en Siria. En este sentido, fueron clave las medidas represivas del régimen para poner fin a las revueltas desde un principio, especialmente a través del despliegue de sus fuerzas de élite como la Cuarta División Blindada, agentes de seguridad e inteligencia (*mukhabarat*) y un conjunto de milicias paramilitares irregulares ampliamente conocidas como *shabiha* (espectro o fantasma en árabe) (Jenkins, 2014, p. 6).

De esta manera, Bashar al-Assad intentó solucionar la situación de la misma manera que históricamente lo había hecho su padre, a través de una combinación de estrategias de despliegue selectivo de fuerzas pretorianas confesionalmente cercanas, uso de fuerzas paramilitares y la implementación de tácticas denominadas *clear and hold* (Holliday, 2013, p. 10), cuyo objetivo era impulsar la fragmentación entre los diferentes sectores de la oposición y, así, agudizar las

dificultades de la sociedad civil y de los grupos rebeldes para formar una alternativa política realista y unificada.³ También se buscaba frenar la gestación de una guerra civil a través del control mediático de la narrativa sobre las movilizaciones, impulsando representaciones sectarias que presentaban oficialmente a la oposición como extremistas manipulados por potencias extranjeras, con el objetivo de dismantelar la unidad secular de la patria siria (Della Ratta, 2018, pp. 118-142). Así, se buscaba desmotivar políticamente a los sectores seculares y a los grupos islamistas más moderados dentro de la oposición, en vista de frenar la conformación de una situación de guerra civil y restaurar el modelo de *governabilidad mediante el terror* característico del manejo territorial por parte de la administración Baazista (Pinto, 2012).

Conforme fue avanzando el conflicto, sin embargo, las limitaciones organizativas de las Fuerzas Armadas Sirias (FAS), el aumento de la defección dentro de las filas del ejército, la erosión del capital militar que había sido acumulado durante la Guerra Fría y la dependencia del gobierno en el despliegue irregular se hizo cada vez más visible, dando lugar a pérdidas importantes de territorio y de infraestructura estratégica. En 2013, esto conllevó a la firma del Decreto Legislativo 55, el cual permitía “la contratación de compañías privadas para proteger la infraestructura petrolera y gasífera” (Waters, 2019). Este decreto constituye la plataforma legal a partir de la cual Compañías Militares y de Seguridad Privadas (CMPS) rusas como ENOT Corp, Turan y, sobre todo, el Grupo Wagner (Østensen y Bukkvoll, 2018, pp. 24–26) pudieron ser contratadas por élites cercanas al gobierno para llevar a cabo operativos de recuperación de campos petroleros y gasíferos, los cuales, desde 2013, empezaban a ser tomados por el incipiente Estado Islámico (EI) (Østensen y Bukkvoll, 2018, p. 25). Pese al fracaso generalizado de estos operativos, su presencia

³ Holliday define las tácticas *clear and hold* como el despliegue de fuerzas armadas en grandes centros poblaciones para despejarlos, para posteriormente sostenerlos usando una guarnición pesada que asegure su posición.

constituye un antecedente importante para el escalamiento de los operativos contra fuerzas opositoras por parte de actores privados en años siguientes (Sukhankin, 2019, pp. 12, 13) y es un precedente central para la intervención directa de Rusia en 2015. Además del ingreso de las CMPS rusas, el Decreto Legislativo 55 contribuyó a la fragmentación interna y a la desarticulación operativa dentro de las fuerzas pro-régimen, dada la integración al sistema de guerra de milicias mercenarias pro gobierno ligadas a las élites económicas del Estado, tales como las Fuerzas Tigre (Quwwat al-Nimmr), los Halcones del Desierto (Liwa' Suqur al-Sahra) y el grupo palestino *al-Quds Liwa' al-Quds* (Waters, 2019).

De acuerdo con Richani, esta primera fase de la guerra tiene como característica principal el hecho de que “la oposición estaba compuesta por más de mil grupos armados con planes y objetivos que competían entre sí y sin estructuras de comando central” (Richani, 2018, pp. 160–161), lo cual evoca una idea de anarquía hobbesiana desatada frente al colapso del Estado. Esta imagen resulta útil para ilustrar las contradicciones contenidas por el modelo autoritario del Estado sirio en tiempos de paz, una vez que se identifica que la situación de *anarquía* (i.e. heterogeneidad ideológica, proyectos políticos disímiles y fragmentación social) no es una condición histórica inherente al territorio, sino resultado de la partición colonial del territorio y del propio proceso de construcción del Estado como forma de administración territorial a través de la guerra. Pese a esto, la noción de anarquía hobbesiana en el conflicto sirio ha sido criticada por autores como Baczkó, Dorronsoro y Quesnay, quienes argumentan que, en sus inicios, la insurgencia estuvo caracterizada por el sentido de pertenencia a una oposición nacionalista unitaria, *la coexistencia pacífica de diversas unidades militares* y su acomodo gradual bajo una agrupación paraguas apoyada por las potencias occidentales: el Ejército Libre Sirio (ELS) (Baczkó, Dorronsoro y Quesnay, 2016a, p. 106).

Esta perspectiva que enaltece al ELS como la principal fuerza *moderada* contra el autoritarismo de Assad, sin embargo, está atravesada por una lectura fuertemente occidentalizada del conflicto, la cual

ignora tanto las dificultades que tuvo el ELS para llevar a cabo operativos exitosos como la disimilitud de proyectos políticos que militaban bajo el mismo paraguas, el cual, en la práctica, se sostuvo únicamente por el apoyo que recibía desde las potencias occidentales. Es importante resaltar que las medidas del régimen para desmovilizar a los sectores moderados (tanto seculares como islamistas) por medio de la represión, en conjunto con las tácticas de despliegue selectivo que operaban con mayor violencia en las periferias sunitas que tendían más a la militancia armada e históricamente albergaban grupos islamistas, conllevó a la marginalización del sector moderado y secular frente a una narrativa cada vez más sectaria del conflicto. La *oposición moderada* encarnada por el Consejo Nacional Sirio (CNS, posteriormente denominado Coalición Nacional), un cuerpo civil exiliado que operaba desde Estambul con el apoyo de Turquía y Estados Unidos, permanecía incapaz de crear mecanismos adecuados para coordinar las diferentes facciones que enarbolaba el ELS, a pesar de la creación de un Consejo Militar Supremo (CMS) constituido por 30 representantes designados directamente por los grupos rebeldes (Lister, 2016, p. 8). En última instancia, la “heterogeneidad ideológica y la división interna de la oposición” (Álvarez-Ossorio, 2012), así como el choque de intereses que resultó del reconocimiento estadounidense de algunos grupos islamistas como grupos terroristas (Anderson, 2016, p. 48), conllevó a la erosión de la legitimidad del CMS y las capacidades operativas del ELS. A la par, la insurgencia islamista continuaba fortaleciéndose militar, económica y territorialmente, y se sublimaba gradualmente en la lucha de dos grupos: el Frente al-Nusra, una franquicia nacionalista de Al-Qaeda, y el autodenominado Estado Islámico (EI), también conocido como ISIS o Daesh.⁴

⁴ La denominación del grupo ampliamente conocido como Estado Islámico (EI), ISIS (por sus siglas en inglés, Islamic State in Iraq and Siria), ISIL (por sus siglas en inglés, Islamic State in Iraq and the Levant) o Daesh (por sus siglas en árabe, Dawla al-Islamiyya fi al-'Iraq wa al-Sham), es una cuestión complicada que ha suscitado controversia, ya que varias personas rechazan el reconocimiento de su autonombramiento como *Estado*. Por convención, utilizaremos el término *Estado Islámico* (EI).

Esta fase termina con la islamización del conflicto y su tránsito a una dinámica de guerra que, a pesar de estar protagonizada por milicias irregulares, grupos islamistas, compañías privadas de defensa nacionales/extranjeras y demás fuerzas no estatales, empezaba a presentar características de guerra convencional, una vez que el Estado sirio empieza a sufrir pérdidas significativas en ciudades importantes y el EI aprovecha el vacío de poder que se da en las periferias petroleras del Este para declarar su califato transnacional desde la ciudad de Raqqa (Celso, 2018, p. 103). De esta manera, el islamismo sunní militante del EI se sedimentó como la principal fuerza de oposición armada contra el Estado Baaz, cuyas capacidades militares estaban cada vez más dañadas y permanecían incapaces de mantener el control efectivo sobre el territorio. El *caleidoscopio de conflictos internos* enarbolados por el ELS permaneció operativamente débil y, frente a la falta de apoyo parte de las potencias occidentales, entró en una fase de declive tras el cual su división en facciones abrió paso a los grupos islamistas y frenó su pretensión de consolidarse como una alternativa realista frente al sistema Assad (Lister, 2016, pp. 9–13).

Junio 2014 – agosto 2016

La consolidación del EI como el principal grupo insurgente frente al Estado sirio, así como la expansión transfronteriza de su proyecto territorial desde Irak, es un punto de quiebre fundamental en la medida que rompió el control *de facto* del Estado sirio de vastas extensiones claramente delimitadas de territorio y creó un proyecto protoestatal alternativo al interior de sus propias fronteras. Richani señala que, una vez que el EI logra ocupar Raqqa y declara la fundación de su califato, empezó a articular sus estrategias de combate con estrategias de construcción de Estado (*state-making*) que iban más allá del simple monopolio efectivo de la violencia. Siguiendo el modelo de Charles Tilly, estas incluían la institucionalización de su

dominación a través de cortes judiciales y la creación de sistemas tributarios benéficos para las élites locales (Richani, 2018, p. 166), así como la creación de un sistema financiero autosustentable basado en la “extorsión, el robo, el saqueo de bancos, el tráfico de personas, el control sobre campos de petróleo y gas y el contrabando de bienes culturales” (Beccaro, 2018, p. 211). Frente a esta situación, la academia occidental hacia el conflicto retomó la narrativa del EI y empezó a cuestionar de manera explícita la artificialidad de las fronteras estatales y la posibilidad de una reorganización política del espacio social que pusiera fin al “régimen Sykes-Picot” (Salyer, 2018).

Tras expandirse y consolidar su control sobre pozos petroleros importantes, principalmente los campos petroleros de Mosul en Irak y los campos de Deir Ez-Zour y Palmira en Siria, el EI logró desarrollar endógenamente sus capacidades militares a través de “positive resource shocks” (Kalyvas, 2015, p. 45), véase la captura de cantidades importantes de armamento pesado, y exógenamente a través de su vinculación con redes transnacionales de venta de energéticos y de compra de armas e insumos para hacer la guerra. Esto dotó al EI de un carácter protoestatal históricamente inédito para una insurgencia islamista y le permitió desarrollar capacidades militares convencionales suficientes para “llevar a cabo operativos militares sofisticados” (Beccaro, 2018, p. 211). En este sentido, el EI se debe analizar más allá de la identificación política que se le ha dado como grupo terrorista. Kalyvas, por ejemplo, ha resaltado la similitud que guarda el EI con los grupos tradicionalmente denominados como revolucionarios, puesto que demostró su capacidad de controlar efectivamente los territorios ocupados y articular tanto estrategias híbridas de guerra de guerrillas como estrategias convencionales, adecuadas según la situación (Kalyvas, 2015, p. 45). Estas tácticas han sido desarrolladas por autoras como Beccaro, quien argumenta que el EI se debe analizar como una organización *híbrida* cuyas tácticas de guerra irregular incluyen una plétora de armas y formas de hacer la guerra, incluyendo “capacidades convencionales, tácticas irregulares, actos terroristas y actividades criminales” (Beccaro, 2018, p. 210).

Las capacidades del EI incluso se deben estudiar más allá de su dimensión estrictamente militar, e incluso del control e institucionalidad territorial al interior de Irak y Siria, ya que en su apogeo incluían un aparato de propaganda bien consolidado, conocido como el Centro Mediático al-Hayatt, con lo que acrecentaron la capacidad de generar lazos operativos e ideológicos con redes terroristas en Europa y Estados Unidos. Así, hubo un proceso de militarización del espectro radioeléctrico y el alcance de la guerra en Siria se globalizó ante la exportación de narrativas dirigidas hacia las poblaciones suníes en Europa y Estados Unidos (Ølgaard, 2020). Esto da cuenta del hecho de que la situación de guerra en Siria es una guerra que se ha globalizado, de manera que el control sobre la narrativa y la producción audiovisual respecto a la guerra se ha configurado como uno de sus frentes más importantes. Della Ratta ha desarrollado de manera muy amplia el proceso de militarización del espectro radioeléctrico desde Siria a través de la producción, la publicación y la difusión de representaciones e imágenes de la guerra, lo cual constituye una disputa en la que participan diferentes grupos (i.e. el EI, activistas de la sociedad civil, medios y gobiernos extranjeros, e incluso las élites del Estado sirio) y resulta en su articulación dialéctica con la violencia vivida en el territorio (Della Ratta, 2018).

En el terreno, el gobierno de Assad perdió prácticamente la totalidad del Este y el Noreste del país, cediendo su control sobre las áreas de población mayoritaria kurda en vista de concentrar sus operativos y recuperar el control de su principal zona de interés, la espina dorsal siria que va desde Daraa hasta Aleppo. De acuerdo con Celso, esta retirada del Estado en el Kurdistán sirio contribuyó al eventual desarrollo del Partido de la Unión Democrática Siria (PYD), “una rama siria del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK)”, la cual contaba con un brazo armado conocido como las Unidades de Protección Popular (YPG) (Celso, 2018, p. 103).⁵ A la par, la erosión

⁵ Denominar al PYD como una *rama* del PKK es una cuestión políticamente con-
tenciosa, impulsada en gran medida desde Turquía. Es indudable que existen lazos

del capital militar y las capacidades de las Fuerzas Armadas Sirias eran cada vez más palpables, incluso más allá de los territorios controlados por el EI. Las acusaciones -imposibles de demostrar- que se han hecho al régimen sirio respecto al uso de armas químicas en ciudades como la Ghouta Oriental y Hama, así como al uso de las llamadas *bombas de barril* en grandes ciudades, se tienen que entender como acciones desesperadas para compensar la falta de municiones y el agotamiento del arsenal convencional de las fuerzas armadas.^{6 7} A partir de 2013, Hezbollah, un partido libanés militarmente activo e ideológicamente cercano al Baaz y a la minoría alawita, envió milicias para desplazar fuerzas rebeldes de ciudades fronterizas como Qusayr y asegurar los puntos estratégicos que articulaban la línea Damasco-Alepo y las costas, tras lo cual quedó inserto en el enjambre de milicias característico de las fuerzas pro gobierno (Celso, 2018, p. 103). A la presencia de Hezbollah, cuya importancia para el régimen sirio recaía en su conocimiento y experiencia en tácticas de guerra híbrida adquiridas en la guerra de 2006 contra Israel, se le sumó el “envío de soldados de la Guardia Revolucionaria y agentes de inteligencia iraníes a Siria” (Garduño, 2017, p. 253), los cuales se integraron (inicialmente de manera encubierta) para entrenar a las fuerzas Assadistas y luchar contra algunas milicias islamistas financiadas desde la Península Árabe, así como para “verificar el apoyo logístico, militar y mediático hacia algunas fuerzas” y “abrir canales de comunicación con grupos opositores para que se comprometieran a mantener los intereses de Irán” en caso de un vacío de poder que generara el colapso del sistema (Garduño, 2017, p. 254).

importantes entre ambas organizaciones, aunque sus características específicas sean difíciles de descifrar por los retos inherentes al estudio del conflicto sirio.

⁶ Para este tema, consultar Enrique Baltazar Rodríguez, “El Uso de Armas Químicas en Ghouta y la Geopolítica del Conflicto en Siria”

⁷ Acuerdo a Holliday, “bombas improvisadas hechas con barriles petroleros tiradas desde helicópteros sirio” (Holliday, 2013), a veces cargadas de material incendiario o clavos (Celso, 2018).

Inevitablemente, la degradación de las condiciones en Siria frente al colapso del ELS, el fortalecimiento mediático y territorial del EI, así como a la consolidación gradual de un *frente chíi* conformado por el régimen sirio, Hezbollah e Irán en las áreas controladas por el gobierno, despertó la atención de las potencias occidentales. Pese a esto, los antecedentes que presentaban Irak, Afganistán y, de manera más reciente, Libia redujeron en gran medida la probabilidad de una intervención directa mediada por las potencias occidentales. Desde 2013, las denuncias de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos contra el régimen de Bashar al-Assad por el uso de armas químicas en Ghouta, un barrio periférico de Damasco, estuvieron muy cerca de utilizarse para justificar una intervención militar e internacionalizar el conflicto sirio (Baltar, 2017, p. 271) En última instancia, sin embargo, las *líneas rojas* marcadas por Obama respecto a Siria resultaron bastante flexibles, de manera que su gobierno se abstuvo de llevar a cabo operativos que involucrarán directamente la presencia de tropas estadounidenses.

En su lugar, la administración Obama optó por una combinación del uso de poder aéreo y su asociación con agentes locales, en vista de generar alianzas en un nivel no estatal que le permitieran llevar a cabo un despliegue basado en el uso de drones y operativos especiales (Celso, 2018, p. 107). Con este fin, se creó un grupo de trabajo conjunto (Joint Task Force) conocido como U.S. Special Operations Joint Task Force—Operation Inherent Resolve (SOJTF-OIR) (Brau, 2019, p. 96) con el objetivo de hacer la guerra contra el EI a través de operativos aéreos, coordinar la estrategia estadounidense en Irak y Siria, y en última instancia vincularse con grupos locales afines a sus intereses, en vista de mantener su posición como *stakeholder* en el desarrollo del conflicto sirio. Para reducir la cantidad de tropas en el terreno, se aprovechó la alianza existente con los kurdos y la condición general de Irak como territorio ocupado, en vista de generar acercamientos con las facciones kurdas del YPG, para así llevar a cabo operativos quirúrgicos que buscaban destruir objetivos estratégicos y desmantelar el proyecto proto-estatal del EI sin necesidad de reproducir el modelo de intervención directa implementado en

Irak. De esta manera, la presencia estadounidense se convirtió en un activo permanente dentro de los territorios kurdos en el norte y el este, por medio de un operativo difuso y quirúrgico cuyo objetivo era extender el despliegue de espectro completo hacia el territorio sirio:

Al prohibir que las fuerzas armadas de EE. UU. combatieran en tierra contra los militantes del Estado Islámico, la administración de EE. UU. esperaba manejar las consecuencias políticas de verse arrastrada a otro conflicto regional. Después de cierta confusión inicial, en 2015, la administración siguió una política de degradar y destruir el proyecto de construcción estatal del Estado Islámico. Los ataques aéreos estadounidenses se dirigieron a las concentraciones de tropas del califato y sus nodos logísticos estratégicos. Al ayudar a las fuerzas locales con las operaciones aéreas, Estados Unidos golpeó la infraestructura de transporte y energía del califato (Celso, 2018, p. 107) 107).

Para este punto, la situación de guerra en Siria había llegado a un punto de equilibrio radicalmente distinto. El gobierno, además de perder los pozos petroleros y las periferias agrarias en el Noreste, el Este y partes del Sur, estaba cada vez más presionado por la plétora de milicias de la oposición que operaban y comenzaban a ganar fuerza en las ciudades. Pese a la intervención iraní y la entrada de Hezboallah a favor del régimen, la pérdida de partes de Alepo desde 2012 y la erosión general de las capacidades de las Fuerzas Armadas Sirias para coordinar a las milicias que luchaban a su favor, conllevó un fortalecimiento general de varios sectores islamistas de la oposición, la cual gozaba de apoyos externos desde Turquía, Estados Unidos y las monarquías del Golfo Pérsico, y empezaba a retar la posición del régimen en la espina dorsal del Estado (la ruta Damasco-Homs-Alepo), e incluso Latakia, el bastión histórico de los alawitas.

Es en este contexto que se debe entender la intervención rusa en otoño de 2015, la cual transformó nuevamente la situación y recalibró el punto de equilibrio de la guerra. Pese a estar involucrada políticamente en la cuestión siria y mantener vínculos diplomáticos y militares importantes con Assad desde el inicio de la revuelta, la

intervención rusa en Siria hasta ese momento se había dado de manera encubierta y por medio de operativos irregulares, principalmente por medio del despliegue de CMPS por élites cercanas al gobierno, así como por grandes contratos de venta de armas. Acuerdo a Richani, el flujo de armas dado por Rusia “fue un cambio de dirección en el balance de fuerzas, el cual se había estado inclinando hacia la oposición durante la primera fase de la guerra civil que duró hasta mediados de 2013” (Richani, 2018, p. 173). Esta modalidad de participación exógena a través de la inserción de *inputs* al sistema de guerra, sin embargo, resultaba insuficiente para asegurar los objetivos estratégicos de Rusia hacia Siria y mantener estable la posición del gobierno en los territorios que controlaba. Así, una vez que se percató de los avances de la oposición en las provincias de Latakia, Idlib y Hama, decidió convertirse en un participante directo dentro del sistema por medio de un despliegue cabal de su fuerza aérea (Celso, 2018, p. 104). El objetivo era reestablecer la presencia que históricamente había tenido la URSS en el puerto de Tartus y compensar el deterioro de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas Sirias, generando mecanismos coordinados directamente por Rusia para reconstruir al ejército e integrar las milicias bajo un control unificado desde Damasco (Waters, 2019).

Tras su integración al sistema de guerra bajo la justificación de combatir al EI y defender la unidad y soberanía del Estado sirio (‘Ayek, 2020), Rusia sustituyó a Assad como la principal cabeza detrás de la coordinación de las milicias pro gobierno, y empezó a implementar una serie de planes para la reconstrucción de las Fuerzas Armadas del régimen (Waters, 2019). Así, se empezó a generar una situación en la que las fuerzas armadas bajo el mando de Assad adquirieron un carácter secundario dentro del proceso de guerra, mientras que la organización militar y la negociación político-diplomática quedó en las manos de Irán y Rusia. Este modelo de guerra, dominado por una dinámica de milicias unificadas bajo un mando externo ha sido denominado *Superpower Hybrid Warfare* por Anthony Celso, debido a que “las políticas estadounidenses y rusas hacia Siria presentan un caso único, en el que las intervenciones militares lograron sus

objetivos por un costo relativamente bajo debido a la determinación de sus socios locales para facilitar el cumplimiento de los objetivos de las superpotencias” (Celso, 2018, p. 92).

En este sentido, la noción de guerra híbrida utilizada por Celso está inspirada en la definición de Hoffman a partir de su análisis de la guerra de 2006 entre Hezbollah y Líbano, la cual tiene como base la articulación entre dinámicas de guerra convencional o tradicional y manifestaciones propias de la guerra irregular (Barrios, 2019), aunque se presta énfasis en el carácter instrumental que juegan las milicias en un esquema geopolítico dominado por el choque de intereses entre grandes potencias. El planteamiento de Celso resulta provocador en la medida que su posicionamiento respecto al concepto de *Guerra Híbrida* enarbola los operativos tanto rusos como estadounidenses en Siria, lo cual refiere a la lectura que han hecho varios analistas de la guerra en Siria como una “*proxy war* (guerra indirecta o guerra por procuración) entre patrocinadores regionales, más que como una guerra entre un dictador y un movimiento democrático popular”(Kavlick, Jones, Ward y Bauer, 2015, p. 2). El argumento de Celso está sostenido por una conceptualización impulsada por algunos autores rusos como Dmitri Trenin, quien plantea que existe una *guerra híbrida global* entre Estados Unidos y Rusia debido a la revitalización de su posición geopolítica como una potencia global (Celso, 2018, p. 95). Esta noción ha sido internamente criticada por autores como Koryvko, quienes argumentan que la guerra híbrida es una cuestión propia de la estrategia estadounidense (Koryvko, 2017), y externamente por autoras como Bettina Renz, quienes argumentan que la noción de *guerra híbrida* ha conllevado a un análisis ahistórico e insuficiente respecto al despliegue militar ruso fuera de sus fronteras, hacia sus periferias. Más allá de interpretar la instrumentalidad del poder ruso desde la irregularidad, Renz argumenta que la intervención rusa en Siria demuestra ante todo la capacidad y disposición de Rusia para “llevar a cabo operativos fuera del espacio soviético, por primera vez en la historia post-soviética” (Renz, 2016, p. 11). En última instancia, la intervención rusa y la conformación

del frente Rusia-Irán-Hezbollah generó cambios suficientes en el sistema de guerra para asegurar la posición de Assad en los puntos estratégicos alrededor de Latakia y Damasco, permitiéndole empezar a reconstruir la territorialidad del Estado en sus articulaciones fundamentales e incluso a recuperar territorios y pozos petroleros.

Por su parte, la enemistad compartida entre el frente Rusia-Irán-Assad y las milicias apoyadas por Estados Unidos hacia el EI llevaron al declive de su territorialidad protoestatal. A partir de 2016, Estados Unidos se convirtió en una fuerza ocupante en Siria al establecer la base militar de *al-Tanf* cerca de la frontera con Jordania (O'Hanlon, 2019), con los objetivos de establecer un búfer entre Siria e Irán, bajo la justificación de llevar a cabo operativos y misiones de entrenamiento en contra del EI. Pese a esto, hacia marzo de 2016, fuerzas pro gobierno lograron recuperar territorios importantes en Palmira, en la región central de Siria (BBC, 2016), abriendo por primera vez desde el inicio de la guerra la posibilidad de comenzar a llevar a cabo la reconquista del territorio hacia el este. En última instancia, el apoyo estadounidense hacia las SDF permitió su consolidación como la principal fuerza efectiva en el este y el norte de Siria, lo cual aceleró el declive del islamismo militante en la región y abrió las puertas a un proceso de negociación de la territorialidad ante la liberación tanto del autoritarismo del EI como del régimen Baazista. Es hasta octubre de 2017 que el EI es expulsado definitivamente de su capital administrativa, Raqqa (Cockburn, 2017); sin embargo, la erosión de las capacidades convencionales que logró en su apogeo llevó a su dispersión y rearticulación como un conjunto de células irregulares en un sentido más tradicional. De esta manera, el EI en Siria pasó de ser una insurgencia con una territorialidad protoestatal, capaz de llevar a cabo operativos militares convencionales utilizando armamento pesado, a ser un actor irregular en un enfrentamiento asimétrico, dependiente del uso de tácticas propias de una guerra de guerrillas tales como escaramuzas, ataques suicidas, ataques a líneas de suministro (Al Nofal, 2019) e incluso quema de campos de trigo y cebada (Sly, 2019).

Agosto 2016 – octubre 2019

Al contar con un número relativamente reducido de tropas en territorio sirio, aproximadamente 538 hacia el fin de la administración Obama (Parsons y Hennigan, 2017), las operaciones conjuntas estadounidenses trabajaban directamente con las fuerzas kurdas y árabes agrupadas dentro de las SDF, en las cuales el YPG kurdo juega un papel determinante. El SOTJF-OIR, más allá de llevar a cabo y coordinar operativos estrictamente militares, trabajaba directamente con las SDF para llevar a cabo tareas civiles y de desarrollo institucional, en vista de jugar un papel activo en las formas de gestión, vivencia y producción en territorios sirios. Brau, por ejemplo, ha descrito la manera como los operativos estadounidenses del SOTJF-OIR trabajaron con autoridades locales en ciudades liberadas de la ocupación del EI, retomando su experiencia en la ciudad de Raqqa, a través de tareas civiles como la reconstrucción, apoyo y legitimación de consejos civiles alineados bajo los parámetros estratégicos del Departamento de Defensa (DoD) (Brau, 2020). De esta manera, es observable que el desmantelamiento de las capacidades territoriales del EI desató un proceso de negociación de la territorialidad en las ciudades liberadas, lo cual fue aprovechado por el despliegue estadounidense para mantener su presencia a través de la cooptación y su intervención dentro de lo civil.

Pese a esto, la renegociación territorial desencadenada por el colapso del EI también despertó propuestas de gestión territorial heterodoxas, las cuales negaban el legado colonial inherente a la institucionalidad y las fronteras del Estado sirio, el modelo autoritario que sostenía su existencia y su relación con el sistema capitalista. Este movimiento, liderado por el PYD en alianza con las SDF, se materializó con el anuncio de la creación de un sistema federal en el norte de Siria, conocido como Rojava, u oficialmente, como la Administración Autónoma en el Norte y el Este de Siria (NES) (Baczko, Dorrnsoro y Quesnay, 2016b, p. 177). A la propuesta territorial de Rojava, construida desde 2011 y desarrollada a lo largo del conflicto,

le subyacían décadas de represión baazista y vivencia en las periferias sirias, de forma que su creación tiene que contextualizarse como un proceso latente cuyas posibilidades de existir se dieron con el colapso de la territorialidad del Estado sirio y el surgimiento de un vacío de poder en el Kurdistán sirio (Castillo Quiñones en Conde, p. 116). Al proponer un modelo político alternativo denominado *Confederalismo Democrático*, cuyas formas de autogobierno y defensa del territorio retaban a la estatalidad autoritaria y a la inserción del territorio dentro de un sistema de reproducción ampliada, Rojava ha sido ampliamente interpretada desde occidente como una “tercera vía’ a los modelos políticos observados en la región” (Castillo en Conde, p. 124) o como un *espacio negativo*:

[Un espacio] que contiene en su interior una lucha contra diferentes violencias estructurales, que ha llevado a través de una antipraxis de la violencia que ha conseguido no solo la reivindicación del papel de la mujer en aras de una nueva construcción de subjetividad de género, sino el desarrollo de una democracia participativa directa, todo en el marco de una guerra regional de alta envergadura dentro de la que han logrado, a su manera, un espacio completamente securitizado, negando con su cristalización la partícula esencial que la modernidad reserva sola y únicamente al Estado. Así al interior de un torbellino provocado por la modernidad capitalista, surge de su dialéctica su propia contradicción. Una isla de otro mundo posible (Saracho *et al*, 2018, p. 12).

En este sentido, Rojava surge como un proyecto político cuya territorialidad desafía los parámetros hegemónicos ligados a la estatalidad, la patriarcalidad y al sistema capitalista, lo cual es indicativo de las implicaciones sistémicas que subyacen al conflicto en Siria. Pese a su inconformidad frente a los parámetros propios del sujeto hegemónico, los cantones autónomos de Rojava fueron en gran medida tolerados e indirectamente apoyados por los operativos y la administración estadounidense, debido a su dependencia general respecto a las SDF y el YPG. Sin embargo, uno de los retos a los que se enfrentó la estrategia estadounidense en Siria desde sus inicios

fue el antagonismo de uno de sus principales aliados regionales y miembro de la OTAN, Turquía, hacia las milicias kurdas del YPG, las cuales interpretaba como una amenaza debido a sus lazos con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) que militaba en el sur de Turquía. A pesar de compartir con Estados Unidos su desagrado y oposición en contra del gobierno de Assad, el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan tomó una postura diferente hacia el conflicto sirio, la cual desde sus inicios se mostró hostil hacia el YPG y al apoyo tácito de Estados Unidos hacia el autogobierno kurdo. Brau incluso ha dado cuenta de los esfuerzos que llevó a cabo el SOTJF-OIR para desactivar la hostilidad *irracional* de Turquía en contra de sus aliados en Siria, los cuales incluyeron solicitudes al YPG por cambiar su nombre e imagen para desvincularse del PKK, operaciones mediáticas y esfuerzos de diversificación demográfica dentro de las SDF para incluir más unidades árabes y así dismantelar la percepción de sí mismos como un ejército kurdo (Brau, 2020, p. 98).

Pese a estos esfuerzos, la distancia entre la postura estadounidense y la postura turca hacia Siria eventualmente resultó en un cambio de estrategia cuyas implicaciones dieron paso a una modificación de temporalidad y a la recalibración del punto de equilibrio en el conflicto. Al cambiar su estrategia de contención hacia los kurdos liderados por el YPG por una estrategia de intervención directa y la creación de zonas búfer en el Norte de Siria (Yüksel, 2019, p. 6), Turquía pasó a ser una de las principales fuerzas ocupantes dentro del territorio sirio, junto con Rusia, Estados Unidos e Israel, quien además de ocupar los Altos del Golán ataca frecuentemente objetivos estratégicos en Siria utilizando su poder aéreo. Este cambio de estrategia se materializó en agosto de 2016 con el lanzamiento de la Operación Escudo Éufrates, con el objetivo de ocupar la región central del Norte sirio, desde Azaz hasta Yrabulus, y así crear una zona búfer que terminara con los últimos bastiones territoriales del EI (Middle East Eye, 2017) y, simultáneamente, rompiera la articulación entre los cantones kurdos de Afrín y de Kobane. Este operativo, el cual se orquestó como una operación *antiterrorista* que agrupaba al

EI y al YPG dentro del mismo paraguas, implicó la cooperación del ejército turco con los rastros del FSA y un crisol de milicias de la oposición que eventualmente conformaron un nuevo bloque, conocido como el Ejército Nacional Sirio (SNA) (Yüksel, 2019, p. 6). La intervención turca fue denunciada por todas las fuerzas estatales partícipes en el conflicto: el gobierno sirio, Rusia, Irán e incluso Estados Unidos y sus aliados en Europa, lo cual es indicativo de un enfoque estratégico sumamente localizado que terminó por complejizar la guerra y transferir el foco de conflicto del este al norte.

Una de las implicaciones más importantes de la intervención turca fue su transformación en el principal patrocinador de la oposición en contra del régimen, la cual continuaba operando bajo un sistema de milicias incapaz de hacer frente a la reconstrucción de la estatalidad Assadista, logística y aérea sostenida por Rusia. La recuperación gradual del control desde el sur hasta el norte, lo cual tiene como fecha clave la recuperación de Aleppo a finales de 2016, desplazó a miles de personas y obligó la retirada del crisol de milicias de la oposición hacia el noroeste, concentrándose en la provincia fronteriza de Idlib. Al controlar la frontera occidental, Idlib se transformó en una provincia *bastión* capaz de recibir apoyo militar e insumos desde Turquía, permitiendo a las milicias resistir tanto militar como diplomáticamente a la expansión del régimen hacia el norte. Es imposible describir con precisión al enjambre de milicias que, desde 2017, se concentra en la provincia de Idlib, ya que estas incluyen un espectro de grupos islamistas, grupos moderados e incluso milicias extranjeras de las cuales existe poca información. De acuerdo con Yüksel, Turquía ha llevado a cabo esfuerzos por expandir su influencia en la provincia y, así, obligar a los diferentes grupos a alinearse según los objetivos estratégicos de la coalición opositora apoyada por Turquía y Qatar, la Coalición Nacional Siria (CNS) (Yüksel, 2019, p. 9). En la práctica, la heterogeneidad ideológica y de objetivos que existe en este espacio ha imposibilitado todo esfuerzo por coordinar a las milicias. Incluso es posible observar que, hacia 2019, la milicia dominante en Idlib es la Organización para la

Liberación del *Sham* (Hayat Tahrir al-Sham) (HTS), un grupo islamista fabricado por el Frente al-Nusra para cambiar su imagen y deslindarse de al-Qaeda (Bareesh, 2020, p. 23, citado en Yahya).⁸

A la Operación Escudo Éufrates, la cual sepultó la posición del EI como una fuerza capaz de controlar territorio en la región Norte y marcó la transformación del ejército y la policía militar turca en una presencia fija en Siria, se le sumó otro operativo en 2018.⁹ Denominado Operación Ramo de Olivo, este operativo extendió la ocupación turca al cantón de Afrín, desmantelando de manera efectiva el autogobierno kurdo en la zona noroccidental. Como fuerza ocupante, Turquía ha adoptado varias de las tareas propias del Estado, incluyendo misiones de entrenamiento de policías, la emisión de tarjetas de identidad (Osman, 2018), la creación de un servicio civil e incluso la sustitución de la libra siria por la lira turca (Economist, 2020). De esta manera, Turquía ha negado la posibilidad de construir alternativas a la estatalidad sosteniéndose en un discurso antiterrorista cuya base recae en parámetros étnicos, a la par que ha negado al régimen sirio, a Rusia y a Irán la posibilidad de recuperar la totalidad de Siria y restaurar las viejas formas de gobernanza y administración sobre el territorio.

Otra de las tareas apropiadas por Turquía como parte de su proceso de cooptación del discurso de la oposición y reinserción de la estatalidad tiene que ver con el ámbito diplomático, ya que Erdoğan se ha posicionado como el principal portavoz de las poblaciones opositoras frente a Rusia e Irán. De acuerdo con Al Achi, “el apogeo de esta cooptación internacional de la oposición se vio en las conferencias de Astana (enero 2017) y Sochi (febrero 2018) en las cuales Turquía,

⁸ Pese al intento del HTS por cambiar su imagen y deslindarse de al-Qaeda, los operativos estadounidenses niegan este cambio, refiriéndose a ellos por su antiguo nombre (Frente o Jabhat al-Nusra), o simplemente como *al-Qaeda*.

⁹ Como se señaló anteriormente, el momento más indicativo del colapso territorial del EI es la liberación de Raqqa en octubre de 2017. Turquía externó abiertamente su disposición a participar con Estados Unidos para expulsar al EI de su capital, pero se negó a hacerlo en conjunto con fuerzas kurdas del YPG.

Irán y Rusia fungieron como garantes de ‘alto al fuego’ locales” (Al Achi, p. 16, citado en Yahya). Estos procesos son muy ilustrativos del papel secundario del gobierno de Assad, las milicias de oposición y, en general, las poblaciones sirias en los procesos de negociación de su propia territorialidad; gobiernos ajenos negociaban y continúan negociando el destino de Siria en ciudades extranjeras. Sin embargo, más allá de negociar meras cesaciones de las hostilidades, Turquía utilizó las negociaciones con Rusia e Irán para recalibrar los términos de la guerra, legitimar su ocupación como un *fait accompli* y asegurar la supervivencia de la oposición en Idlib amenazando a Rusia con un escalamiento de la guerra hacia un conflicto simétrico entre ejércitos convencionales. Esto estuvo cerca de ocurrir un par de años después, entre febrero y marzo de 2020, cuando el ejército turco anunció una campaña militar a gran escala tras sufrir cerca de 40 pérdidas en un frente a la artillería rusa y siria (Gall, 2020).

A partir de estas negociaciones, la presencia turca en el norte de Siria se ha normalizado, y se ha transitado a un sistema de conflictos de baja intensidad, patrullas conjuntas y de instalación de puestos de observación rusos, iraníes y turcos que, en la práctica, han institucionalizado la ocupación del territorio sirio, eternizado indefinidamente la situación de guerra y han aumentado la posibilidad de un escalamiento hacia una confrontación convencional entre Turquía y Rusia. Pese a las pérdidas en el Norte, las Fuerzas Armadas Sirias y demás milicias pro gobierno han continuado llevando a cabo operativos internos, en vista de acrecentar su control sobre la carretera M5 que une a Damasco con Alepo, eliminar células asimétricas que operan de manera difusa y restaurar la estatalidad dentro de sus nuevos límites territoriales *de facto*. En este contexto de estancamiento, empate negativo o *impasse* localizado en el norte, Rusia ha profundizado sus capacidades navales y aéreas por medio de la ampliación de sus bases en Tartus y Hmeimim (Deutsche Welle, 2020), lo cual da cuenta de su compromiso con Assad y de la sedimentación a largo plazo de su influencia en el mediterráneo oriental.

En octubre de 2019, el gobierno turco anunció un tercer operativo: la Operación Fuente de Paz (Peace Spring), la cual extendía su ocupación hacia un corredor en la región noreste bajo la justificación de eliminar operativos terroristas y así crear un *espacio seguro* en el que fuera posible reubicar algunos de los 3.6 millones de refugiados sirios (UNHCR, 2019) que, hacia julio de 2019, vivían en Turquía. En la práctica, esto implica el uso de una discursividad humanitaria y antiterrorista utilizada para justificar el despliegue militar en contra de los kurdos y reubicar a poblaciones árabes en territorios históricamente poblados por ellos, lo cual militariza los cuerpos de las personas en situación de refugio y ha sido denunciado como una práctica de limpieza étnica desde diversos posicionamientos. La Operación Fuente de Paz, sin embargo, también es indicativa de los límites de la intervención, debido a la falta de alianzas internacionales que legitimen o apoyen los operativos turcos en el norte de Siria. Las alianzas europeas de Turquía en el marco de la OTAN se han visto mermadas por la cuestión siria, lo cual ha conllevado a una ampliación del espectro de la guerra a través de la militarización del discurso y de los flujos de refugiados contenidos por Turquía. Jennequin, por ejemplo, retoma la noción de *Coercive Engineered Migration* (CEM) para analizar la manera como el gobierno turco ha instrumentalizado militarmente (*weaponized*) el flujo de refugiados sirios que busca avanzar hacia Europa, con el objetivo de obtener beneficios por medio de la negociación con la Unión Europea (UE) (Jennequin, 2020, p. 2). Esta *instrumentalización de la crisis de refugiados* es interpretada por el autor como una táctica de guerra que utiliza Turquía como un Estado débil frente a la UE, y obedece a la apropiación de los discursos de la derecha europea que presenta al flujo de refugiados como un azote existencial para Europa (O’Hanlon, 2019).¹⁰

¹⁰ Un precedente importante en este rubro es el acuerdo de 2015-2016 entre Turquía y la UE, tras el cual Turquía se comprometió a funcionar como un espacio *contenedor* de refugiados a cambio de beneficios económicos y políticos importantes.

Si bien los miembros europeos de la OTAN han denunciado de manera muy clara los operativos turcos, la presencia estadounidense bajo la administración de Trump es más difícil de leer, ya que se ha comportado de manera ambigua y visiblemente contradictoria. Tras recibir la advertencia del operativo de 2019, la administración de Trump pareció dar rienda suelta al despliegue turco y anunció su retirada del norte de Siria para evitar un enfrentamiento con tropas turcas (New York Times, 2020). Posteriormente, matizó su posición, enfatizó la necesidad de “preservar el petróleo” sirio y mantuvo operativos difusos en las regiones petroleras del noreste y el este, así como su activo estratégico en la base militar de al-Tanf (O’Hanlon, 2019), la cual concentra el grueso de las tropas estadounidenses. En fechas recientes, Estados Unidos parece haber transitado a un sistema que presta más énfasis a formas de guerra económica, a través de la imposición de un conjunto de sanciones conocidas como *César*, las cuales han profundizado la situación de crisis e inseguridad alimentaria que afectan directamente a las poblaciones sirias.

Reflexiones Finales

¿Cómo esquematizar un proceso de guerra tan largo y complejo, en el que se ha desatado un espectro tan amplio de formas de violencia, y cuyas características rebasan cualquier definición tradicional de una guerra civil? Dado el peso de las intervenciones estadounidenses, iraní, rusa y turca, ¿es correcto seguir refiriéndonos al conflicto sirio como una guerra civil o es necesario replantear esta noción y repensar su profundidad e implicaciones dentro de una escala sistémica? La respuesta a estas cuestiones tiene que partir de un cuestionamiento profundo de la territorialidad y la vivencia en Siria, así como su misma condición y existencia como Estado nacional. Pese a la complejidad del conflicto y la multiplicidad densa e indescifrable de fuerzas dentro de las facciones dentro del sistema de guerra, consideramos que es posible agrupar a los actores de la guerra según las

características generales del ordenamiento territorial que proponen, prestando énfasis en la relación que guardarían respecto a su articulación con otros espacios en como parte de un sistema de producción global. Partiendo del análisis que ha hecho Ana Esther Ceceña en torno al despliegue de la hegemonía estadounidense y las resistencias en contra de ella, proponemos una categorización en 3 grupos.

En primer lugar, están aquellos grupos y milicias que, a pesar de actuar según intereses, percepciones y necesidades locales, acuerpan los intereses del bloque hegemónico liderado por Estados Unidos. Este bloque engloba a aquellos que, a pesar de luchar en contra del régimen de Assad, no niegan la estatalidad en el territorio sirio y a su condición como un espacio estratégico dentro de un sistema de reproducción liderado desde Occidente. Esta propuesta territorial es observable sobre todo en los consejos que operan en el exilio como la CNS con apoyo turco, qatari y estadounidense, así como en los consejos civiles apoyados directamente por el ejército estadounidense en las regiones petroleras y una parte importante de las milicias englobadas bajo el ELS. La confrontación Estados Unidos-Turquía complica la posibilidad de identificar un bloque pro occidental monolítico utilizando referentes como la OTAN, ya que las situaciones y rivalidades locales dentro de la guerra dan cuenta de disensos importantes dentro de las fuerzas que normalmente acuerpan los intereses del sujeto hegemónico.

En segundo lugar, están aquellos actores *contrahegemónicos* que luchan en contra de la hegemonía estadounidense, pero lo hacen a través del apoyo a la permanencia del *status quo* y no niegan la colocación de Siria como parte de un sistema hegemónico alternativo. Lógicamente, el principal representante de este bloque contrahegemónico es el propio régimen de Assad, quien ha aceptado la subordinación del territorio sirio frente a Rusia e Irán para asegurar su supervivencia política y restaurar las formas de gobernanza históricamente reproducidas en la estatalidad siria. Es decir, mientras que existen similitudes entre los proyectos geopolíticos hegemónicos pro Estados Unidos y contrahegemónicos por su preferencia

a la permanencia del Estado nacional como forma dominante de administración territorial, difieren en la forma como este Estado se vincularía con el exterior y a las élites que esto beneficiaría. Es decir, a pesar de que el apoyo al Estado sirio previsto por el frente Rusia-Irán-Hezbollah parte de una crítica a la hegemonía estadounidense y la necesidad de conformar un frente alternativo, se sostiene del “mismo marco general de relaciones” (Ceceña, 2013, p. 75) que la hegemonía estadounidense misma. Es en este sentido, que autores como Garduño han propuesto la noción de *choque de capitalismo* para explicar la relación que tiene la situación de guerra en Siria con las dinámicas de “acumulación de capital, de territorio y de recursos” propias del sistema (Garduño, 2015).

El tercer bloque está conformado por aquellas fuerzas que rechazan abiertamente la manera como Siria se ha configurado como un territorio dependiente de antagonismos geopolíticos externos, lo cual ha resultado en una reivindicación de la vivencia material y simbólica acuerdo a parámetros estrictamente locales. Este conjunto de territorialidades alternativas o heterodoxas engloban un crisol ideológico sumamente diverso, ya que en esta categoría es posible colocar territorialidades como el sistema de autogobierno en Rojava bajo el mismo paraguas que el islamismo nacionalista impulsado por grupos como el Frente al-Nusra / HTS. En términos generales, sin embargo, comparten un rechazo a la reproducción de un sistema liderado desde otros espacios, y luchan por formas de vida alternativas cuyos orígenes están claramente enraizados en lo local y la vivencia simbólica dentro de sus territorios.

Ana Esther Ceceña escribe: “Las tres maneras, la disputa intrahegemónica, la confrontación y la bifurcación sistémica, suceden todas en este mismo planeta, simultáneamente” (Ceceña, 2013, p.75). Uno de los componentes de la complejidad del caso de Siria recae en el hecho que es posible identificar estas tres disyuntivas dentro de una misma situación de guerra. A la disputa intrahegemónica la encontramos en el rol ambiguo que juega Estados Unidos y la confrontación con uno de sus aliados de la OTAN, Turquía, respecto al

manejo de las poblaciones kurdas. A la confrontación hegemónica la encontramos en el eje Siria-Rusia-Irán y sus esfuerzos por generar un bloque alternativo, capaz de disputar la hegemonía estadounidense, aunque las relaciones propuestas se enmarcan en el mismo encuadre de dominación propio de cualquier sistema hegemónico. En el marco de esta confrontación entre grandes potencias, las poblaciones afectadas no han permanecido pasivas, y se han abierto espacios de negociación territorial que han dado lugar a indicios de una deriva sistémica, la cual encarnan los grupos que luchan contra la destrucción sistemática de sus territorios al promover formas de vida contrarias a los proyectos impuestos desde afuera.

Bibliografía

‘Ayek, Maurice (2020). ادي س ل ل ناچ ذوم نو نات م ل و ع. *al-Jumhuriyyah*. <https://tinyurl.com/yct4jn54>

Abboud, Samer (2020). The Reordering of the Syrian Political Economy. *Salon Syria*. <https://salonsyria.com/the-reordering-of-the-syrian-political-economy/#.YIrn5bXTu00>

Al Nofal, Walid (2019). With new tactics and targets, ISIS demonstrates resilience in Syria (interactive map). *Syria Direct*. <https://syriadirect.org/news/with-new-tactics-and-targets-isis-demonstrates-resilience-in-syria-interactive-map/>

Anderson, Tim (2016). The Dirty War on Syria: Washington, Regime Change and Resistance. *Global Research*.

Baczko, Adam, Dorronsoro, Gilles, y Quesnay, Arthur (2016a). *The Building of Military Capital*. In *Civil War in Syria*. <https://doi.org/10.1017/9781108355322.006>

Baczko, Adam, Dorronsoro, Gilles, y Quesnay, Arthur (2016b). *The Kurds and the PKK*. In *Civil War in Syria*. <https://doi.org/10.1017/9781108355322.010>

Beccaro, Andrea (2018). Modern Irregular Warfare: The ISIS Case Study. *Small Wars and Insurgencies*, 29(2), 207–228. <https://doi.org/10.1080/09592318.2018.1433469>

Cataia, Márcio (noviembre de 2008). Territorialidade Estatal e outras Territorialidades: Novas Formas de Uso Dos Territórios Na América Latina. Conflitos, Desafios e Alternativas. *Scripta*, 12(270), 1–13.

Ceceña, Ana Esther (2018). Hegemonía, poder y territorialidad. En Herrera, David, González Fabián, Saracho, Federico (coords.), *Espacios de la Dominación. Debates sobre la espacialización de las relaciones de poder*. Ciudad de México: Editorial Monosílabo.

Celso, Anthony N. (2018). Superpower Hybrid Warfare in Syria. *MCU Journal*, 9(2), 92–116. <https://doi.org/10.21140/mcu.2018090206>

Cockborn, Patrick (2017). Raqqa Liberated: ISIS defeat latest mine clearance SDF camp. *The Independent*. <https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/raqqa-liberated-isis-defeat-latest-mine-clearance-sdf-camp-residents-medicine-aid-a8005881.html>

Deutsche Welle (2020). Russia to extend Tartus and Hmeimim military bases in Syria. <https://www.dw.com/en/russia-to-extend-tartus-and-hmeimim-military-bases-in-syria/a-41938949>

Dostal, Jorg Michael (2014). Analyzing the domestic and international conflict in Syria: Are there lessons from political science? *Syria Studies*, 6(1), 1–80. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1297945>

Economist (1 de agosto de 2020) Turkey is wielding influence all over the Arab world. *The Economist*. <https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2020/08/01/turkey-is-wielding-influence-all-over-the-arab-world>

García, Rolando (2010). Interdisciplinarietà y sistemas complejos. *Revista Latinoamericana de Metodología de Las Ciencias Sociales*, 1(1), 66–101.

Gleick, Peter H. (2014). Water, drought, climate change, and conflict in Syria. *Weather, Climate, and Society*, 6(3), 331–340. <https://doi.org/10.1175/WCAS-D-13-00059.1>

Hanne, Olivier (2018). La Syrie: construction et ruine d'un territoire national. *Les Cahiers de l'Orient*, 131(3), 13. <https://doi.org/10.3917/lcdlo.131.0013>

Holliday, Joseph (marzo de 2013). The Assad Regime: From Counter Insurgency to Civil War. *Middle East Security Report*, (11).

Jenkins, Brian Michael (2014). The Dynamics of Syria's Civil War. *Rand Corporation*, (24). <http://www.rand.org/pubs/perspectives/PE115.html>

Jennequin, Arthur (2020). *Turkey and the Weaponization of Syrian Refugees*. Bruselas: Brussels International Center.

Jörum, Emma Lundgren (2014). *Beyond Syria's Borders: A History of Territorial Disputes in the Middle East*. Londres, Nueva York: I.B. Tauris.

Kalyvas, Stathis N. (2015). Is ISIS a Revolutionary Group and if Yes, What Are the Implications? *Perspectives on Terrorism*, 9(4), 42–47. <http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/442/873>

Kavlick, Adam et al. (2015). *Prospects for a U.S.-Russian Partnership in Syria*. Joint Forces Staff College.

Kerr, Michael, y Larkin, Craig (2015). *The Alawis of Syria: War, Faith and Politics in the Levant*. Nueva York: Oxford University Press.

Lister, Charles (2016). The Free Syrian Army: A decentralized insurgent Brand. *The Brookings Project on U.S. Relations with the Islamic World*, (26), 40. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/11/iwr_20161123_free_syrian_army.pdf.

Middle East Eye (2017), Turkey ends military “Euphrates Shield” operation in Syria: PM Yildirim. <https://www.middleeasteye.net/fr/news/turkey-ends-military-euphrates-shield-operation-syria-pm-yildirim-1238089172>

New York Times (13 de octubre de 2019). Trump Orders Withdrawal of U.S. Troops From Northern Syria. <https://www.nytimes.com./2019/10/13/us/politics/mark-esper-syria-kurds-turkey.html>

O'Hanlon, M. E. (2019). How to salvage Syria and protect US tropas. *Brookings*, 1–5.

Ølgaard, Daniel Møller (2020). Embodying War, Becoming Warriors: Media, Militarisation and the Case of Islamic State's Online Propaganda.

Making War on Bodies: Militarisation, Aesthetics and Embodiment in International Politics. Edimburgo: Edinburgh University Press.

Osman, Tamer (2018). Syrians in opposition-held areas near Aleppo obtain new IDs, *al-Monitor*. <https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/07/local-council-issuing-identification-cards-syrians-euphrates.html>

Østensen, Åse Gilje, y Bukkvoll, Tor (2018). *Russian Use of Private Military and Security Companies - the implications for European and Norwegian Security*. [https://open.cmi.no/cmi-xmlui/bitstream/handle/11250/2564170/Russian Use of Private Military and Security Companies - the implications for European and Norwegian Security?sequence=1&isAllowed=y](https://open.cmi.no/cmi-xmlui/bitstream/handle/11250/2564170/Russian%20Use%20of%20Private%20Military%20and%20Security%20Companies%20-%20the%20implications%20for%20European%20and%20Norwegian%20Security?sequence=1&isAllowed=y)

Parsons, Christi y Hennigan, WJ. (13 de enero de 2017). President Obama, who hoped to sow peace, instead led the nation in war. *Los Angeles Times*. <https://www.latimes.com/projects/la-na-pol-obama-at-war/>

Renz, Bettina (2016). Russia and 'hybrid warfare'. *Contemporary Politics*, 22(3), 283–300. <https://doi.org/10.1080/13569775.2016.1201316>

Richani, Nazih (2018). Economía política e interdependencia compleja en el sistema de guerra en Siria. *Forum. Revista del Departamento de Ciencia Política*, 18(13), 153–182. <https://doi.org/10.15446/frdcp.n13.71017>

Sly, Liz (7 de junio de 2019). Mystery crop fires scorch thousands of acres in Syria and Iraq—and ISIS claims responsibility. *Washington Post*. https://www.washingtonpost.com/world/mystery-crop-fires-scorch-thousands-of-acres-in-syria-and-iraq--and-isis-claims-responsibility/2019/06/07/8507eb00-87a1-11e9-9d73-e2ba6bbf1b9b_story.html

Sukhankin, S. (2019). Russian PMCs in the Syrian Civil War: From Slavonic Corps to Wagner Group and Beyond, 1–24.

Tilly, Charles (1985). *War Making and State Making as Organized Crime. Bringing the State Back In*. Cambridge: Cambridge University Press..

UNHCR Turkey (2019). Reliefweb <https://reliefweb.int/report/turkey/unhcr-turkey-fact-sheet-july-2019>

Yüksel, Engin (2019). *Strategies of Turkish proxy warfare in northern Syria*. La Haya: Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'.

Parte 3. Guerras en el vecindario

Crear dos, tres... muchas Colombia

David Barrios Rodríguez

DOI: 10.54871/gS23b10f

Colombia ha sido durante mucho tiempo un socio estratégico para los Estados Unidos, y su éxito en la lucha contra las FARC ha sido un importante logro mutuo. La experiencia de Colombia en esa lucha y en sus campañas contra el tráfico ilegal de drogas y el crimen organizado le ha dado al país una considerable experiencia en seguridad. Como resultado, Colombia ahora ayuda a capacitar y preparar a las fuerzas de seguridad en otras partes de la región y en todo el mundo, y esa es una forma más en la que la inversión de Estados Unidos en Colombia ha dado sus frutos.

General David Petraeus

La modalidad de guerra irregular

Con la llegada del siglo XXI, es patente la generalización de formas de guerra irregular, lo que ahora se manifiesta en las definiciones doctrinarias de las propias Fuerzas Armadas, contradiciendo con ello la tendencia que dominó el imaginario en la centuria pasada. Dicha propagación guarda relación con las modalidades que adquirieron los conflictos armados con posterioridad al 2001, es decir cuando la enemistad bélica comenzó a ser redirigida hacia amenazas no estatales.

El Joint Chief of Staff (JCS), en la versión actualizada de su Doctrina para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, establece que, en el presente, reconocen dos tipos de guerra: la tradicional, identificable con el canon construido a lo largo del siglo XX (aunque remite a la instauración de *jure* del orden Westfaliano), mismo que supone el enfrentamiento entre Estados nacionales o coaliciones/alianzas entre estos y que suele emparentarse con combates de fuerzas regulares

en todos los dominios físicos, incluyendo la actualización de los ámbitos de la información. El otro tipo de confrontación es la irregular, en la que participan fuerzas de Estados nacionales, así como otras no adscritas formalmente a la estatalidad y que pugnan por obtener legitimidad o influencia sobre población considerada relevante, siendo característica de este tipo de guerra la asimetría entre las fuerzas contendientes.¹

En lo que respecta a Colombia, el proceso de transformación del ejército iniciado en 2015 con el Plan Minerva fue acompañado en términos doctrinarios por el Proyecto Damasco que busca reestructurar de manera secuencial y metódica los principios de intervención militar del país andino, haciéndolos compatibles con la fuerza conjunta nacional y multinacional (MFE 1-01 Doctrina, 2017). Dentro de este, el Manual Fundamental de Referencia del Ejército 3.0-Operaciones (MFRE) y el Manual de Campaña del Ejército 3-24.0 (MCE) definen la guerra irregular de manera idéntica a Estados Unidos. Llevan a cabo la puntualización de que el énfasis de este tipo de guerra depende del nivel en que se lleve a cabo el análisis. En el enfoque estratégico se trata de influir y controlar a la población, mientras que en términos operacionales implica establecer formas de aproximación indirectas respecto a la planeación y la ejecución de campañas y operaciones.² En lo que respecta al nivel táctico, supone la aplicación asimétrica de

¹ El uso del término *irregular* en lo referente a Estados Unidos remite a la edición 2006 del *Quadrennial Defense Review* (QDR), donde se delinearon cuatro tipos de amenazas, a saber: irregulares, catastróficas, disruptivas y tradicionales. Al mismo tiempo, el reporte consideró el tránsito desde operaciones en la lógica interestatal, a otras de carácter asimétrico e irregular (DOD, 2006). Dicha publicación, emanada de un mandato legislativo, delineaba las prioridades, retos y la estrategia del Departamento de Defensa. Fue sustituida por la *National Defense Strategy* (NDS) a partir de 2018 y solo se da a conocer un resumen ejecutivo, ya que a diferencia de QDR es un documento clasificado (DOD, 2019).

² Una aproximación directa supone atacar el centro de gravedad del enemigo aplicando poder de combate, mientras que la aproximación indirecta parte de atacar el centro de gravedad del enemigo a partir de distintos puntos (MFRE 3-0 Operaciones).

técnicas y procedimientos.³ Aclaran que si bien la Guerra Irregular abarca múltiples actividades, su núcleo es la insurgencia y la contra-insurgencia (COIN).⁴ Para los objetivos de este texto, destaca también la aseveración de que la reestructuración doctrinaria señalada “consolida los conocimientos adquiridos en más de sesenta años de conflicto” (MFRE 3-0 Operaciones, 2017) por parte del Ejército colombiano.

De manera más general, la incorporación doctrinaria-formal de la guerra irregular por parte de Estados Unidos expresa una modificación de gran trascendencia y que resulta decisiva para la adaptación de las modalidades contemporáneas de hacer la guerra, entre otras razones, por los convenios de colaboración en materia militar y de seguridad que tiene con países de los cinco continentes. En América Latina y el Caribe, el principal socio del hegemón es, de lejos y fuera de toda duda, Colombia, cuyo gobierno y Ejército, más que aceptar de manera pasiva la agenda de seguridad de Estados Unidos, han contribuido a su rediseño y, en años recientes, a su *exportación* a distintos lugares del mundo.

El momento preciso en que se puede advertir la inclusión formal de esta modalidad bélica por parte de Estados Unidos fue la emisión de la Directiva 3000.07 del DOD sobre Guerra Irregular en 2008, destinada a asignar responsabilidades para la conducción de este tipo de guerra. En ella se reconoció que “[...] *ir* is as strategically important as traditional warfare. Many of the capabilities and skills required for *ir* are applicable to traditional warfare, but their role in *ir* can be proportionally greater than in traditional warfare” (DOD, 2008).

³ Los manuales de campaña del Ejército colombiano son de carácter restringido y no están disponibles para su consulta en el sitio de internet de la institución castrense. Entre estos se cuentan el ya referido 3-24 Insurgencia y contrainsurgencia, el 3-24.2 Tácticas de contrainsurgencia, el 3-07 Estabilidad, el 3-22 Apoyo del Ejército a la cooperación en seguridad, el 3-53.0 Acción integral, el 3-61 Asuntos públicos, el 3-26 Contraterrorismo, el 2-0 Actividades de Inteligencia y el 2-22.1 Contrainteligencia.

⁴ En donde la contrainsurgencia mantiene como principales características la “[...]mezcla de esfuerzos militares y civiles de carácter comprehensivo diseñados de manera simultánea para contener y derrotar a la insurgencia, dirigiéndose a sus orígenes” (ICOS, 2020).

Para precisar aun más la definición de las amenazas identificadas con la guerra irregular, la aproximación del DOD expresada en el documento *Joint Operating Concept. Irregular Warfare: Countering Irregular Threats*, establece que se trata de “Adaptive adversaries such as terrorists, insurgents, and criminal networks as well as states will increasingly resort to irregular forms of warfare as effective ways to challenge conventional military powers” (DOD, 2010).⁵ Esto denota una reconceptualización respecto a las ideas dominantes y formalmente reconocidas que, de manera previa, escindían la acción bélica del Estado respecto a expresiones no estatales.

En relación a la dicotomía entre Guerra Irregular/Guerra Tradicional, solo es preciso apuntar que la distinción aquí esbozada tiene fines analíticos, mientras que en su materialización en la conducción de las guerras actuales y venideras, funciona como una dupla que combina elementos estratégicos, logísticos, operacionales y tácticos. Esto es puesto de relieve tanto en la doctrina militar de Estados Unidos como en la de Colombia:

Las formas de la guerra no se aplican en términos de una elección de “o esto o lo otro”, sino en varias combinaciones para adaptarse a la estrategia y las capacidades de un combatiente [...] La guerra es un todo unificado, que incorpora todos sus aspectos juntos, tradicionales e irregulares. Es, de hecho, la combinación creativa, dinámica y sinérgica de ambos la que suele ser más efectiva (JCOS, 2017).

La GI no es una forma subordinada de la guerra tradicional. Más bien, abarca un espectro de guerra donde la naturaleza y las características son significativamente diferentes de la guerra tradicional. La guerra tradicional y la GI no son mutuamente excluyentes, ambas formas de guerra pueden estar presentes en un conflicto dado. Los comandantes deben entender que la naturaleza de la guerra a menudo cambiará en el curso de un conflicto. Esto es especialmente cierto

⁵ La primera versión del *Irregular Warfare. Joint Operating Concept* data de 2007 lo cual es consistente con la incorporación doctrinaria formal de esta modalidad de guerra. Consultar la primera cita de este apartado.

en la GI donde el conflicto es a menudo prolongado. La guerra tradicional puede evolucionar rápidamente hacia una guerra irregular y viceversa, requiriendo que la fuerza militar se adapte de una forma a otra (MFRE 3-0 Operaciones, 2017, pp. 2-9)

Una precisión adicional que merece ser traída a cuenta es que no resultan equivalentes las caracterizaciones irregular / no convencional / no tradicional. La enunciación como no convencional / no tradicional ha sido cuestionada en virtud de que la tendencia dominante desde hace décadas es precisamente la de confrontaciones de carácter interno, o en la que tienen participación estados y actores no estatales.⁶

En cambio, la elección en torno al carácter *irregular* de la guerra no solo está relacionada con la frecuencia con la que se desarrollan los conflictos, lo que daría pie a pensar el proceso en términos de encontrarnos frente a una “nueva regularidad de la guerra” (Nieves y Bonavena, 2014), sino con el recurso de tácticas irregulares. Entre estas, aquellas no amparadas en los marcos normativos que deberían sancionar este tipo de fenómenos, por ejemplo los ataques a la población civil, el recurso de la tortura, desaparición forzada, *falsos positivos* o asesinatos masivos.⁷

⁶ La propia definición de Estados Unidos sobre la guerra no convencional da cuenta de ello, al considerar que se trata de “operaciones y actividades conducidas para permitir a un movimiento de resistencia o insurgencia forzar, desbaratar o derrocar a un gobierno o poder de ocupación, operando a través o en colaboración de una fuerza clandestina, auxiliar y de guerra de guerrillas en un área de incursión subrepticia” (JCS, 2014). Con ello, se pone de relieve la actuación conjunta con actores armados no estatales.

⁷ La denominación *falsos positivos* alude a un tipo específico de ejecución extrajudicial utilizada por las fuerzas armadas colombianas. Se trata de asesinatos intencionales de civiles que son artificialmente presentados como muertes en combate con la pretensión de mostrar resultados exitosos. Si bien dicha práctica tiene antecedentes históricos en Colombia, su generalización durante los mandatos de Álvaro Uribe estuvo asociada con la emisión de una directiva que otorgaba recompensas a la muerte de integrantes de la insurgencia. Como resultado de ello, hacia 2012, la Fiscalía de Colombia tenía cerca de 5 mil casos reportados (Movimiento de Reconciliación FOR y Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos-CCEEU, 2014).

Más allá de su incorporación formal en las últimas décadas, la guerra irregular hace parte de un largo recorrido en las adaptaciones de la lógica militar. La generalización de un sentido sobre la guerra con ejércitos profesionales, convenciones normativas en materia de acción y combate, e inclusive la presunta conformación de una ética anclada en el respeto a la población civil, resultan al mismo tiempo una idealización y coartada occidental, restringida a un periodo histórico muy concreto. Junto con ello, se debe insistir en que el despliegue de este tipo de guerra resultó selectivo, lo que resulta especialmente nítido si observamos la manera como Europa Occidental y después Estados Unidos han llevado a cabo procesos de expansión territorial o intervención en otros lugares del planeta.

Colombia en la estrategia hegemónica

Mientras nos aproximamos al primer cuarto del siglo XXI, queda de relieve que se cumplió una cierta transición en las modalidades del hegemón para hacer la guerra. A finales de la centuria pasada con el colapso del Bloque Socialista, Estados Unidos apareció como potencia bélica mundial sin rivales cercanos. Por aquellos años se puso en evidencia la capacidad de despliegue que hacía patente la ventaja militar con la que comenzó el presente siglo: “[...] proyectar energía cuando y donde la necesitábamos en todo el mundo. No seríamos muy disputados. Y podríamos operar libremente en todos los dominios”. (Dunford, 2018).

Se trata del periodo de tiempo que albergó desde el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), la Primera Guerra del Golfo, las modalidades de intervención que fueron implementadas en los conflictos que dieron lugar a la desintegración de Yugoslavia, así como a otros eventos bélicos en las postrimerías del siglo XX.

La siguiente modificación de gran relevancia estuvo determinada por las incursiones bélicas en Afganistán e Irak a inicios del presente siglo. Estas reconfiguraron las modalidades de la guerra y las condujeron hacia distintas vertientes de guerra irregular (contrainsurgencia, contraterrorismo, defensa interna extranjera,

estabilización, reconstrucción), con lo que también se modificaron las coordenadas de comprensión de los conflictos en relación al papel del Estado, la territorialidad o el orden jurídico internacional.⁸ Las características inherentes a este tipo de guerra, en la que el objetivo central es la población, ha conducido a la renovación de los repertorios previos, incrementando el énfasis en las operaciones de guerra psicológica (PSYOP), información e inteligencia, dotando además de una importancia central a la aproximación y comprensión de los elementos culturales que entran en confrontación.

En la actualidad, podemos observar un renovado proceso de redefinición / reincorporación de las amenazas desde la perspectiva de Estados Unidos, pero con importantes vínculos en Europa y en específico con los países que integran la OTAN. Se trata de la conjunción de las amenazas asimétricas con las cuales lidiaron durante los últimos 10 o 15 años y la reemergencia de la disputa con potencias equivalentes.⁹

A partir de esa periodización en el tránsito entre el siglo XX y el proceso reciente, el presente texto hará énfasis en la conformación de la guerra irregular como tipo dominante de hacer la guerra en la actualidad. Esto supone reconocer que al ser incorporada de manera esquiva (pero formal) a la doctrina militar de los Estados, tenderá a

⁸ El concepto Foreign Internal Defense (FID) refiere a “[...]participation by civilian agencies and military forces of a government or international organization in any of the programs or activities taken by a host nation (HN) government to free and protect its society from subversion, lawlessness, insurgency, violent extremism, terrorism, and other threats to its security”. Incluye tres modalidades: apoyo indirecto, apoyo directo (sin involucramiento en operaciones de combate) y participación en operaciones de combate por parte de Estados Unidos. En este último caso, formalmente debe ser aprobado por el presidente de Estados Unidos (JCS, 2018).

⁹ Ecuación que, en un primer momento, fue establecida como 4+1, en referencia a 4 Estados nacionales (China, Rusia, Irán y Corea del Norte) siendo la quinta amenaza el terrorismo, es decir, la coexistencia de enemigos estatales con no estatales (Dunford, 2016). Un poco más adelante se consideró que ante las ostensibles diferencias entre los estados señalados, resultaba más apropiado establecer la fórmula como 2 + 3 que implica reconocer que las de mayor envergadura son las representadas por China y Rusia, consideradas potencias *revisionistas* o *near peer adversaries*, mientras que en el otro conjunto podrían ser albergados *rogue states* como Irán, Corea del Norte, así como las Organizaciones Violentas Extremistas (VEOS) que incluyen Redes Criminales Transnacionales, terroristas y otros actores armados no estatales (Ceceña y Barrios, 2019; Dunford, 2018; DoD, 2018).

irradiar la lógica para lidiar con expresiones de conflictividad social y llevar a cabo las guerras venideras.

En términos históricos, la adopción doctrinaria formal de este tipo de guerra contempla como decisivas las incursiones de Estados Unidos en Afganistán e Irak con el lanzamiento de la guerra contra el terrorismo (GWT), pero también es considerado como paradigma de esta transición el recorrido contemporáneo de Colombia (Marks, Gorka y Sharp, 2010). Esto obedece a que después de décadas de violencia y de haber sido considerado como un Estado fallido, a partir de la primera década del presente siglo, el país andino logró constituir no solo “[...]uno de los ejércitos de guerra irregular más capaces y eficaces del mundo” (Marks, 2010), sino llevar adelante un enfoque de la contrainsurgencia que involucró a toda la sociedad.¹⁰ Esto permite observar dos de los elementos de continuidad con las formas de justificación de las guerras contemporáneas: la invocación de los estados fallidos (Ceceña, 2010) y las dimensiones doctrinarias que enfatizan el papel de las poblaciones.

Para que esto ocurriera, Estados Unidos ha tenido un papel preponderante, posibilitado por la instauración desde hace al menos 20 años de condiciones de intervención directa en Colombia sin parangón en el contexto hemisférico, siendo también este país el que recibe mayor apoyo logístico, financiero y militar en el área. El acercamiento con el país andino le permitió a Estados Unidos ensayar distintos elementos de lo que a la postre sería conocido como Building Partner Capacity (BPC), una manera tanto de *reducir* su huella militar como de encubrir la persistencia de su intervencionismo a escala global.¹¹

¹⁰ Proyecto que resulta especialmente nítido en el documento Estrategia Militar de Colombia 2003 a través de los objetivos de dominio y control de áreas estratégicas, corredores de movilidad, instauración de una red de *cooperantes*, control de población y recursos, así como la expansión de la presencia del Estado.

¹¹ A mediados de la década de los noventa y a pesar de la capacidad bélica mostrada por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, los resultados de las incursiones en Bosnia, Haití y Somalia habrían provocado reticencia de la opinión pública y de la jerarquía militar a llevar a cabo intervenciones de gran tamaño. Por ello la asistencia e intercambios económicos, logísticos y de entrenamiento militar con Colombia permitieron vislumbrar alternativas que después serían adoptadas de manera general (Marra y Bennett, 2020).

Tabla 1. Asistencia de Estados Unidos a Colombia por dependencia de Estado y USAID (en millones de dólares, años fiscales 2012-2020)

Procedencia	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fondo de apoyo económico	172	168,8	141,5	133	126	180,3	180,3	187,3	146,3
Educación y entrenamiento militar internacional	1,7	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,5	1,3	1,9
Control internacional de narcóticos y refuerzo legal	160,6	152,3	149	135,2	135,2	143	143	170	180
No proliferación, antiterrorismo, desminado y programas relacionados	4,8	5,1	4,3	4,3	3,5	21	21	21	21
Financiamiento militar extranjero	40	28,9	28,5	27	27	38,5	38,5	38,5	38,5
Asistencia para el desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	61

Fuente: Beittel, J. 2020 Colombia background and U.S. relations, Congressional Research Service <<https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R43813>> acceso 01 de mayo de 2021

Tabla 2. Asistencia de Estados Unidos en Paz y Seguridad en 2019 en países seleccionados de América Latina (millones de dólares)

País	Paz y Seguridad	Porcentaje total respecto a la asistencia de EU
Colombia	106,14	33%
México	62,25	35%
Perú	12,72	17%
Panamá	10,08	48%
Guatemala	9,01	4%
Honduras	8,69	6%
El Salvador	5,31	3%
Brasil	1	3%

En el rubro paz y seguridad, se incluye: combate a las armas de destrucción masiva, reconciliación y mitigación del conflicto, actividades contra el narcotráfico, actividades contra el terrorismo, paz y seguridad general, operaciones de estabilización y reforma al sector de seguridad y crimen transnacional. Fuente: página del gobierno de Estados Unidos foreignassistance.gov

Con ello, Colombia se perfiló como uno de los puestos de avanzada de la “[...] deslocalización geográfica de la política de Estado formulada por el Pentágono [siendo] un experimento equivalente al de Israel [...] Colombia se erige como sede subalterna de la política estadounidense” (Ceceña, 2010).¹² En dicha dinámica, el país andino destaca por sus cualidades geoestratégicas que permiten la articulación entre Centro y Sudamérica, así como por ser el único sitio en la región sur del hemisferio que cuenta con acceso tanto al Océano Atlántico como al Pacífico.

Desde entonces, Colombia se ha convertido en un socio privilegiado de Estados Unidos en tres ámbitos interrelacionados que merecen ser puestos de relieve. En primer lugar, como modelo de la asistencia militar de Estados Unidos, en especial a partir de lo observado entre finales de la década de los años noventa (con el lanzamiento del Plan Colombia) y hasta la actualidad, lo que incluso ha sido considerada la referencia para llevar a cabo esta estrategia en otras geografías del planeta (Lindsay Poland, 2018).

En segundo, destaca el papel que comporta en el afianzamiento de la estrategia que busca delegar en otros países el avance de la agenda norteamericana, un discurso que se reitera en diversos documentos estratégicos y de manera específica en los que produce de manera constante el Southern Command. Se trata de la ampliación de aquello que fue referido como BPC, pero que alberga la realización de una amplia gama de formas de cooperación: doctrinarias, de acción conjunta y de capacidades militares. Esto se verifica tanto en el despliegue territorial en América Latina y el Caribe, a través del papel asignado a este país por el Colombia Action Plan on Regional Security, dedicado desde 2012 a entrenar a ejércitos y policías de países caribeños y centroamericanos (CRS, 2019); como de la participación

¹² Destacando de este proceso el bombardeo en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos en marzo de 2008 y el ulterior Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América (2009), el mismo que sería rechazado por la Corte Constitucional al año siguiente.

de efectivos del país andino en misiones de *estabilización* de la ONU y como único país de América Latina y el Caribe considerado socio global por la OTAN (OTAN, 2018).¹³ A ello se agrega su reciente inclusión como país miembro de la OCDE (abril de 2020). Se trata de una relación que, como era señalado antes, abarca distintas dimensiones y escalas territoriales:

Colabora en los objetivos diplomáticos de EE. UU. en las Naciones Unidas en temas como Ucrania, Siria y Corea del Norte, coopera en la lucha contra el crimen organizado transnacional, proporciona un mercado en expansión para los productos y servicios de EE. UU. y aporta experiencia en seguridad a América Central, Afganistán, varios países de África y las Naciones Unidas (Blunt et al., 2017).

Finalmente, resalta la retroalimentación que existe entre el recorrido de la política de guerra irregular en Colombia con décadas de implementación de *facto* y la incorporación formal de esta estrategia por parte de Estados Unidos en su doctrina militar y las incursiones bélicas en el siglo XXI.

Conflicto armado de larga duración

Colombia ha contado con uno de los procesos de guerra más duraderos en la historia reciente, aunque suele ser presentado como un país donde la democracia procedimental funciona y en que no han resultado habituales los golpes de estado como en otras regiones de América Latina y el Caribe.¹⁴ Si miramos desde una perspectiva más

¹³ Se trata de un estatus específico que no implica ser miembro de la OTAN, pero que permite hacer parte en ejercicios, entrenamientos, cursos, conferencias, así como en distintos programas.

¹⁴ Sin embargo, solo en el siglo pasado, el Ejército intervino más de 20 veces en la política interna del país, al mismo tiempo que el Estado de sitio ha sido invocado de manera recurrente. Solo durante el Frente Nacional se estima que quince de los veinte años que duró la alternancia entre los partidos Liberal y Conservador, fueron regidos por el Estado de sitio (Puerta, 2010).

amplia, se trata de un país que desde su independencia hasta 2016, cuando se firman los acuerdos de paz en la Habana, ha estado más de tres cuartas partes del tiempo en guerra (Mills y Kilcullen, 2016), lo que hace plausible conceptualizarlo como un conflicto armado prolongado (Insuasty, Valencia y Restrepo, 2016).¹⁵

Esto es especialmente significativo en el contexto de América Latina y el Caribe, región que se caracteriza desde el siglo pasado por la casi ausencia de conflictos armados interestatales y en que la conflictividad social ha estado vinculada en la mayor parte de los casos con formas de violencia política.¹⁶ Con excepción de las guerras o conflictos internos en Perú, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, en el resto de los países la confrontación bélica en la segunda mitad del siglo XX fue de carácter restringido y derivó en la conformación de gobiernos de corte autoritario o directamente bajo el mando de dictaduras militares, todo ello en el marco de la Guerra Fría cuya expresión regional fue la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN).¹⁷ Colombia,

¹⁵ Entre las confrontaciones destaca La Guerra de los Mil Días en el tránsito del siglo XIX al XX, protagonizada por Liberales y Conservadores y saldada con alrededor de 100 mil decesos. Dos elementos resaltan de la conflagración. Por un lado, la utilización de estrategias de guerra de guerrillas por parte del bando liberal, lo que a la postre tendrá continuidades con los procesos bélicos subsiguientes. Por el otro, la situación calamitosa en que quedó el país y que contribuyó con la independencia de Panamá en 1903, promovida por Estados Unidos y su interés en la construcción de un canal interoceánico. El otro proceso de gran trascendencia para es el periodo conocido como La Violencia en que de nuevo la disputa ocurrió entre los partidos Liberal y Conservador y que tiene vínculos históricos con el conflicto armado interno posterior.

¹⁶ Existe una polémica dentro de la historiografía colombiana sobre la continuidad entre el proceso de mediados del siglo XX conocido como La Violencia y la emergencia de los grupos insurgentes de izquierda en la década de los sesenta, lo cual modificaría la duración del enfrentamiento bélico por 20 años, lo que haría del colombiano el conflicto más antiguo del mundo por encima de los que enfrentan a Palestina e Israel, y a India y Paquistán (Pizarro, 2005).

¹⁷ Con ello, se alude a que a pesar de que guerrillas urbanas y/o rurales formaron parte de la escena regional general, hubo pocos lugares en las que estas adquirieron alcance nacional, como sí ocurrió en los ejemplos señalados. En algo que en la actualidad sería considerado como parte del repertorio de herramientas no militares para la consecución de objetivos estratégicos, la contrainsurgencia asociada con la DSN tuvo como complemento la iniciativa de asistencia económica y social conocida como Alianza para el Progreso (1961).

cuya última confrontación por motivos fronterizos se remonta a la disputa con Perú (1932-1943), a partir de ese momento, redirigió sus esfuerzos bélicos y la reestructuración paulatina de su Ejército hacia el control y la estabilidad interna (Ospina, 2013).

Desde cierta perspectiva que busca colonizar el sentido común, se alude a que el largo conflicto interno colombiano concluyó en septiembre de 2016 con la firma de los acuerdos de La Habana entre la representación del gobierno de Juan Manuel Santos y la insurgencia de mayor tamaño y alcance del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).¹⁸ Esta es una primera cuestión que debe ser sopesada a la luz de varios elementos. Por un lado, a partir de la pervivencia de otro de los grupos insurgentes de importancia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).¹⁹ También por la continuidad que tienen las actividades criminógenas / contrainsurgentes de las denominadas Bandas Criminales Emergentes (BACRIM) que en términos generales provienen del curso seguido por el proceso de desmovilización paramilitar de 2003. Finalmente, otra consideración de gran peso que conduce a impugnar la finalización del conflicto armado, es la reactivación pública de una porción de las FARC-EP en agosto de 2019, pero que había comenzado un año antes (Márquez, 2019).

Estos elementos que remiten a la duración y modalidades del proceso para el caso colombiano deben ser considerados para la caracterización que se lleve a cabo sobre el papel que cumple en la actualidad en la región. Entre otras cosas, porque se han alterado las estrategias del gobierno con el pasar de las décadas y a partir del último decenio del siglo pasado, contó con la aparición o sofisticación de

¹⁸ Grupo cuyos orígenes se remontan a 1964, después de los ataques del Ejército colombiano a la aldea de Marquetalia, considerada una *república independiente* por el gobierno y donde coexistían liberales e integrantes del Partido Comunista. Adopta sus siglas en 1966, se trata de una insurgencia con eminente carácter campesino (Beltrán, 2015).

¹⁹ Organización político militar fundada también en 1964, inspirada en la Revolución Cubana y con mayor componente de clases medias, sectores universitarios/intelectuales y también con una fuerte relación con la Teología de la Liberación (Medina, 2019).

actores armados en la confrontación.²⁰ Cuando hablamos de Colombia, nos encontramos con la coexistencia de distintas *temporalidades*, marcos de acción bélica, así como de la actualización de los grupos en disputa. Por lo tanto, el ejemplo del país andino también previene de la utilización de marcos de interpretación lineal-etapistas, o que perciben en determinadas alteraciones, estruendosos cambios de rumbo en las lógicas de la guerra.

Dicha complejidad cuenta con un hilo conductor que nos permite comprender la actualización doctrinaria en las formas de hacer la guerra: la continuidad de las expresiones de guerra irregular que han sido recurrentes desde el siglo XX, en especial en lo que refiere a la contrainsurgencia. En el caso de Colombia, esto refiere a dos ámbitos principales estrechamente relacionados. Por un lado, la existencia a lo largo de las décadas de confrontaciones entre el Estado y distintos actores no estatales y por el otro, la colaboración que, desde mediados del siglo XX, Estados Unidos y el país latinoamericano han tenido para contrarrestar estas amenazas. No obstante que en el proceso colombiano es preciso distinguir entre las expresiones de violencia armada organizada (insurgencia, narcotráfico, paramilitarismo), el tratamiento del Estado ha encontrado en estas la manera de justificar el empleo de la guerra irregular.

Considerar la duración, modalidades y actores involucrados en el extenso conflicto armado resulta necesario también para evitar ciertas generalizaciones o simplificaciones. Esto es lo que ocurre cuando se contrasta con algunas de las conceptualizaciones de orden académico más recientes. Por ejemplo, que a diferencia de las *nuevas guerras* como han sido planteadas por Munkler (2005) y Kaldor (2001), Colombia ha contado desde hace décadas con reconocimiento internacional sobre la existencia de su conflicto armado, a tal grado que han sido reiterados los esfuerzos institucionales, nacionales e internacionales por establecer procesos de negociación entre las

²⁰ Como ocurre con el paramilitarismo contrainsurgente o a la actuación de las CMSP, lo que será abordado con mayor amplitud en las páginas siguientes.

partes. Además de ello, aunque comporta implicaciones específicas, no se trata de una confrontación en la que tenga un papel preponderante el carácter étnico o identitario de los contrincantes. Aun cuando es perceptible la incorporación de tecnología bélica de cierta envergadura, tampoco podría ser considerado un elemento central en la confrontación, con lo cual también se aleja de las conceptualizaciones que enfatizan esos aspectos, como ocurre con la propuesta de la Guerra de Cuarta Generación (Lind, 2005). Vinculado con lo anterior, pero como parte del enfoque en torno a la Guerra Híbrida, los elementos propagandísticos o de lucha a través de mecanismos no militares (Barrios, 2019) está presente desde hace tiempo, lo que sin duda ha contribuido a que Colombia cuente con una de las sociedades más militarizadas de la región y probablemente del mundo entero.

Uno de los aspectos en los cuales el proceso colombiano sí coincide con dichas elaboraciones, pero también con las modificaciones doctrinarias de las Fuerzas Armadas esbozada al inicio de este capítulo es que se trata de un conflicto que no corresponde con la versión dominante a lo largo del siglo XX que asimilaba la guerra con el orden interestatal internacional.²¹ Desde hace tiempo, desde distintas disciplinas, queda claro que el Estado ya no puede ser considerado el referente de la conflictividad social o el principal agente dentro de esta, sino que participan otros actores que en algunos casos resultan determinantes. En relación a ello, se puede señalar que el conflicto colombiano de tanto en tanto irradia las dinámicas de los países limítrofes, en especial Venezuela y Ecuador, pero esto también está relacionado con la participación de Estados Unidos o de las Compañías Militares y

²¹ Lo que merece una crítica historiográfica, ya que esa manera de comprender este tipo de fenómenos está anclada en una visión limitada de los mismos. En los países con una conformación inacabada, incompleta o divergente de la estatalidad y que por añadidura hacen parte del Sur Global, los procesos de violencia y guerra siempre estuvieron dirigidos de manera preponderante hacia asuntos de orden interno. En el marco de la Guerra Fría, operó un proceso de construcción de enemigos endógenos, entre los cuales tuvo un papel privilegiado el combate al comunismo o a distintas expresiones de disidencia social, fuesen estos sindicatos, movimientos estudiantiles, población organizada y desde luego organizaciones político-militares insurgentes.

de Seguridad Privadas (CMPS).²² Estos elementos también contravienen las nociones tradicionales en torno al territorio y la territorialidad.

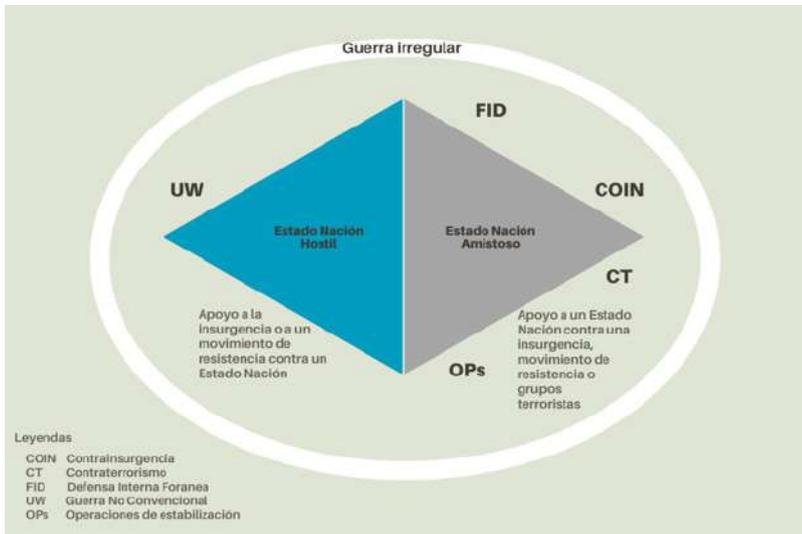
Guerra irregular y contrainsurgencia

Como fue anticipado, el conflicto armado prolongado de Colombia puede ser abordado a través de la puesta en funcionamiento de la guerra irregular y del apoyo que ha recibido el país andino por parte de Estados Unidos. Esto es especialmente nítido a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando comienza este tipo de colaboración, teniendo como momento culminante el tránsito de fines de la década del noventa hacia la presente centuria, cuando esta modalidad de guerra y en particular la contrainsurgencia fue incorporada de manera abierta en la agenda de ambos países. Tratándose de un conjunto de actividades que suelen oscilar entre la clandestinidad y su inclusión en las estructuras y funciones formales de las Fuerzas Armadas, tienen como componente fundamental a las Fuerzas de Operaciones Especiales, que se caracterizan por intervenir en una escala reducida, escenarios no reconocidos de manera abierta y que suelen buscar apoyo en la población civil. En el caso del despliegue extraterritorial del Special Operations Command (SOCOM) de Estados Unidos, establece este tipo de colaboración con grupos armados locales de diverso signo (formales, ilegales, *ciudadanos* y privados). Sobre la vinculación entre este tipo de fuerzas y la GI, en la actualidad el JCS establece:

²² En la hipótesis lejana de que tuviera lugar una guerra interestatal entre Colombia y Venezuela, se presume que la República Bolivariana difícilmente estaría en posibilidades de sostener una guerra de carácter tradicional, aunque sus aviones de combate son más modernos en relación a la flota aérea colombiana, a lo que se suma que Colombia cuenta con una capacidad limitada de defensa antiaérea, con lo cual podrían afectar instalaciones simbólicas en Bogotá o infraestructura petrolera crítica, en cambio: “Colombia has a highly developed irregular warfare capability and could carry out guerrilla-style raids nearly at will against Venezuelan forces, lines of supply, communications and infrastructure” (Spencer, 2019). En síntesis, el resultado de ese balance es que no debiera de ser una preocupación de los jerarcas militares colombianos.

[L]os SOF son seleccionados, capacitados y equipados para llevar a cabo todas las formas de IW. Las operaciones especiales consideran la totalidad de los aspectos cognitivos, informativos, físicos, culturales y sociales del entorno operativo para influir en el comportamiento de la población local a través de capacidades únicas para identificar e influir en las poblaciones relevantes, mejorar la estabilidad, prevenir conflictos y, cuando sea necesario, luchar y derrotar a los adversarios [...] Si bien las CF [fuerzas convencionales] también llevan a cabo algunas de estas actividades (p. ej., FID, SFA, asistencia humanitaria exterior [FHA] y COIN), las SOF las llevan a cabo utilizando tácticas, técnicas y procedimientos especializados, y en condiciones únicas y con diferentes estándares, pero de manera complementaria a las capacidades de CF (JCS, 2014: II-1, II-2).

Gráfico 1. Diagrama sobre la relación entre las operaciones especiales y la guerra irregular



Fuente: elaboración de David Barrios a partir del Joint Publication 1. Doctrine for the Armed Forces of the United States (2017).

El vertiginoso incremento en las actividades de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos resulta un dato elocuente de la creciente importancia que tienen en los conflictos en el siglo XXI. De acuerdo con estimaciones de 2019, que provienen de datos del propio SOCOM, las fuerzas de Operaciones Especiales superan el volumen total de Fuerzas Armadas de distintos países del mundo, con más de 73 mil integrantes. Además de ello, resalta en 2019 su actuación en 144 países, lo que representa casi tres cuartas partes del planeta, desplegando 6700 comandos por semana en alrededor de 82 países (Turse, 2020).²³

Tabla 3. Comparación entre efectivos de las Fuerzas Armadas de América Latina y el Caribe y las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos (2019)

Brasil	335 000
Colombia	293 000
México	277 000
Venezuela	123 000
Perú	81 000
Chile	77 000
Argentina	74 000
Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos	73 000
República Dominicana	56 000
Cuba	49 000
Ecuador	40 000

Fuente: International Institute for Strategic Studies, 2020, “International comparisons of defence expenditure and military personnel”, *The military balance* (Londres: IISS) y Turse, N. 2020 *America’s Commandos Deployed to 141 Countries and “Criminal Misconduct” Followed*, *Tom Dispatch* (19 de marzo)

²³ Al establecer una comparación con las Fuerzas Armadas de los países de América Latina y el Caribe, por sí mismas serían la séptima fuerza con mayores efectivos después de Brasil, Colombia, México, Venezuela, Perú y Argentina (*Military Balance*, 2020).

Aunque América Latina y el Caribe son uno de los sitios donde se llevan a cabo menos actividades de este tipo por parte de Estados Unidos, en el siglo XXI se ha verificado un cierto incremento. Para el año 2006, se estimaba que el componente del Southcom dedicado a estas tareas realizaba: “[...] setenta y cinco despliegues de sof al año con un promedio de quince misiones realizadas en siete países cada día” (Finlayson, 2006d). Pero en lo relativo a Colombia, lo que destaca es que se trata del único país de la región que ha contado con un componente de avanzada en Operaciones Especiales ubicado en la Embajada de Estados Unidos (Finlayson, 2006d).

Esto no siempre fue así y es por ello que el despliegue de este tipo de fuerzas por parte de Estados Unidos en Colombia, así como la adopción de las mismas como parte de la estructura del Ejército del país andino, resulta un elemento importante para comprender estas mutaciones. Este tipo de colaboración tiene un recorrido amplio en la relación entre ambos países y al mismo tiempo que nos ayuda a calibrar la cooperación entre ellos, permite dar cuenta de la trayectoria contrainsurgente colombiana y de los significativos aprendizajes que ha significado para Estados Unidos.

La cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia se remonta al menos, a la participación de efectivos colombianos en la Guerra de Corea, quienes fueron enviados en 1950 (Finlayson, 2006a). En 1959, durante el periodo de alternancia pactada entre Liberales y Conservadores conocido como Frente Nacional, la asistencia militar de Estados Unidos se incrementó. En ese proceso, destaca la conformación de un equipo conjunto, integrado por miembros de la CIA y del Departamento de Estado de Estados Unidos, quienes visitaron el país sudamericano para realizar una evaluación respecto a la violencia imperante. Esto resultó en la creación de la Unidad de Lanceros del Ejército Nacional de Colombia, dedicada a acciones antiguerrilla y cuyo curso de formación es considerado aun en la actualidad el más importante en la región (Briscoe, 2006a, 2006b).

En 1962, una nueva misión, ahora encabezada por el General William P. Yarborough, recomendó el envío de cinco equipos de

operaciones especiales (SF ODA) (Briscoe, 2006), así como la utilización de fuerzas civiles en el marco del Plan Lazo o LASO (Finlayson, 2006c; Beltrán 2015).²⁴ Lo ocurrido en Colombia a partir de dicha intervención es considerada una de las campañas de contrainsurgencia en el continente más exitosas de la época (Rempe, 2002) y que incorporó, además de acciones bélicas no convencionales, operaciones de guerra psicológica, acciones cívicas y tareas de inteligencia.

Sin embargo, en virtud del consabido repudio que han tenido este tipo de intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina, unos años más adelante, las modificaciones en la dinámica de los tráfico de estimulantes ilegales ofrecieron la justificación perfecta para poder hacer presencia a partir de argumentos diferentes.

Es bajo ese argumento que, en la estructura de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, existe desde 1985 una Sección de Asuntos de Narcóticos (NAS) trabajando de manera conjunta con la delegación de la DEA y el personal *propiamente* militar o dedicado a asuntos de defensa.

Ya en el marco del Plan Colombia, se consideró que la dimensión de la misión en el país andino ameritaba la instalación de una *forward operating base* (FOB) en uno de los tres batallones de las Fuerzas Especiales en Bogotá y debido a requisitos de despliegue, una compañía de Fuerzas Especiales configurada como *advanced operating base* (AOB) (Finlayson, 2006d). La misma que puede ser considerada de gran trascendencia, porque, desde esa locación, no solo se ha

²⁴ El Estatuto Orgánico de la Defensa Nacional (Decreto de estado de sitio 3398) de 1965, reglamentado como norma permanente con la expedición de la Ley 48 de 1968, legalizó la conformación de grupos de autodefensa campesinas, autorizando el porte de armas por particulares y adjudicando prerrogativas a las Fuerzas Armadas para dotar de armamento a la población de entornos rurales con el objeto de enfrentar a los grupos guerrilleros (Insuasty, Valencia y Restrepo, 2016). Una versión distinta sobre el nombre de la iniciativa contrainsurgente refiere que las siglas LASO remitían a *Latin American Security Operation* lo que denota la clara influencia de Estados Unidos en la elaboración de la estrategia, cosa que siempre fue negada por los militares colombianos. En cambio, la denominación Lazo fue identificada con la acción de enlazar o cercar militarmente a las guerrillas liberales y comunistas. En el marco de dicho plan, fue destruida la aldea de Marquetalia lo que a la postre conformaría el mito fundacional de las FARC (Beltrán, 2015).

apoyado directamente a las fuerzas especiales en Colombia, sino que se ha establecido una relación de Comando y Control con las Operational Detachment Alpha (ODA) desplegadas en otros países de América del Sur. En 2006, por ejemplo, al mismo tiempo que se llevaban a cabo entrenamientos en Colombia, se apoyaban ejercicios conjuntos en Paraguay, Chile, Ecuador y Panamá, además de una *misión sensible* del SOCSOUTH (Finlayson, 2006e).

Como resultado de la colaboración de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en el marco del Plan Colombia, las Fuerzas Armadas del país andino crearon su propio Batallón de Operaciones Especiales dedicado a la lucha contra el narcotráfico, entrenado por sus pares del Ejército estadounidense (Kilkullen y Mills, 2015; Ejército Nacional de Colombia 2020a). Al mismo tiempo, las Fuerzas de Despliegue Rápido (FUDRA) de carácter antisubversivo fueron beneficiadas por el financiamiento y la tecnología contemplada como parte de la asistencia de la iniciativa bilateral (Ejército Nacional de Colombia, 2020b). En 2002, fue creado el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOPE) al mando de un Coronel quien reporta de manera directa al Comandante del Estado Mayor Conjunto de Colombia y ha sido rutinario que un oficial de Estados Unidos sea asignado para servir en el mismo (Finlayson, 2006c).

Esto resulta importante porque nos permite comprender que la presencia militar de Estados Unidos en América Latina comporta diferentes escalas y estratos, desde las más generales relacionadas con la movilidad de las fuerzas del Comando Sur a lo largo de la región a través de ejercicios militares, hasta la presencia constante y en cierto sentido más sutil dentro de los países del área.²⁵ En relación a este segundo elemento, las embajadas de Estados Unidos en todos los países del mundo contienen en su propio organigrama distintas funciones

²⁵ América Latina cuenta con seis de los veinticuatro Oficiales de Enlace de Operaciones Especiales (SOLO) que están asignados en todos los comandos geográficos (Briscoe, 2018c), además de ello ha implementado la Special Operations Command South (SOCSOUTH) Forward (SOC-FWD) en Colombia con atribuciones respecto a los países del Cono Sur y de la Cordillera de los Andes (Briscoe, 2018d).

militares y de seguridad. Entre estas se encuentran los Agregados Militares (DATT), el Grupo Asesor de Asistencia Militar (MAAG) y el Grupo Militar (MG). En virtud de que esta multiplicidad de figuras provocaba conflictos en la cadena de mando y la toma de decisiones, a partir de 2013, cuando fue lanzada la directiva 5205.75 del DOD, se estableció que el estatus de mayor jerarquía reside en el Agregado Militar que, a partir de entonces, es considerado Oficial Superior de Defensa (SDO) (Briscoe, 2018c).²⁶

Finalmente, en lo que refiere a los marcos de acción de las fuerzas apostadas de manera permanente por parte de Estados Unidos en Colombia, otro elemento que nos permite calibrar la importancia del país andino es la fuerza comúnmente desplegada desde el Comando de Operaciones Especiales del Comando Sur (SOCSOUTH) hacia Colombia para llevar a cabo este tipo de tareas. Se trata del 7th Special Forces Group (SFG), uno de los más antiguos en su tipo (1960), que contó con participación en Vietnam y a partir de la desactivación del 8TH SFG está asignado a América Latina y el Caribe.²⁷ Con posterioridad a 2001, esta fuerza de operaciones especiales rota entre el CENTCOM y el SOUTHCOM, por lo que las actividades que desarrollan en Colombia son consideradas aportes valiosos a su entrenamiento que después será puesto a prueba en las incursiones del hegemón en el área de responsabilidad de dicho comando geográfico (Finlayson, 2006d).

²⁶ Encargado de la coordinación de asuntos civiles (CA), operaciones especiales (SOF) y operaciones psicológicas (PSYOP). En términos más generales, tiene la responsabilidad de ser el enlace entre el Comando Sur y las instituciones de seguridad y defensa del país anfitrión (Briscoe, 2018c). Antes de su instauración en Colombia, fue implementado en El Salvador ante la preocupación de que la victoria electoral del FMLN (después de su derrota militar) se pudiera reiterar en el país andino en el marco de los procesos de diálogo en la Habana, por lo que se consideraba de vital importancia que el personal del DOD en Bogotá tuviera las condiciones para “[...]speak with one voice and become fully integrated with the embassy departments and supporting agencies, as well as the [Ejército de Colombia] COLMIL at all levels—tactical to operational to strategic” (Briscoe, 2018d).

²⁷ El 8th Special Forces Group funcionó de 1962 a 1972 en la Zona del Canal de Panamá (Briscoe, 2008).

El punto de quiebre

Las últimas dos décadas del siglo XX significaron para Colombia la convergencia de distintas problemáticas y posibilidades. Por un lado, el acumulado de alternativas desde la sociedad al conflicto armado interno, fueron sistemáticamente frustradas por la actuación del mercenarismo corporativo contrainsurgente (Franco, 2009), es decir, de la actuación alternada de agentes del Estado, grupos paramilitares y narcotraficantes con objetivos represivos. Este conglomerado impactó de una manera u otra en siete procesos de desmovilización de actores armados, entre los que resaltan los de dos grupos insurgentes de trascendencia (M-19 Y EPL) así como el cuestionado desarme de porciones de las AUC.²⁸ La cancelación de las vías civiles en Colombia durante esos años, pero cuya estela llega hasta nuestros días, cuenta como momentos paradigmáticos el curso seguido a la desmovilización del M-19 y el exterminio de la Unión Patriótica, este último considerado como un genocidio político.²⁹

De manera paralela, la década de los años ochenta había señalado el despegue de las organizaciones colombianas abocadas al tráfico de estimulantes ilegales. Especialmente notorio resultó el desarrollo del Cártel

²⁸ El M-19 fue una insurgencia de carácter esencialmente urbano, compuesto por capas medias y altas de la sociedad colombiana, así como con un perfil *intelectual*. Se destacaron por llevar a cabo acciones audaces entre las que destacan la sustracción de la espada de Simón Bolívar de su casa museo (1974), y la toma de las embajadas de República Dominicana (1980) y del Palacio de Justicia (1985). En marzo de 1990, fueron parte del primer proceso de desmovilización exitoso en Colombia y pasaron a la vida civil y conformaron la Alianza Democrática M-19. Postularon para las elecciones de ese mismo año al ex Comandante Carlos Pizarro, quien fue asesinado el 26 de abril (Behar, 1986; de Pablos, 2016).

²⁹ La Unión Patriótica fue un partido político creado a raíz de las negociaciones entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC-EP a mediados de la década de los años ochenta. Su componente mayoritario han sido integrantes del Partido Comunista Colombiano (PCC). En concreto, es resultado de los acuerdos de La Uribe, que entre otras cosas estipulaban la creación de un movimiento de oposición como mecanismo para que la guerrilla se incorporase de manera paulatina a la vida legal del país. Durante veinte años, fueron objeto de ataques que incluyeron desaparición forzada, tortura y asesinatos sistemáticos. Hasta 2006, se estimaba que entre 4 mil y 5 mil integrantes habían sido asesinados, entre los cuales se cuentan dos candidatos a la presidencia, ocho congresistas, así como cientos de alcaldes y concejales (Cepeda, 2006; Sepúlveda, 2018).

de Medellín, que se logró imbricar en distintas escalas con el Estado colombiano y que, ante la imposibilidad de profundizar esa penetración, llevó a cabo distintas acciones que condujeron a su persecución.

Como fue señalado con anterioridad, fue precisamente a través de la definición del narcotráfico como amenaza que Estados Unidos logró relanzar su política intervencionista en la región, siendo Colombia el espacio privilegiado para la confección de dicha política. En 1992, el Southcom y el socom enviaron una Fuerza de Tarea Conjunta junto con personal de la DEA para asesinar a Pablo Escobar, cabeza visible del Cártel de Medellín. Para ello, fue creado el llamado *Bloque de Búsqueda* en el que tomaron parte, además de las agencias mencionadas, la Policía Nacional de Colombia y los llamados *Pepes*, o Perseguidos por Pablo Escobar, organización de ex integrantes del propio Cártel y entre los que se cuentan personajes después vinculados con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (Barrios, 2014; Gresham, 2013).

En la misma época, resultó notorio el fortalecimiento de las organizaciones insurgentes, en especial en la segunda mitad de la década de los noventa, lo que fue potenciado por los recursos obtenidos a través de exacciones respecto a actividades productivas estatales, pero también de otras de carácter ilegal, además de la realización de retenciones (privación de la libertad). Como resultado de ello, se estima que la insurgencia logró desplegarse en más del sesenta por ciento del país, lo que, a lo largo de las dos últimas décadas del siglo XX, entró en sintonía con un proceso en que las Fuerzas Armadas colombianas habían visto crecer de manera desproporcionada su aparato burocrático en detrimento de sus capacidades de combate, lo que desde cierta perspectiva habría contribuido a la conformación de un “cómodo *impasse*” (Richani, 2003).³⁰

Durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y en el marco de negociaciones de paz con las FARC-EP, fue creada una zona desmilitarizada

³⁰ Significativo del curso del conflicto en aquellos años es el proceso de conversión de las estructuras móviles de las FARC-EP, en un ejército irregular con la conformación de bloques regionales.

conocida como de despeje o de distensión en San Vicente del Caguán. Con una extensión de 42 mil kilómetros cuadrados, tenía una superficie que equivale a un área algo mayor al territorio de Suiza.

De manera simultánea a la realización de los diálogos de paz, el gobierno del país avanzaba en el diseño e instrumentación del Plan Colombia y, en febrero de 2002, dio por finalizadas las conversaciones de manera unilateral, lanzando la Operación Thanatos con el envío de 20 mil soldados y el objetivo de recuperar el área desmilitarizada. El fracaso de estas negociaciones permitió la articulación de un discurso reaccionario y belicista, que sería encarnado en la figura de Álvaro Uribe, quien a la postre impulsaría la política de Seguridad Democrática. De esta manera, el estancamiento del conflicto colombiano llegó a su fin a partir de la formulación del Plan Colombia y la inyección de ingentes recursos a las Fuerzas Armadas, pero también por la decisiva incorporación de otros actores armados en la contienda, como será expuesto en el próximo apartado.

Mapa 1. Zona de distensión de San Vicente del Caguán



Fuente: elaboración de David Barrios Rodríguez.

Paramilitarismo contrainsurgente y privatización de la guerra

A contramano de perspectivas que consideran la privatización de la seguridad y la guerra como una anomalía histórica, la existencia de actores armados privados comporta mayor regularidad en el tiempo que la conformación de ejércitos profesionales, toda vez que formas de violencia y guerra caracterizadas por la participación de este tipo de combatientes, fuerzas dispersas-irregulares, ha sido una condición más constante en el desarrollo de los conflictos bélicos (Singer, 2008). Sobre este aspecto vale establecer con mucha claridad los rasgos del fenómeno y no sucumbir a la tentación de realizar extrapolaciones respecto a manifestaciones de privatización de la seguridad y la violencia, como ha ocurrido con los escuadrones de la muerte o con el *warlordism* (señores de la guerra).³¹

En cambio, una de las características de la guerra irregular en la actualidad consiste en que los Estados busquen *apoyo* en la población civil o en actores privados. Esto permite entre otras cosas, mejorar el conocimiento del terreno en determinadas áreas en disputa, poder llevar a cabo acciones por fuera de los marcos normativos vigentes y en términos generales establecer un desdoblamiento que vuelva más

³¹ Los escuadrones de la muerte, entendidos como grupos irregulares fomentados con frecuencia por el gobierno y cuya principal actividad es el asesinato, tienen como una de sus características ser grupos clandestinos pero que a través del asesinato buscan llevar un mensaje lo más lejos posible (Campbell y Brenner, 2000). La actividad central que desarrollan, el asesinato de sectores poblacionales o como medida represiva o para amedrentar a opositores políticos sigue siendo realizada por una diversidad de actores entre las que se cuentan grupos de sicarios, maras o en el caso de Brasil, las milicias. Los *señores de la guerra* constituyen una figura que da cuenta de liderazgos que se dan durante o con posterioridad a un conflicto armado y que controlan un determinado *territorio*. Se caracterizan por contar con ejércitos privados alimentados por *economías de posguerra* basadas en la explotación de bienes naturales, metales preciosos o a través del cultivo de estimulantes ilegales. La participación en estas actividades económicas les permite vincularse con mercados y empresas transnacionales. También la expoliación de la población bajo su control a través del cobro de impuestos está prevista como uno de los elementos que les permiten subsistir. En algunos casos, estos liderazgos trascienden a los conflictos armados y pueden eventualmente hacer parte de la institucionalidad formal (Schneckener, 2006). Otra aproximación junto con una reconstrucción histórica del *warlordism* es desarrollada por Antonio Giustozzi (2005).

eficaces operaciones en los terrenos de la información, propaganda o la guerra psicológica.

En lo que se refiere al periodo contemporáneo, en Colombia podemos considerar significativa la aparición y expansión de las Compañías Militares y de Seguridad Privada (CMSP) que durante la década de los años noventa, actuaron de manera conjunta con Fuerzas Armadas colombianas y corporaciones para contrarrestar las actividades de la insurgencia, en especial en relación al resguardo de instalaciones y ductos petroleros. Ejemplo de ello es la empresa británica Defense Systems Limited (DSL) contratada por British Petroleum (BP) para impartir cursos de entrenamiento a la Policía Nacional con el objeto de proteger su infraestructura (Werner y Seifert, 2012). También merece la pena mencionar las actividades de la Occidental Petroleum (Oxy), que pagó 2 millones de dólares a la decimotava Brigada del Ejército de Colombia por el resguardo de sus oleoductos en Arauca en 1997 (Leech, 2007). Al año siguiente, en un bombardeo de la fuerza aérea colombiana, fueron asesinadas 17 personas (entre ellos siete niños), mientras que otras 25 resultaron heridas en un operativo ordenado por mercenarios de la empresa Air Scan contratados por Oxy (Perret, 2009). Con posterioridad al lanzamiento del Plan Colombia, Estados Unidos incorporó CMSP en sus actividades en el país andino, bajo la difusa figura de ser empresas contratistas. El Departamento de Estado (DOE) y el Departamento de Defensa (DOD) implicaron a Dyncorp y a Southcom Reconnaissance Systems (SRS), subsidiaria de Northrop Grumman en tareas de erradicación y monitoreo de cultivos (Briscoe, 2018a).³²

³² Tres *contratistas* de SRS, Marc D. Gonsalves, Keith D. Stansell y Thomas R. Howes fueron rescatados después de un accidente en helicóptero y hechos prisioneros por las FARC-EP, lo que a la postre redundaría en distintas operaciones de rescate entre las que destacan *Willing Spirit*, *ELIPSE* y finalmente la más conocida *JAQUE* (Briscoe, 2018a, 2018b). Otra versión señala que el helicóptero fue derribado por las FARC-EP (Beltrán, 2015). El episodio es relevante más allá de lo anecdótico, porque permitió durante varios años la actuación de Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos en el país e inclusive permite explicar la creación de cierta arquitectura militar como las AOB y FOB señaladas con anterioridad, toda vez que el rescate de los contratistas fue

Sin embargo, en lo que se refiere a la incorporación de actores privados, Colombia ofrece uno de los ejemplos más acabados de paramilitarismo contrainsurgente, mismo que fortaleció el carácter de la guerra irregular en el país y que entró en sintonía con la disposición de grupos de poder públicos y privados, lo que, visto en perspectiva, ha permitido la avanzada sobre territorios, así como bienes naturales y estratégicos.

En este caso, también existen antecedentes del fenómeno, por lo que Raul Zelik distingue cuatro generaciones de paramilitarismo en Colombia. La primera encarnada en la versión local de la Triple A (Acción Americana Anticomunista) que operó a finales de la década de los años setenta. Este grupo ejemplifica el paramilitarismo de vertiente institucional, al estar conformado por elementos de las fuerzas de seguridad del Estado. A continuación, en los años ochenta, surgieron diversas expresiones de grupos paramilitares, desde el conocido como Muerte a Secuestradores (MAS) financiado por el narcotráfico, grupos de *autodefensa* en contra de las acciones de la insurgencia y expresiones que tendieron hacia la *limpieza social* lo que implicó que “los límites entre sicariato, organizaciones cívico-militares y ejércitos privados comenzaron a diluirse en esta fase” (Zelik, 2015, p. 27).³³

A fines de la década, se comienzan a organizar las estructuras armadas militarizadas del paramilitarismo contrainsurgente, en cuya cabeza se identifica a los hermanos Castaño y que derivaría en la conformación en 1994 de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y

considerado como la principal prioridad del componente de Operaciones Especiales del Comando Sur a partir de 2005.

³³ Respecto a los grupos de autodefensa, destaca en la década de los años ochenta la aparición de milicias armadas apoyadas por el Estado colombiano. Su finalidad era contrarrestar el control de la insurgencia, especialmente de las FARC, quienes *vacunaban* a ganaderos de la zona, lo que redundó en la conformación de la ACDEGAM (Magdalena Medio) que se expandieron hasta Puerto Boyacá, uno de los bastiones del paramilitarismo patrimonial. Otra perspectiva de análisis sobre esta etapa, señala una relación estrecha entre la aparición de esta vertiente paramilitar y la apropiación de tierras por parte de estructuras abocadas al narcotráfico que a partir de esa relación de propiedad se enfrentan con las insurgencias (Insuasty, Valencia y Restrepo, 2016).

Urabá (ACCU) y en 1997 de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).³⁴ Estas últimas tenían continuidad con expresiones previas, por ejemplo, las ACCU, que reunieron a varios de los grupos de limpieza social y escuadrones de la muerte existentes en Antioquia como Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN), el ya señalado MAS y Muerte a Revolucionarios del Urabá (Insuasty, Valencia y Restrepo, 2016).

En esa tercera generación del paramilitarismo, resulta notable el vínculo con el Estado colombiano que se puede establecer a partir de diversos elementos. Uno de los más elocuentes fue el amparo institucional abierto, como ocurrió con su legalización en 1994 a través de la creación de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir), que operaron entre 1995 y 1999 y que enfrentaron a las milicias y a la insurgencia, al mismo tiempo que realizaron labores de *seguridad pública*, hasta que fueron declaradas ilegales por la corte Constitucional.

En términos discursivos, pero también en su estructura (a través de la conformación de bloques y frentes) las AUC *clonaron* la forma de operar de la insurgencia, al apelar a un pretendido programa de reformas políticas y sociales o al utilizar indumentaria, formas de operación e inclusive denominaciones de sus estructuras que funcionaban como espejo de la insurgencia, lo que constituyó, en suma, construir una cierta simetría entre rebeldes de derecha e izquierda, o mejor dicho, la irregularización de la violencia, impulsada por los grupos de poder (Zelik, 2015). Se trata de aquello que el griego Stathis Kalyvas ha denominado “guerra civil no convencional simétrica” (Kalyvas, 2010).

La última generación del paramilitarismo fue el resultado del proceso de desmovilización de 2003 (durante el gobierno de Uribe Vélez) y la aparición de las BACRIM antes referidas. Éstas constituyen

³⁴ Los grupos paramilitares colombianos, no sin intermediación de autoridades militares del país, recibieron entrenamiento por parte de mercenarios y exmilitares de Israel, siendo uno de los casos más llamativos la asesoría de Yahir Klein creador de la CMPS *hoJanit* (Punta de Lanza), a quien se le atribuye un papel determinante en el entrenamiento de integrantes de lo que a la postre serían las AUC (Behar y Ardila, 2012).

la actualización e integración de los fenómenos del narcotráfico y el paramilitarismo contrainsurgente posdesmovilización y se expresan en organizaciones como La Oficina de Envigado, Aguilas Negras, Rastrojos o Urabeños, estructuras mayores que a su vez se disputan a las bandas o combos en las ciudades abocadas al tráfico de estimulantes ilegales, extorsiones y otras actividades económicas, pero que en otros contextos operan como grupos sicariales, aunque también realizan *paros armados* y establecen como objetivos militares a sectores organizados o movilizados de la población.

Plan Colombia

La implementación del Plan Colombia surgió de manera pública como iniciativa antidrogas, pero con el paso del tiempo adquirió un abierto carácter de apoyo al combate a la insurgencia colombiana, configurando una retórica que hizo equivalente la lucha contra ambas problemáticas. Al ser una iniciativa de tipo bilateral (aunque de subordinación implícita) con Estados Unidos, la Directiva Presidencial de Seguridad Nacional 18 (NSPD-12) de 2002, durante el mandato de George W. Bush, que definió a las FARC-EP, ELN y a las AUC como organizaciones terroristas, permitió incrementar el apoyo logístico y de colaboración en tareas de inteligencia con el gobierno colombiano.

A partir de ello, fue autorizado el despliegue masivo de personal de Estados Unidos en el país. En el año 2000, el Congreso de Estados Unidos había colocado un *techo* de 400 efectivos, mitad militares y mitad civiles, pero, en 2005, la National Defense Authorization Act permitió duplicar la cifra que, además, no incluía al personal de la Embajada de Estados Unidos ni a los integrantes del grupo militar (MILGP) de la misma.

El diseño del Plan Colombia especificaba que la asistencia de Estados Unidos estaría concentrada en cinco áreas: apoyo para llevar a cabo una reforma judicial, expansión de actividades antinarcóticas en el Sur del país andino, sustitución de cultivos de hoja de coca,

incremento de la capacidad del Ejército colombiano para proteger el oleoducto Caño-Limón y el suministro de infraestructura militar de punta (helicópteros, aeronaves para erradicación de cultivos y equipos de comunicación) (Finlayson, 2006b). Además de ello, resalta que el entrenamiento de militares colombianos fue asignado de manera primaria a las Fuerzas Especiales de Estados Unidos (Jones, 2006).

A pesar de que el Plan Colombia se concibió durante la administración de Andrés Pastrana, fue durante los periodos de Álvaro Uribe (2002-2010) que se impulsó una ofensiva sin precedente sobre las insurgencias colombianas y en especial hacia las FARC-EP.³⁵ En términos generales, destaca un primer periodo contrainsurgente encarnado en la Seguridad Democrática, apoyada por el componente paramilitar de las AUC y un segundo momento en que adquirieron un rol central los equipos de operaciones especiales en el marco de la denominada “Consolidación de la Seguridad Democrática” (Marks, 2010). En el primer caso, la vertiente estrictamente militar de esta política fue el Plan Patriota, extensiva campaña bélica en el Sur y el Oriente del país lanzada en 2005 y que desplegó 18 mil efectivos.

La eficacia de la política contrainsurgente del Uribismo puede ser calibrada a partir de la estimación que señala que, durante sus administraciones, las fuerzas de combate de las FARC-EP pasaron de 20 mil a 9 mil combatientes en activo (Domínguez, 2016).³⁶ La conjunción

³⁵ A lo que se agrega la instauración de un *impuesto en bienestar* con propósitos de seguridad, dirigido a comerciantes y estratos privilegiados de la sociedad colombiana. Con un aporte de dichos sectores del 1,3 por ciento durante la década del 2000, hizo elevar de 3 a poco más del 4 por ciento el presupuesto de defensa. El ingreso de estos recursos junto con el financiamiento de Estados Unidos permitió renovar y adquirir tecnología bélica de gran trascendencia en las campañas contrainsurgentes como UAV's, helicópteros Black Hawk, aeronaves Super Tucano, armas de precisión guiada y equipos de telecomunicación y vigilancia avanzados. En términos administrativos, fue creado el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI) que centraliza las acciones de reconstrucción y estabilización y que reporta directamente al presidente del país.

³⁶ Este proceso continuaría en la administración de Juan Manuel Santos (ex ministro de defensa de Uribe), quien inició con la formulación de la Estrategia Espada de Honor, cuyo objetivo era reducir de nuevo a la mitad los efectivos de la insurgencia, pero fue prevenido de que el énfasis debería estar en este caso, en los elementos civiles de la

del modelo corporativo paramilitar interno y el apoyo logístico y financiero de Estados Unidos logró asesinar a parte de la dirigencia (se estimaban 55 cuadros altos y medios hacia 2015) de las FARC-EP, además de establecer un control territorial que en ocasiones jamás había tenido el Estado colombiano. La mano del juego estatal en esas condiciones quedó patente cuando los diálogos fueron abiertos en noviembre de 2012. Pero quizá uno de los logros de mayor trascendencia se puede desprender de la aseveración del ex ministro de defensa y ex embajador de Colombia en Estados Unidos respecto a que la estrategia de Uribe Vélez logró consolidar como principal objetivo político “[...]achieve broader popular legitimacy through a «hearts and minds» campaign.” (Pinzón, 2016). Esto se manifiesta en la popularidad alcanzada por Uribe y la influencia que mantiene sobre la política colombiana hasta la actualidad.

Caminos abiertos

Al comienzo de este texto, se aludió a la importancia que adquirió Colombia para Estados Unidos y su agenda hemisférica. Además de los elementos que son mayormente señalados respecto a su carácter de plataforma militar o de las implicaciones que tiene el entrenamiento a policías y Fuerzas Armadas de otros países del área, se hizo énfasis en los aprendizajes que el proceso colombiano ha reportado para la elaboración y adaptación de la estrategia militar del hegemón en los albores del siglo XXI.³⁷ En específico, la incorporación doctrinaria formal de la guerra irregular por parte de Estados Unidos se ha

contrainsurgencia a partir de la necesidad de eliminar el apoyo social en áreas rurales e indígenas de las organizaciones político militares de izquierda (Domínguez, 2016).

³⁷ La movilidad de Fuerzas de Estados Unidos en la región es un asunto de la mayor relevancia. En el caso de Colombia, la declaración de inconstitucionalidad del acuerdo sobre siete bases militares de Estados Unidos en el país andino, más allá de ser un triunfo simbólico del movimiento social colombiano por la soberanía y la desmilitarización, no hizo sino poner de relieve la inusitada presencia que la potencia tiene en el país.

nutrido de la colaboración con el ejército y gobierno colombianos a partir de la experiencia en guerra contrainsurgente, tanto de sus vertientes a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, como de su reformulación en este siglo XXI.³⁸ De este proceso, destaca también la actuación de actores armados privados entre los que se cuentan las CMSP y especialmente el paramilitarismo contrainsurgente, en una época que se caracteriza por la utilización generalizada de fuerzas pretendidamente civiles o de actores armados no estatales para apuntalar las estrategias bélicas.

Respecto a los logros de la asistencia militar de Estados Unidos en Colombia, vale la pena traer a cuenta un par de elementos. En relación a la lucha antinarcoóticos, resalta que después de la inversión de ingentes recursos en la materia y la firma de los acuerdos de paz con las FARC-EP, Colombia haya alcanzado records de cultivos de hoja de coca y producción de cocaína en 2017 (CRS, 2020). En el rubro de Derechos Humanos, un discurso que con frecuencia es usado para condenar a países como Venezuela o Cuba, Colombia sigue descollando a nivel mundial por procesos de desplazamiento interno forzado o el hostigamiento y asesinato de líderes sociales.

En un estrato muy profundo y que resulta uno de los retos más grandes para su sociedad, destaca en Colombia la conformación de una narrativa y subjetividad contrainsurgente construida a lo largo de las décadas.³⁹ Con todo y bastante más que cien años de guerra, de todos los procesos de paz frustrados, del despliegue de las formas más atroces de violencia, en Colombia, con la tenacidad que es su principal característica, las apuestas organizativas se replican de manera incesante, actualizando sus repertorios y agendas, eludiendo el proyecto de exterminio, rehaciendo el camino hacia la amenazada posibilidad de futuro.

³⁸ De acuerdo a lo señalado por Juan Carlos Pinzón, entre 2011 y 2016, el país andino habría entrenado a 24 mil efectivos de sesenta países del mundo (Pinzón, 2016).

³⁹ Narrativas y discursos que cuentan con recorridos genealógicos, como ocurre con la figura del liberal reconvertido en comunista, ateo y eventualmente guerrillero. La actualización de esta narrativa en las últimas décadas es la construcción en torno al terrorista (Puerta, 2010).

Bibliografía

- Barrios, Rodríguez, David (2014). Comando Sur: Cincuenta años de ampliación del espectro de dominación. *América Latina en Movimiento*. Quito: ALAI.
- Barrios, Rodríguez, David (2019). Guerra híbrida: origen y usos políticos. *América Latina en Movimiento*. Quito: ALAI.
- Behar, Olga, (1986). *Las guerras de la paz*. Bogotá: Planeta.
- Behar, Olga y Ardila, Carolina (2012). *El caso Klein. El origen del paramilitarismo en Colombia*. Bogotá: Ícono.
- Beittel, June (2020). Colombia background and U.S. relations, *Congressional Research Service*. <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R43813>
- Beltrán Villegas, Miguel Ángel (2015). *Las FARC-EP (1950-2015): Luchas de ira y esperanza*. Bogotá: Ediciones Desde Abajo.
- Bilgin, Pinar y Morton, Adam David (2004). From “Rogue” to “Failed” States? The Fallacy of Short-termism. *Politics*. Londres: Political Studies Association.
- Blunt, Roy et al. (2017), *A Roadmap for US Engagement with Colombia*. Washington: Atlantic Council.
- Bonavena, Pablo y Nievas, Flabián (2014). *Guerra: modernidad y contra-modernidad*. Buenos Aires: Final Abierto.
- Briscoe, Charles (2006a). *Plan Lazo*. Evaluation and Execution. *Veritas*, 2(4).
- Briscoe, Charles (2006b). Colombian Lancero root school. *Veritas*, 2(4).
- Briscoe, Charles (2008). 8TH Special forces group. *Veritas*, 4(1).
- Briscoe, Charles (2018a). Operation Willing Spirit (OWS) Setting Conditions for *Operación Jaque*. *Veritas*, 14(3).
- Briscoe, Charles (2018b). Who’s in charge down here? *Veritas*, 14(3).
- Briscoe, Charles (2018c). Joint SOF integration. SDO, Bogotá. *Veritas*, 14(3).
- Briscoe, Charles (2018d). Total immersion language, culture, and the colombian military. *Veritas*, 14(3).

- Briscoe, Charles y Kulich, Daniel (2018). Operación Jaque. The ultimate deception. *Veritas*, 14(3).
- Campbell, Bruce y Brenner, Arthur (2000). *Death squads in global perspective. Murder with deniability*. Londres: Macmillan Press.
- Ceceña, Ana Esther et al. (2010). *Un continente bajo amenaza. El águila imperial se despliega*. La Habana: Editorial Ciencias Sociales-OLAG.
- Ceceña, Ana Esther (2014). Los golpes de espectro completo. *América Latina en Movimiento*, (495).
- Ceceña, Ana Esther (octubre-diciembre de 2018). Territorialidad del poder. *Inclusiones*, 5(4).
- Ceceña Ana Esther y Barrios Rodríguez, David (2019). Dominación capitalista y geopolítica continental. *Revista de Estudios Estratégicos*.
- Cepeda, Iván (2006). Genocidio político: el caso de la Unión Patriótica en Colombia. *Revista CEJI*, I(2).
- Comaroff, Jean y Comaroff, John (2009). *Violencia y Ley en la poscolonia: Una reflexión sobre las complicidades Norte-Sur*. Catalunya: Katz Editores.
- Dados, Nour y Connell, Raewyn (invierno de 2012). The Global South. *Contexts*. Washington: American Sociological Association.
- Department of Defense (2006). *Quadrennial Defense Review Report*. Virginia: DoD.
- Department of Defense (diciembre de 2008). *Directive 3000.07: Irregular Warfare*. Virginia: DoD.
- Department of Defense (mayo de 2010). *Joint Operating Concept. Irregular warfare: Countering Irregular Threats*. Virginia: DoD. (versión 2.0)
- Department of Defense (2018). *Summary of the National Defense Strategy*. Virginia.
- Department of Defense (2019). What has taken the place of the Quadrennial Defense Review (QDR). Virginia: DoD. <https://www.defense.gov/ask-us/faq/Article/1774728/what-has-taken-the-place-of-the-quadrennial-defense-review-qdr/>

Domínguez, Agustín (2016). After the Negotiations How Reconstruction Teams Can Build a Stronger Peace in Colombia. *Prism*.

Dunford, Joe (30 de octubre de 2018). Global Integration -- Maintaining a Competitive Advantage. <<https://www.jcs.mil/Media/News/News-Display/Article/1681761/global-integration-maintaining-a-competitive-advantage/>>

Ejército Nacional de Colombia (2017). *Manual fundamental del ejército* MFE 1-01-Doctrina. Bogotá: Imprenta Nacional del Ejército.

Espinal, Verónica; Escobar, Juan Carlos y Flores, Carlos (comps.) (2010). *Izquierda y derecha. Discursos y actores de la política contemporánea*. Medellín: Universidad de Medellín.

Finlayson, Kenneth (2006a). ARSOF in Colombia. Introduction. *Veritas*, 2(4).

Finlayson, Kenneth (2006b). Colombia. A Special Relationship. *Veritas*, 2(4).

Finlayson, Kenneth (2006c). Colombian special operation forces. *Veritas*, 2(4).

Finlayson, Kenneth (2006d). U.S. Forces. The Major Command Structure. *Veritas*, 2(4).

Finlayson, Kenneth (2006e). "Conducting the orchestra" AOB 740 in Colombia. *Veritas*, 2(4).

Franco, Restrepo, Vilma Lilibiana (2009). *Orden contrainsurgente y dominación*. Bogotá: Siglo del Hombre editores.

Giustozzi, Antonio (2005). The debate on warlordism: the importance of military legitimacy. *Discussion Papers* (13).

Grajales, Jacobo (2017). *Gobernar en medio de la violencia. Estado y paramilitarismo en Colombia*. Bogotá: Universidad del Rosario.

Gresham, John (2013). *Southcom History. Southcom. A half century of service*. Florida: Defense Media Network.

International Institute for Strategic Studies (2020). International comparisons of defence expenditure and military personnel. *The military balance*. Londres: IISS.

Joint Chief of Staff (2017). *Joint Publication 1. Doctrine for the Armed Forces of the United States*. Washington.

- Joint Chief of Staff (2018). *Joint Publication 3-22. Foreign Internal Defense*. Washington.
- Jones, Robert (2006). Plan Colombia and Plan Patriota. The Evolution of Colombia's National Strategy. *Veritas*.
- Kaldor, Mary (2001). *Las nuevas guerras: la violencia organizada en la era global*. Barcelona: Tusquets.
- Kalyvas, Stathis (2010). *La lógica de la violencia en la guerra civil*. Madrid: Akal.
- Kilkullen, David y Mills, Greg (2015). Colombia A Political Economy of War to an Inclusive Peace, *Prism* 5(3).
- Koonings, Kees y Kruijt, Dirk (eds.) (2002). *Las sociedades del miedo. El legado de la guerra civil, la violencia y el terror en América Latina*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
- Kortüm, Hans-Henning (2006). Clash of Typologies -The Naming of Wars and the Invention of Typologies. En Kortüm, H. *Transcultural Wars from the Middle Ages to the 21st Century*. Akademie Verlag.
- Kümmel, Gerhard (2006). A soldier is a soldier is a soldier!? The military and its soldiers in an era of globalization. Caforio Giuseppe (ed.) *Handbook of the Sociology of the Military*. Springer.
- Leech, Garry (2007). *EE.UU., el petróleo y el (des) orden mundial*. México: Editorial Popular.
- Lind, William (enero-febrero de 2005). Comprendiendo la Guerra de Cuarta Generación. *Military Review*. Edición Hispanoamérica. pp. 12-17.
- Lindsay, Poland, John (2018). *Plan Colombia. U.S. ally atrocities and community activism*. Durham: Duke University Press.
- Mann, Michael (10-13 de abril de 2002). The Crisis of the Latin American Nation-State. Ponencia presentada en la conferencia *Crisis Política y Conflicto Interno en Colombia*. Bogotá: Universidad de los Andes.
- Marks, Thomas; Gorka, Sebastian y Sharp Robert (2010). Getting the next war right beyond population-centric warfare. *Prism*, 1(3).
- Marks, Thomas (2010). Colombia. Learning Institutions Enable Integrated Response. *Prism*, 1(4).

- Mattar, Karim (2012). Re reading the rogue state. *Interventions. International Journal of Postcolonial Studies*. pp. 551-568.
- Márquez, Iván (2019). *La segunda Marquetalia. La lucha sigue*. Bogotá: Segunda Marquetalia editores.
- Marra, Michael y Bennett, Douglas (18 de febrero de 2020). Plan Colombia: Learning from a light-footprint “America second” military strategy. *Small Wars Journal*.
- Medina, Gallego, Carlos (2019). *Ejército de Liberación Nacional (ELN) Historia de las ideas políticas (1958-2018)*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Molano, Alfredo (1985). *Los años del tropel. Relatos de la violencia*. Bogotá: Cinep.
- Moncada, Eduardo (2017). Varieties of vigilantism: conceptual discord, meaning and strategies. *Global Crime* 18(4).
- Movimiento de Reconciliación (FOR) -Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) (2014). “Falsos positivos” en Colombia y el papel de la asistencia militar de Estados Unidos, 2000-2010. Bogotá.
- Munkler, Herfried (2005). *Viejas y nuevas guerras. Asimetría y privatización de la violencia*. Madrid: Siglo XXI Editores.
- Nay, Olivier (2013). Fragile and failed states: Critical perspectives on conceptual hybrids. *International Political Science Review*. International Political Science Association.
- Nievas, Flabián (ed.) (2006). *Aportes para una sociología de la guerra*. Buenos Aires: Proyecto editorial.
- O’ Reilly, Kevin (2007). Perceiving Rogue States: The Use of the “Rogue State” Concept by U.S. Foreign Policy Elites. *Foreign Policy Analysis*, 3(4).
- Oslender, Ulrich (agosto de 2008). “Geografías del terror”: un marco de análisis para el estudio del terror. *Scripta Nova*, XII(270).
- Ospina Ovalle Carlos (2013). Colombia Updating the Mission? *Prism*, 2(4).
- OTAN (2018). *Relations with Colombia*. https://www.nato.int/cps/en/nato-hq/topics_143936.htm

- Pinzón, Juan Carlos (2016). Colombia Back from the Brink From Failed State to Exporter of Security. *Prism*. pp. 3-9. Washington: INSS.
- Pizarro, Eduardo (2005). Las FARC-EP: ¿repliegue estratégico, debilitamiento o punto de inflexión? En Gutiérrez, Sanín F. (coord.), *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia*. Bogotá: IEPRI-Norma.
- Perret, Antoine (2009). *Las compañías militares y de seguridad privadas en Colombia ¿una nueva forma de mercenarismo?* Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Puerta, Henao, Catalina (2010). Discurso Político y violencia en Colombia. O cómo se construye un enemigo, 1949-1980. En Espinal, Verónica; Escobar, Juan Carlos y Flores, Carlos (comp.) *Izquierda y derecha. Discursos y actores de la política contemporánea*. Universidad de Medellín.
- Rempe Dennis (2002). *The Past as a Prologue? A History of Counterinsurgency Policy in Colombia, 1958–1966*. Pennsylvania: Strategic Studies Institute.
- Richani, Nazih (2002). *Sistemas de guerra. La economía política del conflicto en Colombia*. Bogotá: IEPRI.
- Ruzza Stefano y Geisler, Charles (2017). Introduction: The Siege of Westphalia? En Ruzza, Stefano; Jakobi, Anja y Geisler, Charles; *Non-State Challenges in a Re-Ordered World. The Jackals of Westphalia*. Nueva York: Routledge.
- Sacquety, Troy (2006a). Colombia's troubled past. *Veritas*, 2(4)
- Sacquety, Troy (2006b). Colombian military forces. *Veritas*, 2(4).
- Schneckener, Ulrich (2006). *Fragile Statehood, Armed Non-State Actors and Security Governance*. Berlin: LIT.
- Serrano, Mónica y Palacios, Marco (2012). Colombia y México: Las violencias del narcotráfico. En Alvarado, Arturo y Serrano, Mónica, *Los grandes problemas de México XV. Seguridad Nacional y Seguridad Interior*. Ciudad de México: El Colegio de México.
- Sepúlveda, Juan Pablo (2018). "Todo pasó ante nuestros ojos": claves del informe sobre el exterminio de la UP. *Pacifista!* <https://pacifista.tv/notas/todo-paso-ante-nuestros-ojos-claves-del-informe-sobre-el-exterminio-de-la-up/>

Singer, Peter Warren (2008). *Corporate warriors. The rise of the privatized military industry*. Cornell University Press.

Spencer, David (2019). Security challenges of the new colombian administration. *Prism*. Washington: INSS.

Stewart, Patrick (2007). “Failed” states and global security: Empirical questions and policy dilemmas. *International Studies Review*. Oxford University Press.

Turse, Nick (2020). America’s commandos deployed to 141 countries and “criminal misconduct” followed. *Tom Dispatch*. https://www.tomdispatch.com/blog/176677/tomgram%3A_nick_turse%2C_america%27s_commandos%3A_what_did_they_do_and_where_did_they_do_it

Werner, Klaus y Seifert Thomas (2012). *El libro negro del petróleo. Una historia de codicia, guerra, poder y dinero*. Buenos Aires: Le Monde Diplomatique.

Zelik, Raul (2015). *Paramilitarismo. Violencia y transformación social, política y económica en Colombia*. Bogotá: Siglo del Hombre editores.

El rompecabezas de la guerra contra Venezuela

Yetiani Romero Rebollo

DOI: 10.54871/gs23b10g

En la vuelta de siglo, Venezuela experimentó el inicio de un profundo proceso de cambio con la llegada de Hugo Chávez al poder. En 1999, se aprobó una nueva Constitución apoyada por la gran mayoría de la población. La Revolución Bolivariana representó un desafío a los intereses del hegemón, que inició rápidamente una ofensiva contra el proceso venezolano. Sin embargo, ni el golpe de Estado de 2002, ni los sucesivos intentos por someter a Venezuela funcionaron en los catorce años de gobierno de Hugo Chávez. El apoyo popular al proceso bolivariano fue contundente durante ese periodo y, para Estados Unidos, se hizo necesario un cambio de estrategia.

Con la muerte de Hugo Chávez en 2013, se abrió una oportunidad. Para muchos, el proceso bolivariano era un proyecto populista y personalista que no sobreviviría a la ausencia del liderazgo carismático de Chávez. De tal suerte, se inició el despliegue de un *proceso rampante de guerra irregular*, con pretensiones imperialistas y continentales. El contexto regional estuvo marcado por un cambio de época que dio fin a la mayoría de los gobiernos *progresistas* que habían emergido en la primera década del siglo XXI. Esto permitió el aislamiento

regional de Venezuela como la primera condición para desplegar la guerra contra el país, que lo mantiene en un constante clima de crisis política y económica. No obstante, hasta ahora, Venezuela ha resistido a las pretensiones injerencistas del *sujeto hegemónico* (Ceceña, 2004).

En el presente texto, se describe y analiza dicho proceso de guerra, sus etapas y mecanismos. Se sostiene que las motivaciones para instalar una guerra consisten en disciplinar a Venezuela y recuperarla como parte del sistema de dominación hegemónico, cancelar así el desafío sistémico-ideológico que representa la Revolución Bolivariana y disponer de sus riquezas naturales y su posición en el escenario geopolítico mundial.

En la primera parte, se explora el devenir de la guerra en Venezuela en cuatro dimensiones centrales: construcción de narrativa, ruptura o corrosión del tejido social, asedio y deslegitimación institucional e intervención directa. Se analizan con detalle motivos, características, objetivos e intereses, para finalizar presentando algunas consideraciones sobre los alcances de la Revolución Bolivariana y de la guerra en su contra.

Las dimensiones de la guerra

Durante los últimos años, se han venido creando condiciones que posibilitan una guerra contra Venezuela. Temporalmente, podríamos rastrear intentos por desestabilizar al Estado venezolano desde los inicios de la Revolución Bolivariana en 1999, pasando por el golpe de Estado de 2002, el paro petrolero de 2002-2003, las protestas de 2004, el referéndum constitucional de 2006, e incluso, en el ámbito regional, el golpe de Estado de Honduras de 2009, entre otros muchos intentos por golpear el proceso de cambio venezolano. No obstante, la actual estrategia para preparar ese escenario comienza de manera más precisa entre el 2012 y 2013, tras la reelección del presidente Hugo Chávez, su posterior muerte y el ascenso de Nicolás Maduro al poder ejecutivo.

La guerra en Venezuela ha tenido varios momentos o etapas para ir construyendo las condiciones de intervención. Aunque mantienen una temporalidad propia, no son estrictamente cronológicas y algunas pueden darse de manera simultánea, pero sin la etapa anterior no es posible desarrollar la siguiente. Es decir, cada etapa es una suerte de capa en un círculo concéntrico cuyo objetivo es hacerse del territorio conforme se acerca al centro. Esto puede explicarse gráficamente de la siguiente forma:



Cada capa, etapa o nivel de la guerra tiene sus propias modalidades, temporalidad y agentes. La primera etapa, la de construcción de narrativa, es también la más importante, pues permea a las demás y se desenvuelve de manera permanente. Con lo que podemos identificar como una *guerra mediática*, empieza la construcción de la guerra propiamente dicha. Sin una narrativa o discurso que justifique la intervención no hay posibilidades de instalar una guerra, por lo que la narrativa está en constante proceso de construcción. Sus modalidades son el uso de noticias falsas, la manipulación de la información y el uso de un lenguaje específico para referirse al Estado venezolano y su gobierno. Se puede rastrear hasta 2002, durante el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez, cuando los medios tuvieron un papel fundamental en el modo como relataron los sucesos del 11 de abril en el puente Llaguno de Caracas, justificando el golpe. Como es

un proceso continuo, también se puede identificar la campaña contra el referéndum constitucional de 2006 y la disputa ese mismo año entre el gobierno y el canal de televisión Radio Caracas Televisión (RCTV), entre otros. Pero para el periodo específico de guerra actual, la construcción de la narrativa comienza en 2013 y se renueva constantemente conforme transcurren los eventos políticos nacionales, pasando paulatinamente a la producción de un imaginario sobre la existencia de una dictadura.¹ Los agentes de esta etapa de la guerra son los medios de comunicación, mientras que hay un impulso desde Estados Unidos para la construcción de la narrativa.

En la dimensión de ruptura y corrosión del tejido social, se trabaja en crear descontento de la población con el gobierno en los ámbitos económico y político. Sus modalidades son la *guerra económica*, con el desabasto y la inflación como sus derivaciones, así como el desarrollo de protestas violentas, conocidas en Venezuela como guarimbas. El tejido comunitario que se formó durante los gobiernos de Chávez, bajo las concepciones de la democracia participativa y protagónica y el poder popular representado por prácticas organizativas en los sectores populares, intenta romperse con la decepción e impacto que generan las condiciones económicas creadas bajo esta etapa de la guerra. Las protestas violentas, por su lado, ayudan a generalizar esa sensación de inestabilidad política y descontento en la población. Las guarimbas contemporáneas se remiten a las protestas de 2004. En el escenario actual, las guarimbas contra el gobierno de Nicolás Maduro han tenido lugar en 2014 y 2017 principalmente, mientras que el escenario de desabasto e inflación ha sido constante desde 2012. Los sujetos involucrados, a grandes rasgos, son la oposición y los grupos empresariales nacionales, con el apoyo de entidades de Estados Unidos tal como la National Endowment for Democracy (NED) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

¹ Particularmente las series que circulan por plataformas como Netflix, Prime y similares, insisten en la idea de una narcodictadura con altísimos niveles de corrupción.

En la etapa de asedio y deslegitimación institucional, se avanza en el debilitamiento del Estado. Una de sus modalidades es diplomática, con el reconocimiento internacional a la oposición y el desconocimiento de las instituciones electorales, judiciales y de gobierno. De la mano de la diplomacia, se desenvuelven sanciones contra funcionarios e instituciones gubernamentales, las cuales, más que el ataque a individuos específicos, van dirigidas a debilitar los soportes económicos del Estado, como por ejemplo las sanciones contra la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la negación del acceso a los circuitos de comercio internacional. Temporalmente, los sucesos relevantes tuvieron lugar en 2015, con la declaración de Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos; en 2017, con la conformación del Grupo de Lima; y en 2019, con el reconocimiento de varios gobiernos al diputado Juan Guaidó como *presidente interino*. Los agentes en el ámbito internacional son Estados Unidos y el Grupo de Lima, mientras que en el ámbito local vuelve a aparecer la oposición.

La última etapa, actualmente en un despliegue inicial, es la de la intervención. Sus modalidades son el golpe de Estado, las incursiones paramilitares, el acoso externo y el uso de mercenarios. En estos intentos de golpe de Estado e intervención, se ha pretendido ganar apoyo dentro de la Fuerza Armada, el cual ha sido encontrado marginalmente en algunos oficiales desertores, muy pocos con grados superiores. Esta etapa se ha desarrollado en 2017, con los ataques de un exfuncionario policial a las sedes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Ministerio Público; en 2018, con el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro; en 2019, con el intento de ingresar cajas de abasto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); y más recientemente, en 2020, con la incursión de un grupo de mercenarios de la empresa Silvercorp USA; entre otros eventos. Además, se han venido desarrollando ejercicios militares en la región encabezados por Estados Unidos.

Dicho esto, falta responder a cuestiones importantes: ¿cuáles son los motivos para crear una guerra contra Venezuela?, ¿qué

características tiene esta guerra?, ¿cuál es el objetivo final?, ¿quién(es) son los interesados en hacer una guerra en Venezuela?

Entre 1958 y 1999, el país fue gobernado bajo un sistema bipartidista, producto del golpe de Estado de 1958 contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y la firma del llamado Pacto de Punto Fijo entre los principales partidos políticos. Durante este periodo, los partidos Acción Democrática (AD) y el Comité Político Electoral Independiente (COPEI) se alternaron en el poder bajo un modelo de democracia representativa que llegó a ser vista como ejemplar en un contexto de dictaduras militares en casi toda la región de América Latina. Como fruto del pacto de 1958, ambos partidos habían desdibujado las ideologías que los habían mantenido enfrentados antes de la dictadura de Pérez Jiménez, y en general sus gobiernos se mantuvieron alineados a las políticas estadounidenses, especialmente en el ámbito de la defensa durante la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional de los años setenta (lo que explica en parte la continuidad del sistema democrático liberal, pero que no impidió que Venezuela buscara sus propios intereses geopolíticos, como su presencia como miembro fundador de la OPEP). De igual forma, tras la llamada década perdida y la crisis de la deuda de los años ochenta, los gobiernos de AD y COPEI se alinearon a las políticas de ajuste estructural en clave neoliberal emanadas del Consenso de Washington, lo que fue respondido por la población con una revuelta popular en 1989, conocida como el Caracazo, y un intento de golpe de Estado en 1992 encabezado por el entonces desconocido Teniente-Coronel Hugo Chávez Frías.² Tanto el

² En los primeros días de la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez (1989-1993), se anunciaron una serie de medidas de ajuste económico que contemplaban un acercamiento al FMI, privatizaciones y aumentos en los costos de productos básicos. Tras decretarse el aumento del precio de la gasolina y el transporte, el 27 de febrero de 1989, los sectores empobrecidos de Caracas salieron a las calles en una revuelta popular que se respondió con la salida del ejército para reprimir las protestas, dejando innumerables muertos, cuyas cifras aún siguen siendo desconocidas, pero que algunos calculan entre cientos y miles. Tres años después, el 4 de febrero de 1992, un grupo de militares organizados en el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) intentaron dar un golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, arguyendo los eventos de 1989 como una de sus principales causas.

Caracazo como el intento de golpe de Estado respondían al desgaste del sistema político *puntofijista*, que se expresó en una gran desigualdad y una crisis económica, política y social.

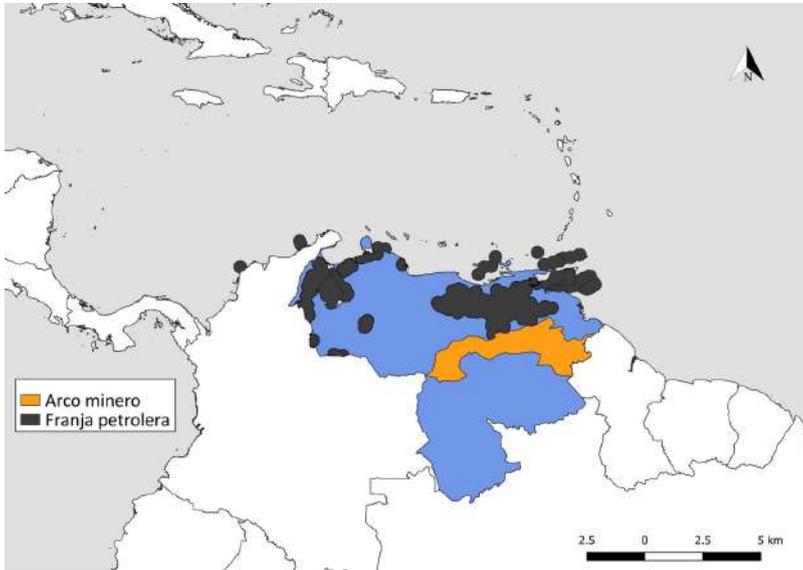
El triunfo de Hugo Chávez en las elecciones de 1998 y el proceso de cambio que despegó con la aprobación de la Constitución de 1999 fueron la respuesta de la sociedad a ese sistema desgastado y significaron el indisciplinamiento del pueblo venezolano. El gobierno de Chávez se mostró opuesto a los intereses estadounidenses en la región, propuso construir un mundo multipolar y buscar alternativas al neoliberalismo y al modo de producción capitalista. El Departamento de Estado de Estados Unidos encuentra ese alejamiento del modelo liberal como autoritario y corrupto (lo que en realidad es parte de la construcción de la etapa mediática de la guerra):

Los recientes presidentes de Venezuela, el fallecido Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro (2013-2019), se definieron ellos mismos en parte a través de su oposición a los Estados Unidos, regularmente criticando el gobierno estadounidense, sus políticas y sus relaciones con América Latina. Las políticas del expresidente Maduro [sic] están marcadas por autoritarismo, intolerancia a la disidencia y represión violenta y sistemática de los derechos humanos y libertades fundamentales -incluyendo el uso de tortura, detenciones arbitrarias, asesinatos extrajudiciales y la existencia de más de 700 prisioneros de conciencia (Department of State, 2019).

De ahí que la primera razón de librar una guerra es la de (re)disciplinar a Venezuela y recuperarla como parte del sistema de dominación hegemónico. La importancia de recuperar Venezuela no solo significa doblegar a un sujeto indisciplinado. Los intereses en las riquezas estratégicas de Venezuela tienen un papel clave. Venezuela tiene 302.809 millones de barriles de petróleo en reservas probadas, lo que la convierte en el país con las mayores reservas del mundo, la mayoría de ellas al interior del país, en la Franja Petrolera del Orinoco (OPEP, 2020 y PDVSA, s.f., p. 19). Además, tiene importantes reservas de gas, de minerales como oro, diamantes, coltán, bauxita,

granito, cuarzo y hierro, todas ellas presentes en el Arco Minero del Orinoco, donde también se encuentran muchas de las llamadas tierras raras (Navarro, 2018).

Mapa 1. Riquezas estratégicas de Venezuela



Fuente: elaboración de Adriana Franco.

De tal manera, el escenario que se instala en Venezuela es el de una guerra no convencional e irregular que se inscribe en la *dominación de espectro completo*, ya que no se hace uso de un ejército regular que busque desplegarse al interior del país, ganar posiciones y penetrar el territorio. En cambio, se hace uso de fuerzas irregulares, como paramilitares, mercenarios y fuerzas especiales. En cuanto al espectro completo, idea emanada del Pentágono a finales del siglo XX, consiste en el control de todos los aspectos del espectro geográfico, espacial, social y cultural (Ceceña, 2018). La búsqueda de ese control tiene “dos objetivos generales: garantizar el mantenimiento del capitalismo y dentro de él la primacía de Estados Unidos; y garantizar la

disponibilidad de todas las riquezas del mundo como base material de funcionamiento del sistema” (Ceceña, 2013,p. 47).

Por lo tanto, Estados Unidos busca retomar el control de Venezuela para satisfacer sus propios intereses como sujeto hegemónico, lo que no significa que no se involucren otros actores. En el ámbito continental, varios países se alinean a los objetivos de derrocar a la Revolución Bolivariana, varios de ellos a su vez (re)disciplinados: como Ecuador, Bolivia y Brasil.³

Localmente, los partidos opositores se agrupan en una alianza heterogénea llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD) desde el 2008, algunos buscando el retorno a los viejos tiempos del *puntofijismo*, como demostró el efímero gobierno de facto de 2002 al reestablecer la Constitución de 1962. Pero dada la lejanía, también buscan un nuevo ordenamiento que desplace completamente al chavismo y revierta los cambios producidos a lo largo de veinte años. En esta alianza, lo mismo entran los viejos políticos de la *Cuarta República*, como los sectores oligarcas que intentan sabotear los esfuerzos por llevar a flote la economía. Si justamente el interés de controlarlo todo es mantener el sistema capitalista, no es de extrañar el involucramiento de grandes empresas transnacionales.

La guerra contra Venezuela no es “para derrocar a un dictador”, cuestión que evoca las de Irak, Libia y circunstancialmente las de cualquier país petrolero que pretenda poner condiciones a la entrega de sus recursos. Es la guerra de la Exxon, que no deja de abrir brecha desde la región en disputa del Esequibo; es la guerra de Chevron, del coltan, el uranio, el thorium, el gas y el oro; es la guerra del estado norteamericano por reforzar sus condiciones materiales y su posición hegemónica (Ceceña y Barrios, 2017).

No solo es la búsqueda de recursos lo que motiva a Estados Unidos a llevar a cabo esta guerra. Venezuela se instala en el centro de la disputa hegemónica. Sus alianzas con los adversarios de Estados

³ Bolivia, en el periodo del golpe de Estado de 2019 a 2020.

Unidos suman una causa más para intentar retomar el control del país. El Almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) lo expresa así:

Cada desafío y amenaza a la seguridad en nuestro hemisferio está atravesado por la crisis en Venezuela. Rusia proporciona aliento vital a través de préstamos, apoyo técnico y militar y retórica. China es el mayor acreedor estatal en solitario, endeudando tristemente al pueblo venezolano con más de 50 mil millones de dólares y exportando tecnología de vigilancia usada para monitorear y reprimir al pueblo venezolano. Irán ha reiniciado vuelos directos de Teherán y revitalizado sus lazos diplomáticos. Siempre presente, Cuba provee de personal crítico y recursos para apuntalar a un dictador corrupto (Faller, 2019).

De tal manera, Venezuela hoy es el epicentro de la guerra en el continente. Los esfuerzos por derrocar a la Revolución Bolivariana han sido constantes y con su carácter de guerra irregular, no existe la posibilidad de vislumbrar un fin a dicha situación. Aunque poco probable, la situación podría mutar a una guerra regular con una intervención abierta si se prestaran las condiciones y si el actual ocupante de la Casa Blanca decidiera cumplir sus amenazas. Sin embargo, los esfuerzos de Venezuela por esquivar los intentos por derrocar al gobierno en gran medida han funcionado, aunque no se ha logrado evitar la cotidianidad de la guerra.

Regresando al esquema del círculo de la guerra, tenemos que el paso final es el de la intervención, lo que se puede leer como uno de los objetivos centrales, aunque no es el fin último. Veamos entonces cada nivel de esta guerra de forma detallada.

Nivel mediático

Como se mencionó, la capa mediática es donde inicia la construcción de la guerra y se desenvuelve de manera permanente, al mismo

tiempo que se avanza en las otras capas. La estrategia de guerra se arma en torno al trabajo *mediático* por medio de la construcción de una narrativa catastrófica sobre Venezuela, y en los medios de comunicación se pretende legitimar todos los intentos por derrocar al gobierno de Nicolás Maduro y una posterior intervención. Es decir, se hace uso de la información con fines propagandísticos.

La manipulación de la información no es algo nuevo. El uso de *propaganda* es una de las herramientas para la creación de sentidos y su fin es “modificar la conducta de las personas a través de la persuasión [...] uno de los principales medios para ejercer influencia en la gente y obtener ese fin es la mentira. La mentira como arma” (Fazio, 2013, p. 6). Se hace uso de noticias falsas y manipulación de la verdad para influir y modificar la opinión pública, todo como parte de *operaciones de guerra psicológica*.⁴

Esta guerra mediática no es llevada a cabo por intereses abstractos e invisibles. La estrategia de hacer uso de la información para manipular la matriz de la opinión pública es operada por sujetos específicos. La estrategia se delinea desde Washington y Miami, en las oficinas del Departamento de Estado y el cuartel del Comando Sur respectivamente. Desde ahí se produce la estrategia diplomática y militar dirigida a Venezuela, expresada en documentos de las respectivas dependencias.

La construcción de una narrativa sobre la situación venezolana está dirigida a dos auditorios. Por una parte, a la opinión pública estadounidense e internacional, desde donde se presenta un escenario catastrófico del país y la presencia de un *régimen* autoritario, algunas veces tildado de dictadura. Por otra parte, está el público venezolano,

⁴ Hasta el 2010, el Departamento de Defensa de Estados Unidos mantenía un manual doctrinario de *Operaciones de Guerra Psicológica* (PSYOP), en el que se indicaba que su propósito era influir en la percepción de audiencias extranjeras y su subsecuente comportamiento (Joint, 2010). Actualmente, el manual es llamado *Operaciones de Información*, donde se advierte un ambiente de la información formado por las dimensiones física, informacional y cognitiva. Esta última resulta la más importante debido a la posibilidad de influir en los individuos por medio de factores como las creencias culturales, normas, moral, identidad, ideología, etc. (Joint, 2014).

que intenta ser permeado culturalmente con el *American Way of Life* por medio de la polarización de la sociedad y el cuestionamiento al antiimperialismo de la Revolución Bolivariana. Es, ante todo, una narrativa que intenta imponer el modelo económico y político liberal en un país que ha decidido desafiarlo. La estrategia diplomática del Departamento de Estado para Venezuela indica que:

Nuestro reto es ofrecer a todos los venezolanos -incluyendo a la juventud, sociedad civil y no élites- información precisa sobre los Estados Unidos. Ofreciendo acceso imparcial a información sobre las políticas, valores, historia, arte, música, deportes y cultura estadounidenses, [...] los venezolanos podrán evaluar por ellos mismos las acciones y creencias de Estados Unidos (DoS, 2018, p. 5).

La justificación de Estados Unidos para intervenir en el nivel mediático es que el gobierno les ha mentido a los venezolanos sobre las acciones de Estados Unidos en la región. Invisibilizando el largo historial estadounidense de intervenciones en América Latina, se busca borrar la memoria de los venezolanos, mencionando las bondades de la economía de mercado. “La embajada en Caracas continuará contrarrestando la propaganda anti-mercado difundida por el gobierno venezolano, trabajando con organizaciones no gubernamentales pro mercado, empresas, centros educativos y medios, para proveer información pro mercado políticamente neutral al pueblo venezolano” (DoS, 2018, p. 10). No es de extrañar que en esta estrategia se busque influir en la juventud, aquella que no vivió la desastrosa implementación del neoliberalismo en Venezuela y eventos como el Caracazo. Tan solo para ilustrar el potencial de dirigirse al público joven, vale la pena recordar que el *movimiento estudiantil* de 2007 tuvo un discurso neoliberal y fue la plataforma para la emergencia de jóvenes políticos de la oposición.

En el mismo tono, la estrategia del Comando Sur para la región incluye esparcir información sobre la *influencia maligna* de los rivales de Estados Unidos, los que, según su perspectiva, llevan a cabo la estrategia de desinformación:

Trabajaremos con nuestros socios para despuntar la actividad maligna en nuestro vecindario. Compartiremos información sobre las predatorias y opacas prácticas económicas de China alrededor del mundo con aliados y socios para incrementar el entendimiento de la influencia maligna de China. Negaremos a Rusia la oportunidad estratégica de controlar el espacio informacional en este hemisferio usando nuestro compromiso consistente y presencia para contar nuestra historia y disminuir los efectos de su campaña de desinformación (Southcom, 2019).

Sin embargo, aunque el Departamento de Estado, funcionarios del gobierno estadounidense y agencias gubernamentales puedan publicar comunicados de prensa en los que se expresa esa estrategia, es en los medios donde se comunica propiamente. Casado (2016) indica que los medios hegemónicos, concentrados en 25 empresas transnacionales, han tratado de ocultar su parcialidad bajo el *mito de la objetividad*. Si en el siglo XIX el periodismo tenía una vocación ideológica, en la actualidad, su ideología liberal se esconde bajo su vocación comercial, siendo su ostentación como relatores de la verdad su mecanismo de encubrimiento (p. 16).

De ahí que se homogeneicen las líneas discursivas en torno al gobierno revolucionario de Venezuela en diarios que podrían ser considerados tan dispares como el socialdemócrata *El País* y el monárquico conservador *ABC*, pero ambos comparten y defienden la ideología liberal que Venezuela discute. Como resultado, es probable que el lector considere como verdadera la parcialidad que estos diarios comparten (Casado, 2016, p. 16).

En el plano de los medios de comunicación de masas internacionales, una de las características de la retórica usada por las grandes agencias de noticias y medios occidentales es la distinción del gobierno de Nicolás Maduro como *régimen*, usando ese término con una acepción negativa y no como un concepto político que indica un orden legal o una forma de gobierno. Algunos otros medios, por su parte, se saltan esa relativa moderación y pasan a calificarlo directamente como dictadura.

Como se había mencionado antes, el escenario mediático actual comienza a construirse desde antes de 2013, periodo caracterizado por el enfrentamiento entre el presidente Chávez con los medios de comunicación nacionales y por el montaje de una imagen de caudillo autoritario en los medios internacionales. Pero el escenario actual comienza propiamente tras la muerte de Chávez y la elección de Nicolás Maduro.

Entre 2013 y 2014, los medios reconocen la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente, aunque aparecen cuestionamientos a la limpieza de las elecciones y se reportan las guarimbas de 2014 como el inicio de una crisis política. En 2015, el triunfo electoral legislativo de la oposición se explica en los medios como consecuencia del descontento de la población con el gobierno y del desgastado modelo económico responsable de desabasto e inflación (de esto se hablará propiamente más adelante), y hasta 2017, las notas periodísticas giran en torno al enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y legislativo, además de las ocasionales guarimbas de esos años. Simultáneamente, a finales de 2017, los medios empiezan a hablar de hiperinflación y degradación de la situación económica. El año 2018 está marcado por las elecciones presidenciales, en las que se acusa al gobierno de indisposición para entablar un diálogo con la oposición para después reportar la elección como fraudulenta e ilegítima. Finalmente, en 2019 se empieza a desconocer a Maduro como presidente, se reporta una supuesta crisis humanitaria sin precedentes y se reconoce al diputado Juan Guaidó como *presidente encargado* de Venezuela.

Vale la pena hacer un pequeño recorrido por algunos medios de comunicación para ilustrar la forma en que se comunica la situación venezolana y cómo se va modificando la estrategia. En 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, Human Rights Watch (HRW), emitía una nota titulada “Venezuela: El legado autoritario de Chávez” donde acusaba una concentración de poder e indiferencia por los derechos humanos en los catorce años de gobierno de Chávez (HRW, 2013). Aunque HRW no es propiamente un medio de comunicación, esta nota resume la narrativa construida durante la presidencia de Hugo Chávez y su sucesor.

Cuando se empezaba a hablar de hiperinflación, en el diario español *El mundo* se reportaba que, “Según el FMI, la inflación en Venezuela en 2018 podría superar el 2.300 %. Sin embargo, el presidente socialista argumenta que los precios suben por una ‘guerra económica’ de comerciantes para ‘derrocarlo’” (Santander, 2018).

El entremetido sugiere que la guerra económica es tan solo una estrategia discursiva del gobierno y que los intentos para derrocarlo son suposiciones sin pruebas. También cabe resaltar la referencia al FMI, cuya fuente es usada constantemente para construir la retórica catastrófica en el ámbito económico, tal como lo hacía el diario *El País* en octubre de 2019:

El Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó en julio a recalcular las estimaciones de la brutal hiperinflación que vive Venezuela desde hace dos años, y en su nuevo informe de este martes las ha rebajado nuevamente. El país sudamericano, inmerso en una profunda crisis humanitaria y política, cerrará el año con 200.000 % de inflación y una estimación de 500.000 % para 2020 (Singer, 2019).

De la misma forma, se procura justificar las sanciones financieras y bloqueos impuestos por Estados Unidos por medio de acusaciones de corrupción. Por ejemplo, el embargo de cuentas venezolanas y reservas de oro en países extranjeros está plenamente justificado porque, como lo menciona CNN:

Maduro, los miembros de su familia y de su régimen han estado utilizando este marco legal [regulación en el Arco Minero del Orinoco] para dirigir las operaciones mineras ilegales en la región, otorgando a militares venezolanos un ‘acceso liberal’ a las minas para comprar su ‘lealtad acérrima’, dijo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en marzo, cuando impuso sanciones a la industria minera de Venezuela. (Cotovio, Soares y Bonnett, 2019).

La BBC, por su parte, maneja una retórica similar basada en los señalamientos de corrupción y autoritarismo: “Estados Unidos anunció

un embargo económico sobre Venezuela, con la intención de poner fin al gobierno autoritario de Nicolás Maduro” (Aponte, 2019).

Esta narrativa construyó en 2019 uno de sus pilares principales en la crisis humanitaria por la que se supone que atraviesa Venezuela. Nuevamente, se acusa al gobierno de haber generado esa crisis. Días antes del intento de la oposición y los gobiernos de Estados Unidos y Colombia de ingresar cajas de la USAID por la frontera con Colombia para generar desestabilización, en febrero de 2019, el relato giró en torno a la necesidad del envío de ayuda humanitaria.

El reconocimiento de una crisis humanitaria sería la confesión pública del fracaso del Gobierno de Nicolás Maduro. Por otra parte, ningún país u organismo internacional puede imponer una ayuda que un gobierno no acepta o pide. Ahora, el autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó, ha pedido ayuda internacional. (Ospina-Valencia, 2019).

Sin embargo, los propios medios reconocían que la supuesta ayuda humanitaria tenía intenciones que iban más allá de enviar alimentos y medicinas para ayudar a los venezolanos que han sufrido el yugo del socialismo. Desde Cúcuta, Colombia, reporteros del New York Times mencionaban que:

Según esta línea de razonamiento, si se interrumpiera el dominio total de Maduro sobre el suministro de alimentos y medicinas y se mostrara que ha perdido el control de la frontera, su legitimidad como presidente del país se debilitará. Si los militares pueden ser convencidos de no interponerse entre la población venezolana y la ayuda humanitaria, Maduro podría caer (Casey y Kurmanaev, 2019).

Por otra parte, a la hora de reportar acciones contra el gobierno, se suele presentarlas como suposiciones o incluso montajes del propio gobierno. En agosto de 2018, la mayoría de los medios de comunicación reportaron el ataque con drones contra Nicolás Maduro como un supuesto atentado, a pesar de la claridad de las imágenes que se difundieron. “Nicolás Maduro sale ileso de ‘atentado’ en Caracas, dicen autoridades” reportaba CNN (CNN, 2018); “Tras

supuesto atentado a Maduro, Venezuela responsabiliza a Colombia de ‘cualquier nueva agresión’” se decía en France 24 (Méndez, 2018).

Como se puede ver en los ejemplos anteriores, existen varias tácticas de manipulación. Aunque en este espacio no es posible exponer a cada medio informativo, una revisión sencilla de las notas sobre Venezuela puede comprobar que el patrón narrativo se repite para prácticamente cualquier medio internacional. Casado (2016) menciona que para Venezuela las ‘técnicas’ de manipulación son: la manipulación en los titulares, los cuales se ‘editorializan’ independientemente del contenido; la falta de espacio y tiempo para dar rienda suelta a los estereotipos; el desequilibrio en las fuentes y sesgo lexicológico, lo que incluye el uso parcial de hechos reales, es decir, de especulación, no de información; la opinión por encima de la información y el uso de las agencias para editorializar la información; y la publicación de editoriales que avalan un golpe de Estado.

En cuanto a los medios nacionales venezolanos, se ha señalado desde distintos lugares que el gobierno venezolano ha restringido la libertad de expresión desde el gobierno de Hugo Chávez. Esos señalamientos vienen de los propios medios, de organizaciones no gubernamentales, de organismos multilaterales como la CIDH e incluso desde algunos sectores académicos (véase, por ejemplo, Banfi, 2019; CIDH, 2017; Espacio Público, 2018; Vélez et al., 2019).

Para entender estas posiciones hace falta remitirse al golpe de Estado de 2002, cuando las cadenas de televisión tuvieron un papel fundamental al manipular las imágenes del puente Llaguno que sirvieron como justificación al golpe de estado; censuraron información sobre el golpe de Estado; y mintieron abiertamente sobre la supuesta renuncia de Hugo Chávez.⁵

⁵ Sobre el golpe de estado de 2002 y el papel de los medios de comunicación, véase el documental *La revolución no será transmitida* (Bartley y Ó Briain, 2003).

Los medios de comunicación privados fueron críticos de Chávez antes y después del golpe. El papel central de los medios valió para que el gobierno de Chávez tomara medidas para impulsar una propuesta informativa contrahegemónica. Antes del golpe, el Estado venezolano contaba solo con Venezolana de Televisión (VTV) y Radio Nacional de Venezuela (RNV) para difundir sus propias versiones del acontecer político. Después del golpe, se impulsaron proyectos como Telesur y otros medios informativos alternativos, incluyendo medios televisivos, radiales y escritos, algunos de carácter estatal y otros comunitarios.

El aumento de la participación del Estado y de proyectos afines a la Revolución Bolivariana ha servido de excusa para acusar al gobierno de restringir la libertad de expresión. Sin embargo, los medios de comunicación venezolanos siguen siendo mayoritariamente de carácter privado y estos siguen criticando duramente al gobierno, incorporando la narrativa construida en torno a la Revolución Bolivariana. Tan solo en la televisión, las cadenas Venevisión y Televen concentran el 46% de la audiencia, sumado a que la mayoría de los venezolanos cuentan con televisión por suscripción (Casado, 2016, p. 413), a través de distintas empresas, como Inter del grupo transnacional estadounidense HMTE, NetUno, Supercable y Directv (transnacional estadounidense que recientemente salió del país). Estas empresas transmiten canales extranjeros con líneas editoriales hostiles al gobierno y que pertenecen a los grandes emporios mediáticos, como TVE, Caracol, Univisión, CNN, Bloomberg, Fox, BCC, entre otros (p. 420). En Venezuela, existe la libertad de expresión y los medios privados abusan de ese derecho al mentir y manipular al momento de informar, siendo el golpe de Estado el evento más vergonzoso y descarado en ese sentido. Lo que pasa en Venezuela es una polarización de la sociedad impulsada desde el ámbito mediático, que se extiende a todas las esferas de la vida cotidiana y que se ha venido construyendo desde antes del golpe de Estado de 2002, de la mano de la narrativa que se expone al exterior del país.

Ruptura del tejido social

Como se había mencionado, en esta etapa se busca crear descontento en la población venezolana para legitimar un paulatino cambio de gobierno. Para lograr dicho fin, se recurre a operaciones o *mecanismos de guerra no militares*, lo que implica el uso de lo que Estados Unidos define como *instrumentos de poder nacional* e incluye tanto una *guerra económica* que genera desabasto e inflación, como protestas violentas conocidas como *guarimbas* que generan un clima de inestabilidad política.

Recordemos que la guerra en Venezuela es una guerra irregular y no convencional. En la doctrina del Departamento de Defensa, la guerra irregular se lucha por legitimidad e influencia sobre la población. “Los adversarios que libran una guerra irregular tienen vulnerabilidades críticas para ser explotadas dentro de sus interconectados sistemas político, militar, económico, social, de información e infraestructura” (Joint, 2013, p. 1-6). En el mismo sentido, el Departamento de Defensa define la guerra no convencional como aquellas “operaciones y actividades dirigidas a habilitar un movimiento de resistencia o insurgencia para coartar, interrumpir o derrocar un gobierno” (Joint, 2014, p. 2-8).

De ahí que, en este nivel, colocamos las acciones de desestabilización político-económica ejercidas contra Venezuela. La guerra económica es necesaria para crear el descontento de la población para habilitar ese *movimiento de resistencia*, que en el caso venezolano se trata del fortalecimiento de la alianza opositora de la MUD. Las *guarimbas*, por su lado, son la expresión de la habilitación de ese movimiento que termine por romper el tejido social venezolano. En otras palabras, son acciones de subversión, definidas como “acciones diseñadas para socavar la fuerza o moral militar, económica, psicológica o política de una autoridad gobernante” (DoD, 2020, p. 205).

En el caso de la guerra económica, desde 2012 se comenzó a experimentar el desabastecimiento de productos de primera necesidad como alimentos, medicamentos y productos de higiene personal,

además de materias primas e insumos agrícolas e industriales. Curcio explica que la escasez de algunos productos no se debe a la falta de entrega de divisas del Gobierno al sector empresarial como lo ha argumentado la oposición, sino a un uso tramposo de esas divisas. En cambio, las razones del desabastecimiento son:

- 1) la disminución relativa de las importaciones con respecto a las divisas otorgadas al sector privado; 2) el acaparamiento por parte de empresas oligopólicas que dominan los mercados de algunos bienes; y 3) el contrabando de extracción [contrabando de productos venezolanos hacia Colombia, que a su vez obliga al cierre de fronteras] (Curcio, 2017, p. 44).

Por su parte, la inflación ha sido provocada por la manipulación del tipo de cambio paralelo (mercado de divisas ilegales), sostenida gracias a la dependencia de Venezuela de los bienes importados y a la concentración de esas importaciones en pocas empresas (Curcio, 2017, p. 76). En otras palabras, al ser pocos los importadores de bienes, estos tienen la capacidad de fijar los precios de los productos, y lo hacen con base en el tipo de cambio paralelo.

Para Salas (2015), la inflación es la expresión de la lucha de facciones o sectores empresariales para incrementar sus ganancias y su expresión es la escasez, por lo que es más conveniente hablar de especulación, usura y acaparamiento. En estos términos, es fundamental señalar que en Venezuela el problema económico es una expresión de la lucha de clases. De tal manera, “el fin último de la guerra económica emprendida por la burguesía parásita es la consolidación de las condiciones sociales de reproducción y explotación de los grupos concentrados [...] sobre la sociedad” (Salas, 2015, p. 13).

Vázquez (2019) identifica tres grupos de intelectuales venezolanos que explican de diferente manera la situación de crisis económica por la que atraviesa el país. En primer lugar, un grupo de opositores conservadores, quienes sostienen que el modelo económico socialista es la causa de la situación económica. Ese modelo se caracterizaría por una política expropiatoria, controles de precio y

enriquecimiento de gobiernos aliados, entre otros; el segundo grupo es el oficialista, quienes defienden la hipótesis de la guerra económica; por último, un grupo de izquierda opositora, donde se puede ubicar al propio autor, que sostiene que la situación es creada por un ajuste económico impulsado desde el Estado basado en la apropiación de la renta petrolera.

Si bien desde aquí sostenemos que existe una guerra económica contra Venezuela enmarcada en la instalación de una guerra irregular, hay que considerar que aunque se ha desafiado el modelo económico liberal impulsando iniciativas de producción comunitaria, la economía venezolana sigue siendo mayoritariamente capitalista con un énfasis en la tutela del Estado sobre la economía y en la dependencia de la renta petrolera, problema endémico de la economía venezolana que la Revolución Bolivariana no ha podido resolver del todo. Sin embargo, ha habido un esfuerzo por construir una nueva territorialidad expresada en la figura de las comunas, cuya institucionalidad:

Propone formas descentralizadas del poder, donde las ciudadanas y ciudadanos de manera directa asumen responsabilidades sobre los asuntos locales [...] Uno de los ejes centrales de este modelo, en su dimensión económica, es la apuesta por la propiedad social, la planificación productiva y la inversión social de los excedentes. (Fréitez et al., 2018, p. 392).

En todo caso, reiteramos que la inestabilidad económica es causada fundamentalmente por la influencia de grupos empresariales, la oposición político-partidaria y los Estados Unidos. Uno de sus objetivos es justamente romper ese tejido comunitario que impulsa un nuevo modelo económico, creado a lo largo de veinte años. Como se mencionaba antes, en la guerra irregular y no convencional se busca debilitar al gobierno y fortalecer a los grupos opositores. El involucramiento de Estados Unidos, aunque encubierto, puede rastrearse por su apoyo económico a partidos de la MUD. Se trata de mecanismos de financiamiento a través de agencias del gobierno estadounidense

y organizaciones no gubernamentales asociadas a él, principalmente la National Endowment for Democracy (NED) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

En cuanto a la NED, organización fundada en 1983, a iniciativa del Congreso estadounidense, para encubrir las actividades de la CIA, recibe dinero directamente del Congreso pero por su carácter privado tiene la capacidad de utilizarlo según su propio criterio. La NED no está obligada a indicar a quiénes está financiando en Venezuela, pero se ha señalado como beneficiarios a Leopoldo López y María Corina Machado, así como a los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular (Golinger, 2019). Tan solo entre 2016 y 2019, la NED ha financiado con más de nueve millones de dólares distintos proyectos, como partidos políticos, líderes políticos y medios de comunicación.

NED en Venezuela 2016-2019		
Año	Presupuesto (dólares)	Proyectos
2016	1.684.568	37
2017	2.603.177	42
2018	2.425.293	42
2019	2.667.163	41
Total	9.380.201	162

Fuente: elaboración de Yetiani Romero con datos de la NED (2020).

Si se revisan los proyectos que financia la NED, se puede constatar el interés en dismantelar el modelo económico para regresar a un esquema neoliberal. El proyecto *Establishing a Democratic Framework for State-Owned Asset Privatization and Recovery*, en el cual se han invertido 284.095 dólares, busca “fortalecer actores venezolanos democráticos para desarrollar un marco de referencia para la privatización de empresas estatales y la recuperación de activos robados en una ventana corta de oportunidad” (NED, 2020). En este caso, habría que preguntarse quién quiere recuperar esos activos *robados*, dado

que son propiedad del Estado y la NED está buscando que pasen a manos privadas.

En otro de sus proyectos, aunque no se mencionan nombres, “una red de líderes emergentes será consolidada y entrenada. Similarmente, líderes emergentes aprenderán nuevas herramientas y conocimiento para involucrarse en el proceso de toma de decisiones y fortalecer sus capacidades de manejar proyectos” (NED, 2020). Esto último concuerda con los señalamientos que se han realizado respecto a la capacitación que Estados Unidos ha brindado a varios personajes de la oposición. Durante 2007, en varias universidades surgió el *movimiento estudiantil* de carácter neoliberal que se mencionó en el apartado anterior, de donde emergieron los líderes actuales de los partidos Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP). Entre ellos, se encuentran Yon Goicoechea, Freddy Guevara, Carlos Graffe, David Smolansky y Juan Guaidó, quienes fueron enviados en 2005 al Centro de Acción y Estrategias no Violentas Aplicadas (CANVAS) en Serbia y a Estados Unidos para estudiar las técnicas de cambio de régimen de Gene Sharp con apoyo de la USAID (Fazio, 2019).

Este mecanismo de financiamiento a la oposición tiene su origen en la apertura de una oficina de transición (OTI) de la USAID en la embajada de Estados Unidos en Venezuela en 2006. Desde esa fecha, esta oficina ha financiado a distintos agentes de la oposición (Golinger, 2007). Pero en el contexto actual, la estrategia de USAID se basa en la supuesta crisis humanitaria por la que atraviesa Venezuela. En 2017, inició el envío de ayuda humanitaria de la USAID, que desde entonces ha destinado 656 mdd, de los cuales 467 mdd son destinados a venezolanos fuera del país y 189 mdd dentro (USAID, 2020).

De lo anterior, derivan las protestas violentas conocidas como guarimbas, que consisten en el cierre de avenidas para instalar barricadas desde donde se enfrenta a las fuerzas policiales. En el actual contexto, las guarimbas se han desarrollado en 2014 y 2017 y han sido encabezadas por personajes de la oposición, principalmente de los partidos antes mencionados. En el caso de las guarimbas de 2014, organizadas en torno a un plan llamado *La Salida*, fueron

la respuesta de la oposición a su derrota en las elecciones de 2013. En este momento, podemos observar la articulación de las distintas capas de la guerra y los mecanismos que venimos describiendo:

En dicho año [2013], se observa un fuerte boicot económico, manipulación de los medios de comunicación, movilizaciones que terminan en acciones violentas, todo ello para crear un clima de ingobernabilidad. El año 2014 se abre con las llamadas Guarimbas impulsadas por los sectores opositores al chavismo, con el objetivo de generar un clima de desestabilización en la República que consiga, en última instancia, la renuncia del presidente Nicolás Maduro (Galiñanez y Rossi, 2015, p. 29).

En estas guarimbas, estuvieron involucrados Antonio Ledezma de Alianza Bravo Pueblo, Leopoldo López de VP, María Corina Machado de Vente Venezuela y el propio excandidato presidencial, Henrique Capriles de PJ. Por esos hechos, Leopoldo López fue arrestado y sentenciado a 13 años de prisión, Henrique Capriles fue inhabilitado en 2017 por 15 años y María Corina Machado tiene una prohibición para salir de Venezuela. Exactamente un año después de las guarimbas, los primeros tres personajes publicaron un manifiesto y jóvenes generaron disturbios en el barrio en el que reside la familia de Maduro, sumando la grabación de un pronunciamiento donde se llamaba a la rebelión militar, todo enmarcado en el *Plan Jericó* que buscaba generar caos y justificar una intervención extranjera (Gilañanez y Rossi, 2015, p. 30), lo que habría implicado el avance de la guerra.

Por su parte, en las guarimbas de 2017, la oposición sigue un patrón similar. Entre 2015, cuando la MUD logró ganar la mayoría calificada de la Asamblea Nacional (AN) y 2017, cuando el presidente convocó a la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la oposición había enfocado sus esfuerzos en derrocar al gobierno mediante un golpe legislativo. Sin embargo, tras fracasar en sus intentos se regresó a la estrategia de violencia callejera que genera un clima de inestabilidad.

Este clima de inestabilidad no es suficiente para el derrocamiento del gobierno, pero sí es un paso necesario para instalar una guerra dadas las consecuencias que tiene en el rompimiento del tejido social y comunitario. Una vez debilitado ese tejido y desarrollado el malestar entre la población, se avanza en el debilitamiento institucional del Estado.

Asedio y deslegitimación institucional

En esta etapa, se busca debilitar las instituciones del Estado venezolano, especialmente aquellas fundadas con la Constitución de 1999. El propósito de romper ese tejido institucional tiene dos sentidos. Por un lado, con instituciones débiles se dificulta la permanencia de la Revolución Bolivariana en el poder. Por el otro, en el buscado escenario de un gobierno de transición, se facilitaría el desmantelamiento de la institucionalidad construida desde 1999 y por ende la reversión del proceso de cambio y el regreso a un Estado neoliberal sustentado en la democracia liberal procedimental.

Al respecto, cabe mencionar que, con la aprobación de la Constitución de 1999, se reemplazaron en su totalidad los órganos del poder ejecutivo, legislativo y judicial, además de la creación del poder electoral y el poder moral como poderes completamente separados e independientes de los tres otros, el primero constituido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el segundo por el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República.

El proceso bolivariano se caracteriza por ser un impulsor de formas organizativas populares enmarcadas en la idea de democracia participativa y protagónica. Entre 2006 y 2007, se instauró una nueva institucionalidad basada en el poder popular (PP) que busca ser la forma de realización de la democracia participativa y protagónica (Machado et al., 2018). Esa institucionalidad genera las bases para el autogobierno comunitario en la figura de las comunas, que asumen atribuciones de administración, prestación de

servicios y ejecución de obras, además de tener su propia estructura institucional, que incluye un parlamento comunal, un consejo ejecutivo, comités de gestión y banco comunal, entre otros (Barrios Benatuil et al., 2018).

Este es el marco institucional que Estados Unidos intenta debilitar y desconocer. Las prácticas organizativas basadas en la democracia participativa, protagónica y directa no son reconocidas por los valores liberales estadounidenses, donde la única democracia válida y legítima es la procedimental y delegativa. Para el Departamento de Estado, “Maduro y su régimen han tomado una serie de pasos para dismantelar las instituciones democráticas y para socavar la confianza del pueblo venezolano en su democracia” (DoS, 2018, p. 3). La vía para revertir ese proceso es el apoyo a la oposición que encontró una posibilidad en las elecciones legislativas de 2015: “la marginada pero legítimamente elegida Asamblea Nacional controlada por la oposición necesita desesperadamente desarrollar capacidades si se trata de desempeñar un importante papel restaurando la democracia, las libertades civiles y la prosperidad venezolanas” (DoS, 2018, p. 9). Resulta significativo señalar el reconocimiento del proceso electoral solo cuando beneficia a la oposición, aun en un momento en el que ya se señalaba al gobierno como autoritario y dictatorial.

Los mecanismos para llevar a cabo esta operación son la aplicación de medidas coercitivas en las que se conjuga la etapa de rompimiento del tejido social y los mecanismos de desestabilización política y económica con la de la deslegitimación institucional y que temporalmente se ha desarrollado entre el 2018 y 2020. Por una parte, encontramos la aplicación de sanciones y embargos financieros que terminan por deteriorar las condiciones económicas del país, dificultando los esfuerzos del gobierno por salir de la emergencia económica y agravando los problemas de desabastecimiento. Por otra parte, se encuentran las acciones diplomáticas que, desde 2019, han desconocido al presidente Nicolás Maduro como jefe del ejecutivo y han reconocido al diputado de VP, Juan Guaidó, como

presidente encargado tras una *juramentación* que careció de cualquier legitimidad legal. Es una estrategia de asfixia que busca sentar las bases para una paulatina sustitución de la institucionalidad.

En 2015, todavía siendo Barack Obama presidente de Estados Unidos, se declaró a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional a través de la orden ejecutiva 13692. Anteriormente, el Congreso de Estados Unidos había aprobado el Acta de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela, en la cual se establece un marco legal para imponer sanciones contra el gobierno, funcionarios y entes del Estado venezolano.

Sucesivamente, se han decretado siete órdenes ejecutivas más entre el 2015 y 2019, las cuales se realizan dentro del ámbito diplomático, pero están encaminadas a sostener las sanciones y bloqueos económico y financiero y son ejecutadas por el Departamento del Tesoro. Entre 2015 y 2018, dichas sanciones estaban dirigidas contra individuos específicos y algunas instituciones como PDVSA, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) o la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Pero a partir de 2019, con la orden ejecutiva 13857, se desconoció al gobierno de Nicolás Maduro como un todo y se empezó a reconocer al diputado Juan Guaidó como presidente del país. Por su parte, la orden 13884, establece un bloqueo total a Venezuela, lo que consolida su aislamiento diplomático, político y económico.

Actualmente, en la lista de sancionados, figuran 98 venezolanos, incluyendo al presidente Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, su hijo Nicolás Maduro Guerra, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el presidente de la ANC Diosdado Cabello, los jueces del TSJ, generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), así como gobernadores, el director del Banco Central de Venezuela (BCV) y el ministro de relaciones exteriores, entre otros (Ribando, 2020). Sin embargo, aunque las sanciones puedan estar dirigidas contra individuos específicos, en la práctica se trata de debilitar las instituciones por medio de la descalificación y criminalización de funcionarios del Estado, a los que se acusa de autoritarismo, corrupción e, incluso, de tráfico de drogas.

Tabla 1. Sanciones de Estados Unidos contra Venezuela		
Sanción	Fecha	Motivo/Propósito
Acta de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela	18 de diciembre de 2014 (Congreso)	Acta para imponer sanciones dirigidas a personas responsables de violaciones a los derechos humanos o a manifestantes antigubernamentales, para fortalecer la sociedad civil en Venezuela y para otros propósitos
Orden ejecutiva 13692	8 de marzo de 2015	Establece que la erosión de los DD.HH, persecución política, restricciones a libertad de prensa, uso de violencia, corrupción constituyen amenaza a seguridad nacional de Estados Unidos.
Orden Ejecutiva 13808	24 de agosto de 2017	Se anexan a los motivos de la orden 13692 la responsabilidad por la crisis humanitaria y el establecimiento de la Asamblea Constituyente. Se prohíben transacciones relacionadas al financiamiento a PDVSA (nuevos prestamos). Se prohíbe el acceso de Venezuela al mercado financiero.
Orden ejecutiva 13827	19 de marzo de 2018	Se prohíben transacciones en monedas digitales.
Orden ejecutiva 13835	21 de marzo de 2018	Se prohíbe la compra de deuda del gobierno y cualquier transacción relacionada.
Orden ejecutiva 13850	1 de noviembre de 2018	Se bloquean todas las propiedades e intereses en Estados Unidos de las personas especificadas.
Orden ejecutiva 13857	25 de enero de 2019	Se amplía el término gobierno de Venezuela a cualquier subdivisión política o agencia incluyendo el BCV y PDVSA
Orden ejecutiva 13884	5 de agosto de 2019	Bloqueo de propiedades e intereses del gobierno de Venezuela en Estados Unidos.

Fuente: elaboración de Yetiani Romero con datos del US Department of the Treasury (DOT) (2020) y Ribando (2020).

No obstante, el esfuerzo de Estados Unidos no es suficiente por sí mismo. El papel de sus aliados regionales ha sido necesario para

establecer el cerco y aislamiento diplomático. En agosto de 2017, se constituyó el Grupo de Lima en un momento en el que América Latina había regresado mayoritariamente a políticas conservadoras y pro estadounidenses. Originalmente, el grupo de Lima se conformó por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Más recientemente, se han adherido Guyana, Haití, Santa Lucía, Ecuador, República Dominicana y Bolivia, esta última tras el golpe de Estado de 2019. Por su parte, México y Argentina se han alejado de las posiciones del grupo tras sus respectivos cambios de gobierno recientes, aunque no lo han abandonado de manera oficial.

El grupo de Lima es una expresión de la alineación de la mayoría de países latinoamericanos a los intereses estadounidenses. El grupo considera al gobierno venezolano un régimen ilegal, ilegítimo y dictatorial, al mismo tiempo que reconocen a Guaidó como presidente y apoyan a Estados Unidos en su guerra económica contra Venezuela. Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) también se ha usado para aislar Venezuela. En mayo de 2016, su secretario general, Luis Almagro, inició un proceso para aplicar la carta democrática interamericana a petición de la Asamblea Nacional. Los esfuerzos rindieron fruto en 2017 con la aprobación de un documento que señalaba el rompimiento del orden constitucional, lo que fue respondido por Venezuela con su salida del organismo.

Paralelamente, se lleva a cabo una *guerra financiera* que en un primer momento fue encubierta y basada en la publicación de índices de riesgo-país (Curcio, 2017, p. 117), pero desde 2017, comenzó a dirigirse al bloqueo abierto. Esto ha consistido en el bloqueo de cuentas y apropiación de activos venezolanos en el exterior. Tal es el caso de CITGO, la filial de PDVSA que opera en Estados Unidos y que ha sido embargada a favor de las empresas ConocoPhillips y Cristallex y que, en 2019, le fue entregada al *gobierno* de Juan Guaidó. De la misma forma, el gobierno estadounidense ha otorgado el control de cuentas bancarias de Venezuela al grupo de Guaidó, mientras que en países europeos se han embargado cuentas y reservas de oro de propiedad del Estado venezolano.

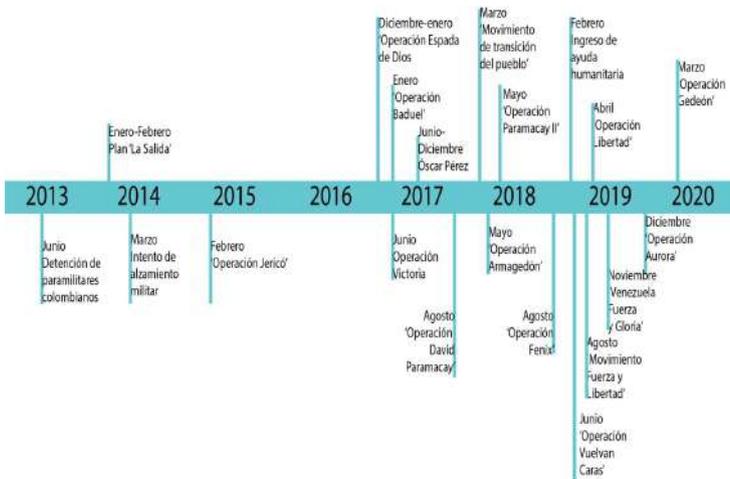
A pesar de este esfuerzo por desconocer a las instituciones del Estado y considerarlas ilegítimas, no obstante, la fortaleza de las prácticas organizativas y las propias instituciones del Estado no han permitido un clima de inestabilidad que sea suficiente para forzar la renuncia del presidente o su derrocamiento desde la Asamblea Nacional.

Intervención Directa

La expresión de intervención directa remite al despliegue de un ejército o fuerzas militares en territorio extranjero. En el caso venezolano, esta es una posibilidad que se ha contemplado mediante una fuerza de coalición entre Estados Unidos, Colombia y Brasil y que representaría la transformación de la guerra en regular. Sin embargo, la forma de intervención que ha operado contra Venezuela ha sido encubierta por medio de incursiones de desertores de la FANB desde Colombia e intentos de golpe de Estado.

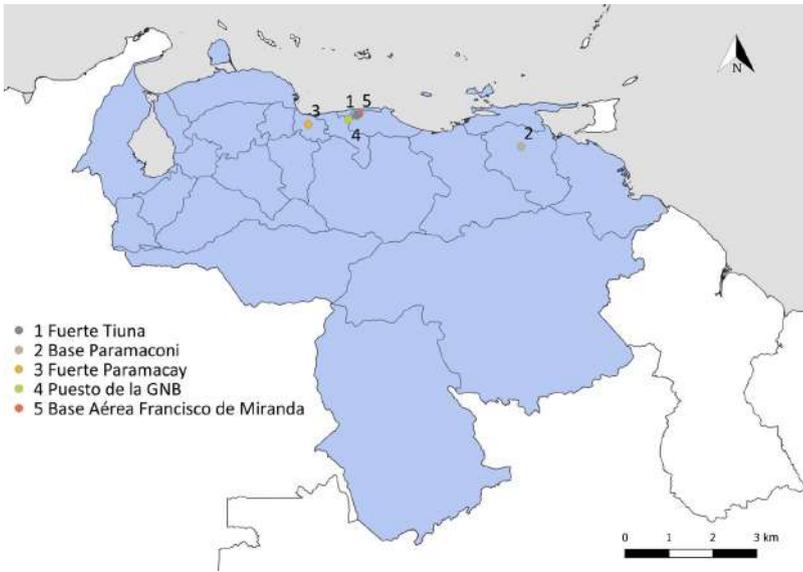
La lista de dichas acciones es larga, contando al menos un ataque a distintos objetivos militares por año que se pueden observar en la siguiente línea del tiempo y, con más detalle, en la tabla del anexo 1:

Operaciones de golpe de Estado e intervención directa



Fuentes: Elaboración propia con datos de Cabello (2020); Escobar (2020) y Misión Verdad (2020b).

Mapa 2. Puestos estratégicos



Fuente: elaboración de Adriana Franco.

De esta lista, cabe destacar el intento de ingresar cajas con supuesta *ayuda humanitaria* de la USAID tras de la *juramentación* de Guaidó y el rápido reconocimiento que le brindaron Estados Unidos y el Grupo de Lima. El escenario fue montado el 23 de febrero, día en el que se pretendía introducir las cajas desde las fronteras con Colombia y Brasil e incluyó el traslado de Guaidó a Colombia con apoyo de reconocidos grupos paramilitares, el desarrollo de eventos violentos y la deserción de oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que tomaron un vehículo oficial y huyeron a Colombia tras atropellar a varios de los presentes en el puente fronterizo entre Cúcuta y Táchira.

Cada uno de los intentos anteriores por derrocar al gobierno venezolano ha fracasado y la mayoría de ellos han sido desactivados antes de iniciar sus acciones. Se trata de acciones militares en las que se enlazan todas las etapas de la guerra descritas anteriormente. La narrativa mediática justifica una acción militar que busca derrocar a

un pretendido gobierno corrupto y autoritario; la corrosión política y social busca un clima propicio para atacar objetivos militares; y el acoso y deslegitimación institucional posibilitaría la instalación de un gobierno de facto. En muchos de los casos, estaría directamente involucrado el gobierno estadounidense y colombiano, siendo la *Operación Gedeón* la que proporciona más pruebas del contubernio entre Colombia, los actores de la oposición y Estados Unidos.

Al respecto, vale la pena profundizar en la *Operación Gedeón* dada su importancia.

En la madrugada del 3 de mayo, fue frustrada la incursión de mercenarios provenientes de Colombia vía marítima con la intervención de la FANB y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), donde murieron ocho de los tripulantes de la embarcación durante el enfrentamiento y dos más fueron detenidos (Misión Verdad, 2020a,p. 17). Al siguiente día, otra embarcación fue detenida con ocho tripulantes tras la intervención de pescadores junto a las fuerzas de seguridad, en un operativo llamado *Negro Primero*. En los siguientes días, varios individuos fueron detenidos, sumando 66 implicados hasta el 21 de mayo (Telesur, 2020). En el transcurso de la operación, se mostró un video en redes sociales donde aparecía Jordan Goudreau, presidente de la empresa Silvercorp USA, junto al excapitán venezolano Javier Nieto Quintero. En dicha grabación, ambos hombres confirmaron la veracidad de la operación con la intención de llegar a Caracas y detener al presidente Nicolás Maduro para ser llevado a Estados Unidos (al estilo Noriega). La mayoría de los involucrados habían participado en los intentos anteriores de golpe de Estado.

Más trascendente fue que se comprobó la existencia de un contrato firmado por Goudreau y Guaidó para la realización del operativo. El mismo Goudreau confirmó la existencia del contrato e incluso acusó a Guaidó de incumplir sus compromisos. Guaidó, por su parte, negó haber firmado cualquier tipo de documento, sin embargo, el contrato con su firma fue difundido por las autoridades venezolanas. Con ánimos de disminuir el impacto negativo hacia Guaidó y

su partido, otro de los firmantes, el estratega Juan José Rendón, reconoció públicamente haber firmado el contrato, aunque según su versión, Guaidó no firmó y se trataba de un contrato exploratorio cuyo plan nunca se ejecutó. Tras sus declaraciones, Rendón renunció a su *puesto* en el comité de estrategia del *gobierno interino de Guaidó* (Teruggi, 2020). El contrato entre Guaidó y Silvercorp demuestra el involucramiento de actores externos en la operación, incluyendo los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Brasil.

Es muy poco probable que la inteligencia del gobierno estadounidense no tuviera conocimiento del rol de Silvercorp USA y los campamentos colombianos. Es además endeble la tesis de que el gobierno estadounidense simplemente los dejó actuar por cuenta propia contra uno de sus objetivos estratégicos como lo es el gobierno venezolano (Misión Verdad, 2020a,p. 14).

Días antes de la incursión, el 23 de marzo, el fiscal de Estados Unidos, William Barr, presentó cargos por narcotráfico contra el presidente Maduro, Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino López y Maikel Moreno. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala a estos funcionarios como líderes del *Cártel de los Soles*, el cual supuestamente opera desde 1999 y es responsable de la importación de cocaína a Estados Unidos (Misión Verdad, 2020a,p. 11). Esta maniobra justificó el despliegue de embarcaciones estadounidenses en el Caribe e involucró a la DEA en la maniobra.

La Operación Gedeón constituye una forma de intervención relativamente inédita al incorporar una empresa privada de seguridad. Su éxito habría posibilitado la entrada de Estados Unidos de manera directa y materializar la toma del poder colocando en la presidencia a alguna figura de la oposición. La utilización de mercenarios ha permitido a Estados Unidos negar su participación en la operación, siguiendo un esquema de ensayo-error en los intentos por derrocar al gobierno. Por otra parte, su fracaso ha tenido repercusiones negativas para la oposición, que desde enero de 2020 venía retornando a las disputas internas que caracterizan a la coalición de la MUD,

debido al cambio de presidente en la Asamblea Nacional.⁶ La exposición de los contratos con Silvercorp ha profundizado la marginación de Guaidó del escenario político local, mientras que sigue siendo reconocido como presidente por parte de la comunidad internacional.

Por último, hay que considerar la posibilidad de una intervención abierta. El presidente de Estados Unidos ha insistido en diversas ocasiones en su deseo de invadir militarmente Venezuela de manera directa. Tanto los países del grupo de Lima como el *establishment* republicano lo han frenado en sus pretensiones debido al costo político que tendría, pero no debe descartarse. De tal manera, hay que considerar el escenario en las fronteras con Colombia, Brasil y Guyana. Sin duda, en una incursión militar, el escenario más probable se daría vía Colombia, pero no hay que olvidar la participación de Brasil en el cierre de frontera y los intentos por ingresar cajas de la USAID en 2019 y la disputa territorial que mantienen Guyana y Venezuela por el territorio del Esequibo.

Consideraciones finales

La pretensión de Estados Unidos, sus aliados y la oposición venezolana por derrocar al gobierno de Venezuela se ha topado con la firmeza del grupo gobernante, la decidida participación popular en la defensa de su proceso y la creatividad para afrontar la situación

⁶ Una parte de la oposición, con apoyo de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), eligieron a Luis Parra, ex militante de PJ, como nuevo presidente de la AN, mientras que el grupo de Guaidó protagonizaba un altercado a las afueras del Palacio Federal Legislativo debido a que reclamó que no se le había permitido entrar al palacio legislativo. Sin embargo, el ingreso nunca le fue negado, sino solamente a los diputados inhabilitados por la justicia con los que iba acompañado. Ese grupo *reeligió* a Guaidó en un recinto alternativo, sin sustento legal y emulando su *juramentación* como presidente un año antes. Además, debido a la proximidad de las elecciones legislativas, una parte de la MUD se ha mostrado dispuesta a participar en el proceso electoral, mientras que la línea dura insiste en desconocer el proceso aún antes de realizarse, y apearse al llamado a Washington para intervenir en la situación.

desfavorable que se genera con el aislamiento, los bloqueos y las sanciones impuestas desde el país del norte. A lo largo de veinte años, se generó una base de apoyo a la Revolución Bolivariana cuyo modelo de organización desafía la hegemonía capitalista y desde donde se puede encontrar el principal punto de defensa del proceso venezolano. Al respecto, cabe resaltar que el Estado no es el principal protagonista del proceso venezolano, sino un pueblo movilizado sin el cual la Revolución Bolivariana habría visto su final desde hace tiempo.

Precisamente, el caso de la guerra contra Venezuela nos muestra que la simple determinación del sujeto hegemónico por disciplinar a un país no es suficiente cuando existe un proceso organizado desde abajo y un sujeto contrahegemónico determinado a defender su independencia. Esto no implica que Estados Unidos, en ejercicio de su posición hegemónica, no haya logrado nada en su ofensiva contra Venezuela. El aislamiento de Venezuela en todas las dimensiones ha permitido a Estados Unidos consolidar su posición de cabecilla continental al revertir procesos análogos en otros países de la región. Si bien no se ha alcanzado el objetivo de recuperar Venezuela, ha logrado castigar el indisciplina del pueblo venezolano con medidas de asfixia que degradan la calidad de vida.

En el ámbito mediático es donde se encuentra una de las grandes debilidades del proceso bolivariano debido a la presencia hegemónica de los grandes medios de información. Desde sus lentes, en el exterior de Venezuela, vemos una situación caótica que requiere de un final mediado por la comunidad internacional, léase Estados Unidos y sus aliados. Pero algunos proyectos contrainformativos, impulsados por Venezuela o países confrontados también con el *mainstream*, permiten inclinar un poco la balanza para exponer que la situación venezolana ha sido creada por los intereses injerencistas de Estados Unidos y la oposición venezolana que busca revertir la Revolución Bolivariana.

A pesar de las prácticas organizativas que ha impulsado la Revolución Bolivariana, la desestabilización política ha permitido crear

descontento entre la población debido a los efectos en la descomposición del tejido social, lo que se ha manifestado en el apoyo de parte importante de la población a la oposición. El pueblo venezolano se encuentra dividido entre el apoyo al proceso bolivariano y los que han encontrado ese proceso como culpable de la situación actual, mientras que una tercera opción, que no simpatiza ni con el gobierno ni con la oposición, sigue siendo minoritaria como para representar una alternativa.

En cuanto a la institucionalidad, el proceso de desplazamiento ideológico que implicó refundar el Estado en 1999 ha permitido la permanencia de instituciones que se mantienen firmes en su apoyo a la Revolución Bolivariana. Es preciso señalar que esto no significó una ideologización de las instituciones del Estado, como lo consideran los actores liberales, sino un cambio de ideología. En la democracia liberal occidental, se considera que sus instituciones son no ideológicas, lo que resulta en la mayor de sus falacias, pues defienden precisamente la ideología liberal, una clase social en el poder y un modo de producción.

Finalmente, en el ámbito militar, los actores golpistas no han podido encontrar apoyo de la FANB ni las deserciones necesarias para tener éxito en sus intentos por derrocar al gobierno. Esto se debe precisamente al profundo proceso de cambio ideológico en el seno de la institución castrense durante la década pasada. Además, en una eventual invasión militar, las hipotéticas tropas invasoras se encontrarían con la aplicación de la doctrina militar venezolana de *Guerra Popular de Resistencia*, que incorpora las nociones de asimetría, guerra multidimensional y un *sistema de resistencia* que incorpora a la población en la defensa del país por medio de la figura de las Milicias Bolivarianas.

Bibliografía

- Aponte-Moreno, Marco (9 de agosto de 2019). Punto de vista: 5 razones por las que las sanciones a Venezuela no acabarán con el gobierno de Maduro (como desea Estados Unidos). *BBC Londres*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49289922>
- Banfi, Karina (15 de septiembre de 2019). Venezuela: todo comenzó con la violación a la libertad de expresión. *Infobae*. <https://www.infobae.com/opinion/2019/09/15/venezuela-todo-comenzo-con-la-violacion-a-la-libertad-de-expresion/>
- Barrios Benatuil, Ana Graciela, et al. (2018). Poder popular territorial. En Gabbert, Karin y Martínez, Alexandra (comp.), *Venezuela desde adentro*. Quito: Fundación Rosa Luxemburgo.
- Bartley, Kim y Ó Briain Donnacha (Directores). (2003). *La revolución no será transmitida* [Documental]. Bórd Scannán na hÉireann; Nederlandse Programma Stichting; CoBo Fonds.
- Cabello, Diosdado (6 de mayo de 2020). *Vea el mapa de eventos que se relacionan con la invasión imperialista a Venezuela*. Con el Mazo Dando (Video). YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=F9TYQ9aEeMw>
- Casado, Fernando (2016). *Antiperiodistas: confesiones de las agresiones mediáticas contra Venezuela*. Caracas: El perro y la rana.
- Casey, Nicholas y Kurmanaev, Anatoly (18 de febrero de 2019). La crisis de la ayuda humanitaria es la clave del cambio en Venezuela. *New York Times*. <https://www.nytimes.com/es/2019/02/18/espanol/america-latina/venezuela-ayuda-humanitaria-frontera.html>
- Ceceña, Ana Esther (2018). Poder, emancipación, guerra y sujeción. En Efraín León (coord.), *Praxis espacial en América Latina. Lo geopolítico puesto en cuestión*. México: Itaca-UNAM.
- Ceceña, Ana Esther (2013). La dominación de espectro completo sobre América. *Patria*, 1(1), 43-59.
- Ceceña, Ana Esther y Barrios, David (2017). *Venezuela ¿invadida o cercada?* <http://geopolitica.iiec.unam.mx/node/178>

CIDH (2017). *Situación de derechos humanos en Venezuela*. Organización de Estados Americanos.

CNN (4 de agosto de 2018). *Venezuela: Nicolás Maduro sale ileso de “atentado” en Caracas, dicen autoridades*. <https://cnnespanol.cnn.com/2018/08/04/venezuela-evento-que-encabezaba-nicolas-maduro-es-interrumpido-por-ruidos-que-podrian-ser-explosiones/>

Cotovio, Vasco; Isa Soares y William Bonnett (20 de agosto de 2019). Un rastro de “oro sangriento” conduce al gobierno de Venezuela. CNN. <https://cnnespanol.cnn.com/2019/08/20/un-rastro-de-oro-sangriento-conduce-al-gobierno-de-venezuela/>

Curcio Curcio, Pasqualina (2017). *La mano visible del mercado. Guerra económica en Venezuela*. Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información.

Department of Defense (2020). *DoD dictionary of military and associated terms*. Washington: DoD.

Department of State (2018). *Integrated country strategy: Venezuela 2018-2022*. Washington: DoS. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/ICS-Venezuela_UNCLASS_508.pdf

Department of State (2019). *U.S. Relations With Venezuela*. <https://www.state.gov/u-s-relations-with-venezuela/>

Department of the Treasury (2020). *Venezuela-related Sanctions*. <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/venezuela.aspx>

Espacio Público (2018). Situación general del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela: enero-diciembre 2017. *Comunicación: estudios venezolanos de comunicación* (182), 137-146.

Escobar, Facundo (21 de mayo de 2020). The US endless war against Venezuela. *United World*. <https://uworld.com/10964-the-us-endless-war-against-venezuela/>

Faller, Craig (1 de mayo de 2019). Opening Statement: Adm. Faller before the House Armed Services Committee. Washington: DoD. <https://www.southcom.mil/Media/Speeches-Transcripts/Article/1834898/opening-statement-adm-faller-before-the-house-armed-services-committee-may-1-20/>

Fazio, Carlos (2013). *Terrorismo mediático. La construcción social del miedo en México*. México: Debate.

Fazio, Carlos (25 de marzo y 8 de abril de 2019). Estados Unidos y el cambio de régimen en Venezuela [I y II]. *La Jornada*. <https://www.jornada.com.mx/2019/03/25/opinion/016a1pol> y <https://www.jornada.com.mx/2019/04/08/opinion/017a2pol>

Fréitez, María Eugenia, et al. (2018). En Gabbert, Karin y Martínez Alexandra (comp.), *Venezuela desde adentro*. Quito: Fundación Rosa Luxemburgo.

Galiñanes, Pablo y Rossi, Verónica (2015). ¿Existe una real oposición al chavismo en Venezuela? Análisis sobre la Mesa de Unidad Democrática. *Revista política latinoamericana* (1), 23-35.

Golinger, Eva (13 de septiembre de 2007). USAID en Bolivia y Venezuela: la subversión silenciosa. *América Latina en Movimiento*. <https://www.alainet.org/es/active/19685>

Golinger, Eva (28 de enero de 2019). The Dirty Hand of the National Endowment for Democracy in Venezuela. *Consortium News*. <https://consortiumnews.com/2019/01/28/the-dirty-hand-of-the-national-endowment-for-democracy-in-venezuela/>

HRW (5 de marzo de 2013). *Venezuela: El legado autoritario de Chávez*. <https://www.hrw.org/es/news/2013/03/05/venezuela-el-legado-autoritario-de-chavez>

Joint Chiefs of Staff (2010). *Joint Publication 3-13.2, Psychological Operations*. Washington: Departamento de Defensa.

Joint Chiefs of Staff (2013). *Joint Publication 1, Doctrine for the Armed Forces of the United States*, Washington: Departamento de Defensa.

Joint Chiefs of Staff (2014). *Joint Publication 3-05, Special Operations*. Washington: Departamento de Defensa.

Joint Chiefs of Staff (2014). *Joint Publication 3-13, Information Operations*, Washington: Departamento de Defensa.

Machado, Jesús, Nuñez, Betty y Arraíz, Nanciely (2018). Poder popular: una mirada desde las bases. En Gabbert, Karin y Martínez, Alexandra (comp.), *Venezuela desde adentro*. Quito: Fundación Rosa Luxemburgo.

Méndez Urich, Luis (6 de agosto de 2018). Tras supuesto atentado a Maduro, Venezuela responsabiliza a Colombia de “cualquier nueva agresión”. *France 24*. París. <https://www.france24.com/es/20180806-nicolas-maduro-intento-atentado-colombia>

Misión Verdad (2020a). *Operaciones mercenarias contra Venezuela: Evaluación de una amenaza militar fracasada*. Caracas: Misión Verdad.

Misión Verdad (16 de mayo de 2020b). *Siete años de operaciones mercenarias contra Venezuela: un registro de todos los planes desmantelados*. Caracas.

Navarro, Ernesto J. (2018). *Tierras raras o coltán: La otra riqueza mineral de Venezuela*. <https://www.ocmal.org/tierras-raras-o-coltan-la-otra-riqueza-mineral-de-venezuela/>

NED (2020). *Venezuela 2019*. <https://www.ned.org/region/latin-america-and-caribbean/venezuela-2019/>

Ospina-Valencia, José (4 de febrero de 2019). Crisis humanitaria en Venezuela: el dilema de la ayuda. *Deutsche Welle*. Berlín. <https://www.dw.com/es/crisis-humanitaria-en-venezuela-el-dilema-de-la-ayuda/a-47358497>

OPEP (2020). *World proven crude oil reserves by country. Annual Statistics Bulletin*. <https://asb.opec.org/index.php/data-download>

PDVSA (sin fecha). *Faja Petrolera del Orinoco Hugo Chávez Frías*. Caracas: PDVSA. http://www.pdvsa.com/images/pdf/cuadernos/Faja_petrolera.pdf

Ribando, Seelke Clare (2020). *Venezuela: Overview of U.S. Sanctions*. Washington: Congressional Research Service. <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10715>

Salas Rodríguez, Luis (2015). *22 claves para entender y combatir la guerra económica*. Caracas: El perro y la rana.

Santander, Diego (1 de enero de 2018). Nicolás Maduro sube el salario mínimo por sexta vez en un año. *El Mundo*. <https://www.elmundo.es/internacional/2018/01/01/5a4a8ae0268e3e3f428b4606.html>

Singer, Florantonia (15 de octubre de 2019). Venezuela cerrará el año con una inflación del 200.000%. *El País*. https://elpais.com/economia/2019/10/15/actualidad/1571150056_773127.html

Southcom (2019). *United States Southern Command Strategy*. “Enduring Promise for the Americas”.

Telesur (25 de mayo de 2020). *Capturan a nuevos implicados en Operación Gedeón*. <https://www.telesurtv.net/news/venezuela-gobierno-revela-captura-nuevos-mercenarios-20200525-0002.html>

Terruggi, Marco (12 de mayo de 2020). Acorralado, renunció J.J. Rendón, asesor de Juan Guaidó. Página 12. <https://www.pagina12.com.ar/265219-acorralado-renuncio-j-j-rendon-asesor-de-juan-guaido>

USAID (6 de febrero de 2020). *USAID en Venezuela, preguntas frecuentes*. <https://www.usaid.gov/venezuela/usaid-en-venezuela-preguntas-frecuentes>

Vázquez Heredia, Omar (2019). La situación económica de Venezuela en el período 2014-2018 y disputa intelectual. Socialismo, guerra económica o ajuste económico. *Observatorio Latinoamericano y Caribeño* (3), 121-139.

Vélez Cabrera, Juan Pablo; Lara Ledesma, Abigail y Ruiz Abril, Karina Marianela (2019). Vulneración a la libertad de expresión. Caso los jinetes del apocalipsis. *Revista de ciencias sociales*, 25(1), 102-110.

Anexo 1

Operaciones de golpe de Estado 2013-2020				
Nombre	Fecha	Objetivo	Lugar	Involucrados
-	10 de junio 2013	Asesinato de Nicolás Maduro	Estados Táchira y Portuguesa	Miembros del grupo Los Rastrojos
La Salida	Enero-febrero 2013	Renuncia del presidente	Caracas	Antonio Ledezma, Leopoldo López, María Corina Machado
-	24 de marzo de 2014	Alzamiento militar	Caracas	General de brigada José Daniel Machillanda Díaz; general de división Oswaldo Hernández Sánchez; general de brigada Carlos Alberto Millán Yaguaracuto
Operación Jericó	12 de febrero 2015	Atacar el Palacio de Miraflores en avión artillado	Caracas	-
Operación Espada de Dios	Diciembre 2016-enero 2017	Asesinato de Nicolás Maduro	Caracas	Raúl Isaías Baduel; Ángel Vivas Perdomo
Operación Baduel	Enero 2017	Golpe de Estado; tomar Fuerte Tiuna; conformar Estado Mayor	Aragua, Carabobo, Zulia, Guárico, Bolívar	Raúl Isaías Baduel; Ricardo Haussman; Milos Alcalá
Operación Victoria	Junio 2017	Sabotaje electoral; tomar brigada Caribe	Base Paramaconi	General de brigada Jesús Alberto Milano; teniente coronel Durvis Melean
Óscar Pérez	Junio-diciembre 2017	Ataque al TSJ y MP en junio; ataque a comando de GNB en diciembre	Caracas y estado Miranda	Óscar Pérez

Operación Paramacay I	6 de agosto 2017	Tomar fuerte Paramacay	Fuerte Paramacay	Juan Carlos Caguaripano; Raider Alexander; Delgado Taboski
Movimiento de transición del pueblo	Marzo 2018	Sabotaje electoral; asaltar unidades militares	Fuerte Tiuna (Caracas)	Miguel Rodríguez Torres; Marín Chaparro
Operación Paramacay II	Mayo 2018	Sabotaje electoral; tomar unidades militares	Fuerte Paramacay	García Palomo
Operación Armagedón	Mayo 2018	Suspender elecciones; tomar base aérea Francisco de Miranda	Caracas	Miguel Rodríguez Torres; Antonio Rivero
Operación Fénix	4 de agosto 2018	Asesinato de Nicolás Maduro	Caracas	Julio Borges; Juan Requesen; Delgado Tabosky
-	Febrero 2019	Ingresar cajas de USAID	Frontera con Colombia y Brasil	Juan Guaidó
Operación Libertad	30 de abril 2019	Golpe de Estado	Base Aérea Francisco de Miranda	Juan Guaidó; Leopoldo López; Edgar Zambrano; Ilich Sánchez; Soto Farias
Operación Vuelvan Caras	Junio 2019	Golpe de Estado	Caracas	General de brigada Eduardo José Baez; Cliver Alcalá; general de brigada Miguel Carmelo Sisco; Josnars Adolfo Baduel
Movimiento Fuerza y Libertad	Agosto 2019	Golpe de Estado	Caracas	Cliver Alcalá; Pedro Pablo Santano Carvallo

Venezuela Honor y Gloria	Noviembre 2019	Tomar fuertes militares y robo de armas	Sucre	Ramón Martínez; Yanet Fermín; Fernando Orozco
Operación Aurora	Diciembre 2019	Ataque de fuertes militares	Bolívar	-
Operación Gedeón	Marzo 2020	Golpe de Estado; arresto o asesinato de Nicolás Maduro	Caracas; Aragua; Miranda; Carabobo; Bolívar	Jordan Goudreou; Cliver Alcalá; Juan Guaidó

Fuentes: elaboración propia con datos de Cabello (2020); Escobar (2020) y Misión Verdad (2020b).

Parte 4. Las guerras invisibles

Guerras no militares

Sanciones, embargos y guerra financiera

Alberto Hidalgo Luna

DOI: 10.54871/gS23b10h

*...persuasivo en la paz, decisivo en la guerra,
y preeminente en cualquier forma de conflicto.*

Joint Chiefs of the Staff

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo comprender el lugar de las *sanciones económicas y financieras* como una herramienta de *guerra por medios no militares* utilizado por el aparato de estrategia estadounidense. Identificamos su accionar en el terreno DIMEFIL (Diplomacia-Información-Militar-Economía-Finanzas-Inteligencia-Legal), donde se considera el poder nacional como algo no limitado únicamente al poder militar. Dentro de este término ampliado de la guerra, se comprende al *Instrumento de Poder* (IOP) como el ejercicio de los campos o herramientas de *todo el gobierno* (WOG) que sean capaces de generar ventajas sobre el enemigo, destacando las herramientas no tradicionalmente militares. Bajo esta lógica, las sanciones económicas “apuntan a cambiar el cálculo de decisiones del objetivo sobre la presión y resistencia a soportar, aumentando el costo y la dificultad de

la actividad económica o las transacciones financieras del objetivo.” (Jermano, 2018)

En el trabajo, se realiza una breve revisión del entendimiento estratégico de las herramientas de guerra no militar: del funcionamiento de las sanciones económicas y su importancia clave en la disputa hegemónica contemporánea. A través de tres tablas descriptivas se busca comprender el accionar que han tenido estas sanciones en el enfrentamiento de Estados Unidos con Irán, Rusia y China específicamente.

I

Tradicionalmente, las potencias occidentales mantuvieron el modelo de Clausewitz de que la guerra es violencia y de que sin acciones violentas, una nación no está realmente en guerra. Este paradigma simple encadena a los militares a una búsqueda miope de la guerra que quieren pelear en lugar de la que podrían presentar sus competidores.

General Terrence J. O’Shaughnessy y Matthew D. Strohmeyer (2018)

La razón de ser de la guerra, señala el general Terrence O’Shaughnessy (2018), líder del Comando Norte de Estados Unidos, consiste en “producir un estado final, militar y político deseado”, es decir, la concreción de objetivos estratégicos de carácter geopolítico en espacios concretos, sea mediante modos militares o formas *no explícitamente militares*, donde se rocen “los bordes tradicionales de la paz y la guerra” (O’Shaughnessy, Strohmeyer, 2018).

Estrategas del más alto nivel como el ex jefe del pentágono Jim Mattis proponen una línea similar de acción, donde se “exploren ventajas por debajo del umbral del conflicto armado para alcanzar los objetivos” (Mattis, 2018), situación en la que Estados Unidos se concibe aún como “la nación que puede expandir el espacio competitivo más que cualquier otra, desafiando mediante espectros donde se poseen las mayores ventajas” (Mattis, 2018). Ambos estrategias plantean la necesidad de claridad del objetivo, es decir *el efecto político*

deseado a partir del cual la estrategia debe adecuarse para superar a cualquier tipo de adversario en cualquier escenario operativo mediante *capacidades cinéticas y no cinéticas* “que se puedan aplicar para influir directamente en la selección de opciones del adversario” (O’Shaughnessy y Strohmeier, 2018), potenciando sus acciones ahí donde mayores ventajas se puedan tener en la coerción del enemigo.

La disputa por la hegemonía requiere de la plena identificación de las ventajas asimétricas que son aplicables como capacidades reales y posibles en el campo amplio de acción. Como una caja de herramientas, el aparato de defensa de Estados Unidos (Army, 2008) entiende los Instrumentos del Poder (IOP) como la suma de elementos y capacidades de *todo el gobierno* (WOG) compuestos por ejercicios en espectros múltiples e interdependientes de carácter explícitamente militar, así como instrumentos *soft* de carácter no militar.¹ Para entender la modalidad WOG, se presenta el término DIMEFIL, el cual se desglosa de los campos de Diplomacia, Información, el aparato explícitamente Militar, poder Económico y Financiero, Inteligencia, así como dispositivos Legales. Este es un término militar recientemente revitalizado para recordar a los líderes y responsables políticos que consideren el poder nacional como algo que no se limita únicamente al poder militar. Su aplicación, señala NATO (2017), es de gran capacidad ante enfrentamientos tales como los de Guerra Híbrida y Zona Gris, es decir, formas “[...] por debajo del umbral del conflicto militar convencional, las líneas rojas establecidas y la guerra interestatal abierta” (NATO, 2017, p. 7).²

Estas formas operativas de IOP entremezcladas entre bélicas y no bélicas son ejecutadas por distintos departamentos y agencias no explícitamente militares como los departamentos de Estado, Tesoro, Justicia, Energía, Comercio, etc. Sectores que desdoblados amplían la esfera de posibilidades y espacios estratégicos de acción. Sobre esto, Rodríguez, Walton y Chu (2020) señalan:

¹ Por su traducción del inglés *whole of government*.

² Para mayor profundidad en estos conceptos de guerra consultar Barrios (2019); Center for Strategic and International Studies (n.d.); y Korikbo (2015).

La dirección estratégica y la doctrina conjunta de los Estados Unidos afirman la importancia de sincronizar e incorporar un enfoque de participación de todo el gobierno a fin de utilizar todos los *instrumentos del poder* (IOPS) para la unidad de esfuerzo. El concepto Joint Force 2020 de operaciones globalmente integradas aboga por un enfoque transregional, de todos los dominios y acercamiento multifuncional (Rodríguez, Walton y Chu, 2020).

Rees (2016) habla de un funcionamiento *interoperativo* y *orgánico* de las capacidades nacionales para ejercer *presión y coacción*, en que las agencias involucradas reaccionen como aviso pero bajo la lógica de la comunicación precisa y la ventaja de la inteligencia y superioridad tecnológica. La dirección estratégica y la doctrina conjunta de Estados Unidos (Joint Doctrine, 2020) afirman la importancia de sincronizar e incorporar un enfoque donde todo el gobierno y sus instancias sean partícipes a fin de utilizar todas las posibles ventajas que las IOP brinden, funcionando cohesivamente bajo un mismo objetivo. La Doctrina Conjunta 2020 (Joint Doctrine) señala:

La complejidad de las operaciones futuras también requiere que, además de operar en conjunto, nuestras fuerzas tengan la capacidad de participar de manera efectiva como un elemento de un esfuerzo nacional unificado. Este enfoque integrado utiliza todas las herramientas del arte de gobernar para lograr nuestros objetivos nacionales de manera unilateral cuando sea necesario, al tiempo que hace un uso óptimo de las habilidades y los recursos proporcionados por las fuerzas militares multinacionales, las organizaciones regionales e internacionales, las organizaciones no gubernamentales y *las organizaciones privadas* de forma voluntaria cuando sea posible (Joint Force, 2000).

Por esto, el accionar de instituciones tales como el Departamento del Tesoro, de Justicia, de Energía, pero también instituciones privadas como servicios financieros y medios de comunicación como mencionaremos posteriormente, se vuelven fundamentales. La integración de los IOP, señala O'Shaughnessy, es fundamental para el quiebre de expectativas del enemigo, mediante *formas o ejercicios no*

convencionales de hacer la guerra en la que aparatos cinéticos y no cinéticos funcionan bajo un mismo objetivo, es decir producir un estado final, militar y político deseado.

Tales acciones pueden incluir una variedad de presiones diplomáticas, informativas, militares y económicas no cinéticas en diversas ubicaciones geográficas. Debido a que la velocidad y la sincronización son vitales para crear el efecto cognitivo de estas acciones, se debe planificar a fondo y precoordinar un enfoque de configuración estratégica en los niveles más altos de gobierno (O'Shaughnessy y Strohmeier, 2018).

Las guerras no convencionales (O'Shaughnessy y Strohmeier, 2018), o *por otras maneras* (Blackwill y Harris, 2016), se ejecutan mediante acciones estratégicas rápidas de *todo el gobierno* (wog) para presentar dilemas múltiples y complejos, en los que se pueda proseguir por la consecución de determinados objetivos estratégicos sin la utilización de armas cinéticas, teniendo como terreno de posible acción un “estado de guerra en todos y cada uno de los campos del esfuerzo humano” (Liang y Xiangsui, 1999), donde se pueden avistar las capacidades tecnológicas, culturales, de inteligencia, propagandísticas, financieras, económicas, legales, energéticas, etc. (Rodríguez, Walton y Chu, 2020).³ Sobre esto, Army señala que “todos los medios para influir en el comportamiento humano se aplican a las guerras no convencionales” (Army, 2008).⁴

Los generales chinos Liang y Xiangsui (1999) en un análisis de las formas de guerra del siglo XXI, señalan algunas formas no convencionales de hacer la guerra mediante ejercicios no militares. Avistan formas con características bastante sombrías como las operaciones

³ “El concepto anterior, ‘operaciones de guerra no militares’, amplía nuestra comprensión de lo que constituye exactamente un estado de guerra a todos y cada uno de los campos de la actividad humana, mucho más allá de lo que puede abarcar el término ‘operaciones militares’”.

⁴ La guerra no convencional (UW, por sus siglas en inglés) se trata fundamentalmente de influir en los grupos humanos dentro de un área específica (generalmente fuera del alcance del poder militar unilateral de los EE. UU.). Todos los medios para influir en el comportamiento humano se aplican a la UW.

psicológicas fundamentadas en guerras de terror y los medios de comunicación, guerras culturales (liderando las tendencias culturales para asimilar a aquellos con diferentes puntos de vista), los monopolios tecnológicos y de recursos, guerra en el derecho internacional mediante el manejo de influencias políticas, incluso guerras ecológicas en las que la tecnología se implementa para alterar el estado de la naturaleza, así como las que son de interés particular para el presente trabajo, las guerras comerciales y guerras financieras.

Estas dos formas de utilizar el capital como instrumento coercitivo dentro del fenómeno geopolítico son comprendidas por Blackwill y Harris como fenómenos de carácter geoeconómico, es decir, “el uso de instrumentos económicos para promover y defender los intereses nacionales y producir resultados geopolíticos beneficiosos, y los efectos de las acciones económicas de otras naciones en los objetivos geopolíticos de un país” (Blackwill y Harris, 2016). Estas acciones pueden tener como resultado cambios en el modelo económico, cambio de régimen, aceptación de un proyecto externo, pero primordialmente impactos y cambios estructurales en la economía nacional mediante los cuales se puede “absorber países sin tener que usar la fuerza” (Blackwill y Harris, 2016).⁵ Entre la diversidad de herramientas punitivas o persuasivas de carácter geoeconómico encontramos “políticas comerciales, políticas de inversión, sanciones económicas y financieras, ataques cibernéticos a entes económicos, ayuda internacional, política financiera y monetaria, y el manejo estratégico de materias primas, primordialmente los energéticos” (Blackwill y Harris, 2016). NATO (2017), por su cuenta, señala algunas formas no militares de guerra de carácter económico que funcionan interrelacionadas. Para el presente trabajo nos enfocamos en las sanciones económicas, comerciales y financieras en el marco de guerras no explícitamente militares.

⁵ Como el caso de los aranceles impuestos por la administración Trump a México en 2019 que tuvieron como consecuencia la implantación del proyecto de retención migratoria “Remain in Mexico”, que cumplió la labor sucia de retener a los migrantes que se encaminaban a solicitar refugio en Estados Unidos.

Tabla 1. Formas no militares de guerra de carácter económico
Guerras financieras (Financial Warfare)
Guerras comerciales (Trade Warfare)
Guerra de recursos (Resources Warfare)
Guerra económica o mediante asistencia (Economic/Aid Warfare)
Guerra jurídica (Legal Warfare)
Guerra de sanciones (Sanctions Warfare)

Fuente: elaboración de Alberto Hidalgo con base en NATO (2017)

II

Aprovechar el poder económico para los objetivos de la política exterior presenta formidables obstáculos. . . Sin embargo, si la guerra es demasiado importante para dejarla en manos de los generales, seguramente el comercio, en este contexto, es demasiado importante para dejarlo en manos de banqueros y empresarios

Samuel P. Huntington

Estados Unidos tiene un largo historial de usar sanciones de carácter económico como una forma de influenciar o manipular objetivos con fines geopolíticos. Nos remontamos a 1807, cuando legisladores estadounidenses, con aprobación del presidente Jefferson, utilizaron sanciones internacionales por primera vez, aunque tuvieron como resultado un “cruento bloqueo a su propia economía” (Rosenberg et al., 2016, p. 5). A través del tiempo, han perfeccionado sus herramientas mientras crecía su propia economía, ejemplo de ello es el efectivo bloqueo que desde la década de 1960 es aplicado sobre Cuba o la permanencia punitiva sobre Irán que desde 1979 se ha ido

reconfigurando hasta la política de *máxima presión* de la administración Trump, continuada discretamente por Biden.⁶

Durante el siglo XX, fueron 120 los programas de sanciones a instancias estatales y no estatales aplicadas por Estados Unidos (Blackwill y Harris, 2016). Sin embargo, a partir del final de la Guerra Fría se potencia el uso de esta IOP, incluso con finalidades bélicas declaradas como la operación *tormenta del desierto* en la década de 1990 impuesta sobre Irak, o la guerra de Yugoslavia en 1995.⁷ En ambos escenarios, se libró en simultaneidad el estrangulamiento económico y la fuerza cinética. Para inicios de este siglo y a partir de la caída de las torres gemelas, las sanciones cobran una preponderancia clave, ya que fueron utilizadas como una forma de combate al terrorismo mediante el bloqueo de entidades del sistema financiero gracias a la virtualidad e interconexión, esto permitió desarrollar sistemas sumamente precisos que lograban retener fondos específicos. Tal restricción fue lograda mediante la participación o *reclutamiento* de bancos y agencias de mensajería y seguridad, tales como SWIFT, que participaron a cambio de seguir utilizando la moneda dólar en sus

⁶ Que vive un recrudescimiento en la era Trump al romper los acercamientos que el previo mandato había ejercido, teniendo como mayor peso la imposición del título III de la ley Helms-Burton la cual “codificó las disposiciones del bloqueo, ampliando su alcance extraterritorial, mediante la imposición de sanciones a directivos de empresas extranjeras que realicen transacciones con propiedades estadounidenses nacionalizadas en Cuba y la posibilidad de demandas en tribunales de EE.UU” (Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, 2019), generando pérdidas en rubros estratégicos como el turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba señala que desde abril de 2018 hasta marzo de 2019, el bloqueo ha causado pérdidas a Cuba en el orden de los 4 mil 343 millones de dólares. Asimismo, en plena pandemia de coronavirus, se “impulsó un golpe al sistema de envío de remesas a través del cual decenas de miles de cubanoamericanos envían dinero a sus familias, poniendo en ‘la lista negra’ a siete corporaciones financieras dedicadas a esta materia” (Vicent, 2020).

⁷ Según estimaciones presentadas en 1995 por la FAO, 567 mil niños iraquíes habían muerto por las restricciones calóricas y de agua potable provocadas por las sanciones económicas impuestas sobre la condición de guerra abierta. Referente a esta situación, en una entrevista a la entonces secretaria de Estado, Madeleine Albright, se refirió a las medidas punitivas respondiendo: “creemos que el precio lo vale” (Albright, 1995).

transacciones.^{8,9 y 10} Juan C. Zárate, en sus memorias *Treasury's War. The unleashing of a New Era of financial Warfare* (2013), señala las formas en que el Departamento del Tesoro comienza a ser la instancia bélica de mayor alcance y precisión en el marco de un *nuevo panorama de seguridad nacional* iniciado con el ataque a las torres gemelas en 2001.¹¹ Señala a este espectro como una

[...] guerra definida por el uso de herramientas financieras, presión y fuerzas del mercado para apalancar al sector bancario, los intereses del sector privado y los socios extranjeros con el fin de aislar a los *canallas* de los sistemas financieros y comerciales internacionales y eliminar sus fuentes de financiamiento. [...] Estas capacidades, que se encuentran entre la diplomacia y la guerra cinética, se convertirían cada vez más en las herramientas de seguridad nacional preferidas para los difíciles problemas de seguridad internacional que enfrenta Estados Unidos.

Este nuevo panorama surge de una clara asimetría en que las llamadas *sanciones inteligentes* se ven acuerpadas por el gran aparato financiero y su eficiente infraestructura tecnológica de rastreo y encriptamiento con capacidad inmediata de hacer valer bloqueos, observar movimientos, detectar intentos de burlas a las sanciones, entrecruzar información, etc. Esta nueva capacidad de las sanciones

⁸ Blackwill y Harris señalan que “Los funcionarios de EE. UU. comenzaron a reclutar a bancos de todo el mundo como agentes de ejecución, presentándoles una opción simple: cumplir con las sanciones de EE. UU. O dejar de hacer negocios en dólares estadounidenses” (2016).

⁹ “Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales” (SWIFT por sus siglas en inglés) que brinda la “seguridad” en la comunicación virtual diaria entre más de 10 mil organizaciones bancarias, grupos corporativos e instituciones de seguridad de 212 países del mundo (Swift, n.d.).

¹⁰ La divisa dólar, según el Bank for International Settlements para el 2019 ejecutó el 88% de las transacciones comerciales internacionales, brindándole al sector financiero norteamericano una tremenda preponderancia respecto a las demás divisas, teniendo como ejemplo la ventaja sobre el Yuan chino que representa el 4,3% de las transacciones (Yeung, 2019).

¹¹ Aun sin traducción al español, pero el título podría trasladarse como: “Guerra del Tesoro. El desencadenamiento de una nueva era de guerra financiera”

fue aprovechada por Estados Unidos para actuar también contra países o regímenes objetivo. Irán sufre en 2006 un recio ataque mediante instrumentos de guerra financiera o de sanciones que incluso llega ser denominado como “[...]la más sofisticada sanción económica y financiera impuesta sobre un país en la historia” (Zárate, 2013). Señala Jermano (2018) que las sanciones fueron realizadas a bancos clave de Irán primeramente por Estados Unidos, seguido por la Unión Europea, así como por numerosos bancos mundiales y otras empresas multinacionales que dejaron de hacer negocios con Irán, lo que redujo significativamente su capacidad para comerciar, obtener divisas y atraer inversión extranjera.

Las grandes capacidades de las sanciones para aislar a un país casi en su totalidad de los beneficios y necesidades del comercio internacional en la lógica de un mundo globalizado se deben a que estas cuentan con un gran margen de acción mundial. Pueden incluir: limitaciones al comercio de una nación (restricciones generales o restricciones a exportaciones particulares), bloqueo de activos sujetos a la jurisdicción estadounidense (incluso en países y bancos aliados u obedientes), límites en el acceso al sistema financiero de Estados Unidos, restricción de préstamos privados y gubernamentales, inversiones, seguros y suscripciones, pero siendo el mayor daño las *sanciones a terceros o secundarias*, pues se convierten en amenazas a todas las instituciones financieras, comerciales y gobiernos internacionales que deseen mantener relaciones económicas de alguna manera con el afectado, teniendo como consecuencia retiros casi generales del comercio con países sancionados.¹² Ejemplo de ello es el caso del petróleo venezolano, en el que “Estados Unidos ha instruido a las casas de comercio

¹² Incluso organizaciones humanitarias corren el riesgo de recibir sanciones severas, daños a la reputación y poner en peligro su capacidad de operar por completo si desean realizar transacciones en países y lugares sujetos a sanciones secundarias de Estados Unidos, como señala una reciente investigación realizada en el Center for Economic and Policy Research, the Charity & Security Network & Committee (2020) respecto al problema contemporáneo en la importación de bienes y recursos destinados a refugiados afganos en Irán, donde bancos internacionales se niegan a facilitar el traspaso financiero de Noruega al país persa debido a posibles sanciones.

de petróleo y refinerías de todo el mundo a que reduzcan aún más sus tratos con Venezuela o de lo contrario se enfrenten a sanciones; incluso si esos tratos no estuvieran prohibidos por las sanciones que EEUU había anunciado [...]” (Reuters, citado por Sachs y Weisbroty, 2019)

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) perteneciente al Departamento del Tesoro es la principal agencia operativa de las sanciones económicas, mediante el acceso a gran cantidad de información del sistema financiero estadounidense por su cercano trabajo con la mensajería SWIFT (Zárate, 2013).¹³

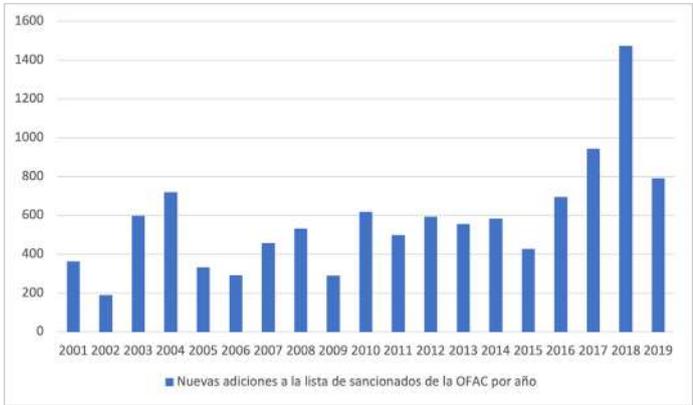
[La OFAC] administra y hace cumplir las sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior de EE. UU. y los objetivos de seguridad nacional contra países y regímenes extranjeros objetivo, terroristas, narcotraficantes internacionales, aquellos involucrados en actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la seguridad nacional, la política exterior o la economía de los Estados Unidos (OFAC, n.d.).

En las últimas dos décadas (2001-2019), la OFAC ha aplicado sanciones en 10.958 ocasiones (Gibson, Dunn y Crutcher, 2020), siendo la administración Obama la que más utilizó la herramienta con un total de 4.265 entidades sancionadas. Tal fue la cantidad de veces que se usó este IOP, que el mismo presidente llegó a denotar a la OFAC como su “comando de combate favorito” (Gibson, Dunn y Crutcher, 2020). Durante la administración Trump, las sanciones se exponenciaron a tal grado que por dos años consecutivos se rompió el récord de sanciones aplicadas. En 2017, fueron enlistadas 944 entidades, récord que se ve opacado por el año 2018 durante el cual 1474 entidades, compañías o individuos internacionales fueron enlistados por el Departamento del Tesoro. Durante la era Trump, se sostuvo un promedio de 976 sujetos sancionados por año. Este mismo realce de la importancia de la OFAC se refleja en la obtención de recursos presupuestarios, entre 2014 y 2019 “en términos ajustados a

¹³ En 2014, Edward Snowden reveló que esta agencia era espía por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la NSA (Mathew, 2014).

la inflación, los recursos presupuestarios de la OFAC aumentaron en un total de 58 por ciento, de aproximadamente \$ 29,7 millones en el año fiscal 2014 a aproximadamente \$ 46,8 millones en el año fiscal 2019” (United States Government Accountability Office, 2020).

Gráfico 1. Sanciones de la OFAC



Fuente: elaborado con datos de Gibson, Dunn y Crutcher (2020).

Cabe resaltar que la OFAC no es la única oficina encargada de realizar las sanciones, además de esta institución, la Oficina de Contabilidad del Gobierno de Estados Unidos (GAO) menciona a 10 distintas instancias con roles en la implementación de las sanciones, donde se incluye la Oficina de Focalización Global, la Oficina de Política e Implementación de Sanciones Económicas del Estado (SPI), la División de Política Exterior (FPD), la Oficina de Industria y Seguridad (BIS), el Buró de inteligencia e investigación de la Oficina de Contramedidas Financieras (INR), entre otras donde destaca el Departamento de Justicia, Energía y de Estado. Asimismo, están las medidas para emitir sanciones dictadas desde la Presidencia (sin necesidad de aprobación del Congreso) mediante la Ley de Emergencia de Poder Económico (IEEPA por sus siglas en inglés), Ley de Emergencia Nacional (NEA), Ley de Comercio con el Enemigo (TWEA), Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero; así como leyes emitidas desde el Congreso específicamente contra un país como

la Ley de Sanciones de Irán (ISA), la Ley patriótica de los Estados Unidos o las órdenes emitidas por el Departamento del Tesoro y su agente OFAC.

Pese al carácter unilateral de las sanciones estadounidenses, los objetivos suelen ser atacados por distintas medidas de países aliados como miembros de la OTAN o el Grupo de Lima, pues como menciona Jermano (2018) “Las situaciones que involucran un apalancamiento limitado de EE. UU. pueden requerir la coordinación de acciones de sanciones con gobiernos mejor posicionados para presionar un objetivo.” Jermano (2018) y GAO (2019) señalan que estas se vuelven más efectivas cuando son ejecutadas no únicamente por Estados Unidos, sino por una serie de instituciones, organismos y países que las sustentan. Las sanciones a Rusia son un buen ejemplo, ya que generan un *apalancamiento limitado* de parte de Estados Unidos, siendo más precisa su función mediante la “coordinación con gobiernos mejor posicionados para presionar al objetivo, que para el caso los vínculos económicos de Moscú con Europa, le han dado a la Unión Europea más influencia para coaccionar a esta nación” (Congressional Research Service, 2020). También es preciso señalar el caso del ejercicio del Grupo de Lima brindando servicio de inteligencia en la persecución de transacciones, cuentas y operaciones financieras de Venezuela como bien demuestra en investigaciones Misión Verdad (2019a, 2019b).

Army señala sobre el tema:

La manipulación de la fortaleza financiera de Estados Unidos puede aprovechar las políticas y la cooperación de los gobiernos estatales. Los incentivos y desincentivos financieros pueden construir y sostener coaliciones internacionales que luchan o apoyan campañas de guerras no convencionales de EE. UU. Como parte de un esfuerzo interinstitucional, el Tesoro de los EE. UU. puede recomendar cambios en la política de los EE. UU. que pueden proporcionar tales incentivos a los gobiernos estatales y otros a nivel de política estratégica nacional. La participación en organizaciones financieras internacionales, como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco de Pagos Internacionales (BPI), ofrece a los Estados Unidos espacios diplomático-financieros para lograr tales coaliciones (Army, 2008).

Jermano (2018) nos presenta el funcionamiento de las sanciones financieras como una herramienta coercitiva que forma parte de la *Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos* (2017), en la cual se entiende que “[...]pueden ser partes importantes de estrategias más amplias para disuadir, coaccionar y constreñir a los adversarios[...].” (Jermano, 2018), es decir, que forma parte del aparato DIMEFIL que en su conjunto potencia el accionar de todo el gobierno (WOG) con un mismo objetivo. Es así una IOP presentada como una gran ventaja asimétrica gracias al sistema bancario controlado por Estados Unidos y su moneda dólar, que además presenta la ventaja de que “[...]implican un menor costo y riesgo que el uso de la fuerza militar” (Jermano, 2018).¹⁴ y ¹⁵ Sin embargo, como en el caso de las señaladas operaciones en Irak y Yugoslavia en la década del noventa, las sanciones “[...]pueden preceder u ocurrir simultáneamente con la amenaza o el uso de la fuerza militar. La imposición de sanciones antes de la acción cinética es una forma de aumentar la presión para persuadir al objetivo de que ceder sería menos costoso en el corto plazo” (Jermano, 2018). Incluso NATO (2017), que entiende las sanciones económicas como IOP de carácter no militar, menciona que “las formas no militares de poder nacional a menudo se aplican de manera encubierta mucho antes de la existencia de un estado definible de guerra abierta.” Ante lo cual, deja mucho que pensar respecto a los actuales 24 programas de sanciones a países que reconoce la OFAC y 19 reconocidas por IEEPA, pero que según Sanctions Kill (2020) suben a 39 países cuando se desglosan las 8.000 medidas aplicadas por todas las leyes y medidas existentes, cuestión que termina ejerciéndose sobre tantos países que “afecta a una tercera parte de la humanidad” (Sanctions Kill, 2020).

¹⁴ Menciona James Rickards “mientras los inversores y las instituciones se vean forzados a un sistema basado en el dólar, el control del dólar equivale al control de esas instituciones” (2020).

¹⁵ La cita completa nos menciona: “las sanciones y otras herramientas económicas pueden ser partes importantes de estrategias más amplias para disuadir, coaccionar y limitar a los adversarios. La potencia de las sanciones se deriva del poder económico de los Estados Unidos y, por lo general, implican un costo y un riesgo menores que el uso de la fuerza militar”.

Tabla 2. Programa de sanciones de la OFAC

Programa de sanciones de la OFAC	Última actualización del programa al 30/07/21
Balcanes	8 de junio de 2021
Bielorrusia	28 de junio de 2021
Birmania	2 de julio de 2021
Burundi	2 de junio de 2016
República Centroafricana	7 de agosto de 2020
China	16 de junio de 2021
Cuba	13 de abril de 2021
República Democrática del Congo	10 de marzo de 2021
Hong Kong	16 de julio de 2021
Irán	2 de julio de 2021
Irak	30 de abril de 2021
Líbano	30 de julio de 2010
Libia	6 de agosto de 2020
Mali	6 de febrero de 2020
Nicaragua	9 de junio de 2021
Corea del Norte	8 de diciembre de 2020
Rusia	15 de abril de 2021
Somalia	27 de abril de 2021
Sudán	19 de mayo de 2021
Sudán del Sur	26 de febrero de 2020
Siría	28 de julio de 2021
Venezuela	20 de julio de 2020
Yemen	20 de mayo de 2021
Zimbabue	5 de agosto de 2020

Fuente: U.S. Department of Treasury, Sanctions Program and Country Information. <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information>

Sachs y Weisbroty (2019), en una ardua investigación, describen profundamente las restricciones de divisas a Venezuela generadas por el bloqueo a las empresas petroleras nacionales, de lo cual catalogan como una forma de *castigo colectivo a la población civil*, tal como se describe en las convenciones de La Haya y Ginebra (ambas firmadas por Estados Unidos), pues infligen daños muy graves a la vida y la salud humana. En esta investigación, los autores señalan que “las sanciones reducen las ganancias del Gobierno y, por lo tanto, los ingresos reducen así las importaciones de bienes esenciales que en muchos casos salvan vidas” (Sachs y Weisbroty, 2019) con la importación de medicamentos, alimentos, equipo médico, repuestos y equipos necesarios para la generación de electricidad, sistemas de agua o transporte.

Las sanciones económicas, nunca actúan por separado, siempre funcionan en sincronía con otros IOP, pues “las estrategias coherentes y efectivas combinan sanciones con otros instrumentos de política para aumentar el impacto de la acción en el objetivo” (Jermano, 2018). Por ejemplo, el acompañamiento de las herramientas informativas, tales como un anuncio público en forma de aviso del Registro Federal y un comunicado de prensa, suelen formar parte de una acción de sanciones, donde el discurso construye y justifica el escenario narrativo favorable, dentro de lo que NATO (2017) denomina como *batalla de narrativas*.¹⁸ y ¹⁹ Con esto, se busca construir imaginarios en la sociedad del país objetivo, ejecutante y global donde permea la

¹⁸ Señala OTAN: “[...]uno de los aspectos más importantes de la guerra híbrida es el impacto cognitivo, tanto a nivel local, como nacional e internacional.” (One of the most important aspects of hybrid warfare is the cognitive impact, both locally, nationally and internationally) (OTAN, 2017, p. 11).

¹⁹ Ejemplo claro es la clasificación de 26 funcionarios venezolanos en marzo de 2020 en la categoría de *narcoterroristas* por el Departamento de Justicia norteamericano, ofreciendo incluso una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a la detención del presidente Nicolás Maduro y 10 millones para los demás funcionarios, utilizando la retórica de un orden moral de suma eficacia en imaginarios sociales, señala el edicto: “Líderes del régimen venezolano dirigen un cartel de drogas en coordinación con el grupo rebelde colombiano FARC para traficar cocaína a los Estados Unidos” (Guerrero, 2020).

idea de que las sanciones se están realizando por una buena causa y son un medio menos desastroso que una invasión militar. Se suele argumentar como instrumentos de presión sobre gobiernos para alentarlos a “respetar los derechos humanos”, pese a que el objetivo real sea un cambio de régimen, como el caso venezolano. De igual forma, herramientas jurídicas acompañan el accionar punitivo entremezclándose con guerras jurídicas, es decir “el uso de la ley como un medio para conseguir lo que de otra manera tendría que conseguirse con la aplicación de la fuerza militar tradicional” (Dunlap, 2017). Asimismo, las ya señaladas herramientas de inteligencia que han colaborado en la obtención de información clave de mensajería financiera de SWIFT, que pese a colaborar directamente con la OFAC, ha sido víctima de espionaje por la NSA como bien reveló Snowden (Mathew, 2014).

Pese a las grandes ventajas que presentan por sus bajos costos económicos y políticos, su ventaja asimétrica, efectividad y su aplicabilidad instantánea, NATO observa que “una desventaja importante de las sanciones económicas es que, por lo general, tardan un período prolongado en influir en el resultado político. Sin embargo, el cambio incremental a menudo vale la pena” (OTAN, 2017, p. 15). El daño de los enfrentamientos por medios geoeconómicos de carácter no militar como las sanciones estadounidenses es innegable, pese a existir supuestas medidas de prevención de daños a la población por desabasto de necesidades básicas de importación extranjera.²⁰ Las sanciones violan acuerdos de gran peso internacional como el Artículo 32 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados que señala: “...ningún Estado podrá utilizar o alentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otro tipo para coaccionar a otro Estado a fin de obtener de este la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos” (Asamblea General de las Naciones

²⁰ Como la licencia #8 del 27 de febrero de 2020 asignada en beneficio de bienes humanitarios para Irán, no dejan de pasar por confirmaciones o una licencia especial brindada por la OFAC que lleva en su aprobación o negación un calculado de 77 días para poner en marcha la transacción de estos bienes .

Unidas, 1974). Así, “el derecho y las convenciones internacionales, incluidas las Convenciones de Ginebra, La Haya y Nuremberg, la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, prohíben explícitamente atacar a civiles indefensos, especialmente en tiempos de guerra” (Sanctions kill, 2020). Igualmente, los artículos 19 y 20 de la OEA lo señalan explícitamente:

Artículo 19: Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen.

Artículo 20 Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza (OEA, 1993).

Conclusión

Las sanciones económicas que son presentadas en la batalla de narrativas como instrumentos de presión sobre gobiernos para respetar los Derechos Humanos, deben ser denunciadas por lo que realmente son: daños y castigos colectivos a la población civil, una forma netamente de guerra no militar que a su vez puede ser la preparación de una crisis para el escenario de guerra física como bien señala Jermano (2018). Tal entendimiento militar nos pone en una suma preocupación respecto a la gran cantidad de países sobre los cuales hoy se ejercen las sanciones económicas. Pues intentos de invasión han ocurrido recientemente sobre países arduamente sancionados, como el caso de la operación Gedeón de 2020 en Venezuela o la crisis del Golfo Pérsico (2019-2021).

Cabe destacar que no son únicamente *estados débiles o potencias medias* las que se ven afectadas por las herramientas geoeconómicas.

Guerras financieras como las libradas con las emergentes potencias Rusia y China, donde la presión bélica ha ido en aumento con el incremento de ejercicios de la OTAN cerca de Crimea o de Estados Unidos en el mar del sur de China, y la constante amenaza sobre la también sancionada Taiwán, podrían definir grandes cambios en el dominio geopolítico.

La disputa geoeconómica con China avista grandes consecuencias en las finanzas mundiales, pues, como menciona Zhou Li, subdirector del Departamento de Enlace Internacional del Partido Comunista, la potencia asiática “se ve urgida de desacoplar gradualmente el yuan chino del dólar estadounidense” (Wang, 2020) ante las amenazas sobre los bancos del país a un corte de acceso al servicio de mensajería financiera SWIFT. Ante tal emergencia, sistemas de comunicación financiera chinos tratan de posicionarse ante el monopolio norteamericano, como el caso del Sistema de pago interbancario transfronterizo (CIPS). Esto cabe recalcar, ya que la hegemonía del dólar y su sistema de mensajería que posibilitan las sanciones financieras podrán actuar bélicamente mientras diversas formas de divisas no sean una real oposición, o fenómenos como el blockchain puedan plantearse como una alternativa.

Bibliografía

Albright, Madeline (1995). *Is the price worth it [Video]*. YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=4iFYaeoE3n4>

Army, D. of the. (2008). *FM 3-05.130 Army Special Operations Forces Unconventional Warfare*. <https://fas.org/irp/doddir/army/fm3-05-130.pdf>

Barrios Rodríguez, David (2019). Guerra híbrida: orígenes y usos políticos. *América Latina en Movimiento* (544). <https://www.alainet.org/es/articulo/203107>

Blackwill, Robert y Harris, Jennifer M. (2016). *War by other means, geoeconomics and statecraft*. Harvard University Press.

Brown, Chad P. y Kolb, Melina (2020). *Trump's Trade War Timeline: An Up-to-Date Guide*. <https://www.piie.com/sites/default/files/documents/trump-trade-war-timeline.pdf>

Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (1974). <https://dudh.es/carta-de-derechos-y-deberes-economicos-de-los-estados/>

Ceceña, Ana Esther (2008). *Hegemonía, emancipaciones y políticas de seguridad en América Latina: Dominación, epistemologías insurgentes, territorio y descolonización*. Lima: Programa Democracia y Transformación Global.

Center for Economic and Policy Research, the Charity & Security Network, A., & Committee, the A. F. S. (2020). *Joint Submission to the Special Rapporteur on the negative impact of the unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights*. <https://charityandsecurity.org/wp-content/uploads/2020/07/Joint-Comments-UNSR-Coercive-Measures.pdf>

Center for Strategic and International Studies (n.d.). *Competing in the gray zone*. <https://www.csis.org/features/competing-gray-zone>

CGTN en español (2018). *Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974*. https://www.youtube.com/watch?v=-oyiHyFz_tc

Congressional Research Service (2020). *U.S. Sanctions on Russia*. 1–71. <https://crsreports.congress.gov>

Consejo de seguridad de la ONU (2020). *Sanciones*. <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/information>

Corbett, Jessica (2019). Amid Blackouts and Food Shortages, Pence Unveils New Sanctions Targeting Venezuelan Oil Exports to Cuba. *Common Dreams*. <https://www.commondreams.org/news/2019/04/06/amid-blackouts-and-food-shortages-pence-unveils-new-sanctions-targeting-venezuelan>

Curcio, Pasqualina (2019). Impacto de la guerra económica en Venezuela. *ALAI*. <https://www.alainet.org/es/articulo/207768>

Davis, Nicolas (2019). US Iran sanctions make Europeans challenge dollar hegemony. *The Hill*. <https://thehill.com/blogs/congress-blog/foreign-policy/427934-us-iran-sanctions-make-europeans-challenge-dollar-hegemony>

Dudley, Sara et al. (2019). Evasive Maneuvers. How malign actors leverage cryptocurrency. *Joint Force Quarterly*, (97), 14. https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/jfq/jfq-92/jfq-92_58-64_Dudley-et-al.pdf

Dunlap, Charles (2017). Introducción a la guerra jurídica Manual básico. *Military Review*, (11). <https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/Spanish/Online-Exclusives/Dunlap-Introduccion-a-la-guerra-juridica.pdf>

Egan, B. (2017). A Detailed Look at the Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. *Steptoe*. <https://www.steptoec.com/en/news-publications/a-detailed-look-at-the-countering-america-s-adversaries-through-sanctions-act.html>

Flounders, Sara (2019). Crimes against Humanity: US Sanctions Harm One Third of World's People. *Global Research*.

Gibson Dunn (2020). *2019 Year-End Sanctions Update*. <https://www.gibsondunn.com/wp-content/uploads/2020/01/2019-year-end-sanctions-update.pdf>

Guerrero, Kay (2020). Trump administration targets Venezuela's President and other top officials. *CNN*. <https://edition.cnn.com/2020/03/26/politics/venezuela-trump-administration-terrorism/index.html>

Human Rights Whatch (2019). "Maximum Pressure" US Economic Sanctions Harm Iranians' Right to Health. <https://www.hrw.org/report/2019/10/29/maximum-pressure/us-economic-sanctions-harm-iranians-right-health>

Jermano, Jill (2018). Economic and Financial Sanctions in U.S. National Security Strategy. *Prism, The Journal of Complex Operations*, 7(10). <https://cco.ndu.edu/News/Article/1680801/economic-and-financial-sanctions-in-us-national-security-strategy/>

Joint (2000). *Joint vision 2020. America's Military: Preparing for tomorrow*. <http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a526044.pdf>

Korikbo, Andrew (2015). *Hybrid wars: the indirect adaptive approach to regime change*. Moscú: The Institute for Strategic Studies and Predictions PFUR.

Liang, Qiao y Xiangsui, Wang (1999). *Unrestricted Warfare*. Beijing: PLA.

Lyotard, Jean-François (1981). *Dispositivos pulsionales*. Fundamentos.

Mathew, J. (2014). Edward Snowden NSA Scandal: EU to Suspend US Data Sharing After Swift's Interbank Messaging System Breach. *International Business Times*. <https://www.ibtimes.co.uk/edward-snowden-nsa-scandal-swift-tftp-eu-5088827>

Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (2019). *Cuba vs bloqueo; informe de Cuba sobre la resolución 73/8 de la asamblea general de las naciones unidas*. [https://www.mincex.gob.cu/files/Cuba vs Bloqueo \(informe\).pdf](https://www.mincex.gob.cu/files/Cuba%20vs%20Bloqueo%20(informe).pdf)

Misión verdad (2019a). Cronología de una estrategia para destruir Venezuela. <https://rebellion.org/cronologia-de-una-estrategia-para-destruir-venezuela/>

Misión verdad (2019b). Las caras ocultas del bloqueo financiero contra Venezuela. <https://observatoriode trabajadores.wordpress.com/2019/03/21/las-caras-ocultas-del-bloqueo-financiero-contra-venezuela/>

Office of Secretary of Defense (2019). *Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2019*. <https://www.hsdl.org/?view&did=824747>

Organización de Estados Americanos (OEA) (1993). *Carta de la Organización de los Estados Americanos (A-41)*. http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp

Peksen, Dursun (2011). Economic Sanctions and Human Security: The Public Health Effect of Economic Sanctions. *Foreign Policy Analysis*, (7), 237–251.

Pieper, Oliver (2019). ¿Qué sanciones pesan actualmente sobre Venezuela?. *Deutsche Welle*. <https://www.dw.com/es/qué-sanciones-pesan-actualmente-sobre-venezuela/a-47544148>

Rickards, James (29 de junio de 2020). Los bancos centrales manejan al oro. James Rickards Blogspot. <https://kenzocaspi.wordpress.com/2020/07/03/james-rickards-29-06-20-super-articulo-los-bancos-centrales-manejan-al-oro/>

Rodriguez, Cesar Augusto, Walton, Timothy C. y Chu, Hyong (2020). Putting the 'FIL' into 'DIME' Growing Joint Understanding of the Instruments of Power. *Joint Force Quarterly* 97, (8).

Russia sanctions tracker (2019). *Russia sanctions database*. <https://russia-sanctionstracker.csis.org/#database>

Saberi, R. (2019). *Countering Iran*. <https://twitter.com/cbseveningnews/status/1095986045324349440?lang=hr>

Sachs, Jeffrey y Wesibrot, Mark (2019). Economic Sanctions as Collective Punishment: The Case of Venezuela. *Center for Economic and Policy Research*. <https://cepr.net/images/stories/reports/venezuela-sanctions-2019-04.pdf>

Sanctions Kill, *List of 39 countries targeted by economic sanctions*. <https://sanctionskill.org/wp-content/uploads/2020/03/39Sanctioned-Countries3.pdf>

Summary of the National Defense Strategy, 14 (2018). <https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf>

Swift. (n.d.) (1 de agosto de 2020). *No Title*. Retrieved from <https://www.swift.com/>

Terrence J. O'Shaughnessy; Strohmeier, Matthew D. y Forrest, Christopher D. (2018). Strategic Shaping Expanding the Competitive Space. *Joint Force Quarterly*, 90(6). https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/jfq/jfq-90/jfq-90_10-15_OShaughnessy-et-al.pdf?ver=2018-04-11-125441-307

United States Government Accountability Office (2019). *Economic sanctions. Agencies assess impacts on targets, and studies suggest several factors contribute to sanctions' effectiveness*. <https://www.gao.gov/assets/710/701891.pdf>

United States Government Accountability Office (2020). *Economic sanctions. Treasury and state have received increased resources for sanctions implementation but face hiring challenges*. <https://www.gao.gov/assets/710/705265.pdf>

Venezuela Solidarity Campaign (2019). *Briefing: The effects of the economic blockade of Venezuela*. <https://www.venezuelasolidarity.co.uk/2019/09/19/briefing-the-effects-of-the-economic-blockade-of-venezuela/#sdfootnote3sym>

Vicent, Mauricio (2020). EE UU golpea el sistema de envío de remesas a Cuba en medio de la crisis económica por el coronavirus. *El País*. <https://elpais.com/economia/2020-06-04/ee-uu-golpea-el-sistema-de-envio-de-remesas-a-cuba-en-medio-de-la-crisis-economica-por-el-coronavirus.html>

Yao, Aidan (2019). The US is whispering about financial war against China. Investors must brace themselves. *South China Morning Post*. <https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3032012/us-whispering-about-financial-war-against-china-investors-must>

Yeung, Karen (2019). China's yuan makes little progress to dethrone the US dollar as global currency, survey finds. *South China Morning Post*. <https://www.scmp.com/economy/global-economy/article/3027506/slow-going-chinas-ambitions-make-yuan-global-currency-survey>

Wang, Orange (2020) Time for China to decouple the yuan from US dollar, former diplomat urges. *South China Morning Post*. <https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3091865/time-china-decouple-yuan-us-dollar-former-party-official>

Zárate, Juan C. (2013). Treasury's War. The unleashing of a new era of financial warfare. *Public Affairs*. Nueva York.

Anexo

Las siguientes tres tablas presentan las formas de guerra no militares de carácter económico y financiero que en años recientes se han establecido desde Estados Unidos hacia Rusia, Irán y China, país que ha respondido a su vez con diversas estrategias geoeconómicas.

Tabla 1: sanciones sobre Irán

Año	Sanciones sobre Irán:
1995	<ul style="list-style-type: none">· En la administración Clinton, con la orden ejecutiva 12959 (06/May/1995) que declara emergencia nacional, prohíbe el comercio y las inversiones de Estados Unidos en Irán, con una primera intención de bloquear la modernización productiva del sector petrolero que, para el momento, producía el 20% del producto interno bruto pese a su envejecida infraestructura (es clave señalar que, para el momento, Irán tenía las segundas reservas probadas de gas natural del mundo, por detrás de Rusia, con 940 trillones de pies cúbicos).· El 8 de septiembre de 1995, el senador Alfonse D'Amato introdujo la <i>Ley de sanciones al petróleo extranjero de Irán</i> para sancionar las exportaciones de empresas extranjeras de tecnología energética a Irán. El proyecto de ley fue aprobado por el Senado el 18 de diciembre de 1995.

<p>1996</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Basado en las leyes de un año anterior, se emite la Ley de Sanciones de Irán (ISA), originalmente llamada Ley de Sanciones Irán-Libia (ILSA), con validez hasta 2001. El decreto es denotado como de <i>interés nacional</i> bajo la justificación de frenar el programa nuclear y el apoyo de estos países a Hezbollah, Hamas y diversos movimientos subversivos en Palestina. Esta enmienda tiene como originalidad la sanción directa a las firmas inversoras en el país. Los puntos más importantes de la enmienda son: 1) negación de préstamos para entidades inversoras en los países sancionados; 2) negación de licencias para la exportación estadounidense de tecnología militar o militarmente útil (susceptible a problemas de interpretación); 3) negación de préstamos bancarios de los EE. UU. que excedan los \$10 millones en un año a la entidad; 6) restricción a las importaciones de entidades inversoras. · Esta sanción unilateral afecta de forma directa intereses estratégicos de países aliados de Estados Unidos como firmas petroleras de Europa, lo cual lleva a estos países al rechazo y condena de las sanciones.
<p>1997-1998</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Estados Unidos prohibió exportaciones a países que en un futuro comerciaran en rubros similares con Irán. La nueva condena de los países europeos se opone al ILSA como una aplicación extraterritorial de la ley de los EE. UU. y amenaza con una acción contraria en la Organización Mundial del Comercio (OMC). · En abril de 1997, Estados Unidos y la UE acordaron evitar una confrontación comercial al respecto. Este acuerdo contribuyó a una decisión del 18 de mayo de 1998 de la Administración Clinton de renunciar a las sanciones de ILSA. En ese año, Total SA de Francia y sus socios, Gazprom de Rusia y Petronas de Malasia firman un contrato con Irán para desarrollar las fases 2 y 3 del campo de gas South Pars de 25 fases. Con EE.UU., la UE se comprometió a aumentar la cooperación en materia de no proliferación y lucha contra el terrorismo. La administración Clinton indicó que las empresas de la UE probablemente recibirían exenciones para futuras inversiones similares en Irán.
<p>1999-2006</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Durante 1999 y 2000, la Administración Clinton había aliviado un poco la prohibición comercial de Irán para tratar de involucrar al relativamente moderado presidente iraní, Mohammad Khatemi, así como para saciar las necesidades aliadas. · ILSA debía expirar el 5 de agosto de 2001, en el contexto de las relaciones estadounidenses algo mejoradas con Irán y Libia. Sin embargo, sufre una extensión hasta 2006 con un relajamiento a las sanciones.

<p>2006</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Durante el 109 ° Congreso, con la preocupación de los EE. UU. <i>por el aumento del programa nuclear de Irán</i>, se extiende la sanción sin incluir a Libia, denominándose ahora ISA, la cual aparece con todo vigor el 5 de agosto de 2006. Se encuentra estrechamente relacionada con las grandes inversiones que habían hecho crecer las exportaciones de petróleo iraní a 4 millones de barriles diarios, preocupación que hace a los EE. UU. introducir la enmienda 282, <i>Ley de Libertad y Apoyo de Irán</i>, la cual extendía de forma indefinida las sanciones previas, cierra canales de inversión cortando asistencia a países que cuenten con compañías que violen la prohibición y autoriza fondos para actividades <i>prodemocráticas</i> en el país. · Los funcionarios estadounidenses teniendo cierto éxito <i>persuadiendo</i> a los gobiernos europeos de limitar las nuevas garantías de créditos a la exportación a Irán, y persuadir a los bancos europeos de que no proporcionen cartas de crédito para las exportaciones a Irán o que no procesen transacciones en dólares para los bancos iraníes.
<p>2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Tras la aprobación de la Resolución 1929 (junio de 2010) del Consejo de Seguridad de la ONU que trata sobre las actividades nucleares iraníes, la Unión Europea impuso sanciones <i>casi tan amplias</i> como las de los Estados Unidos. · British Petroleum y diversas empresas petroleras europeas son parte de las sanciones hasta retirar inversiones de Irán, viéndose drásticamente disminuida la producción petrolera del país.
<p>2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Mediante la implementación de la Ley de Reducción de Amenazas de Irán, así como la Orden Ejecutiva 13622 por los Estados Unidos, se extendieron las restricciones a las compras de petróleo iraní, así como la adquisición de seguros relacionados con la exportación de petróleo y bloqueos a las transacciones financieras que involucran al sistema financiero de EE. UU. El Congreso, asimismo, agregó disposiciones a la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2012 que penalizó a los bancos extranjeros que realicen una <i>transacción financiera significativa</i> con el Banco Central de Irán o cualquier banco iraní bajo las sanciones de los Estados Unidos. · En medidas similares, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea decretaron la adopción de nuevas sanciones contra Irán, medidas que incluyen la prohibición de toda compra de petróleo iraní, el congelamiento de los fondos del Banco Central depositados en los países de la Unión Europea y la prohibición de las ventas de diamante, oro y metales preciosos a Irán.

<p>2013-2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> · La coalición de países liderada por Estados Unidos que ejecutan las sanciones económicas, logran reducir las exportaciones de petróleo iraní a 1 millón de barriles por día, bajando a una cuarta parte de la exportación previa al aumento de presión. · En 2013, comienzan a darse pláticas entre los gobiernos estadounidense, iraní, ruso, chino y europeos respecto a un acuerdo de no proliferación de armas nucleares, que en 2015 ve la luz con la firma del Plan de acción global (JCPOA, por sus siglas en inglés) teniendo ese año como prueba de la voluntad de destensar las disputas en Palestina, Líbano, Siria, Irak y Bahréin, así como una reducción comprobada de la actividad nuclear iraní, que es confirmada por doce reportes consecutivos de la Agencia Internacional de Energía Eléctrica, donde se recalca el uso civil de esta energía. Tras dicha confirmación, todas las sanciones económicas y financieras de la UE adoptadas en relación con el programa nuclear iraní se levantaron en enero de 2016. Permaneciendo los embargos sobre armamento, sanciones sobre tecnología en misiles, transmisión de tecnología nuclear y diversas cuestiones con especificidad militar. · La firma del JCPOA es señalada como un elemento clave en la formulación de una diplomacia multilateral y un elemento de suma importancia para la no proliferación mundial de armas de destrucción masiva. · Las grandes reservas de Irán en petróleo, sumado a su posicionamiento meridional ayuda a llevar las exportaciones del país a ser la 5ta en el mundo con grandes mercados en India, Taiwan, China, Corea del Sur, Alemania, Japón, Turquía, Italia y Grecia.
<p>2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> · La administración Trump viene desbaratando avances diplomáticos y punzando sobre los ya tensos a nivel mundial. En mayo, se anuncia la salida de Estados Unidos del JCPOA con la excusa de que <i>el acuerdo fue tan mal negociado que incluso si Irán cumple con todo, el régimen estaría al borde de conseguir armas nucleares en un corto periodo de tiempo</i>, jugando una política discursiva que el presidente iraní, Rohani, califica de <i>guerra psicológica</i>. Con la salida del acuerdo, EE. UU. reimpone de forma inmediata todas las sanciones financieras previas y suma nuevas medidas a niveles que previamente no se habían alcanzado, denominándolo <i>Campaña de máxima presión</i>, mencionando constantemente que se busca llevar las exportaciones iraníes a nivel 0. · En el mes de agosto, se prohíbe la compra o adquisición de dólares por parte del gobierno de Irán, comercio de oro o metales preciosos, suministro o transferencia directa o indirecta de metales de grafito, otros metales como el aluminio y acero, carbón y <i>software</i> para integrar procesos industriales; prohibición a transacciones relacionadas con la compra o venta de riales (moneda nacional iraní), o el mantenimiento de fondos o cuentas con montos considerables de riales fuera del territorio de Irán. Prohibición a la compra, suscripción o facilitación de la emisión de deuda soberana iraní, bloqueo al sector automotriz del país, así como el bloque sobre la exportación de aviones comerciales de pasajeros, sus partes o servicios relacionados.

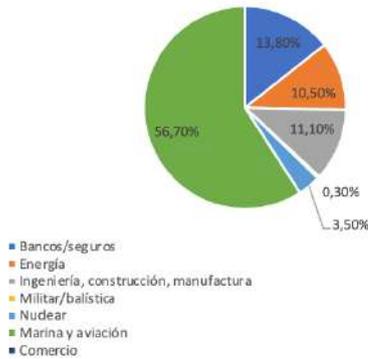
<p>2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> · En solo un día, 5 de noviembre de 2018, el Departamento del Tesoro sancionó a más de 700 personas, entidades, aviones y embarcaciones que hacen negocios con Irán, bloqueándolos de posibles comercios con terceros, pues ponen la amenaza de sanciones a quien comercie con ellos. · Designando en la lista especial de naciones y personas bloqueadas a 50 bancos iraníes y sus respectivas subsidiarias locales e internacionales (incluyendo el Banco Internacional de Desarrollo Venezuela-Irán, dándole a dos pájaros de un tiro), operadores portuarios y compañías relacionadas con sectores de envío y construcción naval. · Bloqueando en la misma fecha toda transacción relacionada con petróleo y petroquímicos con las empresas National Iranian Oil Company (NIOC), Naftiran Intertrade Company (NICO) y National Iranian Tanker Company (NITC), entre otras. · Bloqueando también toda transacción de instituciones financieras extranjeras con el Banco Central de Irán e instituciones financieras del país, incluyendo la prestación de servicios de mensajería y seguros financieros.¹ · Pese al nivel de las medidas, se emite una excepción de reducciones significativas (SRE) para que siete países aliados puedan seguir comerciando mientras los niveles de petróleo mundial puedan saciar el vacío que deja el producto iraní, señalando en enmiendas el papel que Estados Unidos, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos tendrán en suplementar a Irán (Statement from President Donald J. Trump Regarding Imposing Sanctions with Respect to the Iron, Steel, Aluminum, and Copper Sectors of Iran, 2019). · Con la implementación de sanciones a terceros, más de 100 firmas de diversos rubros deciden dejar de realizar transacciones con y en Irán.
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹ “En una conferencia de prensa el 2 de noviembre de 2018 que anunciaba el retroceso de las sanciones contra Irán, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin confirmó que la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT), sería un potencial objetivo de las sanciones de Estados Unidos y que el Tesoro había ‘aconsejado a SWIFT que debe desconectar cualquier institución financiera iraní que designemos tan pronto como sea tecnológicamente factible para evitar la exposición a las sanciones’. En una declaración el 5 de noviembre, SWIFT prometió cortar su servicio a todos los bancos iraníes sancionados”. (Davis, 2019)

2019	<ul style="list-style-type: none">· La Unión Europea creó un <i>Vehículo de Propósito Especial</i> en un esfuerzo por apoyar el comercio continuo con Irán que está permitido por el JCPOA. INSTEX se registró el 31 de enero de 2019, con Francia, Alemania y el Reino Unido como accionistas iniciales. El 29 de junio, la UE anunció que INSTEX estaba operativo y procesando sus primeras transacciones. Sin embargo, la línea de crédito inicial fue de solo varios millones de euros, una pequeña fracción del comercio europeo-iraní.· Estados Unidos decide no volver a emitir Excepciones de reducción significativas (SRE) que vencían en el mes de mayo, sancionando un mes después a la compañía china Zhuhai Zhenrong y una empresa de transportes, haciendo que diversos países anunciaran separadamente que detenían sus importaciones, como Turquía y Corea del Sur.· El 15 de abril, el Departamento de Estado designó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) una parte formal de la fuerza militar de Irán, como Organización Terrorista Extranjera, lo que impide tanto Visa, como cualquier forma de comercio financiero o material, a cualquier sujeto que forme parte de esta. Institución que en amplio alcance suma 11 millones de miembros con sus instituciones afiliadas.· El 8 de mayo de 2019, Estados Unidos sancionó los sectores de hierro, acero, aluminio y cobre de Irán, que representan los mayores ingresos de exportación de Irán además del petróleo (10% del PIB). En junio de 2019, la administración Trump sancionó a la compañía petroquímica más grande de Irán Petrochemical Industries Company (PGPIC), y sus subsidiarias locales e internacionales, las cuales poseen el 40 por ciento de la capacidad de producción petroquímica total de Irán y son responsables del 50 por ciento de las exportaciones petroquímicas de este país.
2020	<ul style="list-style-type: none">· En enero de 2020, la administración impuso sanciones a cuatro sectores adicionales de la economía iraní: construcción, minería, manufactura y textiles.· El 18 de marzo de 2020, estando ya declarada la emergencia de coronavirus a nivel mundial, se imponen sanciones sobre ocho entidades conectadas con la industria metalúrgica de Irán (incluyendo empresas de transporte) y una entidad que transfirió un material a Irán que es crítico para las plantas de metal de Teherán.· La más reciente sanción se tiene registrada el 25 de junio.

Fuente: United Against Nuclear Iran (2020), UANI's Iran Corporate Penalties Tracker <https://www.unitedagainstnucleariran.com/violations-penalty-tracker>

Sanciones estadounidenses a Irán por sector industrial



United States Departamento of the Treasury (2020). Iran Sanctions. <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions>

Tabla 2: sanciones sobre Rusia (Egan, 2017), Congressional Research Service (2020), y Departamento del Tesoro)

Año	Sanciones asignadas por el gobierno estadounidense a Rusia
2014-2016	<ul style="list-style-type: none"> En 2014, Obama, bajo las Leyes de Emergencia Internacional de Poderes Económicos (IEEPA) y Economía Nacional (NEA) firma las ordenes ejecutivas 13660, 13661,13662, 13685 y la ley de soporte a la libertad ucraniana PL 113-272 que surgen como respuesta a la problemática respecto a Crimea entre Ucrania y Rusia. En estas órdenes, se ejecutan sanciones individuales a funcionarios rusos, militares, empresas del sector financiero y energético, constantemente se van modificando para adherir a diversos nuevos sujetos. Hasta el 17 de enero de 2020, 205 individuos, 378 entidades, 3 aviones y un buque han sido puestos en la lista especial nacional (SDN) que implica el bloqueo propietario dentro de los Estados Unidos, la imposibilidad de comerciar con individuos bajo la jurisdicción de este país, así como la restricción de visas. Orden ejecutiva 13582 respecto a la postura rusa en Siria de apoyo material al gobierno de Assad. Mediante esta orden, agregan a la lista especial nacional (SDN) a agentes gubernamentales y bancos a los que se les han restringido licencias. En diciembre, se firman las ordenes ejecutivas 13757 y 13694 en las que se acusa directamente a Rusia de haber interferido en las elecciones presidenciales norteamericanas (sin pruebas aun fiables) y a grupos cibernéticos. Mediante las órdenes se sanciona a agencias de inteligencia, empresas de seguridad y funcionarios gubernamentales.

2017-2019	<ul style="list-style-type: none">· En marzo de 2017, se firman las órdenes ejecutivas 13722 y 13382 por violar las restricciones comerciales de Estados Unidos respecto a Corea del Norte, Venezuela e Irán. Mediante dichas órdenes, se bloquea propiedad en los Estados Unidos, tanto de individuos como de empresas del sector energético, petrolero y financiero ruso. Estas órdenes ejecutivas van aumentando sus puniciones respecto Rusia no acepta finalizar su comercio con estas naciones.· El 2 de agosto de 2017, Trump firma la <i>Ley para contrarrestar a los adversarios de los Estados Unidos mediante sanciones</i> (CAATSA) enfocada en Rusia, Corea del Norte e Irán, específicamente para Rusia (CRIEEA) se enfoca en contrarrestar la influencia que ejerce sobre Europa y Eurasia. Significa la expansión de las sanciones hacia Rusia, en las que se implementan por primera vez sanciones secundarias a quien comercie en el ámbito de los nuevos proyectos petroleros y energéticos, donde se incluye servicios tecnológicos, de inteligencia, metales y minas, apoyo a la exploración en aguas profundas, préstamos, transporte, etc. Inmediatamente esta tiene un gran efecto que ha ayudado a la no finalización del gasoducto Nord Stream 2.· En abril de 2018, Estados Unidos impuso sanciones a Rusal, una empresa global de aluminio, que tuvo amplios efectos que sacudieron a los mercados financieros rusos y globales. Ese año, pese a no tener nuevas enmiendas bajo las cuales sancionar, ve un gran recrudescimiento en las órdenes previas que se hacen efectivas sobre bancos, empresas, individuos, agencias gubernamentales (inteligencia), defensa, etc.
2019	<ul style="list-style-type: none">· En marzo, la administración Trump designa a un banco conjunto Rusia-Venezuela bajo la orden 13850 de sanciones a quien provea apoyo a empresas estatales venezolanas.· El 30 de septiembre, cuatro entidades de inteligencia, siete individuos y una entidad financiera bajo la orden 13848 son sancionados bajo los cargos de interferir en las elecciones intermedias estadounidenses.· El 20 de diciembre, el gobierno de los Estados Unidos emite la Ley de Protección de Seguridad Energética de Europa de 2019 (PEESA), la cual se suma a la Ley de Autorización de Defensa Nacional FY2020. Esta ley exige sanciones a las personas extranjeras que, desde la fecha de su promulgación, vendan o arrenden tecnología para la instalación de las tuberías para la construcción de los gasoductos Nord Stream 2 y TurkStream, así como cualquier tubería sucesora. Esta ley genera serias tensiones con aliados europeos de los Estados Unidos partícipes del proyecto.

Tabla 3: cronograma del enfrentamiento comercial China - Estados Unidos (Brown and Kolb (2020), Yao (2019), Departamento del Tesoro)

Fecha	Medida
1 de marzo de 2018	<ul style="list-style-type: none"> · Trump anuncia (pese a recomendaciones del Departamento de Comercio) aranceles sobre importaciones de acero (25%) y aluminio (10%), donde no únicamente incluye a China, sino a aliados como México, Canadá, la Unión Europea y Corea del Sur (con los que próximamente negocia fin de estos aranceles). · En abril, China impone aranceles de represalia sobre desechos de aluminio, carne de cerdo, frutas y nueces y otros productos estadounidenses, por un valor equivalente con los aranceles de acero y aluminio de EE. UU.
24 de marzo de 2018	<ul style="list-style-type: none"> · El gobierno Trump anuncia aranceles sobre productos de tecnología chinos acusados de transferencia de tecnología ilícita bajo leyes de propiedad intelectual e innovación. Los aranceles tienen un costo de \$60 mil millones.
3 de abril de 2018	<ul style="list-style-type: none"> · La administración Trump publica una lista de aranceles del 25% para 1.333 productos chinos, los principales sectores afectados son maquinaria, aparatos mecánicos y equipo eléctrico. Aproximadamente el 85 por ciento de las importaciones objetivo de los aranceles son en insumos intermedios y capital de bienes, lo que elevaría los costos dentro de las cadenas de suministro de las empresas estadounidenses. · China responde con aranceles del 25% a 106 productos, primordialmente aviones, automóviles, embarcaciones y productos vegetales.
6 de julio de 2018	<ul style="list-style-type: none"> · Estados Unidos aplica aranceles del 25 por ciento a un valor alrededor de \$ 34 mil millones de dólares en importaciones procedentes de China, incluidos automóviles, discos duros y piezas de aviones · China toma represalias imponiendo un arancel del 25 por ciento a 545 productos originarios de los Estados Unidos por un valor de us \$ 34 mil millones, incluidos productos agrícolas, automóviles y productos acuáticos.

<p>10 de julio de 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> · El Representante de Comercio de los Estados Unidos publica una lista de aranceles del 10% sobre \$ 200 mil millones en importaciones de china. Esta lista se enfoca en bienes como autopartes, teléfonos, computadoras, muebles. Esta lista de sanciones se combina con una lista de \$ 50 mil millones aplicadas el 15 de junio, lo que cubriría \$ 250 mil millones de los aproximadamente \$ 504 mil millones de bienes importados de China en 2017.
<p>13 de agosto de 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Por primera vez desde la guerra fría, Estados Unidos impone como cuestión de carácter de Seguridad Nacional un asunto relacionado con China, para el caso: el monitoreo de algunas inversiones en el país y la transferencia de tecnología.
<p>23 de agosto de 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Washington impone aranceles del 25 por ciento a otros bienes chinos por valor de 16 mil millones de dólares, incluidos productos de hierro o acero, maquinaria eléctrica, productos ferroviarios, instrumentos y aparatos. · China responde aplicando aranceles del 25 por ciento a productos estadounidenses por un valor de 16 mil millones de dólares, incluidas las motocicletas Harley-Davidson, Whiskey bourbon y jugo de naranja.
<p>24 de septiembre de 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Estados Unidos aplica impuestos del 10 por ciento a las importaciones chinas por un valor de 200 mil millones de dólares. · China responde colocando derechos de aduana sobre bienes estadounidenses por valor de 60 mil millones de dólares.
<p>1 de diciembre de 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> · El presidente Xi Jinping y su homólogo estadounidense Donald Trump acuerdan un alto el fuego a la guerra comercial en la cumbre del G20 en Argentina. Suspenden un aumento de aranceles del 10% al 25% señalado por Trump, sin embargo, no se firma nada y la amenaza permanece latente.
<p>14 de diciembre de 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> · China suspende los aranceles sobre automóviles y autopartes fabricados en EE. UU. Durante tres meses a partir del 1 de enero, y también reanuda la compra de soya estadounidense.

<p>10 de mayo del 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Después de que se rompan las negociaciones comerciales, los Estados Unidos aumentan los aranceles sobre los 200 mil millones en productos chinos entre un 10% al 25%. · China responde anunciando que aumentará los aranceles sobre bienes estadounidenses por un valor de 60 mil millones de dólares a partir del 1 de junio.
<p>15 de mayo de 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> · El Departamento de Comercio de EE. UU. anuncia la incorporación de Huawei a su <i>lista de entidades</i>, que prohíbe efectivamente que empresas estadounidenses vendan a la entidad china de telecomunicaciones sin aprobación oficial.
<p>31 de mayo de 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> · China anuncia que establecerá su propia lista de entidades poco confiables.
<p>1 de junio de 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> · China aumenta aranceles sobre productos por valor de US \$ 60 mil millones.
<p>29 de junio de 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> · El presidente Xi Jinping y Donald Trump acuerdan una tregua de guerra comercial en la cumbre del G20 en Japón, retrasando la imposición de nuevos aranceles estadounidenses de hasta un 25 % sobre bienes chinos por valor de 300 mil millones de dólares. · Trump también sugiere que se levanten algunas de las restricciones impuestas a las compañías estadounidenses que venden productos a Huawei.
<p>15 de enero de 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Firma de la fase uno de acuerdos comerciales en la que China acepta comprar un adicional de \$200 mil millones en exportaciones estadounidenses, sin embargo, para lo que va de 2020, los aranceles siguen siendo 6 veces más altos que antes de comenzar la guerra comercial en 2018.
<p>14 de Julio de 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Por enmienda presidencial, basado en el IEEPA (Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional) y la Ley de Emergencia Nacional, los Estados Unidos finalizan el estatuto especial de autonomía sobre Hong Kong, mediante el cual enmarca a esta dentro de las mismas leyes de comercio que China continental. Incluye posibles sanciones a empresas que pasando un año del anuncio continúen operando bajo la antigua legislación.

Fuente: Departamento de Estado

Glosario

ACCU	Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá
ACDEGAM	Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio
AD	Acción Democrática
AN	Asamblea Nacional
ANC	Asamblea Nacional Constituyente
AOB	Advanced Operating Base
AP	Autoridad Palestina
AUC	Autodefensas Unidas de Colombia
BACRIM	Bandas Criminales
BCV	Banco Central de Venezuela
BG	British Gas Group
BPC	Building Partner Capacity
CCOPE	Comando Conjunto de Operaciones Especiales
CF	Conventional Forces
CGN	Congreso General Nacional
CIA	Central Intelligence Agency
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CIPS	Cross-Border Interbank Payment System

CMSP	Compañías Militares y de Seguridad Privada
CNE	Consejo Nacional Electoral
CNT	Consejo Nacional de Transición
COG	Center of Gravity
COIN	Counterinsurgency/Contraainsurgencia
COPEI	Comité Político Electoral Independiente
DATT	Defense Attaché
DEA	Drug Enforcement Administration
DIMEFIL	Diplomacy, Information, Military, Economics, Finance, Intelligence and Law
DOD	Department of Defense
DOE	Department of Energy
DOS	Department of State
DSL	Defense Systems Limited
DSN	Doctrina de Seguridad Nacional
DUE	Dense Urban Enviroment
ELN	Ejército de Liberación Nacional
ENL	Ejército Nacional Libio
EPL	Ejército Popular de Liberación
FAES	Fuerzas de Acciones Especiales
FANB	Fuerza Armada Nacional Bolivariana
FARC-EP	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo
FDI	Fuerzas de Defensa de Israel
FMI	Fondo Monetario Internacional
FMLN	Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
FNSL	Frente Nacional de Salvación Libia
FOB	Forward operating base
FUDRA	Fuerzas de Despliegue Rápido
GAN	Gobierno de Acuerdo Nacional
GICL	Grupo Islámico de Combate Libio
GNB	Guardia Nacional Bolivariana
HRW	Human Rights Watch
IAI	Industria Aeronáutica de Israel

IEEPA	International Emergency Economic Powers Act
IMI	Industrias Militares de Israel
IOP	Instrument of Power
JCOS	Joint Chief of Staff
JSF	Joint Strike Fighter
LOC	Lines of Communication
M-19	Movimiento 19 de abril
MAAG	Military Assistance and Advisory Group
MAS	Muerte a secuestradores
MG	Military Group
MI6/SIS	Servicios de Inteligencia Secreta de Reino Unido
MRN	Muerte a Revolucionarios del Nordeste
MUD	Mesa de Unidad Democrática
NAS	Narcotics Affaires Section
NATO	North Atlantic Treaty Organization
NED	National Endowment for Democracy
NSA	National Security Agency
OEА	Organización de Estados Americanos
OEА	Organización de Estados Americanos
OFAC	Office of Foreign Assets Control
OIT	Office of Transition Initiatives
ONU	Organización de las Naciones Unidas
OPEP	Organización de Países Exportadores de Petróleo
OTAN	Organización del Tratado del Atlántico Norte
PCC	Partido Comunista Colombiano
PDVSA	Petróleos de Venezuela S.A.
PJ	Primero Justicia
PNB	Policia Nacional Bolivariana
PSYOPS	Psychological Operations
RCTV	Radio Caracas Televisión
SDN	Specially Designated Nationals and Blocked Persons List
SDO	Special Defense Officer
SF ODA	Special Forces Operational Detachment Alpha

SIPRI	Stockholm International Peace Research Institute
SOCOM	Special Operations Command
SOC SOUTH	Special Operations Command South
SOF	Special Operations Forces
SOLO	Special Operations Liaison Officer
SWIFT	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications
TSJ	Tribunal Supremo de Justicia
UA	Unión Africana
URSS	Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
USAID	United States Agency for International Development
USCENTCOM	United States Central Command
USSOUTHCOM	United States Southern Command
VEO	Violent Extremist Organizations
VP	Voluntad Popular
VTV	Venezolana de Televisión
WOG	Whole of Government

Sobre las autoras y los autores

Ana Esther Ceceña

Es investigadora senior de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Integran-te del proyecto *Polarization*, coordinado por Immanuel Wallerstein (2006-2014); directora de la revista *Chiapas* (1994-2004); coordinado-ra de los grupos *Economía mundial* y *Hegemonías y emancipaciones* de CLACSO (2001-2009); presidenta de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI). Posgraduada en Relaciones Económicas In-ternacionales por la Universidad de Paris I-Sorbonne. Docente del Posgrado en Estudios Latinoamericanos (UNAM), de la Escuela Na-cional Florestán Fernandes y ocasionalmente de CLACSO. Con publi-caciones en 8 idiomas en 18 países, entre las que destacan *Producción estratégica y hegemonía mundial*; *Derivas del mundo en el que caben todos los mundos*; *Chevron: paradigma de la catástrofe civilizatoria*, *Las corporaciones y la economía mundo* (todos en Siglo XXI); *La guerra in-finita. Hegemonía y terror mundial*; *Hegemonías y emancipaciones en el siglo XXI*; *De los saberes de la emancipación y de la dominación*; *Los desa-fíos de la emancipación en un contexto militarizado* (todos en CLACSO);

Reflexionen einer rebellion (Westfälisches dampfboot); así como una centena de capítulos de libros y artículos. Líneas de investigación: geopolítica, sistemas-mundo, complejidad, bifurcaciones, militarización, emancipaciones y dominación de espectro completo.

Raúl Ornelas Bernal

Es licenciado y maestro en Economía por la UNAM y doctor en Ciencias Económicas y de Gestión por la Universidad de París X – Nanterre. Fue ayudante de profesor y profesor de asignatura en la Facultad de Economía entre 1986 y 1990. A partir de 1992, es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas. Actualmente es integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y coordinador del Laboratorio de estudios sobre empresas transnacionales. Es tutor de los posgrados de Economía, Administración y Estudios Latinoamericanos. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt. Sus principales líneas de investigación son el estudio de las corporaciones transnacionales y la hegemonía mundial; en la actualidad trabaja los temas de la bifurcación sistémica y la crisis ambiental. Entre sus obras recientes destacan *Cuál es el futuro del capitalismo* (Akal), *Estrategias para empeorarlo todo. Corporaciones, dislocación sistémica y destrucción del ambiente* (UNAM), *Chevron. Paradigma de la catástrofe civilizatoria* (Siglo XXI), *Las corporaciones y la economía-mundo. El capitalismo monopolista y la economía mexicana en retrospectiva* (Siglo XXI), y “Hacia una economía política de la competencia. La empresa transnacional” (Problemas del Desarrollo).

Ana Katia Rodríguez Pérez

Es maestrante del posgrado en Sociología Política del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Autora del artículo “De los desastres naturales a las catástrofes sociales: impactos del cambio climático y la militarización en Haití” en la revista *CariCen*. Sus líneas de investigación giran en torno a los impactos socioecológicos de las actividades militares de Estados

Unidos, el Antropoceno, el capital fósil, la transición energética y la militarización de América Latina y el Caribe.

Adriana Franco

Es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Candidata a doctora por el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Estudios de Asia y África, especialidad: África, por El Colegio de México y licenciada en Relaciones Internacionales por la FCPyS de la UNAM. Entre sus publicaciones destacan “Violencias contra las mujeres: análisis de tres novelas africanas recientes” en la *Revista Páginas* de Argentina, “La dominación de Francia y Estados Unidos en el espacio tuareg” en el libro *Geopolítica. Espacio, poder y resistencia en el siglo XXI* coordinado por David Herrera y, en coautoría con Kanety Zavaleta, “La Militarización del Desarrollo: La intervención humanitaria humanicida en Haití” en la *Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo* de Colombia. Sus líneas de investigación son geopolítica, territorio y hegemonía, movimientos sociales en África, estudios decoloniales y enfoques de la complejidad.

Christian Jean Faci

Es graduado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en coloquios sobre economía creativa y geopolítica, y se ha dedicado a la aplicación de teorías sobre el espacio como herramientas de estudio en las relaciones internacionales, con especialidad en Medio Oriente y América Latina.

David Barrios Rodríguez

Es doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Desde 2008, forma parte del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG) donde se dedica a estudiar las formas de militarización contemporáneas, especialmente en América Latina y el Caribe. Es

docente de las licenciaturas de Estudios Latinoamericanos y Desarrollo y Gestión Interculturales de la Facultad de Filosofía y Letras; así como del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos. Ha escrito artículos científicos y de divulgación en más de 10 países. La investigación que desarrolló durante la maestría obtuvo el reconocimiento a la mejor tesis en Ciencias Sociales de la UNAM y fue publicada dentro de la Colección Posgrado con el título *Las ciudades imposibles. Violencias, miedos y formas de militarización contemporánea en urbes latinoamericanas: Medellín-Ciudad Juárez* (2014). Su investigación de doctorado, titulada *La vida entre cercos: militarización social en América Latina en el siglo XXI* (2020) recibió el Premio a la mejor tesis sobre América Latina o el Caribe, otorgado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM en 2022. Sus principales líneas de investigación están relacionadas con procesos de violencia urbana, militarización social y temores contemporáneos.

Yetiani Romero Rebollo

Es licenciado y maestrante en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Colaborador del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG) del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Sus líneas de investigación incluyen geopolítica, hegemonía y fuerzas armadas en América Latina. Su tesis de maestría se centró en el papel de las fuerzas armadas en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Recientemente colaboró en las publicaciones del OLAG, *Militarización del Sureste de México* y *El istmo de Tehuantepec en riesgo*.

Alberto Hidalgo

Es egresado de la licenciatura en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde 2019, colabora en el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y desde 2021, con el grupo de trabajo de “Fronteras, regionalización y globalización” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Ha participado en diversos congresos, destacando como ponente en la pre

conferencia CLACSO “México, Centroamérica y el Caribe: Tramas de las desigualdades. Saberes, luchas y transformaciones”. En el 2022, recibió la beca Elisa Acuña (SEP-UNAM) para realizar una estancia de investigación en el War College del King’s College-London. Entre sus publicaciones se encuentra la tesis para obtener el grado de licenciado en Estudios Latinoamericanos titulada *Fronterizando Mesoamérica; Geopolítica de las migraciones en el sureste mexicano*; Ceceña, Ana Esther y Alberto Hidalgo, *Turismo colonizador: La larga historia maya bajo amenaza*, traducida al francés, así como diversas publicaciones conjuntas sobre megaproyectos en el sureste mexicano bajo el título del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Sus líneas de investigaciones han sido migraciones, geopolítica de Centroamérica, militarización, guerras no militares, megaproyectos, sureste mexicano, crimen organizado y cine latinoamericano.

Las guerras del siglo XXI

Durante mucho tiempo, las guerras se han entendido como hechos de armas que ocurren en campos de batalla. No obstante, los modos de concebir y hacer la guerra se modificaron como respuesta a las claves que provenían tanto de los cambios en la organización política como de los de las tecnologías. No solo cambiaron la estética de la guerra, la capacidad letal de los atacantes, los sentidos de la intervención, las herramientas a ser empleadas, las tecnologías, los estilos y los modos, sino también sus protagonistas, los desafíos y su propia concepción. El nuevo milenio inició su despliegue con modalidades de entender y hacer la guerra muy distintas a las heredadas de las experiencias pasadas y que modifican sustancialmente su concepción y sus prácticas.